

Causa Rol N° 29.875

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

ÍNDICE

Relación de la Sentencia.....2-5

Resumen ejecutivo.....5-6

Actuarios de tramitación y dato técnico.....6-7

En cuanto a la Acción Penal:

Declaraciones7-114

Documentos114-131

Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....131-134

Calificación jurídica de los hechos.....134-141

Concepto de Lesa Humanidad.....141-144

Declaraciones indagatorias y sus respectivos análisis.....141-183

En cuanto a la Defensa.....183-186

Consideraciones previas al análisis de la defensa:

Resumen ejecutivo del auto acusatorio.....186-188

Estado de Derecho.....188-193

Obligación de Investigar.....193-213

Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos
(Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por Tribunales alemanes
.....213-224

Convenios de Ginebra.....224-225

Análisis de la defensa específica.....225-234

Reflexiones de lesa humanidad.....234-241

Acusaciones particulares y análisis.....241-242

Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

Atenuante de responsabilidad penal.....242-243

Prescripción gradual de la acción penal243-246

Agravantes de responsabilidad penal.....246-248

Determinación de la Pena.....248-250

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....250-258

En cuanto a la Acción Civil:

Demandas civiles.....258-266

Contestación de las demandas civiles.....266-272

Análisis de la contestación de las demandas
civiles.....272-285

Acreditación probatoria del daño moral.....285-289

Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....289-290

Aspectos Resolutivos.....290-293

RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 29.875** del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, para investigar el delito de secuestro calificado en la persona de Celso Segundo Avendaño Alarcón y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. CARLOS HERNÁN MORENO MENA, R.U.N. 5.631.189-0, chileno, natural de Independencia, casado, 78 años, ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en pasaje Las Lenguas N° 1161, Villa Santa Fe, Los Ángeles, región del Bio Bio, extracto filiación y antecedentes de fs. 2.945 (Tomo IX).

Se inició la causa por querrela criminal de Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del interior, que consta a fs. 29 a fs. 39 (Tomo I), por el delito de secuestro calificado en la persona de Celso Segundo Avendaño Alarcón, en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos y aplicar el máximo de las penas legales, con costas.

A **fs. 865 (Tomo III)** del 31 de octubre de 2023 se dictó resolución que ordena la acumulación de causas roles 29.880 y 29.882, ambas de ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, sometidas al conocimiento de este Ministro Instructor, se conocen hechos similares a los investigados, acumulándose al rol 29.875.

De **fs. 867 a fs. 871 (Tomo IV)**, querrela criminal por Carlos Marcelo Oliva Troncoso en representación de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía, por el delito de secuestro calificado en la persona de Luis Anselmo Fernández Barrera, en contra de todos

aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos a las penas legales pertinentes, con costas.

De **fs. 1076 a fs. 1086 (Tomo IV)** querella criminal de Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del interior, por el delito de secuestro calificado de Luis Anselmo Fernández Barrera, en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos y aplicar el máximo de las penas legales, con costas.

De **fs. 1.736 a fs. 1740 (Tomo VI)**, querella criminal de Sebastián Saavedra Cea en representación de Rosalía Silva Mardones, Víctor Alejandro Fernández Silva, Luis Rufino Fernández Silva y Anselmo Ascanio Fernández Silva, en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos y aplicar el máximo de las penas legales, con costas; por el delito de homicidio calificado consumado cometido en la persona de Luis Fernández Barrera.

De **fs. 1.910 a fs. 1914 (Tomo VII)**, querella criminal por Carlos Marcelo Oliva Troncoso en representación de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía, por el delito de secuestro calificado en la persona de Ismael Rolando Bocaz Alarcón, en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos a las penas legales pertinentes, con costas.

De **fs. 2077 a fs. 2086 (Tomo VII)** querella criminal de Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del interior, por el delito de secuestro calificado de Ismael Rolando Bocaz Muñoz, en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos y aplicar el máximo de las penas legales, con costas.

A **fs. 2873 a fs. 2892 (Tomo IX)**, con fecha 06 de diciembre de 2023, se sometió a proceso a Carlos Hernán Moreno Mena como autor de los delitos de secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, perpetrados en la comuna de Pitrufquén, a contar del 18 de octubre de 1973. Otorgándoles la medida cautelar personal de arresto domiciliario total.

A **fs. 2.918 (Tomo IX)**, con fecha 11 de enero de 2024, **se declaró cerrado el sumario.**

A **fs. 2.923 a fs. 2942 (Tomo IX)**, con fecha 05 de febrero de 2024 se dictó auto acusatorio en contra de Carlos Hernán Moreno Mena en calidad de autor del delito secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las personas

de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, perpetrados en la comuna de Pitrufulquén desde el 18 de octubre de 1973.

A fs. 2977 a fs. 3001 (Tomo X) el abogado David Morales Troncoso, en representación de **Ginette Apolonia Bocaz Peña, Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña, Isolina Peña Perez, Patricio Leónidas Bocaz Peña, Héctor Celso Avendaño Vásquez y Eduardo Enrique Avendaño Stancovich**, deduce acción civil en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Diego Acuña Gálvez, abogado procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma de \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) para cada uno los demandantes civiles, o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes, interés legales y las costas del juicio.

A fs. 3.004 a fs. 3.007 (Tomo X), el abogado Ricardo Lavín Salazar en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos formula acusación particular en contra Carlos Hernán Moreno Mena, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en contra de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz solicitando se le reconozca la agravante contemplada en el artículo 12 N°8 del Código Penal.

A fs. 3.080 a fs. 3.110 (Tomo X) el abogado Sebastián Saavedra Cea y Leopoldo Huichalaf García, en representación de **Rosalía Silva Mardones, Anselmo Ascanio Fernández Silva, Víctor Alejandro Fernández Silva y Luis Rufino Fernández Silva**, en lo principal de su presentación acusación particular; al primer otrosí deduce acción civil en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Álvaro Sáez Willer, abogado procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma de \$800.000.000 (ochocientos millones de pesos), esto es \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno los demandantes civiles, o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes de acuerdo al IPC, interés legales y las costas del juicio.

De fs. 3.313 de fs. 3.346 (Tomo XI), el abogado Procurador Fiscal de Temuco, **Diego Acuña Gálvez**, en representación del Fisco de Chile, **contesta las demandas civiles** deducidas por el abogado David Morales Troncoso, Sebastián

Saavedra Cea y Leopoldo Huichalaf García, solicitando tener por contestadas las demandas y, en definitiva, acoger las excepciones o defensas opuestas (Excepción de reparación integral. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas alegadas por haber sido ya reparados todos los demandantes que se indican. Excepción de prescripción extintiva), negando lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable de que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización, de perjuicios, además de acoger la excepción que mira los reajustes e intereses y su cómputo, e improcedencia de condena en costas.

A **fs. 3.386 a fs. 3.401 (Tomo XI)**, la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación de **Carlos Hernán Moreno Mena**, en lo principal de su escrito contesta acusación judicial y acusaciones particulares; al primer otrosí: medios de prueba; al segundo otrosí: Beneficios de la ley 18.216; tercer otrosí se deje sin efecto apercibimiento que indica y al cuarto otrosí: solicita copia simple de resolución que indica.

A **fs. 3.427 a fs. 3.428 (Tomo XI)**, con fecha 13 de agosto de 2024, se recibió la causa a prueba.

A **fs. 3.510 (Tomo XI)**, el 03 de octubre de 2024 se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A **fs. 3.511 (Tomo XI)** del 03 de octubre de 2024 se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A **fs. 3.512 (Tomo XI), 3.545 (Tomo XI), fs. 3572 (Tomo XI), fs. 3574 (Tomo XI) y de fs. 3579 (Tomo XI)** se dictaron medidas para mejor resolver.

A **fs.3580 (Tomo XI)**, se trajeron los autos para fallo.

Resumen ejecutivo:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 1° al 42 °: 1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones y Documentos; **3°)** Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; **4°) y 5°)** Calificación jurídica de los hechos; **6°) y 7°)** Concepto de Lesa Humanidad; **8°)** Declaración Indagatoria de Carlos Hernán Moreno Mena; **9°),10°) y 11°)** Análisis de la declaración del acusado Carlos Hernán Moreno Mena, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **12°)** Defensa de la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación de Carlos Hernán Moreno

Mena; **13°)** **Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa:** **14°)** Resumen ejecutivo del auto acusatorio; **15°)** Estado de Derecho; **16°)** Obligación de investigar. **17°)** Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.; **18°)** Convenio de Ginebra; **19°)** Análisis de la Defensa Específica del acusado Carlos Hernán Moreno Mena; **20°), 21°), 22°), 23°), 24°), 25°), 26°), 27°), 28°) y 29°)** Reflexiones sobre lesa humanidad; **30°) y 31°)** Acusación particular y análisis del Tribunal; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 32°) y 33°)** Atenuante de responsabilidad penal y análisis del Tribunal; **34°)** Prescripción gradual; **35°) y 36°)** Agravantes de responsabilidad penal y análisis del tribunal; **37°), 38°) y 39°)** Determinación de la pena; **40), 41°) y 42°)** Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores;

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 43° al 49°: **43°)** Demanda Civil interpuesta por el abogado David Morales Troncoso en representación de 1) Ginette Apolonia Bocaz Peña, 2) Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña, 3) Isolina Peña Perez, 4) Patricio Leónidas Bocaz Peña, 5) Héctor Celso Avendaño Vásquez y 6) Eduardo Enrique Avendaño Stancovich; **44°)** Demanda Civil interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea y Leopoldo Huichalaf García en representación de 7) Rosalía Silva Mardones, 8) Anselmo Ascanio Fernández Silva, 9) Víctor Alejandro Fernández Sila y 10) Luis Rufino Fernández Silva; **45°)** Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Gálvez, en representación del Consejo de Defensa del Estado; **46°)** Análisis de la contestación de la demanda civil efectuada por el Fisco de Chile; **47°)** Acreditación probatoria del daño moral; **48°)** Montos; **49°)** Reajustes e intereses de la suma demandada.

Actuarios de tramitación y dato técnico:

- a. Fecha de inicio de la causa: 11 de diciembre de 2012
- b. Actuario de Tramitación Sumario: Ignacia Pérez García y Francisca Rosales Castillo.
- c. Actuario de Tramitación Plenario: Leslie Villalobos Retamal, Paulina Montealegre Carrillo y Francisca Rabié Figueroa
- d. Tomos XII

Tomo I de fs. 1 a fs. 350

Tomo II de fs. 351 a fs.713

Tomo III de fs. 714 a fs. 866

Tomo IV de fs. 867 a fs.1.215

Tomo V de fs. fs. 1.216 a fs. 1.578

Tomo VI de fs. 1.579 a fs. 1.909

Tomo VII de fs. 1.910 a fs. 2.292

Tomo VIII de fs. 2.294 a fs. 2.696

Tomo IX de fs. 2.697 a fs. 2.948

Tomo X de fs. 2.949 a fs. 3.310

Tomo XI de fs. 3.311 a fs. 3.581

Causa a la vista N°30/96 del IV Juzgado Militar de Valdivia, por delito de inhumación ilegal.

e. Fojas:294

f. Considerandos: 49°

CONSIDERANDOS:

En cuanto a la acción penal.

1°) Que de **fs. 2.923 a fs. 2.942 (Tomo IX)**, con fecha 05 de febrero de 2024, se dictó auto acusatorio en contra de Carlos Hernán Moreno Mena como autor del delito de secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, perpetrados en la comuna de Pitrufquén, desde el 18 de octubre de 1973.

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del señalado ilícito penal, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de **fs. 2.923 a fs. 2.942 (Tomo IX)**, (que corren de **fs. 1 a fs. 2.922**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de las pruebas rendidas durante el plenario.

A. Declaraciones (38).

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

1. Francisco Javier Navarrete Quijón

2. Hugo Nibaldo Catalán Lagos

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 3. Eleodoro Merino Salas | 21. Carlos Gabriel Jaramillo Flores |
| 4. German Fernández Torres | 22. Rosalía Silva Mardones |
| 5. Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy | 23. Orfelina Del Tránsito Vásquez |
| 6. Luis Arnoldo Becerra Jaramillo | 24. Juan Nolberto Caamaño Toledo |
| 7. Guillermo Fabio Muñoz Rodhe | 25. Candelaria Del Transito Álvarez Vásquez. |
| 8. Esmeraldina Stancovich Meriño | 26. Hernando Atilio Madariaga Fernández |
| 9. Octavio Castillo | 27. Luz Edelmira Álvarez Vásquez |
| 10. Carlos Alberto Salinas Mora | 28. Eduardo Enrique Avendaño Stancovich |
| 11. Juan Alfonso Prado Ponce | 29. Jorge Orlando Henríquez Muñoz |
| 12. Carlos Eugenio Ramírez Gatica | 30. Plácido Del Carmen Carrillo Hermosilla |
| 13. Reinaldo Aurelio Hernández Reyes. | 31. Víctor Alejandro Fernández Silva |
| 14. María Elena Calfuquir Henríquez | 32. Ángel Ascanio Fernández Barrera |
| 15. Oscar Manuel Seguel Jofré | 33. Isolina Peña Pérez |
| 16. José Job Jiménez Vergara | 34. Sofia Iris Bocaz Muñoz |
| 17. Juan Fernando Rioseco Montoya | 35. Patricio Leónidas Bocaz Peña |
| 18. Domínica Aguilera Caamaño | 36. Mauricio Guy Alexis Teillier Del Valle |
| 19. Héctor Celso Avendaño Vásquez | 37. Rubén Darío López Llanos |
| 20. René Laureano Teillier Del Valle | 38. Flavio José Urra Guiñez |

A.1 Francisco Javier Navarrete Quijón (23 años a la época de los hechos) depone de fs.110 a fs.111 (tomo I) copia de fs. fs. 1.047 a fs. 1.048 (Tomo IV) y de fs. 2103 a fs. 2104 (Tomo VII) y de fs.114 a fs.115 (tomo I) copia de fs. 2107 a fs. 2108 (Tomo VII).

En **declaración extrajudicial** de fecha 06 de febrero de 2014 **rolante a fs. 110 a fs. 111 (Tomo I), copia de fs. 1.047 a fs. 1.048 (Tomo IV) y de fs. 2103 a fs. 2104 (Tomo VII)**. Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Destaca que en el año 1973, ostentaba el grado de Carabinero y prestaba servicios en el Retén Los Galpones, al mando del Cabo Benjamín Chávez y lo conformaban cinco funcionarios, a saber Mellado, Germain Punulef y Raúl Amulef. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, por órdenes superiores de la Prefectura de Temuco, el Retén debió cerrar y su personal trasladarse a la 5° Comisaría de Pitrufquén, unidad donde permanecerían acuartelados, apoyando en la seguridad y servicios de patrullajes de controles de toque de queda. Durante los patrullajes que le correspondió efectuar, nunca detuvo ni trasladó detenidos por infringir el toque de queda, como tampoco por temas políticos. Anexa que en su caso particular no se vio involucrado en allanamientos donde detuvieran personas. En los servicios de guardia, su labor era de centinela y durante el desarrollo de

estas, observó un gran flujo de detenidos, los cuales permanecían en las caballerizas, debiendo hacer presente que las custodias eran realizadas por los mismos funcionarios que efectuaban las detenciones. Con relación a los funcionarios dedicados a las detenciones por temas políticos, en la Comisaría existía un grupo selecto de confianza del Mayor Callis, siendo ellos Reinaldo Lukowiak, Bernardo Catalán, Raúl Amulef (Chofer), Antonio Silva (Chofer) y otros que no recuerda. Durante el cumplimiento de sus deberes en la 5° Comisaría, llegó detenido un Profesor de apellido Seguel, a quien conocía del Sector Los Galpones, por lo que se acercó a las caballerizas y pudo conversar con él, momentos donde fue sorprendido por el teniente Carlos Moreno, quien lo increpó y señaló que se retirará del lugar y volviera a la guardia, siendo esa la única oportunidad que tuvo contacto con los detenidos de las caballerizas. A su consulta sobre la víctima Luís Fernández Barrera, no lo conoce e ignora las circunstancias que rodearon su detención y posterior desaparición.

En **declaración judicial** de fecha 06 de agosto de 2014 **rolante de fs. 114 a fs. 115 (Tomo I) copia de fs. 2107 a fs. 2108 (Tomo VII)**. Ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 110 a fs. 111 y que en este acto le ha sido leída. En esos años la unidad tenía un furgón para las labores habituales, al parecer era blanco con negro. Además, después del 11 de septiembre de 1973 se requisaron vehículos al SAG, dos furgones de color verde. A su pregunta, los detenidos por motivos políticos eran mantenidos en las caballerizas del cuartel, no debiendo ingresar a ellos, otros funcionarios que no fueran los encargados de sus detenciones o custodia, es decir, los más antiguos de la unidad y que pertenecían al grupo del Capitán Callis. A su pregunta, el Teniente Moreno sabía lo que pasaba en la unidad, porque era el Subcomisario del cuartel, es decir, el segundo de los jefes. Él podía transitar libremente por toda la Comisaría, incluso por las caballerizas. Recuerda el caso de un profesor de Apellido Seguel que era de Los Galpones. A este profesor lo mantenían detenido en las caballerizas de la unidad, según comentarios de los otros funcionarios. En un momento, aprovechando que no había nadie cerca de las caballerizas, concurrió hasta ahí y divisó a Seguel, le preguntó cómo estaba, pero de inmediato apareció el Teniente Moreno y lo retó por estar en ese lugar y que se retirara de allí. A su pregunta, respecto al profesor Seguel no supo nada más de él, hasta que muchos años después se encontraron en Santiago, pero él lo eludió

cuando trató de saludarlo. Respecto a Celso Avendaño Alarcón, es primera vez que escucha su nombre e ignora todo antecedente al respecto.

A.2 Hugo Nibaldo Catalán Lagos (28 años a la época de los hechos) declara de fs.128 a fs.129 (tomo I) copia de fs. 1.147 a fs. 1.148 (tomo IV), de fs.351 a fs.354 (tomo II), de fs.634 a fs.635 (tomo II) y de fs. 2.150 a fs. 2.151 (tomo VII).

En **declaración extrajudicial** de fecha 28 de septiembre de 2014 **de fs. 128 a fs. 129 (Tomo I), copia de fs. 1147 a fs. 1148 (Tomo IV)**. Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Para el día 11 de septiembre de 1973, era parte de la dotación de la 5ª Comisaría de Pitrufquén, a cargo del Capitán Sergio Callis Soto, siendo secundada por el Teniente Carlos Moreno Mena, Suboficial Reinaldo Alberto Lukowiak Luppi, Sargento Segundo Aroldo Hernández Reyes, Sargento Emilio Caro y Germán Fernández; Cabo Primero Reinaldo Hernández Reyes, Antonio Silva Soto, Carabinero Raúl Amulef, Cabo Juan Asenjo Inostroza, Bernardo Catalán y otros que no recuerda en estos momentos. Luego del pronunciamiento su labor específica fue proteger la población civil y realizar servicio de guardia de cuartel. Acerca de un grupo especial o interrogatorios realizados en la 5ª Comisaría, existía un grupo a cargo del Comisario Callis, Carabinero Silva Soto, Cabo Primero Juan Rioseco, Sargento Germán Fernández, Cabo Primero Carlos Ramírez, todos cuales realizaban las detenciones políticas de la fecha y los interrogatorios. Siendo el lugar de interrogatorios las caballerizas o bodega de forrajes, al cual estaba estrictamente prohibido ingresar, salvo el Comisario y el personal que custodiaba los detenidos. De la víctima Celso Segundo Avendaño Alarcón, desconoce todo tipo de antecedente respecto a ese hecho. Señala que sólo participó en la detención de dos profesores a los cuales no conocía, Urrutia y Seguel.

En **declaración judicial** de fecha 29 de octubre de 2015 **rolante a fs. 351 a fs. 354 (Tomo II)**. Explica que cuando Callis no estaba, el Teniente Moreno Mena era quien subrogaba sus funciones. Ese era el orden jerárquico. Sin embargo, en algunas oportunidades era Lukowiak, el tercero al mando, quien en esa época era Suboficial Mayor, asumía las funciones de mando en la unidad cuando Callis no estaba. Tiene entendido que las relaciones entre Callis y Moreno Mena no eran muy buenas, era un oficial que no sabía dar órdenes, ellos, los otros funcionarios no les gustaba su forma de ser. Por esta razón Lukowiak tomaba el mando de la Comisaría en ausencia de Callis. Asevera que el Teniente Moreno Mena tenía acceso a todas

las dependencias de la unidad de Pitrufrquén, exceptuando el almacén de armamento y de vestuario, a cargo de Lukowiak. Moreno Mena estaba al tanto de todas las personas que estaban detenidas en la unidad después del 11 de septiembre de 1973. Él, como Oficial, estaba al tanto de ello e incluso vivía en la unidad, porque era soltero. No le correspondió detener a personas por motivos políticos. Participó activamente en dos detenciones, dos profesores, uno de nombre Oscar Seguel y otro de apellido Urrutia. Incluso con respecto al primero estuvo en su matrimonio tiempo antes. Ellos fueron detenidos y se mantuvieron por alrededor de 2 días en la unidad, para luego ser trasladados hasta Temuco. Narra que el Capitán Callis trabajaba con el Sargento Fernández Torres, Ramírez, Río Seco y como chofer actuaba Silva. Ellos estaban a disposición de Callis, las 24 horas. Recuerda que incluso llegaban detenidos de otras unidades, como Toltén y Gorbea, dejando detenidos en la unidad para luego, cuando se juntaba una cantidad considerable de personas, se trasladaban hasta Temuco. A su pregunta, las órdenes de la Fiscalía Militar o los bandos que se emitían eran recibidas por el Capitán Callis y él disponía quien debía ejecutar las aprehensiones. Él tenía su grupo para hacer esas labores, es decir, los que mencionó anteriormente. A su pregunta, a los detenidos por motivos políticos los mantenían en un lugar denominado las caballadas, que estaba al final del patio de la unidad, en un segundo piso. Cuenta que en algunas oportunidades tuvo que ir a las caballadas y pudo ver a personas detenidas, pero no reconoció a nadie. Tiene entendido que el Capitán Callis, junto con Fernández, Torres, Río Seco y Carlos Ramírez, interrogaban a los detenidos en las mismas caballadas. Al parecer también Lukowiak lo hacía, pero eso no le consta. Adopta que en muchas oportunidades se le llamó la atención porque cuando él estaba a cargo de la oficina de armamento dejaba constancia de todo, del estado de las armas y del uso de municiones. Era prolijo y muchas veces consignada en los libros que los armamentos llegaban con tierra, y sin algunas balas. Por esa razón el Capitán le llamaba la atención. Manifiesta que en varias oportunidades Fernández Torres le indicó que "salieron a conejear", dándole la impresión de que iban a detener a personas. El deponente no hacía mayores comentarios porque ellos eran superiores a él y tampoco los podía interrogar al respecto. Su función era mantener en buen estado el armamento. Se refiere a otros hechos. En relación a Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera, Juan Héctor Ñancuñil Reuque

e Ismael Bocaz Muñoz no recuerda esos nombres y desconoce su actual ubicación. Luego relata hechos de otras causas, sin aportar más antecedentes.

En **declaración extrajudicial** de fecha 11 de julio de 2018 **rolante a fs. 634 (Tomo II)**. Funda que respecto de Celso Avendaño Alarcón, no lo recuerda bien, recalca, a esa persona nunca la conoció. Respecto a la circunstancia de la detención de la víctima, donde se le comenta que un familiar de Avendaño lo involucra como su aprehensor, esa situación es falsa, debido que el Comisario Capitán Callis jefe de su unidad, lo designó como encargado de armamento del cuartel, por lo que no tuvo la labor operativa durante ese periodo. Ahora bien, por la falta de personal reconoce el haber participado en dos detenciones recordando que estas corresponden a la de los profesores de apellido Seguel y Urrutia. En la Comisaría existiría otro carabinero de apellido Catalán, cuyo nombre era Bernardo, no teniendo claro en esos momentos cuál era su otro apellido, en ese tiempo ostentaba el grado de Carabinero y generalmente era utilizado para labores operativas, es decir, fuera del cuartel. Respecto al funcionario de apellido Orellana, ostentaba el grado de Cabo Primero, era más antiguo que el deponente, y lo apodaban "cachito" y por lo que recuerda después del golpe de estado nunca le correspondió salir con él, debido las labores que él desempeñaba. Sobre el grupo encargado de efectuar detenciones por tema políticos recuerda que estaba Rioseco, Fernández, y Ramírez, quienes casi siempre salían bajo las órdenes del Capitán acompañados por el Teniente Moreno o el Suboficial Lukowiak.

En **diligencia de careo judicial con Reinaldo Lukowiak Luppy**, de fecha 28 de agosto de 2000, **rolante a fs. 2150 a fs. 2151 (Tomo VII)**. Ratifica sus dichos prestados en la causa. Atestigua se desempeñaba como Cabo primero en la Comisaría de Pitrufquén y les correspondió detener personas, pero no por propia iniciativa de ellos sino a raíz de bandos provenientes de Temuco de Fiscalía y ellos debían darle cumplimiento. El deponente estaba recién llegado a la ciudad y no conocía a las personas, respecto de las que se le menciona no las ubica, por lo tanto, no puede decir puntualmente que participó en su detención. Aunque puede que entre las personas que en alguna oportunidad le correspondió detener anduviese algunas de las personas. Él se desempeñaba como guardia de armamento, pero a veces tenía que salir en los operativos, además de desempeñarse en labores de seguridad del cuartel y patrullaje de la población

cuando así se disponía. En el mes de febrero de 1974 se fue a la Escuela de Suboficiales ahí había otro funcionario de carabineros de apellido Catalán, pero no recuerda el nombre. Se mantiene en sus dichos.

A.3 Eleodoro Merino Salas (42 años a la época de los hechos) quien declara de fs.130 a fs.131 (tomo I) copia de fs. 2.826 a fs. 2.827 (Tomo IX), de fs.203 a fs.204 (tomo I) copia fs. 2157 a fs. 2158 (Tomo VII) y fs. 2.828 a fs. 2.829 (Tomo IX), de fs.337 a fs.338 (tomo I) copia de fs. 2.830 a fs. 2.831 (tomo IX), de fs. 1.092 a fs. 1.094 (tomo IV) copia de fs. 2092 a fs. 2094 (Tomo VII), de fs. 1.416 (tomo V), de fs. 2.022 a fs. 2.023 (Tomo VII) copia de fs. 1.012 a fs. 1.014 y de fs. 2043 a fs. 2045 (Tomo VII), de fs. 2.157 a fs. 2.158 (tomo VII), de fs. 2.405 a fs. 2.406 (Tomo VIII) con copia de fs. 2.488 a fs. 2.489 (tomo VIII), de fs. 2.488 a fs. 2.489 (tomo VIII) y de fs. 2.823 a fs. 2.825 (Tomo IX).

En **declaración extrajudicial** de fecha 27 de septiembre de 2014 **rolante a fs. 130 a fs. 131 (Tomo I) copia de fs. 2.826 a fs. 2.827 (Tomo IX)**. En lo pertinente se refiere a su carrera funcionaria. Barbulla que el día 11 de septiembre de 1973, era parte de la dotación de la 5ª Comisaría de Pitrufquén, a cargo del Capitán Sergio Callis Soto, siendo secundada por el Teniente Carlos Moreno Mena, además de Suboficial Reinaldo Alberto Lukowiak Luppi, Sargento Segundo Aroldo Hernández Reyes, Sargento Emilio Caro y Germán Fernández, Cabo Primero Reinaldo Hernández Reyes y los Carabineros Antonio Silva Soto, Nibaldo Catalán, Lagos, Raúl Amulef, Cabo Juan Asenjo Inostroza y otros que no recuerda en estos momentos. Luego del pronunciamiento, su labor específica fue proteger la población civil y realizar servicios de guardia de cuartel. Desconoce la existencia de un grupo especial o interrogatorios realizados en la 5ª Comisaría. Hubo un grupo que salía constantemente con el mando de la unidad integrado por el Comisario Callis, Carabinero Silva Soto y Germán Fernández, los cuales realizaban las detenciones políticas de la fecha y los interrogatorios, siendo el lugar de interrogatorios las caballerizas o bodega de forrajes. Estaba estrictamente prohibido ingresar, salvo el Comisario, Teniente Moreno y Lukowiak. En relación a Celso Segundo Avendaño Alarcón, desconoce todo tipo de antecedente respecto a ese hecho, pero sí lo conoció debido a que era un activista el cual se encargó de la toma del fundo "Boldero" en la localidad de Toltén. Nunca participó u observó torturas o muertes a civiles por parte de carabineros.

En **declaración judicial** de fecha 05 de febrero de 2001 **rolante de fs. 203 a fs. 204 (Tomo I) copia de fs. 2157 a fs. 2158 (Tomo VII) y de fs. 2.828 a fs. 2.829 (Tomo IX)**. Utiliza que ignora quienes cumplían las ordenes emanadas de la Fiscalía Militar de Temuco porque esa materia siempre la manejaba personalmente el Comisario Ramón Antonio Callis Soto, el cual era muy hermético de ser y mantenía relaciones institucionales con gente de su entera confianza que eran los mínimos. Él y su segundo en el mando, el Teniente Moreno, eran personas que los trataban muy mal, como ha dicho ignora quienes detenían a las personas por órdenes emanadas de la Fiscalía Militar y puede decir que él no era uno de ellos. Él realizaba los servicios de vigilancia en la población, pero nunca detuvo a ninguna persona. Se refiere a otros hechos.

En **declaración extrajudicial** de fecha 05 de julio de 2005 **de fs. 337 a fs. 338 (Tomo I) copia de fs. 2.830 a fs. 2.831 (tomo IX)**. Agrega que la Comisaría contaba con dos oficiales al mando, el Capitán Ramón Callis Soto y el Subteniente Carlos Moreno Mena. El jefe de unidad contaba con un chofer para sus gestiones, siendo éste el Carabinero Domingo Silva Soto. El Suboficial con graduación era Reinaldo Lukowiak Luppy, sin duda el hombre de confianza de Callis, además de su chofer, Lukowiak también en algunas circunstancias le conducía al Capitán, específicamente cuando salían en la camioneta Chevrolet, modelo C10, de color blanco, sin duda Lukowiak era más cercano al Capitán que el mismo Teniente. Él por su parte para la época ostentaba el grado de Sargento, siendo el de menor antigüedad y grado que Octavio Castillo, su función específica era ser carabinero de orden y seguridad, sin que participará en detenciones de personeros políticos en ninguna circunstancia, ya que para estos cometidos el Capitán Callis tenía su gente seleccionada de su confianza, siendo estos funcionarios el propio Lukowiak, el Carabinero Silva Soto, dentro de los que recuerda. En relación a Hugo Catalán Lagos lo recuerda como ayudante de Lukowiak en las labores de almacén de vestuario, equipo y sala de armas, teniendo entre ambos bastante afinidad. Con motivo de los sucesos ocurridos para el 11 de septiembre de 1973, a la unidad llegaron distintas ordenes relacionadas con temas de índole política, emanadas de la Fiscalía Militar del Ejército de Temuco y la Fiscalía de Carabineros de Cautín, relacionadas con la detención de diversos personeros políticos de Pitrufquén y sus alrededores, ordenes que nunca vio, pues llegaban directamente a la oficina del

Comisario. Como los detenidos políticos llegaron a la Comisaría, en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, fueron separados de los detenidos comunes. Así se habilitó el segundo piso de las caballerizas existentes en las dependencias de la Comisaría, a la cual se accedía por una escala de madera de unos ocho metros de largo por un metro y medio de ancho, que se encontraba fija a la estructura que era del material mixto y este segundo piso era una bodega compuesta de una sola dependencia, la que contaba con ventanas para la ventilación, siendo esta parte del cuartel un lugar prohibido para el común de los funcionarios, por orden del Capitán Callis. Solamente permanecía allí el funcionario que vigilaba ese lugar para lo que existía un turno de custodia y solo tenían acceso en forma libre Lukowiak, Nibaldo Catalán y el propio Capitán Callis. Se refiere a hechos de otra causa. Adopta que los funcionarios Lukowiak y Catalán Lagos casi no compartían con el resto del personal, ya que mantenían una estrecha relación con el capitán Callis. Delibera que el destacamento de militares que se encontraba en el sector de la isla municipal, los cuales eran al parecer del regimiento Tucapel, estaban allí apostados ignorando con qué objetivo, además dicho personal militar, concurría en forma esporádica a entrevistarse con el Capitán Callis, ignora el tenor de esos temas, ya que por su grado cumplía servicios en la población y casi no pasaba en el cuartel. En relación al helicóptero de la base aérea Maquehue que aterrizaba en el sitio eriazó, ubicado al costado de la Comisaría, al cual vio aterrizar en una ocasión en dicho lugar y que venía con tripulación de la FACH, efectivamente el Capitán Callis salía en este helicóptero, acompañado de funcionarios de carabineros cuyas identidades no puede precisar.

En **declaración judicial** de fecha 23 de abril de 2014 **rolante a fs. 1092 a fs. 1094 (Tomo IV) copia de fs. 2092 a fs. 2094 (Tomo VII)**. Ratifica su declaración extrajudicial leída en el acto. El grupo operativo es el que señaló y no recuerda en este momento más nombres, y esto es así porque él llevaba muy poco tiempo en Pitrufquén para esa época y era a los que ubicaba. En cuanto a los civiles, ellos entraban a conversar con el Comisario, desconociendo el tenor de sus conversaciones. Una vez que conversaban se iban de la oficina. Se imagina que debe haber existido alguna orden judicial para detener personas, pero él jamás la tuvo materialmente en sus manos una orden. Para ese entonces funcionó un tribunal de la Fiscalía Militar a cargo de don Alfonso Podlech. No supo si se torturó

personas en la Comisaría de Pitrufquén. Esta se dividió en dos, el día 11 de septiembre de 1973 cuando se produjo el golpe de estado, orden dada por el Comisario Ramón Callis Soto. A él correspondía atender a las consultas de la gente solo en el cuerpo de guardia. Para el interior no tenían acceso, solo lo hacía el Comisario, el Teniente Moreno, con sus respectivos grupos operativos que ellos tenían. Los detenidos eran llevados por la puerta falsa, que es por donde entran los vehículos. Eran llevados a las caballerizas. No había registro en el cuerpo de guardias. Esos registros solo los llevaban ellos. Supo que el grupo operativo se movilizaba en un jeep de la institución y una camioneta facilitada por un particular, cuyo nombre no recuerda en este momento, pero cree que este fallecido. Este vivía en calle Balmaceda cercano a la plaza, su apellido era Maure le parece. A su pregunta, de los civiles que nombra en la declaración policial quien está muerto es Juan Vásquez y Raúl Robín. No tiene conocimiento de que se hubiese fusilado a alguien en la comuna de Pitrufquén por parte de Carabineros. Lo que sabe es que hubo una patrulla militar acampando en la isla del Río Toltén, los que hacían patrullajes en el interior y parte rural de Pitrufquén. No recuerda la población aproximada de habitantes que tenía Pitrufquén en esa época, lo que si puede decir es que era un pueblo de mediana capacidad. A su pregunta, la Comisaría la integraban alrededor de cuarenta y tantos funcionarios, más los destacamentos que tenía en su sector. Él era subordinado del Comisario, del Teniente Moreno, de los Suboficiales que eran de mayor graduación que su persona, y bajo él había otras personas en la cadena de mando. A su pregunta, no hubo ningún comentario de personal hacia él que le contara que se hubiese torturado, asesinado, salvo un ex Cabo que me mencionó que cuando fueron a detener a un señor Calfuquir con el Comisario a la cabeza, lo aprehendieron en su domicilio y lo llevaron a las caballerizas. A su pregunta, no recuerda haber conocido a la víctima que le menciona, ni tampoco supo que haya estado detenida ni de su desaparición. Tampoco supo que hubiese existido tomas de fundos para establecer asentamientos en Pitrufquén. En el sector de la base de la Comisaría no hubo tomas de terrenos, parece que para Toltén si hubo y en Loncoche. A su pregunta, a los funcionarios que le menciona recuerda que Lukowiak era el más jerarquizado dentro de los Suboficiales.

En **declaración extrajudicial** de fecha 04 de octubre de 2013 **rolante de fs. 2022 a fs. 2024 (Tomo VII)** copia de **fs. 1012 a fs. 1014 (Tomo IV), fs. 2043 a fs. 2045 (Tomo VII)**. Suma que respecto de la víctima Ismael Bocaz Muñoz no conoció a esta persona e ignora y desconoce las circunstancias que rodearon su detención y posterior desaparición debiendo hacer presente que nunca le correspondió efectuar detenciones de personas por temas políticos, ya que existía un grupo específico de funcionarios. No aporta más antecedentes.

En **declaración extrajudicial** de fecha 04 de mayo de 2016 **rolante de fs. 2.405 a fs. 2.406 (Tomo VIII) con copia de fs. 2.488 a fs. 2.489 (tomo VIII)**. Glosa que el día 11 de septiembre de 1973, se encontraba ejerciendo funciones de Suboficial de Guardia y por orden del Capitán Callis, debió clausurar una puerta interior que da acceso al patio de la Unidad Policial, lugar por donde ingresaban los detenidos de índole político que eran conducidos por el personal policial en los patrullajes a cargo del Capitán Ramón Callis Soto, Teniente Carlos Moreno y por el Suboficial Mayor Reinaldo Lukowiak, siendo acompañados habitualmente por el Sargento Germán Fernández y el Cabo Hugo Catalán Lagos, completando sus patrullas con personal que se encontraba disponible en el cuartel. Por los antecedentes que maneja, el Capitán Callis, utilizaba un vehículo institucional de la Comisaría, en cambio el Teniente Moreno, se movilizaba en una camioneta particular, facilitado por un caballero de apellido Maurer y el Suboficial Lukowiak, utilizaba habitualmente vehículos particulares, facilitados por amigos de éste. Espeta que no le correspondió participar en interrogaciones, siendo los encargados de estas labores el Capitán Callis, Teniente Moreno y el Suboficial Lukowiak en conjunto con su personal de confianza, los cuales eran el Sargento Fernández y el Cabo Catalán. Conforme a su recuerdo, existió personal de la Fuerza Aérea que se encontraban en la Isla del Río Toltén, la que se ubicaba a la altura de calle Baquedano, incluso hay una bajada al río desde donde se ve la isla, ahí estaban apostados los efectivos de la FACH, quienes se desplazaban en camiones de su institución. Cuenta que nunca vio que estos militares se hayan apersonado en dependencias de la Comisaría, por lo que desconoce sus identidades. Anexa que en oportunidades llegaba un helicóptero de la Fuerza Aérea el cual se posaba en cercanías de la Unidad Policial, a objeto de recoger al Capitán Callis, para efectuar vuelos por la zona, con el objetivo" de ubicar a personas opositoras al régimen

militar, ignorando si esa búsqueda tuvo resultados, ya que siempre el helicóptero dejaba solo a Callis acá en Pitrufrquén. Refiere que el retiro de detenidos desde la Comisaría por personal de Ejército, no le consta, porque no la vio, puede presumir que parte de los detenidos por temas políticos eran trasladados hasta la Base Aérea Maquehue de Temuco, debido a la estrecha relación que había entre el Capitán Callis y el Comandante de la Base Aérea. Supo de esa relación de amistad, ya que Callis, diariamente iba a Temuco en dirección a esa unidad Militar. Soflame que un señor de apellido Calfuquir, Tenorio que estuvieran detenidos en esta unidad policial, no le consta puesto que nunca los vio. Empero por comentarios se enteró que un Carabinero de apellido Meriño, habría participado en la detención de Calfuquir. Se enteró por comentarios que vio un cuerpo flotando a la altura de Comuy, no teniendo mayores conocimientos al respecto, ni enterándose de alguna orden del Capitán Callis, que instruyera ir a retirar cuerpos al río. De Moisés Norambuena, desconoce todo antecedente relacionado con su paradero y destino final.

En **declaración extrajudicial** del 27 de febrero de 2014, **fs. 2.823 a fs. 2.825 (Tomo IX)**. Espeta que en 1973, ostentaba el grado de Sargento 2° de Carabineros y se desempeñaba en la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufrquén ubicada en calle Gronow esquina 21 de mayo de Pitrufrquén. A cargo de dicho lugar estaba el fallecido Capitán Ramón Callis Soto, siendo secundado en el mando por el Teniente Carlos Moreno Mena. Recuerda al Suboficial más antiguo, Reinaldo Lukowiak Luppy. A partir del 11 de septiembre de 1973, quedaron en calidad de acuartelados, justamente ese día se encontraba de Suboficial de guardia, recordando como cuartelero estaba el Cabo Ambrosio Antipan Linconao, actualmente fallecido. El acuartelamiento duró entre 15 o 20 días en su totalidad, pero grado uno estuvieron ocho o diez días en los cuales no se puede salir de la unidad. Apunta que el mismo 11 de septiembre se recogió a esa unidad en el Retén Los Galpones, es decir todo su personal se agregó a la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufrquén. El día del pronunciamiento militar, el Capitán Callis, le ordenó clausurar las puertas que daban al patio trasero de la unidad, dejando solamente en funcionamiento una puerta falsa de acceso a la unidad que se ubicaba por calle 21 de mayo. Delibera que la 5ta Comisaría contaba con un vehículo fiscal que correspondía a un jeep. A los días siguientes particulares facilitaron sus vehículos para el cumplimiento de las funciones, entre ellas una camioneta Chevrolet color verde, no rememora quien era

su propietario. El conductor de vehículos policiales era Domingo Antonio Silva Soto, fallecido. Los detenidos eran ingresados por la puerta falsa, no recordando registros en los libros. Estos eran alojados en bodegas de forraje ubicadas en el segundo piso de las pesebreras de la unidad. Urde que el Capitán Callis, el Teniente Moreno y el Suboficial Lukowiak conformaban agrupaciones encargadas de efectuar las detenciones de personas opositoras al régimen impuesto el día 11 de septiembre. De acuerdo a lo que rememora Lukowiak siempre trabajaba con el Cabo Hugo Nibaldo Catalán Lagos con el personal que estuviera a disposición, en cambio el Teniente Moreno efectuaba ese tipo de diligencias con el personal disponible. Desarrolla que con Lukowiak nunca salió a efectuar algún tipo de detención, empero en una oportunidad salió con el Teniente Moreno y se dirigieron a la salida poniente de la comuna, camino a Toltén a detener a un hombre cuyo apellido no recuerda, de tendencia de izquierda y lo llevaron en calidad de detenido a la Comisaría y al día siguiente lo trasladaron a Temuco a la Fiscalía Militar donde quedó en libertad. Ese señor fue detenido en el domicilio de su conviviente de apellido Rodríguez. Funda que en Pitrufquén hubo personal del Ejército, cumpliendo funciones de patrullaje, acamparon en el sector "La isla Toltén", ubicada a orillas del río del mismo nombre. Los militares deben haber sido de dotación del Regimiento Tucapel. Reconoce que hubo un Capitán que siempre iba a conversar con el jefe de unidad. La patrulla militar estaba compuesta por 15 o 20 efectivos y se movilizaban en un camión, no vio que sacaran detenidos de la Comisaría, sabía que si tomaban gente detenida en Pitrufquén a los cuales llevaban al cuartel de campaña, ignorando si se llevaron algún detenido a Pitrufquén. Los interrogatorios se realizaban en las pesebreras. A dicho espacio solo tenían acceso el capitán Callis, el Teniente Moreno y Lukowiak, en algunos casos con su ayudante Catalán.

A.4 German Fernández Torres (46 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declaraciones de fs.133 a fs. 134 (tomo I) copia de fs. 1.153 a fs. 1.154 (tomo IV), de fs.272 a fs.273 (tomo I) copia de fs. 2.226 a fs. 2.227(tomo VII) y de fs. 1.265 a fs. 1.266 (Tomo V), de fs.329 a fs.333 (tomo I) copia de fs. 2.283 a fs. 2.285 (tomo VII), de fs.346 a fs.349 (tomo I) copia de fs. 2.311 a fs. 2.314 (tomo VIII), de fs.662 a fs.666 (tomo II) copia de fs. 2.698 a fs. 2.702 (tomo IX), de fs. 1.655 a fs. 1.659, de fs. 1.835 a fs.1.937 (tomo VI), de fs. 1.286 (tomo V) copia de fs. 2.247 (tomo VII).

En **declaración extrajudicial** de fecha 27 de septiembre de 2014 **rolante de fs.133 a fs. 134 (tomo I) copia de fs. 1.153 a fs. 1.154 (tomo IV)**. Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Delibera que para el 11 de septiembre de 1973, ostentaba el grado de Sargento Segundo y se desempeñaba en la Oficina de órdenes judiciales emanadas de los Tribunales, diligenciando órdenes de citación, investigación y de detención, siendo mayoritariamente esta su labor. En esta oficina trabajaba solo, con la excepción de la realización de las órdenes de detención, para lo cual necesitaba el apoyo de sus compañeros. Las detenciones fueron respaldadas por órdenes judiciales, y las personas detenidas eran mantenidas en los calabozos al interior de la 5° Comisaría de Pitrufquén, para luego ser puestos a disposición del Tribunal correspondiente. Durante su estadía en la 5° Comisaría de Pitrufquén, se realizaron detenciones ordenadas por la Prefectura de Temuco, de las cuales nunca participó. Éstas, eran practicadas por un grupo especial, constituido por el Teniente Carlos Moreno Mena, Suboficial Mayor Reinaldo Lukowiak Luppy, Cabo Hugo Catalán Lagos y el Carabinero Raúl Amulef Sandoval. En relación a los detenidos llevados por este grupo especial, eran mantenidas en el segundo piso de recinto que denominaban "Caballerizas". La índole de estas detenciones al parecer era de carácter política, desconociendo mayores antecedentes al respecto. En cuanto a la persona que le señala como víctima, Celso Segundo Avendaño Alarcón, no la conoce y nunca la oyó nombrar antes.

En **declaración judicial** de fecha 10 de noviembre de 2005 **rolante de fs.272 a fs.273 (tomo I) copia de fs. 2.226 a fs. 2.227(tomo VII) y de fs. 1.265 a fs. 1.266 (Tomo V)**. Barbulla que respecto de las circunstancias en que fue detenido don Luis Calfuquir, una noche del mes de septiembre de 1973 luego del golpe, el Teniente Moreno le notificó que iban a salir en un operativo. Salieron a pie junto al Teniente y a los Carabineros Lukowiak, Catalán y Amulef. Se dirigieron a la casa del señor Calfuquir y una vez allí Moreno con Lukowiak y Catalán se pararon frente a la puerta y luego de tocar esperaron que abrieran. Una vez ocurrido esto, los mencionados funcionarios entraron a la casa y se dirigieron hasta la pieza de Calfuquir, quien se encontraba acostado. Luego de esperar a que se vistiera, lo tomaron y salieron de la casa juntándose con Amulef y con su persona que se había quedado afuera. Se dirigieron a la Comisaría y entregaron al detenido en la guardia. Respecto de la detención del señor Burgos Lavoiz, recuerda que una mañana de septiembre antes

de las doce del día se dirigieron al Banco del Estado de Pitrufrquén en la camioneta de color blanco en compañía del Capitán Callis, el Carabinero Silva, Catalán, Lukowiak y otros carabineros que no recuerda. El Capitán Callis y él entraron al banco, y procedieron a la detención del señor Burgos. Luego de esto Lukowiak y Catalán se lo llevaron a pie hasta la Comisaría. Existían dos patrullas de carabineros en Pitrufrquén, la primera denominada "Patrulla Callis", integrada por el Capitán Callis, Domingo Silva Juan Rioseco, Carlos Ramírez y su persona. Rioseco vive en Temuco y Ramírez al parecer en Concepción. La segunda patrulla era la "Patrulla Moreno" formada por el Teniente Moreno, Catalán, Lukowiak, Amulef y Meriño.

En **declaración extrajudicial** de fecha 01 de marzo de 2006 **rolante de fs.329 a fs.333 (tomo I) copia de fs. 2.283 a fs. 2.285 (tomo VII)**. Puntualiza que con ocasión de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973, el Jefe de unidad dispuso dos grupos de trabajo para el cumplimiento de los requerimientos emanados de las Fiscalías. En relación a los encargados de la detención de algunos personeros políticos, el primero de los grupos estaba conformado por el Capitán Callis, los Cabos Carlos Ramirez, Gatica y Juan Rioseco Montoya, el Carabinero Antonio Silva Soto; chofer de la unidad y el suscrito. En tanto el segundo grupo estaba conformado por el Teniente Carlos Moreno, el Suboficial Reinaldo Lukowiak, los Cabos Hugo Catalán Lagos, José Meriño Ferreira y el Carabinero Raúl Amulef Sandoval actualmente residente en Argentina. Hubo un gran número de detenidos por razones políticas que ingresaron a la Comisaría, cada patrulla se hacía responsable de sus detenidos en cuanto a sus interrogatorios y destinos finales. Musita que en septiembre de 1973, en el Puente Toltén de ingreso a Pitrufrquén, no tenía custodia permanente de personal de Carabineros, pero cuando se instalaba algún servicio en el mismo, era el personal de su unidad. Con relación al Puente Allipén que se encuentra en el camino que une a las ciudades de Freire y Villarrica, era personal de la Subcomisaría de Freire la que se encargaba de la custodia de dicha estructura. En relación a las personas por las que se consultan y que ingresaron detenidos en algún momento a la 5° Comisaría, recuerda la segunda detención de un funcionario del Hospital de Pitrufrquén de nombre Luis Calfuquir Villalon, a quien ubicaba ya que trabajaba en el centro asistencial. Esta persona fue detenida desde su domicilio una noche en el mes de septiembre, en un procedimiento que se efectuó a pie, a cargo del Teniente Carlos Moreno Mena,

integrado por el Suboficial Lukowiak, los Cabos Catalán Lagos y José Adrián Meriño, el Carabinero Raúl Amulef y quien habla, siendo su persona el único funcionario de la patrulla del Capitán Callis. Recuerda que fue el Teniente Moreno, quien notificó de su participación en este operativo el cual culminó con la detención de Calfuquir, quien una vez detenido fue trasladado hasta las dependencias de la Comisaría, específicamente a la guardia, lugar del cual se retiró para dirigirse a su dormitorio, siendo ésta la última vez que vio al señor Calfuquir, quien quedó en manos del Teniente Moreno y su grupo. Se refiere a otros hechos.

En **declaración judicial** de fecha 29 de octubre de 2015 **rolante de fs.346 a fs.349 (tomo I) copia fs. 2.311 a fs. 2.314 (tomo VIII)**. Narra al mando de la Comisaría de Pitrufquén estaba el Capitán Callis Soto. Si Callis no estaba, el Teniente Moreno Mena era quien subrogaba sus funciones. Ese era el orden jerárquico. Sin embargo, en algunas oportunidades era Lukowiak el tercero al mando, quien en esa época ostentaba el grado de Suboficial Mayor y asumía las funciones de mando en la unidad cuando Callis no estaba. Esto porque Callis no le tenía confianza a Moreno. Efectivamente el Teniente Moreno Mena tenía acceso a todas las dependencias de la unidad de Pitrufquén. Moreno Mena estaba al tanto de todas las personas que estaban detenidas en la unidad, él era el segundo al mando y sabía lo que ocurría. A él no se le restringió el acceso a ninguna dependencia de la Comisaría. Incluso tenía conocimiento de los detenidos por motivos políticos y acceso a ellos. Jamás le correspondió detener a personas por motivos políticos. Él estaba a cargo de la oficina de órdenes judiciales, pero no de detenciones. Sólo le correspondía tramitar las órdenes judiciales de Tribunales ordinarios. Las órdenes de la Fiscalía Militar eran más delicadas, tomando conocimiento de ellas el Capitán Callis o el Teniente Moreno Mena. A su pregunta, la única oportunidad que participó de una detención fue en la de Calfuquir, pero sólo fue acompañando al teniente Moreno Mena. Soslaya que los detenidos por motivos políticos los mantenían en un lugar denominado las caballadas, que estaba al final del patio de la unidad. Los calabozos eran chicos, por esta razón se habilitó el lugar de las caballadas. A su pregunta, no le llamaba la atención ir a las caballadas, ya que sabía que ahí se mantenía a detenidos por motivos políticos. Desconoce si había algún tipo de restricción a los funcionarios para ir hasta el lugar de las caballadas. Generalmente los mismos funcionarios que estaban de guardia estaban

a cargo de los detenidos en esa dependencia. Quienes cumplían las ordenes delicadas, es decir, las que provenían de la Fiscalía Militar o de los bandos que se emitían en esa época, eran Moreno Mena y Lukowiak. Ellos lo hacían acompañados por otros funcionarios que en estos momentos no recuerda. Respecto a lo dicho por Reinaldo Lukowiak Luppy, el día 29 de octubre de 2015, que en lo pertinente se le ha leído, puntualiza que a veces Callis decía que debía acompañarlo a ir a actividades, como trasladarlo a la Prefectura u otras similares. Nunca le correspondió detener a personas con él. En lo único que participó y que guarda relación con una aprehensión, es el caso de Calfuquir. No tiene conocimiento de que personal de otras unidades hayan trasladado a detenidos desde sus destacamentos hasta la Comisaría de Pitrufquén. Respecto al caso de Ricardo Bustos Martínez, nada sabe al respecto y es primera vez que escucha su nombre. Si recuerda que unas dos o tres veces aterrizó un helicóptero de la FACH en la Comisaría de Pitrufquén, ellos permanecían por un tiempo que no recuerda, pero sabe que quienes iban a cargo de él se entrevistaban con el Capitán Callis. En relación a Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera, Juan Héctor Ñancuñil Reuque, no recuerda esos nombres y desconoce su actual ubicación. El nombre de Ismael Bocaz Muñoz le es conocido porque su madre era una persona conocida en el lugar Chada, era agricultora. Incluso un hermano de él fue detenido en horario de toque de queda, al parecer esta persona tenía problemas mentales. También sabía que un hermano de éste fue funcionario de carabineros de Pitrufquén. Es lo único que sabe respecto a ese caso, sobre lo que se le informa, es decir, que su domicilio fue allanado para luego él presentarse voluntariamente en la Comisaría y desde esa fecha se encuentra desaparecido, debe indicar que desconoce esos hechos. Se refiere a otra víctima.

En **declaración judicial** de fecha 06 de junio de 2019 **rolante de fs.662 a fs.666 (tomo II) copia de fs.1655 a fs. 1659 (Tomo VI), fs. 1.835 a fs.1.937 (tomo VI) y de fs. 2.698 a fs. 2.702 (tomo IX)**. Ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 801 de causa rol 29.885 del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén y que en este acto le ha sido leída. Para el año 1973 ejercía funciones al interior de la 5º Comisaría de Carabineros de Pitrufquén, en calidad de Sargento 2º, desempeñándose en el área de diligenciamiento de órdenes judiciales. La Comisaría estaba a cargo del Capitán Luis Callis Soto, lo seguía en el mando el

Teniente Carlos Moreno Mena, luego Suboficial Mayor Reinaldo Lukowiak, al resto del personal no lo recuerda. Es efectivo que para el año 1973 comenzaron a llegar un gran número de detenidos por motivos políticos al interior de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén. Detenciones que eran efectuadas por distintos funcionarios de la unidad, entre ellos Reinaldo Lukowiak y el Teniente Carlos Moreno Mena. Detenciones todas ordenadas por el Comisario Callis de la Unidad. Efectivamente los detenidos por motivos políticos eran ingresados a un libro de guardia de la unidad y luego trasladados a las caballerizas de la unidad. Lo anterior lo sabe, porque era testigo, al igual que los demás funcionarios, como el personal antes señalado los trasladaba. Los detenidos eran ingresados a las caballerizas de la unidad por la gran cantidad de detenidos políticos que comenzaron a llegar a partir de la fecha señalada, los cuales por su número, no cabían en los calabozos. Recuerda que en una oportunidad solicitó permiso al funcionario de guardia que custodiaba las caballerizas para ingresar a este recinto y visualizar a un amigo de nombre Ramón Espinoza, el cual se decía que estaba detenido en la unidad. Rememora que en esa oportunidad pudo ver a un gran número de detenidos, como dijo políticos, los cuales se encontraban con las manos y pies amarradas, y con la vista vendada. No pudiendo reconocer a ninguno de estos detenidos por el estado en que se encontraban, siendo esta la única vez que recuerda haber ingresado a este lugar. Sobre la pregunta que se le hace respecto a los funcionarios policiales que ingresaban a las caballerizas, eran las mismas personas que practicaban las detenciones por motivos políticos, Reinaldo Lukowiak, Carlos Moreno Mena y otros que no recuerda. El tribunal le lee lo pertinente de la declaración de don Pedro Rumualdo San Martín Ríffo, de fs. 616 a fs. 619, a lo que el deponente señala que para septiembre- octubre de 1973 no conocía a don Pedro San Martín. Lo conoció alrededor de tres o cuatro años después de haberse retirado de la institución el año 1974, fue entonces en que le compró leña. Respecto a lo que el señor San Martín declara en el sentido de que él lo habría golpeado al interior de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén puede señalar que no es efectivo lo que él declara. Nunca golpeó a un detenido político porque nunca tuvo contacto con ellos como precedentemente ha declarado. A su consulta, no recuerda detenido a Lautaro Calfuquir en la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén. Pero al papá si lo recuerda detenido. Supo que Caupolicán Calfuquir tenía dos hijos, de los cuales se

decía eran muy mal portados. Con mal portados se refiere que eran agresivos, subversivos, altaneros. Descarga que del destino de los detenidos políticos mantenidos en las caballerizas de la unidad, eran trasladados a Temuco, algunos al Regimiento, otros a la Prefectura, pero casi siempre al Regimiento. Lo anterior lo sabe, por los mismos comentarios de los funcionarios de la unidad. A su consulta, no puede afirmar que los detenidos que vio hayan estado golpeados. Se imagina que esos detenidos por motivos políticos estaban amarrados de pies y manos, botados en el piso y con la vista vendada, especula que los tenían en esas condiciones a modo de castigo psicológico por el hecho de su filiación política, se le ocurre a él. La única oportunidad en que practicó una detención por motivos políticos al interior de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén a contar del 11 de septiembre de 1973 fue la de don Caupolicán Calfuquir, hecho por el cual fue sometido a proceso, acusado y condenado a la pena de tres años y un día bajo el beneficio de la libertad vigilada. Desconoce haber recibido a algún familiar, dado que sus funciones nunca las desempeñó en la guardia, sino en una oficina al interior de la Comisaría. Sin embargo, jamás se enteró si los familiares de estas personas habrán ido a preguntar por ellos a la Comisaría. De Celso Avendaño Alarcón ignora si aquel estuvo en calidad de detenido político en la Comisaría. Tampoco recuerda los nombres de los siguientes detenidos que en este acto se le nombran: Pedro Curihual Paillán, Ismael Socaz Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera y Daniel Sepúlveda Contreras. Se refiere a hechos relacionados con otra víctima. Rememora que para septiembre de 1973 habían alrededor de 20 funcionarios en la unidad. Todos a partir del 11 de septiembre de 1973 estaban acuartelados, él dormía en su oficina, en el lugar destinado a las órdenes judiciales.

En **diligencia de careo judicial** de fecha 30 de marzo de 2006 con la persona de Carlos Ramírez Gatica **de fs. 1.286 (tomo V) copia de fs. 2.247 (tomo VII)**. Ratifica su declaración judicial leída en el acto en el sentido que el señor Ramírez presente formaba parte de la patrulla que comandaba el Capitán Callis y que él integraba. Se mantiene en sus dichos.

A.5 Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy (47 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declaraciones de fs.137 a fs.138 (tomo I) copia de fs. 1.157 a fs. 1.158, de fs.217 (tomo I) copia de fs. 1.209 (Tomo IV) y de fs. 2.171 (Tomo VII), de fs.243 a fs.245 (tomo I) copia de fs. 1.236 a fs. 1.238 (Tomo V) y fs. 2.197 a fs. 2.199

(Tomo VII), de fs.343 a fs.345 (tomo I) copia de fs. 1.344 a fs. 1.346 (Tomo V) y de fs. 2.315 a fs. 2.317 (tomo VIII), de fs.366 a fs.367 (tomo II) copia de fs. 1.358 a fs. 1.359 (Tomo V) y de fs. 2.339 a fs. 2.340 (Tomo VIII), de fs. 1.188 a fs. 1.189, de fs. 1.231 a fs. 1.232, de fs. 1.236 a fs. 1.238, de fs. 1.241 a fs.1.242 copia de fs. fs. 2.202 a fs. 2.203 (Tomo VII), de fs. 1.259 copia de fs. fs. 2.220 (Tomo VII), de fs. 1.261 a fs. 1.262 copia de fs. 2.222 a fs. 2.223 (Tomo VII), de fs. 1.288 copia de fs. 2.249 (tomo VII) y de fs. 1.451 (tomo V) copia de fs. 2.441 (tomo VIII).

En **declaración extrajudicial** de fecha 27 de septiembre de 2014 **de fs.137 a fs.138 (tomo I) copia de fs. 1.157 a fs. 1.158 (Tomo IV)**. Soslaya que para el 11 de septiembre de 1973, pertenecía a la 5° Comisaría de Pitrufquén. En ese lugar se mantuvieron personas detenidas, específicamente en el sector de las caballerizas, desconoce mayores antecedentes al respecto. Sin embargo, algunos de ellos fueron trasladados hasta el Regimiento Tucapel de Temuco, ignorando que sucedió con ellos. Alega que no conoció a Celso Avendaño ni oyó nombrar antes y desconoce antecedentes. El acto es presenciado por su esposa Mirta San Martín, ya que se encuentra con problemas auditivos y de salud.

En **declaración judicial** de fecha 24 de septiembre de 2002, **de fs.217 (tomo I) copia a fs. 1.209 (Tomo IV) y de fs. 2.171 (Tomo VII)**. Agrega que no recuerda el personal que lo acompañaba en los diferentes operativos y diligencias a cumplir, ya que se disponía de las policías que estaban en el cuartel, por lo tanto, no era personal destinado exclusivamente a realizar este tipo de diligencias. Que, por lo general, eran ordenes que provenían de la Fiscalía Militar. Por ello, no puede mencionar a funcionarios, sino como ha dicho los que estuvieran disponibles.

En **declaración judicial** de fecha 24 de octubre de 2005 **de fs. 243 a fs.245 (tomo I) copia fs. 1.236 a fs. 1.238 (Tomo V) y de fs. 2.197 a fs. 2.199 (Tomo VII)**. Barbulla de la detención de Enrique Tenorio Fuentes, en lo pertinente cuenta que acompañó al Teniente Carlos Moreno, junto con otros cuatro o cinco funcionarios cuyos nombres no recuerda. A su pregunta Silva era el chofer personal del Capitán Callis. Destaca a Catalán como chofer de la Comisaría. Respecto de los dichos del Teniente Moreno, es efectivo que Catalán y él eran los hombres de confianza del Capitán Callis. Se refiere a otros hechos. Recuerda que el Capitán Callis manejaba una camioneta de color blanca que era de un servicio público de Temuco. No recuerda si Moreno portaba la orden de detención de Tenorio. Le correspondió

participar en la primera detención de Luis Calfuquir y Osvaldo Burgos. Nunca le correspondió aplicar apremios ilegítimos a detenidos en la Comisaría.

En **declaración judicial** de fecha 29 de octubre de 2015 **de fs.343 a fs.345 (tomo I) copia de fs. 1.344 a fs. 1.346 (Tomo V) y de fs. 2.315 a fs. 2.317 (tomo VIII)**. Afirma que cuando Callis no estaba en la Comisaría, por conducto regular Moreno Mena debía subrogarlo, pero Callis no le tenía confianza, por lo que era él quien asumía las labores de mando en ese lugar. Efectivamente el Teniente Moreno Mena tenía acceso a todas las dependencias de la unidad de Pitrufrquén. Si bien es cierto Callis no le tenía confianza, Moreno estaba al tanto de todo lo que ocurría en la Comisaría, sabía que había detenidos después del 11 de septiembre de 1973. Recuerda que ellos a veces no tenían conocimiento del por qué se detenían a personas, esto después del 11 de septiembre de 1973. Callis les ordenaba detener y ellos cumplían. Recuerda como detenidos políticos a Burgos, Tenorio, Calfuquir. A su pregunta, había grupos para detener, entre los que recuerda a Antonio Silva, Germán Fernández, Juan Río Seco y Carlos Ramírez. Ellos salían con Callis en la camioneta, eran del grupo de confianza de Callis. Él también era de su confianza. Recuerda que a él le correspondió hacer detenciones, pero por toque de queda y podía hacer las detenciones con cualquier otro funcionario. No recuerda a nadie en específico en estos momentos. En ese tiempo eran alrededor de cincuenta funcionarios aproximadamente, pero en la Comisaría no habían más de quince, ya que el resto hacía labores de punto fijo y guardia de población. Se refiere a otros hechos. Desarrolla que una sola oportunidad aterrizó un helicóptero en la Comisaría, fue a hablar con Callis el Oficial al mando de él y luego se fue. No estuvo más de cinco minutos en el lugar. En relación a Celso Avendaño Alarcón, Pedro Curihual Paillán, Luis Anselmo Fernández Barrera, Juan Héctor Ñancufil Reuge e Ismael Bocaz Muñoz, no recuerda esos nombres y desconoce su actual ubicación. Ni que Lautaro Calfuquir Henríquez haya estado detenido en la Comisaría de Pitrufrquén. Sabe que esta persona es hijo del "Polo" Calfuquir, que trabajaba en el hospital, pero no conocía a su hijo. Se le pregunta por otras víctimas.

En **declaración judicial** de fecha 31 de marzo de 1980 **de fs.366 a fs.367 (tomo II) copia de fs. 1.358 a fs. 1.359 (Tomo V) y de fs. 2.339 a fs. 2.340 (Tomo VIII)**. No recuerda a las personas que se le nombran. Expone que si bien tenía el grado de Suboficial, él estaba al mando de superiores y solo le correspondía cumplir

órdenes y acompañar a estos operativos o efectuar detenciones, que en esos días fueron muchas, pero trato directo con los detenidos no tenía ninguno, porque su función era acompañar, proteger a sus superiores y controlar a los detenidos desde el momento de su captura hasta que fueran entregados en la Comisaría. Dichas personas eran trasladadas a Temuco en forma más o menos rápida y entregadas en el regimiento Tucapel y el de la FACH, grupo N° 8 de helicópteros, conforme las instrucciones superiores, pero de las que no tiene mayores antecedentes, para su juzgamiento o investigación correspondiente por las fiscalías de la época. Fuera de este conocimiento no tiene otro y nada recuerda en forma expresa en relación a los citados anteriormente, y puede que haya estado integrando al personal aprehensor de éstos, pero como subordinado sin tuición directa alguna sobre los detenidos ni su posterior destino, lo que era competencia de los tribunales de la época.

En **diligencia de careo judicial** con la persona de Hugo Catalán Lagos, de fecha 28 de agosto de 2000 **de fs. 1.188 a fs. 1.189 (Tomo IV)**. Ratifica íntegramente su declaración prestada en la causa. Se desempeñaba en la Comisaría como Suboficial Mayor. En cuanto a lo que se le pregunta revela que ellos detenían a las personas cuando llegaban los bandos de las Fiscalías de Temuco, ya que había tres, Carabineros, Ejército y Aviación, quedando tan solo la del Ejército, por lo que los detenidos los ponían a disposición de guardia del regimiento y no sabían más que pasaba con los detenidos. Ellos no detuvieron a nadie que no estuviese nombrado en los bandos que llegaban de Temuco. En algunas oportunidades iba gente de Temuco del Ejército o Investigaciones a detener gente, tanto es así que en la isla estuvo acantonada una sección del Ejército. Se refiere a otros hechos.

En **diligencia de careo judicial** con Verónica Tenorio de fecha 10 de noviembre de 1995 **de fs. 1.231 a fs. 1.232 (Tomo V)**. Efectivamente así ocurrieron los hechos, no sabe realmente si el Teniente Moreno tenía o no alguna orden para ingresar al domicilio, ya que él era dueño y señor, precisa que dentro de la disciplina no es mirado bien que se le pida explicación al mayor. Una vez que ingresaron lo llevaron detenido a la Fiscalía del Ejército en Temuco, allí se entregó en la guardia. Posiblemente pudo haber sido así, tal vez si fue un fin de semana, pudo haber estado cerrada la Fiscalía. Así ocurrieron los hechos.

En **diligencia de careo judicial** con Carlos Moreno Mena de fecha 25 de octubre de 2005 **rolante de fs. 1.241 a fs.1.242 (Tomo V) copia de fs. 2.202 a fs. 2.203 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración. No es posible dentro de la lógica militar que la orden que debía cumplir la patrulla que integraba haya sido entregada a un subalterno y no al jefe de la misma, lo anterior puesto que la orden las recibe y las porta el jefe de la patrulla, que debe dar cuenta en su oportunidad del diligenciamiento. Posiblemente él era conductor. Se refiere a otra víctima.

En **diligencia de careo judicial** con Carlos Salinas Mora de fecha 09 de noviembre de 2005 **rolante de fs. 1.259 (Tomo V) copia de fs. 2.220 (Tomo VII)**. No es efectivo que se haya aplicado corriente o cualquier otro tipo de tormento a los detenidos. No sabe por qué esta persona está inventando esas cosas. Reconoce que le correspondió subir varias veces al segundo piso de las caballerizas tanto a vigilar y ver el estado en que se encontraban los detenidos como para supervisar e instruir al funcionario a cargo de los detenidos. se mantiene en sus dichos.

En **diligencia de careo judicial** con José Jiménez Vergara, de fecha 09 de noviembre de 2005, **de fs. 1.261 a fs. 1.262 (Tomo V) copia de fs. 2.222 a fs. 2.223 (Tomo VII)**. Desconoce que él haya detenido a esa persona, nada de lo que declara es efectivo, pues es imposible que se haya amarrado a los detenidos con alambres de púas, no recuerda que esta persona estuviese detenida. Efectivamente le correspondió trasladar en una oportunidad detenidos de Pitrufquén a Temuco. Sin embargo, por la cantidad de personas que se llevaba no recuerda haber visto al señor Jiménez. Respecto del carabinero Guzmán, éste era del destacamento de Comuy. Es imposible que una persona resistiera tal descarga de corriente. Se mantiene en sus dichos.

En **diligencia de careo judicial** con la persona de Carlos Ramírez Gatica, de fecha 30 de marzo de 2006, **de fs. 1.288 (Tomo V) copia a fs. 2.249 (tomo VII)**. Ratifica su declaración extrajudicial leída en el acto y se mantiene en sus dichos

En **diligencia de careo judicial** con Rosalía Silva Mardones de fecha 06 de diciembre de 2005, **de fs. 1.451 (tomo V) copia de fs. 2.441 (tomo VIII)**. Espeta que no recuerda al señor Fernández aunque si conoció al señor Avendaño, porque en una oportunidad le correspondió ir a un asentamiento ubicado en Puerto Boldo, cerca de Toltén, acompañando a unos señores de INDAP, lugar en el cual esta persona vivía. Al parecer en esa ocasión se investigaba la pérdida de unos dineros.

Además, esta persona era hermano de una vecina suya, la señora Rosa Avendaño, actualmente fallecida. No recuerda el hecho que señala la señora con la cual se le carea. Insiste que nada sabe sobre la detención de su marido. Desconoce qué fue de él y el señor Avendaño, no los vio detenidos en la Comisaría. Legalmente el subrogante legal del Capitán Callis debería ser el Teniente Moreno, pero en la realidad, él asumía el mando.

A.6 Luis Arnoldo Becerra Jaramillo (26 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declaraciones de fs.147 a fs.148, de fs.189 a fs.190 (tomo I), de fs.679 a fs.680 (tomo I) copia de fs. 2.718 a fs. 2.719 (tomo IX), de fs.715 a fs.716 (tomo III), de fs.717 a fs.718 (tomo III), de fs. 1.673 a fs. 1.674 (Tomo VI) copia de fs. 2.716 a fs. 2.717(Tomo IX), de fs. 1.675 a fs. 1.676 (tomo VI) y de fs. 2.486 a fs. 2.487 (tomo VIII).

En **declaración judicial** de fecha 21 de junio de 2007 **rolante de fs.147 a fs.148 (Tomo I)**. Relata que para septiembre de 1973 se desempeñaba en la Tenencia de Toltén con el grado de Carabineros. En lo pertinente narra que por órdenes del Capitán Callis Soto de la 5° Comisaría de Pitrufquén a veces debían detener y trasladar a personas hasta esa unidad. Entre ellos estuvo un comerciante de nombre Julio Jaramillo, un profesor de apellido Uribe, director de la escuela de Toltén y Gabriel Nesbet del Servicio de Seguro Social. No recuerda que haya habido personas sujetas a control de firma en la Tenencia de Toltén o que estuvieran bajo el régimen de arresto domiciliario. Hubo detenidos por motivo políticos en Toltén, pudieron recordar a una persona de apellido Avendaño, quien era dirigente social y había participado de la toma de un fundo. Esta persona, posteriormente fue trasladada a la Comisaría de Pitrufquén por órdenes del Capitán Callis. También recuerda que en una oportunidad aterrizó un helicóptero de la FACH que fue a buscar a una persona que habían detenido previamente y que era requerido por los militares. No vio al Capitán Callis en Toltén, tampoco patrullas militares en la Tenencia de Toltén.

En **declaración extrajudicial** de fecha 16 de junio de 2015 rolante de **fs.189 fs.190 (tomo I)**. En lo pertinente blasona que rememora como compañero de labores a los carabineros Muñoz Rodhe, Prado Ponce, Navarrete Paillalef, Orellana, quienes eran nuevos como él y de los antiguos recuerda a Meriño, Verdugo, Voisier, Lagos, Carrasco, Polanco y Hernández. Con respecto a la víctima Celso Segundo

Avendaño Alarcon, lo conoció ya que era Presidente del Asentamiento de Los Boldos, del fundo Carrizal, pero desconoce antecedentes de su detención, ya que en la fecha él era dotación de la Tenencia Toltén, sólo llevaban detenidos a la Comisaría de Pitrufuquén, debido a que estaba prohibido dejar detenidos en la Tenencia. Por comentarios de funcionarios supo que Celso había estado detenido en la Comisaría de Pitrufuquén, desconociendo su paradero posterior.

En **declaración judicial** de fecha 12 de septiembre de 2019 **rolante de fs.679 a fs.680 (tomo I), copia de fs. 1.675 a fs. 1.676 (tomo VI) y de fs. 2.718 a fs. 2.719 (tomo IX)**. Ratifica su declaración extrajudicial leída en el acto. Para el mes de octubre de 1973 se desempeñaba como Carabinero en la Tenencia de Toltén, al mando de Manuel Verdugo (Sargento primero) le seguía en el mando Haroldo Hernández Reyes, (Sargento primero), luego Navarrete. Reitera sus funciones. Respecto a los detenidos políticos que comenzaron a llegar a la Tenencia de Toltén a contar del 11 de septiembre de 1973 eran directamente trasladados hasta la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufuquén por orden del Capitán Sergio Callis Soto dado que la Tenencia de Toltén dependía de aquella unidad. El conductor era Juan Prado Ponce (Cabo 2) recuerda que él y su persona eran los únicos encargados de trasladar a los detenidos por motivo políticos hasta la 5° Comisaría de Pitrufuquén. Las detenciones en la comuna de Toltén eran ordenadas generalmente por el Capitán de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufuquén y cualquier funcionario que estuviera de servicio en Toltén cumplían la orden. Respecto a la víctima Celso Avendaño Alarcón fue detenido en el asentamiento Los Boldos ubicado a 6 kilómetros de Toltén (hoy llamado fundo Carrisal), por funcionarios de Carabineros, pasó por Toltén, no recuerda cuánto tiempo estuvo, tampoco le consta si fue registrado, pero posteriormente fue trasladado hasta la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufuquén. Lo anterior lo sabe porque se lo comentaron los colegas de trabajo. Responde que no trasladó al señor Celso Avendaño hasta la Tenencia de Carabineros de Pitrufuquén, desconoce quién lo hizo. Ese procedimiento se ordenó por orden del Capitán Callis. Respecto a la víctima Luis Fernández Barrera, los comentarios eran que lo habían detenido junto a Celso Avendaño por ser dirigentes del asentamiento. Se refiere a otros hechos. Respecto de Ismael Bocaz, no lo conoció ni maneja ningún antecedente respecto a su desaparición.

En **declaración extrajudicial** de fecha 21 de agosto de 2013 rolante a **fs. 715 a fs. 716 (Tomo III)**. Relata hechos de otra causa sin aportar antecedentes.

En **declaración judicial** de fecha 10 de marzo de 2014 rolante de **fs.717 a fs.718 (tomo III)**. Relata hechos de otra causa, agregando que el único funcionario que sabía conducir era Juan Prado Ponce, siendo designado conductor de la unidad después del 11 de septiembre de 1973. En ese tiempo la unidad no tenía mucho espacio por lo que, los detenidos eran puestos a disposición de Pitrufquén apenas se podía, ya que de lo contrario no habría espacio para mantenerlos en Toltén. Hubo una situación de acuartelamiento por lo que todos los funcionarios y los que dependían de ella pernoctaban en la dependencia de Toltén. Atestigua que los detenidos por motivos políticos no se ingresaban en libros y se remitían lo más rápido posible a la Comisaría de Pitrufquén. Sólo se enviaba un oficio en el que se mencionaba a los detenidos que se trasladaban, de lo cual no quedaba copia alguna en la Tenencia de Toltén. No le consta lo que señala Muñoz Rodhe con los supuesto apremios ilegítimos recibidos por algunos detenidos de parte del sargento Hernández o de otro funcionario policía. Nunca vio que se hayan efectuado este tipo de actos en contra de detenidos ni supo de aquello. Recuerda que en más de una oportunidad le correspondió trasladar detenidos políticos desde la Tenencia de Toltén hasta la Comisaría de Pitrufquén y el Regimiento Tucapel de Temuco, ya que junto a Prado Ponce eran los encargados de efectuar este tipo de procedimientos. Sin embargo, no participó en el traslado de Daniel Sepúlveda.

En **declaración extrajudicial** de fecha 16 de junio de 2015 rolante de **fs. 1.673 a fs. 1.674 (Tomo VI) copia de fs. 2.716 a fs. 2.717(Tomo IX)**. Habla que Celso Avendaño Alarcón era presidente del asentamiento los boldos, del fundo carrizal, pero desconoce los antecedentes de su detención, ya que en la fecha él era dotación de Toltén y sólo llevaban detenidos a la Comisaría de Pitrufquén, debido a que estaba prohibido dejar los detenidos en la Tenencia.

A. 7 Guillermo Fabio Muñoz Rodhe (29 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declaraciones de fs.165 a fs. 168 (tomo I), de fs.186 (tomo I), de fs.524 a fs.525 (tomo II) copia de fs. 1.494 a fs. 1.495 (tomo V) y de fs. 2.520 a fs. 2.521 (tomo VIII), fs. 1.407 a fs. 1.408 (tomo V) y de fs. 2.409 a fs. 2.410 (tomo VIII).

En **declaración judicial** de fecha 27 de junio de 2015 rolante de **fs.165 a fs. 168 (tomo I)**. Expresa que la mayoría de las personas detenidas en la Tenencia de

Toltén eran de sectores rurales, de la comuna, pero del campo. La mayoría ascendencia mapuche. Recuerda a algunos integrantes de las familias de apellido Alonso, a otros de apellidos Landeros. No recuerda específicamente sus nombres, pero eran integrantes de esas. No había un grupo especial de carabineros para detener a personas que estaban incluidos en los listados que llegaban desde Pitrufuén. Todos debían hacer estas detenciones. A su pregunta, los detenidos por motivos políticos eran trasladados en una camioneta prestada por una persona de nombre Segundo Lataste, de Toltén. Era un negociante de Puerto Boldo y les facilitaba su camioneta. Al parecer Prado Ponce la conducía, pero no está seguro. En la Tenencia también había una camioneta requisada, que era la que conducida por Prado Ponce, ya que era el único conductor de la Tenencia. A los detenidos sólo les daban agua y les permitían ir al baño, no había comida para darles, por esa razón eran trasladados dentro de las 24 horas después de su detención. A estos se les mantenía en los calabozos, pero muchas veces no había capacidad para dejarlos allí, por lo que los dejaban en el comedor de la Tenencia. Desarrolla que ellos comían en la guardia o donde pudieran hacerlo. A su pregunta, la relación entre Hernández y Verdugo era buena. Lo único malo era cuando Hernández se ponía a tomar y embriagaba ya que se ponía prepotente incluso con ellos. Verdugo nunca le dijo nada, no le llamaba la atención, eran colegas, se tapaban las cosas. Respecto al caso de Celso Avendaño era amigo de él. Se conocieron antes de 1973 ya que él era mueblista, muy conocido en el sector de Toltén, e hizo su primer comedor. Él vivía en Toltén, con su señora e hijos y según lo que recuerda dos niñas y algunos niños. Sin embargo, nunca tuvo contacto con su señora y tampoco la vio. En realidad no había un contacto permanente con él, sus familias no se visitaban, todo el contacto que tuvo con él fue por la confección de su comedor. Conversaban harto con Celso y lo consideraba una persona sana y honesta. El único problema que tenía es que era bueno para beber alcohol. Después del 11 de septiembre de 1973, al parecer en el mes de septiembre u octubre de ese año, se comentó que Celso Avendaño fue detenido por Juan Caamaño y otro funcionario que desconoce, ya que era integrante del partido socialista y estaba mencionado en los listados que les llegaron de personas con vinculaciones políticas que había que detener. A su pregunta, no recuerda quienes eran los detenidos que estaban botados en el piso de la Tenencia cuando Hernández bailó, sobre ellos. Pero eran mapuches, era gente

muy humilde. A ellos los querían hacer un lavado de cerebro respecto a lo sucedido antes del 11 de septiembre, que prácticamente estaban en una guerra, pero jamás vio una guerra. Toda la gente de Toltén eran personas honestas, se cometieron muchos excesos. Recuerda que incluso tuvo que detener a un amigo de nombre Máximo Uribe, director de una escuela. Él era socialista y les llegaron listados desde Pitrufrquén donde estaba incluido. El único motivo por el cual detuvo a su amigo fue por haber estado en esa lista. Eran lógicamente detenciones ilegales, pero a ellos los mandaban y tenían que cumplir lo que les ordenaban. A su pregunta, él no vio detenido a Celso Avendaño en la Tenencia de Toltén, pero se enteró y además supo que había sido trasladado hasta la Comisaría de Pitrufrquén. Lo precedente por comentarios que le hicieron otros carabineros de Toltén, cuyos nombres no conmemora en estos momentos. Anexa que tiempo después se encontró con una de sus hijas en Temuco y le preguntó por su padre, respondiéndole que había fallecido. No recuerda el nombre de esta niña, sólo la ubicaba de vista y sabía que era hija de Celso Avendaño. Narra el caso de un carabinero, del cual no recuerda nombre, que era parte de la dotación de Queule, el cual fue dado de baja por orden del Capitán Callis. Esto sucedió porque este joven carabinero era enfermero o había estudiado algo relacionado con enfermería, quien ayudaba a todos los funcionarios de carabineros y sus familiares cuando tenían alguna dolencia. Por esta razón Verdugo lo acusó de socialista o que tenía alguna vinculación política. Verdugo quería darlo de baja y se lo dijo, a lo que este carabinero se encerró en el baño y lloraba en ese lugar. Él fue a tranquilizarlo, porque además, estaba con su arma en la mano con claras muestras de querer suicidarse. Recuerda que lo tranquilizó y luego fue enviado a Pitrufrquén. Tiempo después, unos ocho o diez años, estando de paseo en Queule, su hija se enfermó de asma y empezó a preguntar por algún médico o practicante, dirigiéndolos a un domicilio que estaba cercano al Retén de Queule. En ese lugar los atendió el carabinero que ha mencionado, quien le dio el medicamento a su hija y le comentó que había sido dado de baja de la institución el año 1973 o 1974. No le comentó nada más al respecto.

En **declaración extrajudicial** de fecha 15 de junio de 2015 **rolante de fs.186 (tomo I)**. Aduce que para el mes de octubre del año 1973, trabajaba en la Tenencia de Toltén con el grado de Carabinero, sus labores consistían en realizar servicio de población, control de toque de queda, punto fijo afuera de la unidad, hacer aseo en

el cuartel, entre otros. Nombra como compañero de labores a los carabineros Becerra, Prado, Navarrete, quienes eran nuevos como él y de los antiguos recuerda a Meriño, Verdugo, Voisier y Hernández. Con respecto a la víctima Celso Segundo Avendaño Alarcón, lo conoció ya que era mueblista y en una oportunidad le confeccionó un living. Cuenta que habría sido detenido por un funcionario de Carabineros de la Tenencia de Toltén de nombre Juan Caamaño, desconociendo quienes habrían participado junto a él. Suma que se comentaba que Avendaño habría sido llevado a la Tenencia de Toltén y luego trasladado hasta la ciudad de Pitrufuquén, desconociendo mayores antecedentes, encontrándose desaparecido hasta el día de hoy.

En **declaración judicial** de fecha 23 de marzo de 2017 **de fs.524 a fs.525 (tomo II) copia de fs. 1.494 a fs. 1.495 (tomo V) y de fs. 2.520 a fs. 2.521 (tomo VIII)**. Ratifica su declaración extrajudicial leída en el acto y quiere rectificar aquella parte donde funda que detuvo a una persona de apellido Uribe, lo que no es efectivo, puesto que él era su amigo. Indica que a lo largo de su estadía en la T Tenencia de Toltén a partir del 11 de septiembre de 1973 no le correspondió participar en patrullajes u operativos policiales que se desarrollaran tanto dentro como fuera de su jurisdicción. Sin embargo, las personas detenidas por motivos políticos eran trasladados hasta la 5°Comisaría de Pitrufuquén, traslado que realizaba principalmente el Carabinero Juan Prado Ponce, chofer de la unidad. Prado Ponce, iba generalmente acompañado de un grupo de carabineros, que en la mayoría de las veces eran los mismos, Verdugo y Luis Becerra Jaramillo. A su consulta, el 99% de los detenidos en la Tenencia de Toltén eran por motivos políticos. En la Tenencia no se cumplían órdenes judiciales ni nada, todo era por mando y por documentos secretos que llegaban a la Tenencia los cuales eran abiertos por el jefe de Tenencia Verdugo y él era quien ordenaba que había que detener a tal persona en tal parte. A él le toco cuidar a los detenidos por motivos políticos en la Tenencia de Toltén. Funda, en el mes de septiembre de 1973 algunos carabineros que se encontraban en la Tenencia bebiendo alcohol, y el Sargento 1° Hernández comenzó a bailar cueca sobre ellos, momento en que se retiró a otra dependencia. No recuerda la identidad de aquellos detenidos. A su consulta, tuvo que haber detenidos a personas por motivos políticos, pero siempre al mando de otra persona, pero no recuerda a quién y siempre acompañado por superior.

En **declaración extrajudicial** de fecha 03 de mayo de 2016 **de fs. 1.407 a fs. 1.408 (Tomo V)**. Suma que para el año 1973 ostentaba el grado de Carabinero y se desempeñaba en la Tenencia de Toltén, a cargo del Sargento 1° Verdugo, secundado por el Vice sargento 1° Haroldo Hernández Reyes, dentro de sus compañeros de funciones recuerda a los Cabos Voissier, Navarrete, además de los Carabineros Prado Ponce, Luis Becerra, entre otros. Durante su estadía en la Tenencia de Toltén, sus labores consistían en realizar puntos fijos en distintos puntos del pueblo, patrullajes en la población, control de toque de queda, así como también servicios de guardia, dentro de los cuales, en algunas oportunidades le correspondió tomar personas detenidas. Es así, que en una oportunidad, junto a otros funcionarios de la Tenencia de Toltén, les correspondió detener a una persona de apellido Uribe, quien era Director de la Escuela de Toltén, desconociendo el motivo específico de su detención. Espeta que fue trasladada hasta la 5° Comisaría de Pitrufrquén. Se refiere a otras víctimas. Adopta que durante su estadía en la unidad policial, no le correspondió participar de patrullajes u operativos policiales que se desarrollaran fuera de su jurisdicción. Las personas detenidas que debían ser trasladadas hasta la 5° Comisaría de Pitrufrquén, eran llevadas en una camioneta de Indap, generalmente conducida por el Carabinero Juan Prado Ponce, indicando además que jamás le correspondió acompañarlo en esa labor. Proclama que no vio ni supo por comentarios que funcionarios de otras Fuerzas Armadas, tales como, Ejército o Fuerza Aérea de Chile, llegaran hasta la Tenencia Toltén con objeto de llevar personas detenidas de su unidad policial. En relación a la víctima de los hechos investigados Luis Fernández Barrera, no lo conoce ni lo oyó nombrar antes, desconociendo todo antecedente al respecto.

En **declaración extrajudicial** de fecha 03 de mayo de 2016 **de fs. 2.409 a fs. 2.410(Tomo VIII)**. Agrega que respecto de Moisés Norambuena no lo conoce ni lo oyó nombrar antes, desconoce todo antecedente.

A.8 Esmeraldina Stancovich Meriño (41 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración extrajudicial** de fecha 15 de junio de 2015 **de fs.180 a fs.182 (tomo I)**. Arguye que para la fecha de los hechos investigados tenía alrededor de 40 años y se encontraba separada de hecho de Celso Avendaño Alarcón con quien tuvo un hijo de nombre Eduardo Enrique Avendaño Stancovich. Para esa fecha vivía en Temuco con don José Ramón Cid Droguett y tuvo tres hijos.

Como se encontraba separada de Celso, no tiene mayores antecedentes acerca de su detención, pero en una oportunidad le avisaron que se encontraba detenido en la Cárcel Pública de Pitrufquén por lo que fue a visitarlo en varias oportunidades. Evidencia se veía en buenas condiciones físicas, aunque un poco delgado, con el pelo largo y barbón, no le comentaba nada acerca de los motivos por los que estaba ahí. Invoca que su hijo Eduardo Avendaño, al parecer habría sido el último en ver a Celso detenido al interior de la Cárcel Pública de Pitrufquén ya que luego fue a verlo y ya no estaba en ese lugar, donde se le pierde el rastro. Desarrolla que Celso era el presidente de un Asentamiento que se ubicaba en Pitrufquén, y militante del Partido Comunista. Precisa que realizaba todo tipo de actividades sociales, colaborando con la gente de Pitrufquén, regalando comida, pasajes y ropa, entre otros. Utiliza que su hijo Eduardo Avendaño podría tener mayores antecedentes acerca de la investigación que está en curso y en la actualidad se encuentra radicado en la ciudad de San Martín de Los Andes en Argentina. Destaca que en este acto es presenciado por su hija María Teresa Cid Stancovich, ya que tiene problemas auditivos.

A.9 Octavio Castillo (50 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declaraciones de fs.194 a fs.195 (tomo I) copia de fs. 1.186 bis a fs. 1.187 (tomo IV) y de fs. 2.148 a fs. 2.149 (Tomo VII), de fs.198 (tomo I) copia de fs. 2.152 (Tomo VII), de fs.232 a fs.233 (tomo I) copia de fs. 1.225 a fs. 1.226 (Tomo V) y de fs. 2.186 a fs. 2.187 (tomo VII), de fs.334 a fs.336 (tomo I) copia de fs. 1.327 a fs. 1.329 (tomo V) y de fs. 2.288 a fs. 2.290 (Tomo VII) y de fs. 1.699 a fs. 1.700 (tomo VI).

En **declaración judicial** de fecha 29 de febrero de 2000 **rolante de fs.194 a fs.195 (tomo I) copia de fs. 1.186 bis a fs. 1.187 (tomo IV) y de fs. 2.148 a fs. 2.149 (Tomo VII)**. Atina que trabajaba como vice sargento 1° de Carabineros en la ciudad de Pitrufquén con motivo del cambio de gobierno y su labor específicamente consistió en el resguardo de la unidad por la parte exterior, ya que estaba con licencia médica cuando se produjo el cambio y fue llamado a laborar de todas maneras. Nunca participó en detenciones, pero vio si vehículos que llegaban con gentes y luego las remitían a Temuco. A las personas que se le nombra no las vio como detenidas ni las vio en esa época en la unidad policial, conoció a don Einar Tenorio porque era un profesor muy conocido en la ciudad, a Gastón Lobos lo conocía porque vivía en la ciudad y fue designado Gobernador de la comuna, por lo

tanto, era muy conocido. A él si lo vio detenido en ocasiones separadas, pues lo detuvieron y lo llevaron a Temuco, de ahí no lo vio más. No vio detenidos ni a Calfuquir que igualmente lo conocía mucho porque trabajaba en el hospital de la ciudad ni al profesor Tenorio. Estaba de jefe de la unidad el señor Ramón Callis Soto, agrega que él tuvo problemas con su jefe en esa ocasión pues acudió a darle agua a un detenido y eso le significó muchos problemas e incluso hasta se le amenazó con fusilamiento por ese actuar, pero en realidad conocía a las personas y era difícil sustraerse a alguna necesidad imperiosa de ellos. Le parece que es la tercera vez que declara por estos hechos y en relación con las mismas personas y en este mismo tribunal.

En **declaración judicial** de fecha 30 de enero de 2001 **de fs.198 (tomo I) copia de fs. 2.152 (Tomo VII)**. Ignora quienes cumplían las ordenes emanadas por la Fiscalía Militar, su función era de resguardo del cuartel a cargo de diez hombres. Efectivamente llegaban detenidos, pero no veía quienes lo llevaban puesto que lo hacían por la puerta principal y él estaba en la parte trasera, donde existía más peligro. Piensa que el Mayor Callis, jefe de la unidad de la ciudad, era el que las cumplía. Tuvo problemas con Callis más o menos en el mes de noviembre de 1973 a raíz de que dio agua a unas mujeres detenidas como acto humanitario y otros carabineros le acusaron a Callis, el cual lo amenazó con fusilarlo en el centro del recinto policial y desde esa oportunidad paso a ser como extraño ahí porque llegaron a sindicarlo como hombre de izquierda, a raíz de lo cual se salió del cuerpo de carabineros, jubilando. Por lo expuesto, desconoce quienes cumplían ordenes emanadas de la Fiscalía y detenían personas porque era más o menos secreto. Las personas que llegaban detenidas eran llevadas a otro lugar con destino desconocido para él, presumiendo que los llevaban a la Aviación o Prefectura de Carabineros de Temuco. Respecto de la detención de Calfuquir, a quien conocía porque trabajaba en el hospital, ignora quien o quienes la hicieron, al igual que al señor Lobos y al señor Tenorio, personas a quienes conocía. Los vio detenidos en el cuartel y después no los vio e ignora a donde fue llevado.

En **declaración judicial** de fecha 11 de agosto de 2005 **de fs.232 a fs.233 (tomo I) copia de fs. 1.225 a fs. 1.226 (Tomo V), fs. 1.699 a fs. 1.700 (tomo VI) y de fs. 2.186 a fs. 2.187 (tomo VII)**. Ratifica su declaración extrajudicial leída en el acto. Es efectivo lo señalado por Eleodoro Merino en el sentido que el Comisario

Ramón Callis reunió al personal y dio órdenes de no acercarse al recinto de las caballerizas. Personalmente ingresó en alguna oportunidad al recinto y vio detenidos. De la camioneta blanca, esta fue proporcionada por un civil de apellido Herrera, usado por Silva, Lukowiak, Moreno y Callis. También recuerda una camioneta verde, cerrada con carpa, pero no sabe quién la conducía ni quien la facilitó. Se comentaba que trasladaba detenidos, no le consta que haya sido ocupada por funcionarios de carabineros de Pitrufquén. No recuerda haber visto una camioneta de color rojo. Atestigua que escuchó gritos de los detenidos políticos, quienes trataban de comunicarse con alguien o intentaban hacer saber que se encontraban en ese lugar. Respecto de familiares de detenidos, no tuvo la oportunidad de atender a nadie. Presume que deben haber concurrido hasta la Comisaría para saber acerca del paradero de estos. No le consta que los detenidos políticos una vez que quedaban en libertad tuvieran que firmar periódicamente en la Comisaría. Atestigua que conoció a una persona en Queule cuando era jefe de Retén, pescador y mueblista de esa localidad. A esta persona, cuyo nombre no recuerda, la vio detenida en Pitrufquén y tiempo después se le acercaron familiares a preguntarle por su paradero. Al parecer se encuentra desaparecido. Nunca vio algún otro oficial de mayor rango que Callis visitar la Comisaría de Pitrufquén. El Teniente Moreno también participada de detenciones, pero tenía un grupo distinto al de Callis, aunque no permanente, pues tomaba indistintamente a cualquier funcionario para que lo acompañara en sus operaciones, todas ordenadas por Callis.

En **declaración extrajudicial** de fecha 05 de julio del año 2005 **de fs.334 a fs.336 (tomo I) copia de fs. 1.327 a fs. 1.329 (tomo V) y de fs. 2.288 a fs. 2.290 (Tomo VII)**. Descarga que con motivo de los sucesos ocurridos para el 11 de septiembre de 1973 a la unidad llegaron distintas ordenes, relacionadas con temas de índole política, emanada de la Fiscalía Militar del Ejército de Temuco y la Fiscalía de Carabineros de Cautín, relacionadas con la detención de diversos personeros políticos de Pitrufquén y sus alrededores, ordenes que nunca vio pues pudieron haber sido ordenes verbales del Capitán Callis. Como los detenidos políticos que llegaron a la Comisaría en los días posteriores al 11 de septiembre, debían ser separados de los detenidos comunes, se habilitó el segundo piso de las caballerizas existentes en las dependencias de la Comisaría, a la cual se accedía por una escala

de manera de uno ocho metros de largo por un metro y medio de ancho, que se encontraba fija a la estructura que era de material mixto y este segundo piso era una bodega compuesto de una sola dependencia, la que contaba con ventanas para la ventilación, siendo esta parte de la edificación de madera, la cual en la actualidad aún existe. Relata hechos de Tenorio y Calfuquir. Anexa que la cantidad de detenidos que pasó por la unidad fue una cantidad considerable de personas. Rememora que una vez detenidas y mantenidas en las caballerizas con custodia policial, por los funcionarios de turno, eran trasladados hasta la Fiscalía del Regimiento de Tucapel en camiones que se facilitaban por personas civiles de la ciudad. Refiere como uno de los vehículos un camión marca fiat, de color verde, con barandas altas. A lo particular, le tocó realizar varios traslados de detenidos, acompañado por el Teniente Carlos Moreno Mena, como también del Suboficial Lukowiak Luppy entre otros. En relación al tratamiento de los detenidos en el interior del cuartel, por razones de seguridad eran mantenidos con la vista vendada y amarrados con una especie de cordel, siendo tajante en señalar que jamás le correspondió participar de interrogatorios. Cuenta que en el interior de esta Comisaría, tanto Ramón Callis como sus guardaespaldas Reinaldo Lukowiak Luppy, Hugo Catalán Lagos y Amulef interrogaban a los detenidos, los cuales posteriormente eran llevados hasta la ciudad de Temuco, desconociendo lugar exacto. Precisa que Lukowiak, Catalán Lagos y Amulef salían juntos todos los días, debido a que este grupo era permanente destinado a la aprehensión de personas de la zona, los cuales cumplían órdenes directas del Capitán Callis y del Teniente Moreno Mena. El destacamento de militares que estaban en la isla municipal, de infantería, ignora a que regimiento pertenecían, se encontraban a cargo de un oficial, cuyo grado y nombre desconoce empero iban a buscar detenidos políticos a la Comisaría, a veces llamados por el mismo Capitán Ramón Callis. Basa que personas de la Comisaría custodiaba la entrada de la isla, con la finalidad de dar seguridad al personal militar apostado en dicho lugar, cuya misión en el sitio desconoce. Con esto Ramón Callis se liberaba en cuanto a la responsabilidad del paradero de los detenidos y así deshacerse de ellos. En relación al helicóptero de la base aérea Maquehue que aterrizaba en el sitio eriazó ubicado al costado de la Comisaría y que vio aterrizar en una ocasión en dicho lugar e iba con tripulación de la FACH, efectivamente Ramón Callis salía en ese helicóptero, acompañado de los

guardaespaldas Lukowiak, Catalán Lagos y Amulef a quienes personalmente vio despegar en ese helicóptero sin que llevaran detenidos. Blasona que Ramón Callis en una oportunidad, en fecha posterior al 11 de septiembre tuvo la intención de fusilarlo, por haber llevado botellas con agua a los detenidos que estaban en el cuartel, pero ante su actitud de desafío, a que fuera él quien lo ejecutará, desistió de su accionar, argumentando que era una broma.

A.10 Carlos Alberto Salinas Mora (35 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declaraciones de fs.205 a fs.207 (tomo I) copia de fs. 1.197 a fs. 1.199 (tomo IV), de fs. 253 a fs.254 (tomo I) copia de fs. 1.246 a fs. 1.247 (Tomo V) y de fs. 2.207 a 2.208(Tomo VII), de fs. 1.260 (tomo V), de fs. 2.221 (tomo VII) copia de fs. 2.159 a fs. 2.161 (Tomo VII) y de fs. 2.220 (tomo VII).

En **declaración** de fecha 03 de junio de 2002 **de fs.205 a fs.207 (tomo I) copia de fs. 1.197 a fs. 1.199 (tomo IV)**. Manifiesta que fue detenido el día 12 de septiembre del año 1973 a las 22:00 horas en su domicilio. En ese entonces era presidente del partido radical, trabajaba en el hospital de Pitruquén, a cargo de la caldera y la lavandería, tenía catorce años de servicio. Fue detenido por los funcionarios de carabineros de apellidos Lukowiak, los hermanos Hernández y de los otros no recuerda. Aquella noche llegaron los funcionarios, tocaron la puerta, atendió su cónyuge y le dijeron que lo necesitaban, él salió enseguida, lo tomaron como un saco de papas tirándolo al interior de la camioneta de color blanco, conducida por el funcionario de carabineros Silva, el hecho es que cayó sobre otra persona que también estaba allí, apellido Jiménez. Cree que había unas seis personas más o menos a quienes no reconoció, por la oscuridad de la noche, los trasladaron a la Comisaría y antes de bajar de la camioneta les vendaron los ojos, los trasladaron al interior, recuerda que subieron una escalera, piensa que tal vez lo ingresaron al galpón donde tenían los caballos, salía mucho olor a asado, se escuchaban muchas risas abajo y como se abrían botellas. Allí permaneció 7 días vendado, amordazado, sin comer durante estos días, a él le ataron las manos por detrás con un alambre, ni siquiera podían ir al baño porque tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar, no vio la luz del día ya que incluso les tenían los ojos vendados y amordazados, les colocaron un capuchón. Cada cierto tiempo los iban a castigar, les pegaban él piensa que combos, les colocaban electricidad en las partes más delicadas del cuerpo, le decían que él sabía dónde

estaban las demás personas, ya que en ese tiempo era presidente de FENATS, a pesar de que lo castigaron muchísimo, nunca entregó nombres de alguna persona. Les preguntaban mucho sobre el plan z, cosa que nunca habían escuchado, él lo ignoraba. Después de haber permanecido siete días en Pitrufrquén, son trasladados a Temuco, de la misma forma, amordazado y vendado por lo que no pudo ver a nadie, pero iban varias personas, los dejaron en una parte que ignora, permanecieron un rato, luego les dijeron que no podían estar allí, nuevamente los subieron a un vehículo, los trasladaron al Regimiento, pero cuando los recibieron allí preguntaron si eran animales o personas que trasladaban, alguien ordenó que tenían que sacarles las vendas y soltarlos, recién allí vio la luz del día, miró a las personas, pero no conoció a nadie, estaban irreconocibles porque tenían barba, les cortaron el pelo y los pintaron de diferentes colores y conversando con personas se dio cuenta que estaban con don Polo Calfuquir, administrador del hospital de Pitrufrquén, José Martínez, Elena Henríquez, personas conocidas de Pitrufrquén, habían 38 en total, estaban en el gimnasio, allí les dieron alimento y les dijeron que tenían que comenzar a servir de apoco, porque hace muchos días que no comían, permanecieron un par de horas y luego condujeron a algunas personas a la cárcel, por ejemplo a don Polo Calfuquir, después nunca más supo de él. Allí permaneció un mes, fue interrogado por un Fiscal, una persona bastante joven, le preguntó si militaba algún partido, le respondió que no, le preguntó que si Allende, se tiraba de presidente le daba su voto, a lo que respondió asertivamente. Y así varias preguntas, además dijo que trabajaba en el hospital de Pitrufrquén desde hace catorce años y que le dieran un papel para reintegrarse, se lo dio, pero jamás pudo reintegrarse a su trabajo, tocó puertas por todos lados e incluso fue a Santiago, pero nunca lo recibieron en su trabajo. Solo fue torturado en Pitrufrquén y al único que pudo reconocer su voz fue al funcionario de apellido Lukowiak, con respecto a fosas comunes que se le pregunta, no le consta.

En declaración judicial de fecha 03 de noviembre de 2005 de **fs.253 a fs.254 (tomo I) copia de fs. 1.246 a fs. 1.247 (Tomo V) y de fs. 2.207 (Tomo VII)**. Ratifica su declaración judicial prestada de fs. 164 y siguiente, que en este acto se le ha leído. respecto de los Carabineros que participaron en su detención, utiliza los nombres de Catalán, Fernández y los hermanos Hernández. Durante su estadía en la Comisaría de Pitrufrquén, vio algunos civiles que cooperaban con carabineros,

como es el caso del señor Arancibia alias “el triquina” y de Julio Dumont. Además, en conversaciones sostenidas después con la señora Elena Henríquez, también cooperaron con carabineros los señores Bernardo Larrondo, Juan Luis Gaete Chesta y Omar Salvo, entre otros, ellos deben saber qué ocurrió con los detenidos. La señora Elena le dijo que vio a estas personas vestidas de carabineros. Mientras estuvo detenido en los altos de las caballerizas de la Comisaría, se le acercó el Teniente Moreno a conversar con él en dos oportunidades. La primera fue una conversación amistosa, en la que le dijo que no se preocupara. La segunda fue con prepotencia preguntándole por el plan Z, torturándolo para que hablara. Una vez que fue liberado de la cárcel de Temuco, le dieron un papel para que fuesen reintegrado a su trabajo en el hospital, pero el director del hospital, el doctor Mellado no quiso reintegrarlo mientras no hablara con el Capitán Callis. Entonces fue muchas veces a la Comisaría a tratar de conversar con Callis, pero sin que lo recibiera. Por último, el carabinero Castillo le aconsejó que no volviera más a la Comisaría porque lo iban a tomar detenido para matarlo. Fue torturado en la Comisaría de Pitrufquén por el Suboficial Lukowiak, el Teniente Moreno y otros carabineros cuyas voces no reconoció. Le aplicaron corriente y le dieron golpes en diferentes partes del cuerpo. Recuerda que estuvo detenido en Pitrufquén alrededor de siete días. Esto lo asevera porque la sirena tocó siete veces. Sin embargo, no podría asegurar fehacientemente que fueron esa cantidad de días, quizás fueron menos. Al regimiento Tucapel llegó junto a José Jiménez, Polo Calfuquir y la señora Elena Henríquez. Recuerda que luego de darles comida fueron llamados de a uno a declarar ante el Fiscal. Los tres anteriormente mencionados salieron libres y él fue dejado en la cárcel. No está seguro de haber visto a Enrique Tenorio en el regimiento, a José Jiménez, Polo Calfuquir y la señora Elena Henríquez si los vio y conversó con ellos, de eso está seguro, aun cuando estaban irreconocibles porque les cortaron el pelo y les pintaron la cara y el cuerpo.

En **diligencia de careo judicial** con la persona de Carlos Moreno Mena, de fecha 09 de noviembre de 2005 **de 1.260 (tomo V)**. Ratifica su declaración leída en el acto el Teniente Moreno a que ha hecho referencia es la persona con quien se le carea. Aclara que nunca vio al Teniente Moreno, pues su vista se encontraba vendada, sin embargo, la primera vez que conversó con él, la persona que se le

acercó se identificó como el Teniente Moreno y la segunda vez reconoció su voz. Se mantiene en sus dichos.

En **diligencia de careo judicial** con la persona de Reinaldo Lukowiak, de fecha 09 de noviembre de 2005 de **fs. 2.221 (tomo VII) copia de fs. 2.159 a fs. 2.161 (Tomo V) y de fs. 2.220 (Tomo VII)**. Ratifica su declaración leída en el acto, el Suboficial Lukowiak que ha hecho referencia en su declaración es la persona con quien se le carea. Aclara que nunca vio al Suboficial Lukowiak, pues su vista se encontraba vendada, sin embargo, le reconoció la voz a esta persona porque lo conocía de antes. Se mantiene en sus dichos.

A.11 Juan Alfonso Prado Ponce (30 años para la fecha de los hechos investigados). Declaró de fs. 731 a fs. 732 (Tomo III), fs. 733 a fs. 734 (Tomo III), fs. 751 a fs. 754 (Tomo III), fs. 769 a fs. 774 (Tomo III), fs. 1763 a fs. 1764 (Tomo VI), fs. 1765 a fs. 1766 (Tomo VI) y de fs. 1767 a fs. 1771 (Tomo VI).

En **declaración extrajudicial** de fecha 19 de agosto de 2013, **de fs. 731 a fs. 732 (Tomo III) y de fs. 1763 a fs. 1764 (Tomo VI)**. Hace una reseña de su carrera funcionaria. Se refiere a hechos relacionados con otra víctima.

En **declaración judicial** del 10 de julio de 2014 **de fs. 733 a fs. 734 (Tomo III) y de fs. 1765 a fs. 1766, de (Tomo VI)**. Blasona que después de 11 de septiembre de 1973 estuvieron acuartelados por dos o tres meses aproximadamente. Eso significaba que siempre debían estar en el cuartel, hacer sus servicios de patrullaje en la población, pero no podían dormir en sus domicilios ni ir a comer a ellos. Todo lo hacían en la Tenencia. Recuerda que después del 11 de septiembre de 1973 se le entregó a la Tenencia una camioneta Chevrolet que al parecer era del Banco del Estado. La camioneta era manejada mayoritariamente por él. El Tribunal lee en lo pertinente la declaración que rola a fs. 467 a fs. 468, señalando: Sí, efectivamente él era el único conductor designado en la unidad. Añade que le correspondió efectuar traslados de detenidos por motivos políticos desde la Tenencia de Toltén hasta la Comisaría de Pitrufquén. Siempre lo hacía acompañado del Sargento Primero Hernández o Verdugo. Todo eso ordenado por el Comisario Callis de Pitrufquén. Recuerda muy vagamente que Verdugo junto a Hernández detuvieron a un profesor de Toltén que supuestamente tenía planes terroristas contra los carabineros de Toltén. Esa información fue comentada por los mismos aprehensores en la

Comisaría, y lo trasladó junto a Verdugo a Pitrufquén. Cuando llegaron a la Comisaría se estacionaron afuera; Verdugo bajó de la camioneta e ingresó solo con Sepúlveda a la unidad. Él se quedó en el vehículo. Verdugo estuvo alrededor de 15 minutos en la comisaría y luego se fueron. No volvió a saber sobre Sepúlveda. Daniel Sepúlveda fue trasladado solo, sin más detenidos, hasta Pitrufquén. Recuerda a don Julio Jaramillo como detenido por motivos políticos en la unidad de Toltén. Añade que en más de una oportunidad los carabineros que conocían a personas de Toltén vinculadas a cargos políticos intervinieron por ellos ante el jefe de retén para que no los detuvieran, ya que no había motivos para ello. Con eso arriesgaban sus vidas. No recuerda si a los detenidos por motivos políticos los ingresaban o no en los libros de guardia.

En declaración extrajudicial de fs. 752 a fs. 754, de fecha 28 de octubre de 2021 (Tomo III). Blasona que ingresó a Carabineros de Chile en el año 1966 o 1967, no recuerda con exactitud y se acogió a retiro con el grado de Sargento 1° en el año 1993. Para el mes de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Cabo 1° y se encontraba desempeñando en la Tenencia de Toltén, donde su labor principal era ser conductor de los jefes de la Tenencia, correspondientes al Sargento 1° Verdugo, Sargento 1° Aroldo Hernández (fallecido), y otra persona que no recuerda su nombre, pero que se encuentra fallecido. En ese sentido, le tocaba salir a patrullar por la población y a veces viajes a Pitrufquén, como también le tocó conducir a los funcionarios que iban a realizar detenciones, pero nunca se bajó del auto. Era la única persona que sabía manejar en la Tenencia de Toltén, por lo que era el único conductor designado y había solo un vehículo que era una camioneta tipo pick up, marca Chevrolet que era del Banco del Estado. Los funcionarios que realizaban detenciones eran los jefes de retenes, y recuerda solamente al Cabo Caamaño (fallecido), al Cabo Meriño (fallecido) y el Carabinero Guillermo Muñoz Rohde. Para el pronunciamiento militar le tocó trabajar con los Carabineros Jorge Henríquez Muñoz, Luis Arnoldo Becerra Jaramillo, Polanco, Lagos y Meriño, ya que todos los retenes de la zona, específicamente los de Queule, Villa Los Boldos y Hualpín, se juntaron y cumplieron funciones en la Tenencia de Toltén. Añade que se realizaron varias detenciones políticas, las cuales eran ordenadas por los Jefes de la 5ª Comisaría de Pitrufquén, quienes eran siempre llevados hasta

dicha Unidad Policial, por lo que nunca se quedaban en la Tenencia más de dos horas. En ese sentido, él era el único chofer que trasladaba a los detenidos hasta la 5ª Comisaría de Toltén, siempre acompañado de los Jefes de los Retenes o los más antiguos que estuvieran en ese momento y otro de los Carabineros que nombró anteriormente, siendo siempre una tripulación de tres personas. Respecto de los detenidos solo recuerda a un tal Jaramillo que vivía en Toltén y tenía una frutería, y un señor de Hualpín, quien al parecer era agricultor, sin recordar mayores antecedentes. Hace presente que todos volvieron a su lugar y ninguno fue trasladado esposado o vendado. Solo cumplía labores de transporte. También recuerda que trasladó junto al Sargento 1º Verdugo y el Carabinero Becerra Jaramillo, a un profesor que también era de Toltén, y con posterioridad se enteró que lo habían torturado en la 5ª Comisaría de Pitrufuquén y posteriormente falleció. Destaca que a mediados o a fines del mes de octubre de 1973 fue trasladado a cumplir funciones hasta el Retén Lastarria, el cual pertenecía a la Tenencia de Gorbea, por lo que perdió contacto con todos los funcionarios que señaló anteriormente. Añade que conoció a Celso Avendaño Alarcón en el año 1968, ya que éste le ayudó con unas cosas de la casa que andaba comprando cuando recién llegó a Toltén, sin embargo, nunca más volvió a tener contacto con él. Aclara que no puede pronunciarse respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención de la víctima de la presente investigación, ni a lo señalado por el Carabinero Becerra Jaramillo, porque recuerda haberlo trasladado hasta la 5ª Comisaría de Pitrufuquén. Añade que por comentarios de la gente se enteró que Celso Avendaño Alarcón se fue a vivir a Queule o Mehuín, y que militares de Valdivia se llevaron detenidos a todos los dirigentes de la zona, donde probablemente se llevaron a Avendaño. Hace énfasis en que en ningún momento participó en la detención de la víctima de la presente causa, como tampoco lo trasladó hasta la 5ª Comisaría de Pitrufuquén.

En declaración judicial mediante plataforma zoom de fecha 18 de mayo de 2022, **de fs. 769 a fs. 774 (Tomo III) y de fs. 1767 a fs. 1771 (Tomo VI)**. El Tribunal le lee su declaración policial de fecha 19 de agosto de 2013, la cual rola de fs. 97 a fs. 98 de la causa rol 29.883 de este Tribunal y se da por reproducida. Asimismo, se le lee su declaración judicial de fs. 516 a fs. 517

otorgada en la misma causa. El Tribunal ordena agregar aquellas declaraciones a la causa rol 29.875 y causa rol 29.880, ambas del ingreso Criminal del Juzgado del Crimen de Pitrufrquén. Ratifica esas declaraciones. La Tenencia de Carabineros de Toltén a partir del 11 de septiembre de 1973, dependía de la 5° Comisaria de Carabinero de Pitrufrquén. Y en Toltén se juntaron los retenes de villa Los Boldos, Comuy y Queule. En relación a la cantidad de detenidos por motivos políticos que a partir del 11 de septiembre de 1973 comenzaron a llegar a la unidad, espeta que las detenciones las realizaban siempre los sargentos que iban a la cabeza, los Sargentos Primero Caamaño por ejemplo, Muñoz Rodhe y Becerra, la mayoría de los funcionarios, no recuerdo bien el nombre de algunos. Pero ellos salían siempre con los jefes de retenes que eran los que encabezaban, porque la lista la tenía el Comisario de Pitrufrquén. Esgrima que no le correspondió efectuar estas detenciones, su misión fue siempre de conducir el vehículo. Muy consciente sí de las detenciones que se hacían, pero no las efectuaba el deponente esas detenciones, porque era el único chofer que había ahí. Habla que trasladaba a los detenidos por motivos políticos, a Pitrufrquén, pero siempre con un jefe, nunca hizo un traslado con un subalterno o con uno que no haya sido jefe de retén, porque el jefe de retén era al que se le ordenaba de Pitrufrquén, entonces él tenía que responderle al Comisario de la detención. Las detenciones las ordenaba el Comisario de Pitrufrquén, Callis, a todo a quien tuviera un color político o que se sospechara que fuera así. Él era quien ordenaba todo. En ningún momento los jefes de retenes ordenaban una detención, todo lo hacían por intermedio de Pitrufrquén. El Tribunal le consulta ¿Qué rol cumplía el Teniente Moreno Mena de Pitrufrquén en las detenciones por motivos políticos? ¿Ud. alguna vez vio a ese Teniente en el retén?, el deponente responde: poco vio al Teniente Moreno Mena en la Comisaria, porque prácticamente se quedaba afuera en el vehículo, pero al teniente Moreno no lo recuerda muy bien. El Tribunal le consulta por la víctima Celso Avendaño Alarcón, cuenta que en la segunda quincena de octubre tenía los trámites hechos para irse de Toltén por motivos familiares, y se sorprendió mucho cuando se le pregunto que había sido detenido porque en realidad no tiene conocimiento que haya estado detenido en la Tenencia. Urde que a Celso Avendaño lo conoció más o menos en el año 1967, que fue una casualidad, estaba recién llegado en Toltén y Toltén era como

una villa no más, era un pueblo chico, entonces necesitaba dos cañones de cocina y en la pensión donde estaba comentó esto. Ir a Pitrufluén por dos cañones de cocina era muy difícil, la locomoción era mala, entonces consultó si había alguien, algún maestro que hiciera este trabajo y le indicaron a este señor; y al mismo tiempo en esa pensión, había un caballero de edad que tenía una camionetita y el la llevó a la casa del señor Avendaño, y allá conversó con este señor, no lo recuerda muy bien físicamente, y a él le preguntó si tenía un par de cañones de cocina porque estaba recién casado y le vendió dos cañones de cocina. Ahí lo vio, inclusive antes de llegar a la casa de él, por el camino le comentó este caballero de edad (que ya debe estar fallecido porque debe haber tenido unos 70 en esa fecha) de que este caballero hacía arreglos de relojes, lámparas, todas esas cosas, entonces el señor Avendaño, conversaron unos ocho o diez minutos en su casa que era prácticamente un galpón donde vivía, el hombre no vivía muy bien, y él mostró unas lámparas, relojes y dijo, cualquier cosa que necesite venga a hablar conmigo porque lo puede reparar, perfecto, eso fue todo, esa fue la única vez que yo conversó con él. Después me parece que fue en el 68, 69 por ahí, a fines del 68, se fue este señor de Toltén, se fue a vivir no sabe si a Queule o en la otra pescadería que hay más allá al otro lado de Queule, se le olvidó en este momento. Él se fue de Toltén, fue una persona que nunca estuvo detenida ni antes ni después de 1973, no era un hombre revoltoso, que peleara, le gustaba si salir en las noches, salir a tomar, tomaba, pero nunca lo vio tomando en un restaurant ni nada de eso, no tiene porque decir nada. El Tribunal le lee una declaración que otorgó Luis Arnoldo Becerra Jaramillo, funcionario también del Retén de Carabineros de Toltén para la fecha de los hechos investigados, declaración que rola a fs. 679 de la causa rol 29.875, la cual se da por reproducida. Funda que de los dichos del señor Becerra, no tiene conocimiento que haya estado detenido, porque se fue en la segunda quincena. Entonces no vio al señor Avendaño. En una oportunidad le hablaron de una micro amarilla que estaba estacionada ahí en el Retén, todos la vieron menos el deponente, por supuesto, porque esa micro llegó después del 15 de octubre. El Tribunal le indica que en su primera declaración policial leída, el señala que permaneció cumpliendo funciones en la Tenencia de Carabineros hasta el año 1974 y posteriormente ratificó esa declaración, el deponente responde: no, hasta

octubre del 73. Tribunal: lo que podría ser coincidente con la fecha de detención de esta víctima. Posteriormente el señor Becerra señala que los únicos conductores de la unidad eran el deponente y el señor Becerra. Entonces si al señor Celso lo detuvieron y llevaron a la Tenencia de Carabineros de Toltén, ¿Quién lo habría trasladado hasta las dependencias de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén si el deponente era el único conductor designado.? Comunica que se fue en la segunda quincena de octubre, no tiene conocimiento que esa persona haya sido detenida, y es la verdad. El Tribunal le consulta respecto a su conocimiento en relación a lo sucedido con las siguientes víctimas: Luis Anselmo Fernández Barrera, de causa rol 29.880, quien habría sido detenido el 25 de octubre de 1973 y trasladado hasta la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén. Depone que no lo conoce. A Ismael Rolando Bocaz Muñoz, víctima de causa rol 29.882, es primera vez que escucha los nombres de esas personas, a los que más recuerda son al señor Hernández, pero no a esas personas. Blasona que no debe haber estado en ese tiempo en la Tenencia. El Tribunal reitera la fecha desde la cual el habría estado prestando servicios en la Tenencia de Carabineros de Toltén, le indica que en su declaración de fs. 97 indicó que se mantuvo en el Retén de Carabineros de Toltén hasta el año 1974. Atestigua que no. El Tribunal le exhibe declaración de fs. 95, declara que si es suya la firma, pero nunca estuvo hasta el año 1974. Se mantuvo hasta la segunda quincena de octubre de 1973. Inclusive en el Retén Lastarria, especula que tendrán algún libro, algún documento donde se diga eso. Adopta que puede ser que Avendaño haya estado detenido en la Tenencia, pero no lo vio. Utiliza que debe haber sido después que se fue de Toltén, pero máximo permaneció hasta el 15 de octubre, reitera que tendría que haber una constancia en alguna parte. Insiste que de Celso Avendaño ni de los otros detenidos que se le mencionan, tiene alguna idea de ellos. Y tampoco el señor Becerra puede decir que haya llevado junto al deponente a algún detenido, porque siempre eso lo hacía un jefe, nunca condujeron solos, menos un carabinero que era menos antiguo. Se refiere a la detención de otra víctima. De otros funcionarios de Carabineros que se desempeñaban en el retén de Carabineros de Toltén, rememora a uno, que fue casualidad, que sabía también manejar, el carabinero de Apellido Polanco, Mario parece que se llamaba, no recuerda, se me han olvidado muchos nombres.

Proclama que se fue en octubre de 1973, como segundo jefe del retén Lastarria, posteriormente a los pocos meses, quedó como jefe. Precisa que por la actitud y todos los hechos que su personal hacían, estuvo hasta 1975 y no hubo violación a los Derechos Humanos, detenciones arbitrarias o cualquier otro que fuera un delito. Recalca que su actitud durante el año 1975 sin ningún detenido trasladado, sin ningún desaparecido, absolutamente nada. Posteriormente se fue a Loncoche en 1975 y jefe de dos destacamentos y en los dos destacamentos pasó lo mismo, nunca tuvo reclamos de nadie, ni tampoco violación de los Derechos Humanos, entonces eso que significa, que lo que le ordenaban los jefes era trasladar detenidos tenía que cumplirlo, pero el resto no. Asegura que el jefe de Retén, el señor Verdugo, era una persona muy correcta, no le gustaban las cosas, sino que lo que le ordenaban él tenía que cumplirlo, porque en esos años teníamos que cumplir, pero actitudes del deponente en el otro destacamento fue irreprochable. Así que no se puede decir que andaba llevando detenidos, los detenidos que llevo fueron estos, pero al señor Avendaño no tiene idea. Asevera que trasladó detenidos políticos desde Toltén a Pitrufquén por orden del Capitán Callis, era el único chofer, nadie decía que sabía manejar, pero eso lo llevo a cabo hasta la primera quincena, hasta la segunda quincena de octubre de 1973. En 1974 yo ya no estaba, y eso el jefe de retén lo puede atestiguar. Desarrolla que una vez pasó a la Comisaria de Pitrufquén para ver si podían dar algún certificado de su traslado al retén Lastarria, porque ahí debe haber algún documento que diga cuando llegó, pero dijeron que tenía que llevar un documento o el Tribunal solicitar con qué fecha lo trasladaron, no quisieron dar ningún documento. Y en su hoja de vida tampoco aparece.

A.12 Carlos Eugenio Ramírez Gatica (30 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 214 a 215 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.206 a 1.206 (Tomo IV), 2.168 a 2.169 (Tomo VII), de fs. 222 a 224 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.176 a 2.178 (Tomo VII) y de fs. 288 a 289 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.242 a 2.243 (Tomo VII) y de fs. 2.286 a 2.287 (Tomo VII), fs. 290 a 291 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.244 a 2.245 (Tomo VII), fs. 2.246 (Tomo VII), fs. 2.247 (Tomo VII), fs. 2.248 (Tomo VII) y de fs. 2.249 (Tomo VII).

En declaración judicial de 11 de junio de 2002, **rolante de fs. 214 a 215 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.206 a 1.206 (Tomo IV) y de fs. 2.168 a fs. 2.169 (Tomo VII).** Adosa que en el mes de agosto del año 1973 regresaba de un curso de Sub-Oficiales de Santiago, que fue por seis meses, pues anteriormente había estado trabajando en diferentes retenes, pero cuando regresó lo dejaron como administrativo en la Comisaría y como había poco personal en alguna ocasión le tocó salir de servicio preventivo, en donde tenían que resguardar la población, también le correspondió detener a algunas personas que infringían el toque de queda, algunos ebrios, que entregaban en la guardia y al día siguiente a las 6 de mañana debían quedar libre, pero no recuerda nombre alguno de los que detuvo, como dijo, ellos al día siguiente quedaban en libertad. También en algunas ocasiones le correspondió con otros colegas salir a disparar en horas de la noche, para que las personas así tuvieran temor y no salieran tarde en la noche y muchas veces lo hacía con miedo, porque como los mandaban tenían que obedecer, ya que estaban a cargo del Mayor Ramon Callis. Afirma que durante el tiempo que permaneció de guardia en la Comisaría vio que llegaban detenidos y como los calabozos estaban llenos, por lo que se habilitó la parte alta de la caballeriza, para dejar algunas personas allí de los detenidos, no sabe realmente que pasó con esos detenidos e incluso en alguna ocasión militares de afuera pasaban a encargar detenidos y luego se lo llevaban, ignorando su detenido, ya que eran los Mayores lo que estaban a cargo de ellos. Con respecto a las preguntas de las personas que se le interroga, agrega que solo recuerda el nombre del profesor Tenorio, ya que tiene un amigo que era compadre de él y siempre le conversaba de su compadre que desapareció y nunca más supo de él. Con respecto a las demás personas, acota que no las ubica.

En declaración judicial de 19 de junio de 2003, **rolante de fs. 222 a fs. 224 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.176 a 2.178 (Tomo VII).** Aduce que antes del 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como agregado a la oficina de partes de la Comisaría de Pitrufquén junto al escribiente Rubén López. Además, algunos fines de semana cumplía labores de servicio en la calle. Luego del 11 de septiembre se intensificaron los servicios en la población y de vigilancia. En el caso específico, luego de esa fecha le correspondió realizar labores de vigilancia de Cuartel, consistente en hacer guardia en la parte exterior de la Comisaría, servicios

de población y el resto del tiempo volvía a realizar sus labores habituales de oficina. En algunas oportunidades en que le tocó realizar servicio de población durante el toque de queda, efectuaban disparos al aire, a fin de evitar que la gente saliera a la calle. Dicha orden era impartida por el jefe de turno respectivo y era una práctica habitual los primeros días después del golpe militar. Respecto de las personas que se le nombra y que se encuentren en la nómina rolante a fs. 16 del tomo 2 del cuaderno de documentos, pertenecieron a la dotación de la Comisaría de Pitrufquén, salvo Germain Punulef y Juan Contreras, de los que no está muy seguro. Se refiere a una víctima de otra causa. Agrega que de la bodega de forraje de la Comisaría se habilitó como un lugar para recibir detenidos, según cree, en forma preferente detenidos por infracción al toque de queda. Se ocupaban vehículos para salir en ellos a efectuar rondas y detenciones. Recuerda una camioneta blanca fiscal, pero no podría precisar de qué institución era, aunque tenía el logo fiscal y también otra camioneta que se ocupaba. Es factible que se haya ocupado vehículos de amigos de Carabineros, ya que ellos les colaboraban. De entre estas personas se acuerda de Juan Gaete Chesta, Renato Cicarelli, Bernardo Larrondo y Julio Dumont, quienes iban asiduamente al Cuartel a conversar con los Oficiales a cargo, particularmente con el Mayor Callis y con el Teniente Moreno. No le consta que ellos hayan prestado algún tipo de colaboración especial. Se comentaba que a la Comisaría llegaban camiones militares a retirar detenidos. En una sola oportunidad vio un vehículo militar estacionado en la parte posterior del Cuartel, pero no vio movimiento de personas. Advierte que el orden jerárquico de la Comisaría de Pitrufquén estaba establecido de la siguiente manera: Mayor Callis, Teniente Moreno, Suboficial Mayor Reinaldo Lukowiak, a continuación, los Sargentos, Cabos y Carabineros. Respecto de la foto que se le exhibe y que rola a fs. 46 del tomo II del cuaderno de documentos, reconoce a las siguientes personas: al N°2 que es Sandoval, al N°3 que es Reinaldo Lukowiak, al N°5 que es Hermosilla, al N°6 que es el Comisario Ramón Callis y el N°10 que es Hernández. Ratifica su dirección como aquella que figura en su individualización de fs. 173 y señala su teléfono particular.

En declaración extrajudicial de 02 de diciembre de 2005, rolante de fs. 288 a 289 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.242 a 2.243 (Tomo VII) y de fs. 2.286 a 2.287 (Tomo VII). Anima que el 11 de septiembre de 1973, con

el grado de Cabo 1° se desempeñaba en la oficina de partes de esa Comisaria, la que físicamente se encontraba frente a la oficina del Capitán Ramon Callis Soto, actualmente fallecido, siendo el funcionario más antiguo de esta oficina el Escribiente Rubén Darío López Llanos, siendo su principal función transcribir los diversos mensajes que provenían de la superioridad y que debía dirigir a los distintos destacamentos de la Comisaria, sin perjuicio de las distintas órdenes emanadas del Comisario Callis. Es efectivo que la Quinta Comisaria fuera utilizada como un lugar de detención para personas políticas y detenidos comunes, con la diferencia que estos detenidos políticos eran mantenidos en el segundo piso de las caballerizas, a la cual se accedía por una escalera y eran denominados “detenidos en tránsito”, agregando que no solo el personal de la Quinta Comisaria efectuaba detenciones, también las efectuaba personal militar del Regimiento Tucapel, generalmente de noche, quienes entregaban y se llevaban a personas detenidas en los camiones militares que se trasladaban, pero ignora el lugar donde estos estaban apostados, ya que nunca supo que estuviesen en la Isla Municipal. En relación a las personas que ingresaron a la Comisaria de Pitrufquén, en calidad de detenidas políticas, aquilata que le es imposible reconocer a alguna, debido a que llegó a esta Comisaria los primeros días de agosto del año 1973, pero quienes pueden identificar a las personas que fueron detenidas deben ser los funcionarios que integraban la patrulla elegida para tal efecto, la que estaba integrada por el Teniente Carlos Moreno Mena, Suboficial Reinaldo Lukowiak Luppy, los Cabos Hugo Catalán Lagos, Fernández Torres, Raúl Amulef Sandoval y el chofer Antonio Domingo Silva Soto. Asevera que lo más probable era que este personal tuviera acceso a los detenidos al interior de la Comisaria. Sobre las personas civiles que frecuentaban la unidad para sostener reuniones con el Capitán, recuerda a Emilio Bornand, el señor Cicarelli, otro de apellido Cárcamo y Juan Gaete Chesta.

En declaración judicial de 17 de marzo de 2006, **de fs. 290 a fs. 291 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.244 a fs. 2.245 (Tomo VII).** Ratifica íntegramente sus declaraciones judiciales de fs. 173, fs. 439 y la extrajudicial de fs. 1.153 a fs. 1.154. El Tribunal le pregunta si formó parte de alguna patrulla conformada por el Capitán Callis o por el Suboficial Lukowiak, a lo que responde que con el Capitán Callis le correspondió salir alguna vez en el día con destino a la Prefectura. Con Lukowiak jamás salió. El Tribunal le lee en lo pertinente la

aseveración rolante a fs. 636, donde es sindicado como hombre de confianza del Capitán Callis e integrante de las patrullas que salían a efectuar detenciones políticas, respecto de lo cual inquiriere que eso no es verdadero, solo el hombre de confianza en la parte administrativa, pero jamás salió a efectuar detenciones políticas. El Tribunal le lee la declaración de fs. 662 en aquella parte que lo sindicaba como integrante de la patrulla Callis, a lo que cree que existe una confusión al respecto, porque si bien se subió alguna vez a la camioneta blanca en la que se movilizaba la patrulla Callis, nunca detuvo a ninguna persona por motivos políticos. El Tribunal le lee la imputación que le formulan a fs. 663 vta., en que lo mencionan como integrante de la patrulla Callis, respecto de lo cual invoca que nunca ha negado que le correspondió salir con el Capitán Callis, pero nunca salió para detener personas. Además, apenas producido el golpe militar le correspondió quedarse en el Cuartel y recién salió a efectuar patrullajes a la población algunos días después. El Tribunal le lee la imputación de fs. 812 en la que se le sindicaba como integrante de la patrulla del Capitán Callis que salía a detener personas por motivos políticos, respecto de lo cual afirma que a él jamás le señalaron que las detenciones en las que le correspondió participar tuvieran un carácter político. Agrega que a un Cabo en esa época solo le ordenaban acompañar al superior a efectuar una diligencia, pero jamás le dijeron a quien se detenía o por qué motivo.

En diligencia de careo con Benjamín Chávez de 30 de marzo de 2006, **rolante a fs. 2.246 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración judicial de fs. 1.164. Cree que el señor Chávez puede estar confundido en sus apreciaciones en el sentido que él, si bien se subió algunas veces en la camioneta que usaba el Capitán Callis, nunca lo acompañó en diligencias cuya finalidad fuera detener personas. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con German Fernández Torres, de 30 de marzo de 2006, **rolante a fs. 2.247 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración judicial de fs. 1.164. Insiste en que, si bien se subió algunas veces en la camioneta que usaba el Capitán Callis, nunca lo acompañó en diligencias cuya finalidad fuera detener personas. Sin embargo, recuerda haber salido algunas veces en ese vehículo con el señor Fernández allí presente y el Capitán Callis. Divulga que nunca salió con el Teniente Moreno ni con el Suboficial Lukowiak. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Juan Rioseco Montoya de 30 de marzo de 2006, **rolante a fs. 2.248 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración judicial de fs. 1.164. Insiste en que, si bien se subió algunas veces en la camioneta que usaba el Capitán Callis, nunca lo acompañó en diligencias cuya finalidad fuera detener personas. Sin embargo, recuerda haber salido algunas veces en ese vehículo con el señor Rioseco allí presente y el Capitán Callis. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy, de 30 de marzo de 2006, **rolante a fs. 2.249 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración judicial de fs. 1.164. Insiste en que si bien se subió algunas veces en la camioneta que usaba el Capitán Callis, nunca lo acompañó en diligencias cuya finalidad fuera detener personas. Se mantiene en sus dichos.

A.13 Reinaldo Aurelio Hernández Reyes (45 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de 17 de septiembre de 2002, **rolante de fs. 216 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.208 (Tomo IV) y fs. 2.170 (Tomo VII)**. Se refiere a su carrera funcionaria. Para el 11 de septiembre de 1973 prestaba servicios en dicha ciudad y puede decir que su labor consistía en hacer servicios en la guardia y población. El Comisario de esa época era el Capitán Ramón Callis Soto y le seguía en el mando el Teniente Moreno, cuyo nombre no recuerda y el Suboficial Mayor Reinaldo Lukowiak. En ese entonces no recuerda si ostentaba el grado de Cabo o Sargento. Atina que nunca le correspondió realizar detenciones por órdenes emanadas de la Fiscalía Militar. esa labor la efectuaba la jefatura, o sea, Callis, Moreno y Lukowiak y funcionarios de menor jerarquía que ordenaba el Comisaría, pero nunca le correspondió a él. Siempre lo hacía con personal más de su confianza. Blasona que cuando estaba de guardia veía cuando llegaban con detenidos, pero no quedaban registrado en la guardia, sino que los pasaban al interior del Cuartel y el deponente no podía distinguirlos, porque llevaban la cabeza tapada. Ese era un movimiento diario y especialmente en la noche. Muchas veces no estuvo de guardia. Ignora lo que ocurrió con estos detenidos, porque los pasaban al interior del Cuartel y el deponente efectuaba servicio de guardia y no se podía mover de ahí. Además, el acceso a la Comisaría, o sea, al interior, también se hacía por la “puerta falsa” que se le llamaba. Por lo tanto, cuando

los sacaban del Cuartel no pasaban por la guardia. Reitera que nunca detuvo a personal alguna.

A.14 María Elena Calfuquir Henríquez (19 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 225 a 230 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.179 a 2.184 (Tomo VII) y de fs. 857 a 864 (Tomo III).

En declaración judicial de 08 de julio de 2003, **rolante de fs. 225 a 230 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.179 a 2.184 (Tomo VII)**. Su padre es don Luis Caupolicán Calfuquir Villalón. Cimentando que los días 11, 12, 13, 14 y 19 y días posteriores de septiembre de 1973 su hogar y domicilio familiar de Vicuña Mackenna 432 fue allanado diariamente por efectivos de la 5ta Comisaría de Carabineros de Pitruftuén. El día 11 de septiembre de 1973 fue detenido su hermano, Patricio Alejandro, de 19 años, estudiante de Ingeniería UTE. En su detención participaron civiles como Juan Vásquez, agricultor de Pitruftuén, quien lo encerró en un galpón, junto a otros cuatro jóvenes, llamando luego a Carabineros y trasladándolos hasta la Comisaría de Pitruftuén. Posteriormente en 1978, Patricio sale con destino a Francia, regresando en 1981. Fue ejecutado en la zona de Neltume por dotación militar y Carabineros de la IV zona militar de Valdivia, el 20 de septiembre de 1981. El día 12 de septiembre de 1973 fue detenido su otro hermano, Lautaro, de 21 años, estudiante de Contabilidad e inspector en el liceo de hombres de Pitruftuén. Estuvo preso en la cárcel de Temuco. En 1974 se exilia. Actualmente vive en Francia. Delibera que con fecha 14 de septiembre de 1973 su padre sufrió su primera detención por parte de los Carabineros Carlos Moreno y Reinaldo Lukowiak de Pitruftuén. El día 17 de septiembre fue trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco junto a otros detenidos, desde donde es liberado el mismo día, con arresto domiciliario firmado por Dorian Novoa, Fiscal Militar de la fecha. Al momento de ser liberado, en el mismo Regimiento Tucapel su padre se encuentra con su madre, Elena, enterándose en ese instante que ella también había sido detenida y que sus hermanos Patricio y Lautaro se encontraban detenidos en alguna parte (estaban incomunicados en la cárcel de Temuco y no daban información respecto de su detención). Ambos se dirigieron hasta el domicilio de un familiar, la tía Aída Henríquez en Temuco, decidiendo Caupolicán retornar solo a Pitruftuén al día siguiente, debido a su delicado estado de salud. Elena se queda en Temuco unas horas más, para tratar de obtener información sobre sus hermanos detenidos,

Patricio y Lautaro. Una vez que llega a la casa en Pitrufrquén lo recibe y se percata que sangraba por la boca y al orinar. Su cuerpo estaba enteramente golpeado, con hematomas y huellas de quemaduras de cigarrillo. Su estado de salud era deplorable. Le comentó que había sido golpeado con guateros, con la culata de armas, quemado en espalda y extremidades inferiores (muslos) y genitales, entre otras torturas. Además, se le humilló, cortó el pelo al rape y se discriminó por su condición de mapuche. Luego lo acompañó hasta la Comisaría de Pitrufrquén, donde fue duramente interpelado por un Carabineros que se encontraba encerando la entrada, diciéndole *“indio de mierda, quien te dio permiso para pasar”*. Su padre había avanzado un paso, pisando el encerado, inmediatamente pidió disculpas y le extendió el documento donde constaba su arresto domiciliario, el Carabinero lo recibió y trató de deletrear su contenido (parecía que apenas sabía leer). El día 15 de septiembre de 1973 fue detenida su madre Elena Henríquez, de 46 años, Profesora y directora de la Escuela Básica. Su detención la realizó el Teniente de Carabineros de la 5° Comisaría de Pitrufrquén, Carlos Moreno Mena, con ocasión en que ella se encontraba indagando sobre la detención de su padre. Estuvo con sus manos atadas y su vista vendada por dos días. Fue liberada junto a su esposo desde el Regimiento Tucapel el 17 de septiembre de 1973. En 1975 fue detenido su tercer hermano, Luis Marcelo, de 24 años, torturado en la Base Naval el Morro de Talcahuano y detenido en la cárcel de Concepción. En 1976 se conmuta su pena de 15 años por exilio. Por lo que actualmente tiene residencia en Paris, Francia. El día 19 de septiembre de 1973, siendo aproximadamente las tres de la madrugada, fue detenido su padre por segunda vez, por Carabineros de la 5ta. Comisaría de Pitrufrquén. Carabineros ingresó en forma violenta al domicilio familiar (ubicado en Vicuña Mackenna 432, Pitrufrquén), a gritos e insultos, a través de ventanas del comedor y por la puerta principal. Tomando de inmediato detenido a su padre, quien se encontraba en pijama como el resto de la familia, por los Carabineros, Capitán Sergio Callis (quien posteriormente se suicida) y Reinaldo Lukowiak (actual encargado de la oficina de registro electoral en Pitrufrquén), los cuales amenazaron de muerte y con intenciones de disparar sus armas largas (pasaron balas), poniendo a su madre, a su padre y deponente contra la pared. Además, se identificó a los Carabineros apellidos Merino y Ortiz. Revisaron y dieron vuelta veladores, armarios, camas, tomaron (robaron) relojes, dinero, objetos de valor familiar, patearon

muebles y paredes, tiraron al suelo libros y objetos diversos, destruyeron y rasgaron fotos y vestimentas, se comieron los alimentos que había sobre la mesa del comedor (empanadas y bebidas), en un escenario de horror gigantesco. Los efectivos de Carabineros actuaron con total impunidad y desprecio hacia las personas y menores de edad presentes, quienes en ningún momento tuvieron la oportunidad de defenderse o incluso hablar. Pese a los ruegos, llantos y peticiones de su madre y suyos, los Carabineros individualizados se llevaron a la fuerza a su padre, pero antes de cruzar la reja tiraron al antejardín su cedula de identidad y lo introdujeron en una camioneta Chevrolet, año 1970, 500K, de color verde, sin tolva, de propiedad de Pablo Maurer (civil), con destino desconocido. Se presume que se dirigieron hacia el puente Toltén de Pitrufquén. A continuación, en horas siguientes del día 19 de septiembre, tanto su madre como la deponente, a partir de las 7 de la mañana se dirigieron a la Comisaría de Pitrufquén para solicitar información y saber sobre la detención de su padre. Allí la atendió el Teniente Carlos Moreno Mena y la amenazó con dejarla detenida, negó que su padre hubiera sido detenido y justificó cualquier acción que hubiera hecho Callis o Lukowiak diciendo que pertenecían a un cuerpo de seguridad especial y “secreto”. Al día siguiente, es decir, el 20, cuando estaba a escasos 100 metros de su casa, observó como una patrulla de Carabineros llegaba a ella y procedían a ingresar. Desde ese momento no volvió a su hogar por temor a ser detenida y su madre tampoco. El mismo día 20 de septiembre de 1973 fue hasta el Regimiento Tucapel y se entrevistó con Dorian Novoa, quien se acordaba de su padre y el arresto domiciliario, dado que lo conocía de antes y dijo no saber nada respecto a esta segunda detención, sugiriendo que los buscara en la Comisaría de Pitrufquén. Posteriormente su madre y la deponente fueron a la cárcel de Temuco y Fiscalía Militar de Temuco sin obtener algún tipo de respuesta. Durante los meses siguientes se dirigieron a Santiago e indagaron antes el Ministerio de Defensa y Estadio Nacional. En años siguientes, además de realizar acciones judiciales, se buscó en la zona sur y norte del país, sin resultados. Encontrándose su padre, hasta la fecha, detenido desaparecido. Delibera que existen personas en Pitrufquén que formaban parte del grupo de amigos de Carabineros, muchos pertenecían a Patria y Libertad, que pueden saber qué pasó con su padre, pues se lo pasaban en la Comisaría. Ellos son entre otros, Pablo Maurer Werner (dueño de la camioneta en la que fue trasladado su padre detenido), Juan Luis Gaete Chesta

(ex alcalde designado en Pitrufquén y hermano de Arturo Gaete, piloto personal de Pinochet, muerto en accidente aéreo en la VII región), Luis Monje Tejeda, Omar Salvo Maldonado y Miguel Jamade, Patricio Vega, Juan Vásquez, Cornelius (jefe de la lechera), Arnaldo Cicarelli, Emilio Bornard, Rogelio Robin Peigna (compadre del General Mendoza, ex alcalde designado en Freire y ex alcalde en Melipeuco), ésta persona se quedó con la camioneta de Burgos (DD) después de su detención junto a Stepke (DD) y Julio Dumond Bornard. Dice que sería provechoso interrogar a toda la dotación de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén de ese tiempo, en especial a los Carabineros Sergio Lukowiak Lupi, Ortiz, hermanos Anabalón (uno de ellos apodado “el piñon”), Carlos Moreno Mena, Hernández (uno de estos, fallecido), Fernández, Octavio Castillo, Merito, Soto, Arias, Uribe y Hernán Mella. En el acto, acompaña los siguientes documentos: copia de una declaración de su madre, doña Elena Henríquez, la que fue publicada por la Vicaría de la Solidaridad en el libro ¿Dónde Están?, copia de un escrito presentado en la causa 6814 del Juzgado del Crimen de Pitrufquén por presunta desgracia, una minuta de una reunión celebrada entre familiares de detenidos desaparecidos.

En declaración judicial de 21 de septiembre de 2023, **rolante de fs. 857 a 864 (Tomo III)**. En el año 1973 tenía 19 años, estudiaba en la Universidad de Concepción, llegó el día 10 de septiembre a Pitrufquén, junto a su hermano mayor que también estudiaba en la Universidad de Concepción, eran en ese momento cuatro hermanos, Luis Marcelo, Lautaro, Patricio y la deponente, María Elena, y su padre Luis Caupolicán y su madre Elena, ese era el grupo familiar. Siempre habían vivido en Pitrufquén, salvo cuando tenía 1 o 2 años. Nació en el campo, su madre era de Allipén, de la hacienda Allipén, era profesora en una escuela, y desde que la deponente tenía más o menos dos a tres años, se trasladaron a Pitrufquén, hasta que construyeron y se quedaron ahí. Todos militaban en la unidad popular, participaron en las distintas actividades, mientras estaban en el liceo, después cuando estaban en la universidad, y sus hermanos también. Su padre y su madre también, Su madre no tenía una militancia, así como activa, pero también era de la unidad popular, y su padre del partido radical. Sus hermanos eran del MIR y en su caso estaba empezando, más bien ligada al movimiento universitario izquierda de la Universidad de Concepción. Habla que fue retenida en la 5° Comisaria cuando buscaban a su padre para la segunda detención, permaneció unas cuatro horas, en

las cuales no la dejaron salir. El Teniente Carlos Moreno Mena es quien la recibió y amenazó. Bueno ahora después de muchos años comienza a procesar algunas conductas que no las entendió como abuso, no las entendía en su momento como abuso, él tuvo un lenguaje muy provocador, sexualmente con ella, en ese momento en esas cuatro horas, y no la dejó salir de la Comisaria, y siempre con la amenaza de que la iba a ingresar hacia adentro, porque estaba adentro, estaba en su oficina, pero era la idea hacia adentro donde tenían los calabozos. Dice esto de los abusos porque cuando fueron con su madre puestas contra la pared, a ella le pasaban los fusiles, quien estaba frente suyo, con su arma larga, le pasaba el arma larga, le dibujaba toda la silueta, los senos, entre medio de las piernas, todo, nunca entendió eso como un abuso, pero nunca lo dijo tampoco. Hoy día con los procesos y haber vivido más de cincuenta años después, si entiende que eso también es un abuso y parte de la humillación. El Tribunal le pregunta respecto a la dotación de la 5° Comisaria de Pitrufquén, ¿a quién recuerda de esa dotación de los que ya nombró, Carlos Moreno, Lukowiak, u otros nombres?, a lo que contesta que recuerda mucho a Silva, Catalán, Fernández, y de uno muy moreno de nombre Catalán, Lukowiak que falleció, el Carabinero Castillo falleció, uno de los Fernández falleció, el Capitán Callis también estuvo en su casa pero ese fue el primero que se mató, cree que se mató el mismo 74, tiene imágenes muy claras, en algún momento muy vividas también. El Tribunal le consulta ¿Quién era el grupo que se dedicaba a las detenciones por motivos políticos, que se sabía en el pueblo respecto a estas detenciones?, a lo que contesta que sí, en algún momento en conversación con el Carabinero Castillo, Octavio Castillo, sabe quién es el, conversaron con él junto con su madre, cuando ella todavía estaba viva, ella falleció el 93, él les comentaba cómo que se dividían las funciones dentro de la Comisaria, entonces el Capitán Callis le había dado como plena autoridad a Lukowiak, que venía ser como el representante de la DINA, de esos primeros años, porque después habría sido como representante en realidad de la CNI, y que incluso el mismo, que se había ido Lukowiak a otro lado a prestar servicio, pero en esos primeros años ellos tenían como un grupo como estable, que iba a todas las casas, y hacían ellos las detenciones, y el Carabinero Castillo decía que a él lo dejaban fuera de eso, y habían muchas cosas que él tampoco las conocía, porque no las compartían y entre otras cosas él les comentó fu que el siendo una persona bastante ordenada con sus dineros, atribuía eso a que

le pedía mucha plata prestada Lukowiak, el mismo Teniente Moreno, etc. Entonces había como un compromiso con él en el tema que ellos sabían que le debían plata, y por eso mismo como que lo dejaban alejado de lo que ellos hacían, eso era lo que el comentó, porque él tuvo una conducta bastante humanitaria, no solo con su madre sino que con varios detenidos de ese tiempo que hablan de que el Carabinero Castillo era un Carabinero que permanecía más dentro del recinto, y él era el que estaba a veces más cerca de los detenidos, que en algún momento el mismo comentó que había sido reprendido por su superior que era justamente al parecer, Lukowiak. Después venía, más arriba el Teniente Moreno y más arriba el Capitán Callis, que era el jefe de la Comisaria, que lo habrían reprendido por estas conductas más humanitarias. Refiriéndose con conductas humanitarias por ejemplo a llevarles en algún momento agua, desamarrarle un poco las vendas porque tenían amarras, porque tenían las manos muy hinchadas, en el caso de su madre muy hinchadas las manos, llevarlas al baño, en el caso de su madre le bajo los calzones para que ella pudiera orinar en el baño, porque con las manos atadas no podía, todos con la venda, y eso en algún momento ellos incluso podían hablar, incluso ella pudo interactuar en una celda que habían muchas personas, dentro de ellas habían mujeres jóvenes que las habían sacado en la noche. El Tribunal le consulta si de ese grupo que señala que era el que siempre estaba en las detenciones, ¿a quién recuerda?, a lo que responde que recuerda a este Carabinero bien moreno, que era de apellido Catalán, a un Silva, que era el que manejaba, se acuerda que ese siempre andaba arriba de los vehículos, manejaba, que habían hartos vehículos de civiles, incluso los vehículos civiles servían para trasladarlos a Temuco, eran unos camiones que eran utilizados para trasladar animales, caballos, por lo que eran vehículos unos con baranda altas y había uno de apellido Meriño que también recuerda. El Tribunal le pregunta ¿Y recuerda a los hermanos Hernández?, respecto de lo cual descarga que han pasado muchos años, pero si, eran dos justamente y había uno que falleció hace mucho tiempo y había uno vivo, aunque en ese minuto, no sabe. El Tribunal le consulta específicamente por la víctima de esta causa que era don Celso Avendaño Alarcón, él era mueblista que vivía en el sector, que él fue detenido en octubre del año 1973 por los Carabineros de la Comisaria, pero desde esa época que no se sabe nada de él, no sabe si tiene algún antecedente de esta persona, si lo conoce o lo conoció, a lo que responde que a esa persona

personalmente no lo conoció, pero previo al 1990, antes que se estableciera la comisión Rettig, con su madre que ya era de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos hicieron una especie de ronda, como de todos los casos que se conocían de Pitrufquén y allí bueno al final pesquisaron 12 casos de Pitrufquén, uno el mismo 73 y el 75 los últimos dos que fueron Barriga y Catalán Escobar, Barriga Gutiérrez y Catalán Escobar, y en ese tiempo el 73, en esas detenciones el que fue detenido también fue su padre. Siendo su segunda detención y no sabiendo absolutamente nada que paso con él, lo mismo decía la familia, que no sabían absolutamente nada, pero ella igual le preguntaba a sus hermanos que estaban preso en ese tiempo en la cárcel de Temuco, si ellos vieron llegar alguna vez por ejemplo a Celso Avendaño, a Anselmo Fernández Barrera y a Ismael Bocaz, y por la forma en que llegaban a los allanamientos, en estado de ebriedad más de alguna vez, tomaban dentro de la misma casa en los allanamientos, tomaban lo que ellos tenían de licor o de alcohol, su nivel de violencia era tal que pensaron que a estas personas nunca los llevaron a ninguna parte, sino que probablemente los mataron en el mismo momento que las detenían, ese día o al otro día de su detención, pero que no llegaron a Temuco ni al Regimiento ni a la cárcel. Y por qué lo dice, porque estaban prácticamente todos los días con su madre en el Regimiento o en la cárcel esperando que llegara su padre y su madre los conocía a todos ellos, porque como era un pueblo chico, la mayoría de los hijos de ellos fueron alumnos de su madre, y ella conocía a estas personas que también habían sido detenidas, y ella en ningún momento reconoció a alguno de estos detenidos, de los que nunca se supo después. El Tribunal le señala que nombró a don Luis Anselmo Fernández Barrera y a Ismael Bocaz Muñoz, ellos tres fueron detenidos en octubre de 1973 y fueron sacados de sus domicilios y de ahí que no se sabe más de ellos, a lo que contesta que efectivamente, por ejemplo en el caso de Bocaz, vivía el frente, una persona delgada como con pelo ondulado, mayor que ellos, tenía hijos pequeños y lo detuvieron en el momento que se iba a presentar a la Comisaría. En el caso de Sergio, siempre tuvieron la duda si fueron militares, porque se había dicho que eran militares del Regimiento, había en la Isla Cautín un Destacamento que llegaban helicópteros, y el hermano de Gaete era uno de los primeros que se dirigía a esos helicópteros. Arturo Gaete, que después falleció y fue efectivamente el que comandaba el helicóptero personal de Pinochet, a ese nivel, y hay un Carabinero

que siempre negó su participación o él nunca estuvo en nada, pero se identificaba el Carabinero Castillo como de inteligencia, era Hernán Mella, un personaje que estuvo siempre durante el 73. Suma que el 81 su casa fue allanada por efectivos de la fuerza aérea, y en ese grupo, cuando fue allanada su casa, habría estado también Hernán Mella, según lo que comentaba madre. Habla que los Bocaz vivían al frente, en la calle Vicuña Mackenna 432, a esa altura, era empleado municipal. Patricio Leónidas Bocaz, es hijo de Ismael Bocaz, en ese entonces era un niño, pequeño en esa época, a lo que responde que tenía niños pequeños. El Tribunal le lee la declaración en que indica que: vivían en ese tiempo como a 2 cuadras hacia el norte de investigaciones, vivían en lo que se conoce como una toma, una mediagua para todos, la señora Elena Henríquez, madre de los Calfuquir era vecina suya, parece que esta señora trabajaba en un hospital y su hija igual, recuerda que la señora Elena llegó corriendo donde su mamá a avisarle que en la plaza le pegaron un culatazo a su papá, y una patrulla de Carabineros lo tomó detenido, la deponente misma acompañó a su mamá a la Comisaria de Pitruftuquén y ahí reconocieron que su padre había estado ahí, pero que no lo habían trasladado al Regimiento de Temuco. Recuerda que la noche que se fueron a su casa, el Carabinero que le pegó era de apellido "Antipan". Eso es lo que señala Patricio Bocaz. Respecto de lo cual asevera que supieron inmediatamente cuando él fue detenido, porque Ismael Rolando Bocaz, vivía al frente y lo veían todos los días cuando iba a su trabajo, era empleado municipal. Lo describe como un hombre joven que tenía niños pequeños y al frente de su casa, había un terreno eriaz, que en algún momento se pobló, se construyeron como dice él de mediagua, ligera, que después se fueron arreglando. Y supieron inmediatamente la detención de él, porque lo detuvieron en la calle, no lo sacaron de la casa directamente, como en el caso de su papá, en la madrugada, sino que a pleno luz del día. Delibera que supieron de inmediato porque eran vecinos, y todos se conocían en el barrio, eran rumores que corrían rápidamente y él era conocido, era del Partido Comunista, el más conocido en su militancia. Urde que su mamá los conocía muy bien, lo más probable es que los hijos de ellos habían sido sus alumnos, porque su mamá fue profesora. Descarga que llevaba 20 años ejerciendo, su mamá tenía 44 años para el golpe, llevaba como normalista y luego estudió en la Chile, historia y geografía, entonces llevaba más de 20 años como profesora. La describe físicamente como una persona delgada, de pelo ondulado,

moreno, delgado. Asevera que la versión que da este señor Bocaz es totalmente creíble, se adecua a la época. Agrega que Carabineros, patrullaba siempre de día, bueno de noche igual, horrible de noche, y tomaban muchas personas detenidas en la calle, ya sea para cortarles el pelo, denostarlo, amenazarlos o llevarlos detenidos, etc. Blasona que en ese tiempo supieron cuando se llevaron detenido al chico en la plaza de Pitruquén. A saber, Pedro Curihual. Glosa que tuvo conocimiento de la detención del señor Bocaz, porque a él lo deben haber detenido un poco después del golpe, no como a su papá, o su hermano, el 11,12,13,14, debe haber sido un poco después, porque ya su madre estaba en libertad, había sido dejada en libertad. Suma que del caso de Celso Avendaño, no lo conocía, pero su madre si los conocía a todos. El Tribunal le pregunta ¿Y de Luis Anselmo Fernández Barrera?, ¿Qué recuerda más específicamente de él?, a lo que responde que tiene una duda, si es el mismo o no, pero le da la impresión de que él vivía cerca de la cárcel, detrás de donde vivían ellos, como cerca de la cárcel, y él tenía una especie de taller. El Tribunal le señala que él era artesano, a lo que contesta que sí, y él era mecánico, arreglaba vehículos y el a su vez, le parece mucho que estaba con una pareja, una hija de una persona que trabajó en la casa de su mamá. El Tribunal le indica que su esposa se llamaba Rosalía Silva, Chalia le decían, y tenían hijos pequeños igual, a lo que la deponente evidencia que sí, justamente, porque ellos vivieron, no don Anselmo, antes de que tuvieran los hijos, Rosalía cree, vivieron en su casa, en un departamentito chiquitito, ya que la mamá trabajaba en su casa, para la deponente en ese tiempo era ancianita, pero si se acuerda que ese señor era pareja de la señora Rosalía, quien debe haber sido unos 5 o 6 años mayor que la deponente. El Tribunal le indica que sí, él (Luis Anselmo Fernández Barrera) también lo detuvieron en el mismo periodo, octubre del 73, respecto de lo cual la deponente expresa que sí, lo detuvieron, y con él se ensañaron mucho porque lo sacaron en varias rondas, lo que ahí se conocía en esos años, y lo sacaban como en ronda cuando ellos salían a detener gente, para que les arreglara los vehículos, ya que si se quedaban en panne tenían ahí mismo al mecánico, incluso con su madre sospechaban que él probablemente haya visto algo, conocido algo y por eso lo desaparecieron. Tienen esa sospecha. El Tribunal le indica que aparte de los otros detenidos desaparecidos, respecto a la familia Bocaz, la duda era si vivían cerca de su familia, a lo que responde que no, vivían bien cerca, los veían pasar, cuando dice el chico (Patricio

Bocaz) que estaba, sabe que Investigaciones en ese tiempo no existía, Investigaciones hoy día está en Vicuña Mackenna esquina, no sabe si es Santa María o algo así, y la otra era León Gallo, y ellos vivían entre esa, donde estaba la Comisaria, mientras ellos también vivían en esa, solo que por Vicuña Mackenna, en esos sitios que eran eriazos, los vieron llegar incluso, cuando se instalaron Bocaz y su familia.

A.15 Oscar Manuel Seguel Jofré (30 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 234 a fs. 235 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.227 a 1.228 (Tomo V) y de fs. 2.188 a fs. 2.189 (Tomo VII) y de fs. 355 a fs. 357 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.307 a fs. 2.309 (Tomo VIII).

En declaración judicial de 07 de octubre de 2005, **rolante de fs. 234 a fs. 235 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.227 a fs. 1.228 (Tomo V) y de fs. 2.188 a fs. 2.189 (Tomo VII).** Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial que rola de fs. 496 a fs. 497. Justifica que la primera vez que fue detenido, el día 14 de septiembre en las afueras del Banco del Estado, el Carabinero Silva iba en el grupo de aprehensores, ahí lo condujeron a la Comisaría y luego de una hora de permanencia en ese lugar, el Capitán Callis le dijo que se fuera a su casa bajo régimen de arresto domiciliario. No vio otros detenidos en esa oportunidad. Habla que por las noches, su casa era vigilada por civiles vestidos de Carabineros, entre ellos Omar Salvo. El día 23 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido desde su domicilio. En esta oportunidad el grupo de Carabineros estaba al mando del Teniente Moreno. También integraba el grupo el Suboficial Lukowiak, quien lo golpeó duramente con la culata de su fusil en presencia de sus hijos. Luego lo subieron a un camión al interior del cual había más detenidos. Una vez que llegaron a la Comisaría de Pitrufquén fue interrogado por el Capitán Callis acerca de personas y armas. Luego de un tiempo en la Comisaría fue trasladado por el Capitán Callis en un camión hasta el Regimiento Tucapel. En ese lugar le sacó la venda de los ojos y se rio de él. El deponente lo trató de traidor. Respecto de las torturas recibidas en el Regimiento Tucapel, un Oficial, al parecer Teniente y de apellido Thielemann procedió a golpearlo con las palmas de sus manos. Durante sus interrogatorios y torturas en el interior del Regimiento Tucapel, a pesar de estar vendado pudo reconocer la voz del Capitán Ubilla. Acerca del consejo de guerra en el cual fue condenado, éste estaba integrado por los Ministros

de la Corte de Apelaciones, el Mayor Jofré y otras personas que no conocía. En dicha oportunidad fue detenido por el abogado Cornelio Villarroel, quien ahora es Ministro. Junto al deponente también fueron detenidos otros cuatro.

En declaración judicial de 21 de agosto de 2015, **rolante de fs. 355 a 357 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.307 a 2.309 (Tomo VIII).** Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 726 a fs. 727 y que le ha sido leída. Invoca que la primera vez que fue detenido, el día 14 de septiembre en las afueras del Banco del Estado. Recuerda que el Carabinero Silva iba en el grupo de aprehensores. Lo condujeron a la Comisaría y luego de una hora de permanencia en ese lugar el Capitán Callis le dijo que se fuera a su casa bajo régimen de arresto domiciliario. No vio otros detenidos en esa oportunidad. Por las noches su casa era vigilada por civiles vestidos de Carabineros, entre los que recuerda a Omar Salvo y Oscar Cárcamo. El día 23 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido desde su domicilio. En esta oportunidad el grupo de Carabineros estaba al mando del Teniente Moreno. También integraba el grupo el Suboficial Lukowiak, quien lo golpeó duramente con la culata de su fusil en presencia de sus hijos. Luego, lo subieron a un camión al interior del cual había más detenidos. Una vez que llegaron a la Comisaria de Pitrufquén fue interrogado por el Capitán Callis acerca de personas y armas. Luego de un tiempo en la Comisaria fue trasladado por el Capitán Callis en un camión hasta el Regimiento Tucapel. En ese lugar le sacó la venda de los ojos y se rio del deponente. Este último lo trató de traidor. Respecto de las torturas recibidas en el Regimiento Tucapel, recuerda que un Oficial, al parecer Teniente y de apellido Thielemann procedió a golpearlo con las palmas de sus manos. Éste era un gringo alto y gordo, bastante agresivo. Que antes del golpe trabaja en alguna repartición pública. Durante sus interrogatorios y torturas en el interior del Regimiento Tucapel, a pesar de estar vendado, pudo reconocer la voz del Capitán Ubilla. Interpreta que en el Regimiento también fue interrogado acerca del consejo de guerra, en el cual fue condenado, éste estaba integrado por un Ministro de la Corte de Apelaciones de apellido Olate, quien era bastante alto y macizo, que lo presidía; el Mayor Jofré y otras personas que no conocía. En dicha oportunidad fue detenido por el abogado Cornelio Villarroel, quien ahora es Ministro. Junto al deponente también fueron detenidos otros cuatro. Manifiesta que fue condenado a diez años de presidio, pero a los tres años salió exiliado a Inglaterra. Respecto de

los hechos materia de esta investigación puede señalar que cuando lo llevaron al segundo piso de las caballerizas de la Comisaria de Pitrufquén, en algún momento de su estadía trajeron a un joven en muy malas condiciones, a quien dejaron junto a él. Esta persona le habló y le dijo que era estudiante de la Universidad de Chile de Temuco y que estaba haciendo su práctica profesional de profesor en Toltén. Después de esto no habló más y como a la media hora después falleció a su lado. Los Carabineros cuando se dieron cuenta de esto lo sacaron del lugar, trasladándolo en una frazada. Sintió que lo subieron a una camioneta y presume que esta fue con dirección al río. Agrega a sus dichos que mientras estaba detenido en la cárcel de Temuco, fue sacado por un Teniente de Ejército y un grupo de militares. Lo subieron a un furgón y lo llevaron hacia Angol, según le dijeron. Cuando iban entre Traiguén y Victoria lo hicieron descender del móvil y le pidieron que corriera. Supo de inmediato que lo iban a matar, por lo que se aferró a la bota del Oficial. Éste lo pateaba para que lo soltara, pero no le hizo caso. Al cabo de un rato volvieron a subirlo al furgón o jeep y retomaron el camino. Recuerda que pasaron a Victoria a la casa de un familiar del Teniente, al parecer los padres de éste. Allí se quedaron toda la noche bebiendo y al deponente lo dejaron en la cárcel de Victoria. Al día siguiente lo llevaron a Angol para presentarlo ante el Coronel Morel que estaba en la Intendencia de esa ciudad. Éste le dijo que lo había llamado para que confesara su participación en el Plan Zeta, cuya finalidad era asesinarlo. Además, le dijo que su padre lideraba ese plan y que lo tenían preso en la cárcel de Angol. Lo llevaron a ese lugar, donde pudo ver a su padre en muy malas condiciones en un calabozo. Había sido cruelmente torturado. Al día siguiente lo regresaron a la cárcel de Temuco. Musita que en el Regimiento Tucapel fue interrogado por el abogado Alfonso Podlech en la Fiscalía Militar, ubicada al interior del Regimiento. En esa oportunidad el señor Podlech vestía de uniforme y usó como actuario al Teniente de Reserva Thielemann. Recuerda que Podlech le dio un palmetazo en la cara porque no estaba conforme con su declaración.

A.16 José Job Jiménez Vergara (33 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 255 a 256 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.248 a 1.249 (Tomo V) y fs. 2.209 a 2.210 (Tomo VII), fs. 1.261 a 1.262 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.222 a 2.223 (Tomo VII) y de fs. 1.263 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.224 (Tomo VII).

En declaración judicial de 03 de noviembre de 2005, **rolante de fs. 255 a 256 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.248 a 1.249 (Tomo V) y fs. 2.209 a 2.210 (Tomo VII).** Propone que para septiembre de 1973 se desempeñaba como funcionario del Servicio de Salud en Pitrufquén. Recuerda que el día 13 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas fue detenido por Carabineros de Pitrufquén, entre los que recuerda al Teniente Moreno, al Suboficial Lukowiak y a los Carabineros Catalán y Silva. Recalca que Lukowiak y Moreno entraron a su domicilio, que en aquel tiempo estaba ubicado en calle Blanco Encalada N°290 de Pitrufquén y en presencia de su señora Gladis Arévalo y su suegra Carmen Ortiz, lo detuvieron para posteriormente subirlo a la parte trasera de una camioneta C-10 de color blanco. Luego de esto se dirigieron a la casa de Carlos Salinas, al que también detuvieron. Posteriormente fueron a las casas de otras personas que también fueron detenidas. Más tarde fueron conducidos a la Comisaría donde les vendaron la vista y les amarraron las manos con alambre de púas. Los encerraron en la parte alta de las caballerizas y en ese lugar fue torturado mediante la aplicación de corriente en diferentes partes del cuerpo. No sabe quiénes participaron en su tortura. Días más tarde fueron trasladados hasta el Regimiento Tucapel. En ese lugar fueron interrogados por un Oficial, al parecer Teniente, que era alto y rubio, el que luego de darles a conocer que se iban a constituir las Fiscalías, les ordenaron que se bañaran. Luego de esto, junto con Polo Calfuquir, Elena Henríquez y la señora Inés Rubilar, pasaron a la Fiscalía y los liberaron inmediatamente, pero con arresto domiciliario y con la obligación de presentarse en la Comisaría. Esto fue el día 18 de septiembre. Agrega que junto con don Polo Calfuquir, una señora y un caballero de Toltén, cuyos nombres no recuerda, contrataron un taxi y se trasladaron a Pitrufquén. Al llegar al puente Toltén fueron detenidos en el control que estaba a la entrada del pueblo y fueron instruidos para irse directamente a sus domicilios. En la barrera policial estaban los Carabineros Haroldo Hernández y Germán Fernández. Suma que en esa oportunidad Luis Calfuquir le dijo que lo iban a matar esa misma noche, pero que no se preocupara porque al deponente no le iba a pasar nada. Relata que se fue a presentar al día siguiente a la Comisaría y allí se enteró por boca del Teniente Moreno que Luis Calfuquir había sido detenido. Además, cada dos días lo iban a buscar los Carabineros y lo detenían por algunas horas. Esto duró como tres meses. También le tenían a un militar como punto fijo, el que lo seguí a

todas partes. Finalmente, el Carabinero Asenjo le dijo que fuera más a presentarse a la Comisaría. Soflame que nunca le preguntaron nada mientras estuvo detenido.

En diligencia de careo con Reinaldo Lukowiak Luppy, de 09 de noviembre de 2005, **rolante de fs. 1.261 a 1.262 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.222 a 2.223 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración judicial que rola a fs. 605 y que se le lee. Sustenta que el Suboficial Lukowiak a que ha hecho referencia es la persona con quien se le carea. Urde que debería acordarse, porque fue quien los trasladó al Regimiento Tucapel de Temuco. Iba sentado sobre la baranda del camión Fiat en el que los trasladaron y portaba una carabina. El único Carabinero que los trató bien fue el Carabinero Nadir Guzmán, quien actualmente vive en Pitrufrquén. Mientras estuvieron detenidos en la Comisaria de Pitrufrquén los ubicaron en fila y les pasaron un cable a través de las manos y les aplicaban corriente. Esa era la manera de torturarlos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Carlos Moreno Mena, de 09 de noviembre de 2005, **rolante de fs. 1.263 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.224 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración judicial que rola a fs. 605 y que se le lee. El Teniente Moreno a que he hecho referencia es la persona con quien se le carea, aun cuando en aquel tiempo éste era más delgado. Recuerda que conversó con él en la guardia de la Comisaria el día 19 de septiembre de 1973. Se mantiene en sus dichos.

A.17 Juan Fernando Rioseco Montoya (33 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 274 a 277 (Tomo I), copia de la cual se encuentra 1.267 a 1.270 (Tomo V) y de fs. 2.228 a 2.231(Tomo VII), fs. 538 a 539 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.507 a 1.508 (Tomo V), fs. 544 a 545 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.515 a 1.516 (Tomo V) y de fs. 2.535 a 2.536 (Tomo VIII) y de fs. 1.287 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.248 (Tomo VII).

En declaración judicial de 29 de noviembre de 2005, **rolante de fs. 274 a 277 (Tomo I), copia de la cual se encuentra 1.267 a 1.270 (Tomo V) y de fs. 2.228 a 2.231(Tomo VII)**. Aduce que el día 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufrquén. Acota que en 1972 cumplía funciones en Toltén, año en que fue trasladado a Pitrufrquén, lugar en que estuvo hasta 1976. Adopta que tenía el grado de Cabo y estaba a cargo de la central de

compra. Recuerda que vivía en Temuco y viajaba todos los días a Pitrufuquén. Adosa que el día 11 de septiembre llegó a su trabajo como de costumbre y siendo las 08:10 horas salió desde su casa el Capitán Callis eufórico, informando lo del golpe de Estado. Sin embargo, no dio ninguna instrucción al respecto. Afirma que le dio a conocer su inquietud por los Carabineros que estaban en la guardia de la Moneda, a lo que éste le dijo *“mejor que mueran unos pocos huevones, pero que se salve el país”*. Luego le preguntó como estaban de mercadería, a lo cual respondió que estaban escasos, por lo que le ordenó que lo acompañara a Temuco a comprar. En Temuco se estacionaron frente a la Prefectura. El Capitán Callis estuvo alrededor de una hora. Al salir le dijo que debía encargarse de la logística de manera exclusivamente a partir de ese día. Se acuartelaron y debieron dormir en la Comisaría. Agrega que como a los cuatro días luego de ocurrido el golpe, el Capitán Callis comenzó a formar patrullas para vigilar y detener personas. Dicha patrulla estaba conformada por Antonio Silva y Germán Fernández. Algunas veces se hacía acompañar del Cabo Carlos Ramírez y en alguna oportunidad le correspondió salir con él. Estas salidas eran hacia Temuco con destino a la Prefectura o a la FACH. Se movilizaban en una camioneta C-10 de color blanco con toldo. El Teniente Moreno tenía una patrulla y el Suboficial Lukowiak tenía otra. Este último funcionario actuaba con Meriño, Hugo Catalán y con Amulef. Ellos se movilizaban en una camioneta de color verde. No recuerda a los integrantes de la patrulla del Teniente Moreno. Alega que nunca le correspondió participar en detenciones por motivos políticos. Respecto del señor Burgos, nunca supo de su detención ni lo conoció. Anexa que existía una puerta falsa por la que entraban los vehículos con detenidos, que eran encerrados en los altos de las caballerizas de la Comisaría. Recuerda que como cinco días luego del golpe, el Suboficial Lukowiak trasladó detenidos a Temuco en un camión que había proporcionado un civil. Al lugar señalado anteriormente solo tenían acceso los patrulleros. Anima que no le correspondió efectuar guardia en el recinto donde estaban los detenidos políticos. Respecto del señor Calfuquir, puede señalar que lo conoció, pero no lo vio detenido. Y no recuerda al profesor Tenorio ni haber visto mujeres detenidas en la Comisaría de Pitrufuquén. Añade que no recuerda que raíz de la detención de alguna persona hubiera quedado una camioneta blanca requisada en la Comisaría. Apunta que la relación entre el Capitán Callis y el Teniente Moreno no era muy buena. Esto porque

el carácter del Comisario era muy cambiante. Apoya que el Suboficial Omar Valdebenito estaba a cargo de la central de compras de la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, actualmente fallecido. El Teniente Riquelme se hizo cargo de esta dependencia al parecer el año 1974, pero en realidad solo firmaba porque no tenía idea como llevarla. Ellos siempre se entendieron con el Suboficial Valdebenito. Aproxima que su esposa es prima del Teniente Ítalo García Watson. Este Oficial luego del 11 de septiembre fue destinado a la Prefectura. Aquilata que el Capitán Callis lo miraba con malos ojos, porque decía que García Watson era socialista y lo asociaba con la esposa del deponente. Arguye que no vio que se torturara a los detenidos políticos en el primer piso de las caballerizas, pero si sintió gemidos y gritos de estas personas. Respecto del traslado de detenidos, le parece que la patrulla de Lukowiak era la encargada de estos movimientos. Solo recuerda a una señora que fue a la Comisaría como tres o cuatro veces a preguntar por algún detenido, pero no recuerda su nombre ni a quien buscaba. Tampoco rememora haber fiscalizado los domicilios de las personas que quedaban bajo el régimen de arresto domiciliario. Asegura que no le consta que existiese una patrulla establece en el sector de la isla municipal. Sin embargo, sus colegas aseguraban que era frecuente ver en las noches patrullas militares dando vueltas en Pitrufrquén.

En declaración extrajudicial de 07 de marzo de 2017, **rolante de fs. 538 a 539 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.507 a 1.508 (Tomo V).** En lo pertinente narra que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 era de dotación de la 3era. Comisaría de Pitrufrquén, ostentando el grado de Cabo. La unidad estaba a cargo del Capitán Callis Soto hasta el mes de diciembre del mismo, para luego hacerse cargo de la Unidad el Capitán Ramiro Espinoza Vega. El Capitán Callis Soto era secundado por el Teniente Carlos Moreno, quien era el Oficial de Orden. Dentro de los funcionarios más antiguos de la Unidad era el Suboficial Mayor Lukowiak, encargado del almacén de vestuario de equipo, Sargento 2do. Juan Fernández de órdenes judiciales. Dentro de sus compañeros de funciones, recuerda al Cabo Carlos Ramírez Gatica, al peluquero David Pinilla Novoa, entre otros. Colige que sus labores consistían en manejar la oficina de central de compras de esa unidad militar. Es decir, se hacía cargo de toda la mercadería que llegaba hasta la unidad y debía ser distribuida para los funcionarios y sus familias, labor que desempeñaba solo. Comunica que durante su carrera

funcionaria no le correspondió participar de comisiones extra institucionales en organismos de inteligencia, tales como D.I.N.A o C.N.I. Supo por comentarios que por detrás de la 3era. Comisaría de Pitrufquén existía una puerta falsa, donde presumiblemente se ingresaban personas detenidas por motivos políticos y eran llevados hasta las caballerizas de su unidad policial. Conjetura que no vio personas detenidas al interior del Cuartel por motivos políticos, pero los comentarios decían que se detuvo a personas por motivos políticos, los cuales no eran ingresados por la guardia principal, sino por la fuera falsa que mencionó anteriormente. Cimentaba que Benedicto Sanhueza Ponce, René Tellier Del Valle, Oscar Seguel Cofré, Juan Saravia Domke, Waldo Pineda Reyes, Gabriel Nesbet Soto, José Job Jiménez, no los conoce ni los ha oído nombrar antes. Se rumoreaba que el Teniente Moreno y el Suboficial Lukowiak eran los encargados de realizar las detenciones por motivos políticos, con su personal subalterno, no teniendo certeza de esta situación. Suma que de acuerdo a dichos de funcionarios que hacían servicios en la calle que, dentro de la ciudad de Pitrufquén, como por la carretera hubo vehículos de Ejército realizando patrullajes, sin tener conocimiento que éstos llegaran hasta dependencias de su unidad buscando detenidos o en labores similares. En relación a la víctima de los hechos investigados, cuya identidad se le da a conocer como Luis Fernández Barrera, decanta que no lo conoce ni lo ha oído nombrar antes, desconociendo todo antecedente al respecto.

En declaración judicial de 11 de mayo 2007, **rolante de fs. 544 a 545 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.515 a 1.516 (Tomo V) y de fs. 2.535 a 2.536 (Tomo VIII).** Efectivamente se encontraba trabajando en la 5° Comisaría de Pitrufquén a partir del 11 de septiembre de 1973. En aquella fecha se desempeñó en la central de compras de la unidad hasta el año 1976. Delibera que es efectivo lo señalado, en el sentido de que a contar de la fecha indicada el Capitán Callis formó patrullas, a fin de detener a personas por temas políticos. Existían dos patrullas: la de Lukowiak y Teniente Moreno. La patrulla de Lukowiak estaba conformada por el Cabo Catalán, Meriño, Arnoldo Amulef; mientras que la segunda patrulla a cargo del Teniente Moreno, no tuvo conocimiento de cuáles eran sus integrantes. Dichas patrullas, una vez practicadas las detenciones, trasladaban a los detenidos por motivos políticos hasta las caballerizas de la unidad, ubicadas en el segundo piso. Muchas veces los Carabineros precedentemente mencionados,

ingresaban por un portón llamado puerta falsa ubicado al fondo de la Comisaría. Delibera que no tuvo conocimiento de lo que les ocurría a los detenidos por motivos políticos una vez ingresados a las caballerizas. En una oportunidad, mientras se encontraba en la Comisaría, observó que un camión estaba apostado en el recinto de la misma y en su interior habían detenidos políticos, momento en que se encontraba presente Lukowiak custodiando a aquellos detenidos. El mismo día en la tarde, por parte del Cabo Meriño, que los detenidos habían sido trasladados a Temuco por orden del Capitán Callis. El Tribunal le lee, en lo pertinente la declaración de don Hugo Catalán Lagos que rola de fs. 150 a 152 de la causa rol 29.876, a lo que responde que salió en camioneta con el Capitán Callis, pero era únicamente durante el día con destino a la Prefectura de Temuco y luego regresaban. Nunca detuvo junto al Capitán Callis a personas por motivos políticos. Respecto a Ricardo Bustos Martínez, es la primera vez que escucha un hecho de esas características. Respecto a Celso Avendaño y Pedro Curihual Paillal, no tiene conocimiento, puesto que el deponente trabajaba en la central de compras de la unidad y no realizaba servicio a la población. Difunde que el nombre de Luis Anselmo Fernández Barrera, Luis Anselmo Fernández Barrera, Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras; Lautaro Calfuquir Henríquez; Moisés Norambuena Oviedo, Leonor Del Carmen Pincheira García y Carlos Alfredo Torres Concha, no le son conocidos.

En declaración diligencia de careo con Carlos Ramírez Gatica, de 30 de marzo de 2006, **rolante de fs. 1.287 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.248 (Tomo VII)**. Ratifica íntegramente su declaración judicial que rola a fs. 812 y que se le lee, en el sentido que el señor Carlos Ramírez formaba parte de la patrulla que comandaba el Capitán Callis y ocasionalmente él también integró. Recuerda haber salido en alguna oportunidad con el señor Ramírez, no más de dos o tres veces. Se mantiene en sus dichos.

A.18 Domínica Aguilera Caamaño (25 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de a fs. 283 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 444 (Tomo II), 1.276 (Tomo V), 1.458 (Tomo V), 2.237 (Tomo VII) y 2.448 (Tomo VIII) y fs. 438 a 440 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V) y de fs. 2.442 a 2.444 (Tomo VIII).

En declaración judicial de 20 de diciembre de 2005, **de fs. 283 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 444 (Tomo II), fs. 1.276 (Tomo V), fs.1.458 (Tomo V), fs. 2.237 (Tomo VII) y fs. 2.448 (Tomo VIII).** El Tribunal le exhibe las fotografías que obran a fs. 94 y siguientes de la causa rol N°22.704 y la de fs. 46 del cuaderno separado II de la causa rol N°28.291, reconociendo al N°6, a quien señala como el Carabinero al que le decían “el maña”; los N°2 y 10, como los hermanos Hernández; y el N°9 como el Carabinero Asenjo. Señala que estos funcionarios son los que detuvieron a Luis Fernández Barrera. Indica que Asenjo era quien conducía la camioneta en la que se movilizaban. Agrega a sus dichos que el Carabinero cuya fotografía rola a fs. 198 y que corresponde a José Meriño Ferreira le dijo a Rosalía Silva que no fuera más a la Comisaría y que no divulgara nada más, porque o si no le podían dar el bajo a ella, igual que lo hicieron con su marido.

En declaración judicial de 07 de diciembre de 2005, **rolante de fs. 438 a 440 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V) y de fs. 2.442 a 2.444.** Destaca que en 1973 era vecina de su cuñada, doña Rosalía Silva en calle Arturo Pratt de la ciudad de Pitrufrquén. Detalla que vivía en una mediagua al lado de la casa de Rosalía. Sobre la detención de Luis Fernández Barrera espeta que el día 25 de octubre de 1973 se encontraba en el patio de su casa mientras su vecino Luis Fernández estaba limpiando un tabló de perejil que estaba cerca de la vereda. De pronto vio aparecer un vehículo de color blanco, específicamente una camioneta, que era cerrada, la que se detuvo frente a la casa de Fernández. De este móvil se bajaron cuatro Carabineros, entre los que pudo reconocer a los hermanos Hernández, otro al que le decían “el maña”, y un cuarto que era moreno y tenía un lunar en la mejilla derecha. Tomaron rápidamente a su vecino y lo subieron a la camioneta. Dentro de ese mismo móvil pudo ver detenidos a Celso Avendaño, un señor de apellido Bocaz y Luis Calfuquir, quien era marido de una profesora de nombre Elena Henríquez. Luego de esto, la camioneta se fue rumbo a la Comisaría. Distingue que le fue a avisar a su vecina Rosalía Silva lo que había sucedido, puesto que ésta se encontraba lavando ropa detrás de la casa. Por lo tanto, ella no vio cuando su marido fue detenido. Junto con ella se dirigió a la Comisaría a preguntar por él, siendo atendidas por el Carabinero Hernández. Se retiraron de ese lugar, pero volvieron en la noche junto con Rosalía Silva y la esposa

de Celso Avendaño, encontrándose con el Carabinero Caamaño, quien les contó que tanto Fernández como Avendaño estaban en la pesebrera de la Comisaría, atados de pies y manos con alambres de púas y vendados. Les señaló que les iban a dar el bajo esa misma noche, pero que no le contaran a nadie. Esa noche se escondieron en las inmediaciones de la Comisaría y vieron salir un camión tolva con detenidos, pudiendo reconocer nuevamente a los hermanos Hernández que abrían el portón de la Comisaría y se subieron al camión. Este último se dirigió hacia la isla municipal regresando poco tiempo después. Luego de un rato volvió a salir cargado con detenidos yendo al mismo lugar antes mencionado. El camión tolva era de vialidad y el chofer de ese vehículo era el cuidador del recinto donde funcionaba vialidad al otro lado del puente. Glosa que entre los dos viajes del camión pudieron sentir muchos quejidos que provenían de la pesebrera, como si estuvieran golpeando gente. Días después pasó por su casa el Carabineros apodado “el maña”, quien le dijo “ojo por ojo y diente por diente. Cuídate”. Su pareja Eduardo Montenegro Jaque fue detenido por los Carabineros Hernández el día 11 de septiembre de 1973 en la plaza de Pitrufrquén. Inmediatamente lo trasladaron a Temuco. Le perdieron la pista hasta que se enteraron de que estaba preso en la cárcel de Temuco. La deponente fue dos veces a verlo sin poder tomar contacto con él. Éste salió libre el día 1 de noviembre de 1973 y tuvieron que huir de Pitrufrquén porque los Carabineros les hicieron la vida imposible, trasladándose a San José. Respecto del Carabinero al que le decían “el maña”, al parecer se trataría del Capitán Callis, porque cuando esta personas aparecía por la Comisaría todos los Carabineros se le cuadraban. Además, usaba lentes oscuros.

A.19 Héctor Celso Avendaño Vásquez (9 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de 21 de diciembre de 2005, **rolante a fs. 284 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 445 (Tomo II), 1.277 (Tomo V), 1.459 (Tomo V), 2.238 (Tomo VII) y 2.449 (Tomo VIII)**. Ensayó que las circunstancias en que fue detenido su padre Celso Avendaño Alarcón las desconoce, pues a la época de ocurridos los hechos era muy pequeño. Esgrime que nunca escuchó comentarios acerca de qué funcionarios de Carabineros participaron en la detención de su padre. Tampoco acompañó a su madre en ninguna diligencia de búsqueda. No recuerda haber visto o escuchado que algún Carabinero se acercará a la casa para dar

consejos respecto de cómo enfrentar la situación que había ocurrido con su padre. Tampoco conoció al Carabinero de apellido Orellana.

A.20 René Laureano Teillier Del Valle (59 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 285 a 287 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.278 a 1.280 (Tomo V), fs. 296 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.289 (Tomo V), fs. 540 a 541 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de 16 de enero de 2006, **rolante de fs. 285 a 287 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.278 a 1.280 (Tomo V).** Espeta que para los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 se encontraba en dicha comuna y en su domicilio, pernoctando por razones de seguridad en otro inmueble cercano al suyo. Siendo las catorce horas del día 13 de septiembre de ese año, mientras se encontraba al interior de su domicilio ubicado en calle General Mackenna frente a la plaza de armas de Pitrufrquén, sorpresivamente ingresó personal de Carabineros vestidos de uniforme, dentro de los cuales se encontraba don Reinaldo Lukowiak Luppy. También ingresaron por la parte posterior del patio, personas vestidas de civil, a quienes jamás había visto. Acto seguido fue maniatado por la espalda y sacado de su casa por el patio a la calle y subido a una camioneta de cabina simple, al parecer de marca Chevrolet una vez que le fuera vendada la vista. Lo anterior, en presencia de su esposa de nombre Elena Espinoza Silva, de inmediato fue conducido hasta la 5° Comisaría de Pitrufrquén e ingresado al segundo piso de las caballerizas existentes en la parte posterior de este cuartel. En este lugar pasó hasta la tarde siguiente, oportunidad en que es sacado de allí, haciéndosele bajar al primer piso de las caballerizas y llevado a una dependencia, donde fue interrogado por algún funcionario que no puede identificar, respecto de su relación con don Antonio Varas, Secretario del Juzgado de Pitrufrquén, a quien conocía con anterioridad. Pues bien, luego de ello, es sacado al patio del cuartel policial y subido a un camión con barandas altas de madera. Junto a él, sin duda alguna, había más personas detenidas, las cuales por las condiciones de silencio que debían tener, además de la venda en sus ojos no pudo reconocer en ese lugar. Desde este recinto y en el vehículo ya citado es trasladado junto a estas otras personas hasta Temuco, específicamente a la 2° Comisaría de Carabineros de esa ciudad, lugar al que llegaron siendo de noche. Al interior de este cuartel los hacen tenderse en el suelo boca abajo, para no poder mirar su entorno, pasando algunos funcionarios de

Carabineros por sobre sus cuerpos; ocasión en la que su frente fue erosionada, sangrando dicha zona de su cuerpo. Suma que en este lugar le fue sacada la venda de su vista y las amarras de sus muñecas. Luego de permanecer un rato en la posición ya descrita, personal de Carabineros de uniforme lo envía al baño a lavar su frente, oportunidad que aprovechó para beber agua. Es llevado de inmediato a la oficina del Fiscal de Carabineros, para ser interrogado por un joven Oficial, al parecer de grado de Teniente, delgado y de alta estatura, quien le narró su detención en Pitrufrquén, absolutamente distorsionada, imputándole la pertenencia a un grupo armado de un sector rural, lo cual negó. Este señor ordenó su incomunicación y traslado a la cárcel pública de Temuco, hasta que se investigará su situación. Luego de pasar la noche en el calabozo de la Comisaría, junto a otros prisioneros políticos fueron conducidos en una micro hasta la cárcel. Una vez en este recinto carcelario pudo percatarse de la presencia de dos personas conocidas de Pitrufrquén, Lautaro Calfuquir Henríquez, quien también permaneció incomunicado y Juan Martín Negrón Negrón, quien no estuvo en la celda de incomunicación. Indica que su incomunicación se prolongó hasta el día 19 o 20 de ese mes, siendo derivado, posterior a ser entrevistado nuevamente por el Oficial ya aludido, al interior de la Prefectura de Carabineros de Temuco que le levantaban la incomunicación por no existir cargos en su contra, pero de igual manera debía quedar detenido a la espera de una nueva resolución. En esta situación permaneció en la cárcel hasta mediados del mes de noviembre de 1973. Oportunidad que por orden de la Fiscalía de Carabineros se le otorgó la libertad desde la cárcel pública de esa ciudad, quedando sujeto al control de su firma todos los sábados en horas de la mañana en la Comisaría de Carabineros de Pitrufrquén. Anexa que por indicaciones del Ministerio de Educación se le castigó con el traslado a la localidad de Cunco, en tanto su cónyuge fue trasladada al sector Los Laureles. Ante tal situación fijaron domicilio en el sector de Los Laureles, por lo que viajaba generalmente acompañado de su familia a Pitrufrquén para firmar cada sábado antes de las 09:00 horas. Pues bien, siendo el mes de diciembre de 1973 no recuerda fecha exacta y en circunstancias que concurrió a la hora acostumbrada a firmar a la Comisaría de Carabineros de Pitrufrquén sin compañía alguna, ingresó al recinto de guardia y antes de firmar fue el Teniente Carlos Moreno Mena, quien se encontraba a cargo del cuartel, el que dio la orden que lo dejaran detenido y lo pasaran al calabozo con la vista vendada

y las manos amarradas por la espalda con un cordel. En este lugar permaneció todo el día y solo funcionarios de Carabineros le dirigió la palabra, indicándole “esto te pasa por andar medito en leseras”. Ya siendo el atardecer fue sacado del calabozo para hacerlo firmar un libro, que supone debió haber sido el libro de firmas, acto seguido le fue puesta una capucha de saco sobre su cabeza que limitaba aún más su posibilidad de ver, siendo subido a un furgón cerrado en posición de cúbito ventral, pudiéndose percatar que este vehículo era espacioso y bajo en relación al suelo, el que se encontraba con puertas posteriores. De inmediato fue sacado de la Comisaría sin que se le indicara el destino, llegando al cabo de 20 minutos hasta un punto donde se detiene el móvil y los ocupantes sostienen una breve conversación con alguien de afuera, luego avanza el furgón unos metros y vuelve a detenerse siendo en este momento bajado el deponente desde este vehículo, recibiendo la orden de que nunca se diera vuelta, debiendo decir que los funcionarios que lo escoltaban eran dos al parecer. Musita que le fue sacada la capucha, la amarra de sus manos y la venda de su vista, dándose cuenta en ese momento que se encontraba en el furgón emprendió su marcha, quedando el deponente en medio del puente y un funcionario de Carabineros que se encontraba de guardia en uno de los extremos del puente, al cual se acercó para preguntarle cómo salía del lugar hacia Pitrufquén, entregándole en el acto ese funcionario sus pertenencias, que le habían sido retenidas en la Comisaría. Seguidamente, emprendió marcha y al poco andar se topó con un campesino que viajaba en su camioneta hacia Freire, accediendo a llevarlo hacia ese lugar, donde pudo tomar bus hacia Pitrufquén. Inquieta que jamás supo cuál fue el motivo del traslado a ese lugar, pues todo indicaba que sería ejecutado, como tampoco supo si alguien intercedió por su vida.

En declaración judicial de 05 de abril de 2006, **rolante a fs. 296 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.289 (Tomo V).** Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 935 a 937 que le ha sido leída (correspondiente a su declaración anterior de fs. 285 a 287, Tomo I). Respecto del Oficial que lo interrogó en la Fiscalía de Carabineros, si bien la placa que estaba sobre su escritorio tenía impreso el nombre de Arias Gonzalez, le pareció que este Oficial era muy joven para tener tan alto grado, por lo que presumen que era otra persona. Durante su cautiverio en las caballerizas de la Comisaría de Pitrufquén

recibió un par de golpes de puño en la cintura y otros golpes en la cabeza. No puedo ver a sus agresores, porque estuvo todo el tiempo vendado.

En declaración extrajudicial de 16 de marzo de 2017, **rolante de fs. 540 a 541 (Tomo II)**. Presume que en el año 1973 se desempeñaba como profesor en una Escuela Básica de la ciudad de Pitrufrquén, cerca de la plaza de la ciudad. En ese entonces, residía junto a su cónyuge y sus tres hijos en su domicilio ubicado en avenida Vicuña Mackenna de la ciudad de Pitrufrquén. El día 13 de septiembre del año 1973 después de las doce horas aproximadamente fue detenido al interior de su domicilio por personal de Carabineros de Chile, reconociendo a uno de ellos como el Sargento Lukowiak, quien trabajaba en la 5° Comisaría de Pitrufrquén, siendo vendado y atado de manos, posteriormente subido a una camioneta, donde es trasladado hasta dependencias de esa unidad policial. Distingue que al momento de su detención jamás se le dio a conocer el motivo, presumiendo que se trataría por su condición política, toda vez que era militante del Partido Comunista y dirigente comunal de profesores. Glosa que desde su domicilio hasta la 5° Comisaría de Carabineros de la ciudad de Pitrufrquén fue mantenido con la vista vendada, siendo interrogado en algunas ocasiones, a objeto de consultarle si conocía a algunas personas de la ciudad y qué labores realizaban. Escruta que estuvo alrededor de dos días al interior de la Comisaría de Pitrufrquén, donde estuvo vendado y atado de manos, de pie la mayor parte del tiempo, siendo golpeado en reiteradas oportunidades por funcionarios de esa unidad policial. Posteriormente en horas de la noche fue sacado en un camión hasta la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, donde le quitan la venda de los ojos y pudo apreciar que en el sector del gimnasio había varias personas en la misma calidad que él, siendo mantenidos en el suelo de este recinto, boca abajo sin poder levantarse, donde recurrentemente les caminaban funcionarios por encima y les daban golpes de puño, manos y pies. Estimula que durante su permanencia fue interrogado por un Teniente que no recuerda su apellido, solo que era una persona de contextura delgada y alto de estatura, donde no fue golpeado, solo interrogado. Luego fue derivado a la cárcel pública de Temuco en calidad de incomunicado, permaneciendo varios días, sin precisar la cantidad de días exacta, hasta que fue dejado en libertad, regresando a la ciudad de Pitrufrquén y retomando sus labores profesionales en la localidad de Cunco. Evidencia que cuando le dan la libertad lo dejan sometido a un régimen de

firma semanal, debiendo concurrir cada sábado a la Comisaría de Pitrufquén. Posteriormente, no recuerda fecha exacta, concurrió solo a la Comisaría de Pitrufquén a firmar, sin embargo fue sacado del recinto de guardia y conducido a una dependencia donde fue vendado y atado de manos. En esa oportunidad, le ponen en la cabeza un saco, lo suben a un vehículo y lo trasladan a un sector lejano de la ciudad, por lo que pudo percibir. Es así, que lo bajan de un furgón y lo dejan al borde de un puente, le sacan el saco de la cabeza y los funcionarios policiales se alejan, dejándolo solo en ese lugar. Posteriormente reconoció el lugar como camino Freire-Villarrica, específicamente el Puente Allipén, logrando retornar a su domicilio por sus propios medios. Expresa que durante las veces que permaneció detenido dentro de la Comisaría de Pitrufquén, 2° Comisaría de Temuco y cárcel pública de esta ciudad, reconoció como detenido a Oscar Seguel Cofré y a Juan Negrón. Explicita que no conoce ni ha oído nombrar antes a Benedicto Sanhueza Ponce, Raúl Amulef Sandoval; David Pinilla Novoa, Carlos Ramirez Gatica, Juan Saravia Domke, Waldo Pineda Reyes, Gabriel Nesbet Soto, Juan Rioseco Montoya y José Job Jiménez. En relación a la víctima de los hechos investigados, cuya identidad se le da a conocer como Luis Fernández Barrera, exclama que no lo ha oído nombrar antes y no recuerda haberlo visto durante sus detenciones, toda vez que en la fecha en que Luis Fernández Barrera fue detenido, se encontraba recluido en la cárcel pública de Temuco.

A.21 Carlos Gabriel Jaramillo Flores (54 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración extrajudicial** de 08 de noviembre de 2005, **rolante de fs. 339 a 340 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.332 a 1.333 (Tomo V)**. Explana que para el año 1973 tenía 23 años y no poseía militancia política, se desempeñaba como inspector paradocente del liceo fiscal de Pitrufquén, ubicado en calle cinco de abril esquina Gronow de esa comuna, establecimiento en el que también hacía clases el profesor Enrique Tenorio Fuentes, actualmente detenido desaparecido. Es necesario indicar que hasta el día 10 de septiembre de ese año el Capitán Ramón Callis Soto, actualmente fallecido, hacía clases en este liceo en el ramo de economía política y educación cívica. Fue el día 13 de septiembre de ese mismo año en horas de la mañana, cerca de las once horas, mientras que se encontraba junto a una profesora de nombre Llanquirray Troncoso Méndez, en dependencias del hotel De France; recuerda que ella subió a su habitación y el

deponente la esperó en el hall del hotel, en esos instantes llegó una camioneta marcar Chevrolet, color verde botella, cabina simple, modelo C-10, al mando del Suboficial Reinaldo Lukowiak Luppy, quien portaba revolver, el Cabo Domingo Silva Soto, quien conducía; los Carabineros Hernán Mella Lagos y Germán Fernández Torres, quienes portaban fusiles. Ahí Lukowiak les indica que están detenidos y los suben a la parte posterior del vehículo. Son trasladados hasta la 5° Comisaría de Pitrufrquén e ingresaron a la guardia. Oportunidad en que les vendaron la vista y luego los pasaron al segundo piso de las pesebreras, ubicadas en la parte posterior del cuartel. Acá estuvo con otros detenidos entre los cuales recuerda a un joven de nacionalidad Nicaragüense, que estaba de visita en Pitrufrquén y a otras personas, quienes no pudo reconocer, por cuanto se encontraba vendado. Desarrolla que pudo escuchar como golpeaban a los detenidos de su alrededor, incluyéndolo, específicamente patadas en el estómago, no reconociendo a quienes propinaban dichos golpes. En horas de la tarde de ese mismo día fue trasladado junto a un grupo de personas en un camión marca Fiat, color verde con barandas, conducido por un civil de nombre Patricio Vega, hasta las dependencias de la 2° Comisaría de Temuco, lugar donde es interceptado en el segundo piso de este cuartel por el Comandante Enrique Arias González y su secretario, cuyo nombre y grado no recuerda. Luego de esto fue introducido a una sala de tres por tres metros de diámetro, ubicada cerca de la guardia hacia la calle Claro Solar. En dichas dependencias había otras personas de Pitrufrquén, entre quienes recuerda a un joven al parecer de apellido Rojas, quien supuestamente era del Mapu y trabajaba en el SAG o INDAP de Pitrufrquén. Al día siguiente es dejado en libertad, por lo cual regresó a Pitrufrquén, donde nuevamente y en circunstancias que se encontraba en el centro de la ciudad es detenido por Carabineros al mando del Teniente Carlos Moreno Mena, quien se movilizaba al parecer, junto a Mella Lagos y Fernández Torres, es trasladado a la 5° Comisaría, donde se le corta el pelo en el patio del Cuartel y se le informa que debe mantenerse con arresto domiciliario por un periodo de casi un mes. En esta oportunidad pudo observar que al interior de la unidad se encontraban algunos ayudantes civiles de Carabineros, entre los cuales recuerda a Julio y Bernardo Dumont Bornard, Juan Larrondo, hermano de un Oficial de Carabineros, Patricio Vega, entre cuyos nombres no recuerda.

A.22 Rosalía Silva Mardones (24 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 362 a 363 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.353 a 1354 (Tomo V), fs. 423 a 425 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.437 a 1.438 (Tomo V) y de fs. 2.427 a 2.428 (Tomo VIII), fs. 433 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.447 (Tomo V), fs. 1.549 a 1.551 (Tomo V) y a fs. 2.437 (Tomo VIII), fs. 1.112 (Tomo IV), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.564 (Tomo VIII), fs. 1.449 a 1.450 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.439 a 2.440 (Tomo VIII), a fs. 2.441 (Tomo VIII), fs. 951 a 952 (Tomo IV), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.562 a 2.563 (Tomo VIII).

En declaración judicial de 25 de octubre de 1994, **rolante de fs. 362 a 363 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.353 a 1354 (Tomo V)**. Justifica que el día 25 de octubre de 1973 el furgón de Carabineros compuesto por seis funcionarios, fueron a buscar a su marido Luis Anselmo Fernández Barrera, a su domicilio en calle Arturo Prat s/n de Pitrufrquén, quien se encontraba en el patio de la casa junto a los niños pequeños, a saber cuatro y un año ocho meses más o menos de edad, cuando se percató que estaban llorando, salió a mirar y le dijeron que al papá se lo habían llevado los Carabineros y de inmediato fue a la Comisaría, llevándole la chaqueta y el carnet a su marido, les pidió conversar con él, pero se lo negaron diciendo que no se encontraba, pero igual le recibieron la chaqueta y el carnet. Regresó a la casa y nuevamente concurrió en horas de la tarde a la Comisaría, encontrándose allí con el Teniente de apellido Moreno, manifestando que ya era muy tarde para ver a su marido, amenazándola que si regresaba nuevamente la dejaría detenida, por lo que tuvo temor y no fue más. Esa misma tarde Carabineros fue a la casa a allanarla para si había armas, trajinaron toda la casa, pero nada encontraron. La dejaron amenazada que no debería salir a ningún lugar, pero igual salió a diferentes lugares para poderlo ubicar, pero nunca ha vuelto a saber de él. En varias ocasiones se juntó con la señora Orfelina Del Tránsito Vásquez. Habla que conocía a Celso Avendaño Alarcón, quien también fue detenido por Carabineros, el mismo día que detuvieron a su marido y tampoco nunca más se supo de él. Su marido estaba inscrito en el Partido Socialista, ya que cuando se casaron vivían en Toltén y allí él se inscribió. Pero después de unos años se fueron a vivir a Santiago y hacia alrededor de seis meses que había vuelto a Pitrufrquén, cuando los detuvo Carabineros. Indica que no conocía a ningún funcionario de

Carabineros, ya que no hacía mucho que habían llegado a Pitrufrquén. Después supo que las personas las habían tirado al río Toltén, pero ignora si alguno de ellos pudo haber sido su marido, ya que ella en varias ocasiones fue a la isla, pero estaba llena de “milicos” y no les daban la entrada.

En declaración judicial de 11 de noviembre de 2005, **rolante de fs. 423 a 425 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.437 a 1.438 (Tomo V) y de fs. 2.427 a 2.428 (Tomo VIII)**. Invoca que el 25 de octubre de 1973 vivía detrás de la cárcel de Pitrufrquén, en calle Arturo Prat s/n. Alrededor de las 15:00 horas de ese día llegó Carabineros a detener a su esposo Luis Anselmo Fernández Barrera de 33 años, militante Socialista, quien había llegado esa mañana desde Santiago. Esto sucedió mientras él estaba trabajando en la huerta de su casa, en compañía de uno de sus hijos, Luis Rufino Fernández de 4 años. La deponente sintió que su hijo lloraba, por lo que salió al patio para ver qué ocurría, entonces pudo observado cómo su esposo era golpeado por un Carabinero con la culata de su fusil y era subido a un vehículo policial de color blanco con negro y descubierto atrás. También pudo ver que había seis personas detenidas en el interior del móvil, pudiendo reconocer a don Celso Avendaño. Junto con su hijo persiguieron el vehículo por media cuadra, pero lo perdieron. Volvió a su casa para encargar a su hijo a su vecina y cuñada, doña Domínica Aguilera, quien está casada con su hermano Enrique Montenegro Jaque, quienes viven actualmente en San José de la Mariquina y se dirigió a la Comisaría para saber de su esposo. Interpreta que doña Domínica fue testigo ocular de la detención. Cuando llegó a la Comisaría se entrevistó con el Teniente Moreno, quien negó la detención de su esposo. Entonces volvió a su casa a buscar un chaquetón de vastilla de su esposo y su carnet de identidad. Regresó a la Comisaría y volvió a conversar con el Teniente Moreno, quien estaba junto al Suboficial Lukowiak. En esta oportunidad el Teniente Moreno reconoció que su esposo había sido detenido, pero que si quería hablar con él tenía que ir a buscarlo al océano. Ante su insistencia el Oficial llamó a un Carabinero para que la detuviera sino se iba, entonces la deponente le dijo que tenía hijos que cuidar, por lo que decidió marcharse. A partir de ese momento concurrió en varias oportunidades a la Comisaría, entrevistándose con diferentes Carabineros que se encontraban de guardia, sin tener noticias de su marido. Al cabo de diez días, al parecer la primera semana de noviembre de 1973, fue al Juzgado de Letras de Pitrufrquén,

entrevistándose con Luis Dossow, quien la ayudó a dejar una constancia por escrito sobre la detención y desaparición de su esposo. También, en compañía de doña Orfelina Vásquez, esposa de Celso Avendaño fueron a Temuco al Regimiento Tucapel para consultar por sus esposos, pero nada pudieron obtener. Manifiesta que las hijas de doña Orfelina Vásquez pudieran haber sido testigos de la detención de Celso Avendaño. Ellas se llaman Candelaria Álvarez Vásquez y Lucía Álvarez Vásquez, quienes viven en Nigue, comuna de Toltén.

En declaración judicial de 06 de diciembre de 2005, **rolante a fs. 433 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.447 (Tomo V)**. Musita que su esposo estuvo detenido en la cárcel de Pitruftuén antes del 11 de septiembre de 1973. Él estuvo privado de libertad por un periodo de dos años aproximadamente por problemas de dinero que hubo en el asentamiento en donde trabajaba, junto al señor Avendaño, quien también estaba involucrado en estos mismos hechos. Recuerda que esta detención ocurrió en 1971. La libertad de su esposo y de Avendaño ocurrió el 9 de septiembre aproximadamente. Le parece que salió con libertad condicional. Después del 11 de septiembre no volvió a estar detenido en Gendarmería. De esto está segura, porque alcanzó a ir dos veces a Santiago a ver a su familia y a dejar algunos trabajos que hacía para su padre. Además, el 18 de septiembre fueron a las ramadas. Agrega que existe otra persona detenida desaparecida de nombre Ismael Bocaz, quien fue detenida ocho días antes que su marido. Su esposa se fue a Argentina. Narra que uno de los Carabineros con los que conversó en la Comisaría cuando preguntó por su marido, tenía los ojos azules.

En declaración judicial de 24 de agosto de 2017, **rolante de fs. 567 a 569 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.549 a 1.551 (Tomo V) y a fs. 2.437 (Tomo VIII)**. Ostenta que aquel 25 de octubre de 1973 se encontraba en su domicilio ubicado en calle Arturo Prat de la comuna de Pitruftuén, cuando de pronto siente los gritos de su hijo Luis Rufino (que aquel entonces tenía 4 años). Ante aquella situación se asoma por la ventana y ve cuando dos Carabineros detienen a su marido, quienes desde el patio de su casa lo trasladaron hacia el furgón de Carabineros posado a las orillas de la calle, momento en que inmediatamente se dirige al lugar; alcanzando a ver cuando los dos Carabineros estaban subiendo mediante empujones a su marido hacia el interior del furgón policial (un Carabinero estaba abriendo la puerta de la patrulla y el otro ingresándolo bruscamente).

Puntualiza que las características físicas no las recuerda con exactitud, sólo tiene la imagen de que eran personas jóvenes de aproximadamente 38 a 40 años. Precisa que testigo de la detención fue su vecina Dominica Aguilera, quien se encontraba a las afueras de su casa. Fue ella quién le señaló los nombres de los Carabineros que detuvieron a su marido, dado que los conocía muy bien (era nacida y criada en esos lugares). Los nombres que le dijo eran Aroldo Hernández, Castillo y Urrutia. Proclama que tras la detención, se fue desesperada corriendo a la Comisaria. Llevó el carnet de su marido y una manta; allí la recibió un Carabinero de apellido Luckowiak, esta completamente segura que era él, más distinguido de todo el personal y mandaba con mucha autorización (después con el tiempo lo conoció). Sabe que él es alto, blanco y de ojos claros. Cuando le consultó a Luckowiak sobre su esposo, el la manda a preguntarle al oceano. En ese momento no tuvo el valor de seguirle preguntando, porque entendió que su marido ya no se encontraba con vida, nunca más lo vio. Sin embargo, éste Carabinero igualmente le recibió la manta y su carnet. Recalca que en ese momento tenía tres hijos (Luis, Alejandro y Anselmo), todos pequeños de dos, cuatro y siete años. Relata que la señora Domincia Aguilera le señaló que en el interior del furgón policial en que detuvieron a su marido iban otros detenidos, cuyos nombres eran: Ismael Bocaz, Tenorio y Celso Avendaño; ella conocía muy bien a estas personas. A la deponente no le consta que esas personas hubieran ido al interior del furgón policial, porque sólo vio cuando subieron a su esposo, no percatándose si existían personas en su interior. Soflama que la señora Orfelina Vásquez, esposa de don Celso Avendaño, también detenido desaparecido, le dijo que al interior del furgón policial se encontraba Celso, ya que momentos antes Carabineros habían concurrido a su casa a detenerlo, pues fue testigo de su detención. Suma que su hijo Luis Rufino Fernández Silva, fue una de las pocas personas que presenció la detención de su padre. Luis Rufino tenía tan sólo cuatro años de edad y aún tiene el recuerdo cuando corrió tras el furgón policial gritando: “papá, llévame, llévame”. El Tribunal le exhibe la fotografía del Carabinero Luckowiak, la cual rola a fs. 499, lado izquierdo de la página, a lo que depone que efectivamente es Luckowiak, el Carabinero que la atendió en la Comisaria.

En declaración judicial de 06 de agosto de 2014, rolante a fs. 1.112 (Tomo IV), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.564 (Tomo VIII). Ratifica su declaración

extrajudicial rolante de fs. 85 a fs.86 y la prestada ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que rola de fs. 75 a fs. 77 y que le han sido leídas. Rectifica aquella parte en que menciona que una de las personas detenidas que iba en el furgón de Carabineros cuando detuvieron a Luis, era Ismael Bocaz. Urde que quién mandaba el grupo que detuvo a su marido, era el Carabinero Lukowiak. A él lo ubicaba porque su empleada, Dominica Aguilera, lo conocía y le dijo el nombre cuando lo detuvieron y cuando la acompañó a dejarle sus cosas a la Comisaria. Utiliza que cuando detuvieron a Luis, los Carabineros se movilizaban en un furgón de color blanco con negro. Acota que el único de sus hijos que presenció la detención de Luis fue Luis Rufino, quién en esa época tenía alrededor de cuatro años. Este tema es tan sensible para ellos que nunca lo han conversado en profundidad y a pesar de los años todavía les impacta lo sucedido.

En diligencia de careo con Carlos Hernán Moreno Mena, de 06 de diciembre de 2005, **rolante de fs. 1.449 a 1.450 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.439 a 2.440 (Tomo VIII)**. Ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 713 y que se le lee. Aduce que no conocía a ningún Carabinero de Pitrufquén, puesto que estaba recién llegada de Toltén. En la Comisaria le dijeron que la persona con la que se entrevistó era con quien se le carea. La persona que le dijo que buscara a su marido en el océano era alto, moreno y delgado.

En diligencia de careo con Reinaldo Lukowiak Luppy, de 06 de diciembre de 2005, rolante a **fs. 2.441 (Tomo VIII)**. Ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 713 y que se le lee. Advierte que la persona que le dijo que buscara a su marido en el océano era alto, moreno y delgado.

En declaración extrajudicial de 24 de julio de 2013, **rolante de fs. de fs. 951 a 952 (Tomo IV), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.562 a 2.563 (Tomo VIII)**. Adosa que para el año 1973 tenía la edad de 24 años y se encontraba casada con Luis Anselmo desde el año 1966. Vivían en un inmueble ubicado detrás de la cárcel de Pitrufquén, no recordando el nombre de la calle. Afirma que junto a Luis tenía tres hijos menores de edad de nombres Anselmo Ascanio, Luis Rufino y Víctor Alejandro. Respecto a las actividades de su marido, era artesano y estudiaba construcción civil en la Universidad de Chile en Santiago, recordando que viajaba esporádicamente para Temuco. Sobre su militancia política, Luis era militante del Partido Socialista, pero no tenía cargo alguno, eso sí fue presidente de unas tomas

de terrenos en la comuna de Toltén. Respecto a los hechos que rodearon su detención, ésta se gestó el día 25 de octubre de 1973 a las 15:00 horas, en circunstancias que él se encontraba en su domicilio junto a ella y sus pequeños hijos. En esa oportunidad, llegó un vehículo de Carabineros de Pitruftuquén, el cual se estacionó frente a su hogar, en dicho móvil andaban 4 Carabineros, logrando ubicar a los Carabineros Hernández, Castillo y Lukowiak, quien iba al mando del carro policial. Según su recuerdo, los Carabineros hablaron con su marido, quien se encontraba en el patio y tras una breve conversación lo suben violentamente al vehículo, incluso pudo ver que al interior del furgón le pegaron un culatazo en sus caderas, cayendo de rodillas en la carrocería de este. Posteriormente, se retiraron del lugar con rumbo desconocido. Esa fue la última vez que vio a su marido. Al cabo de unos minutos, y suponiendo que se lo habían llevado a la 5ta. Comisaria de Pitruftuquén concurrió por sus medios a dicho lugar llevando una manta de castilla negra y su carnet de identidad. Al llegar a la unidad policial, la atendió el Teniente Lukowiak, quien tras consultarle por su marido le respondió que debía retirarse del lugar o si no le podría pasar algo, además le dijo que buscara a su marido en el océano. Hace presente, que antes que le dijera esas frases tan irónicas le había hecho entrega del carnet de su marido, incluso recibieron la manta que le llevaba. Posteriormente, fue muchas veces a preguntar por Luis a la Comisaria, pero nunca le dieron respuesta, incluso recuerda que un par de veces Carabineros de Pitruftuquén fue a allanar su domicilio. Anima que la señora Dominica Aguilera Caamaño, fue testigo de la detención de su marido, esta señora vive en la comuna de San José de La Mariquina. Añade que el día en que se detuvo a su marido iban en el furgón de Carabineros otros detenidos, recordando que iba Ismael Bocaz, un profesor de apellido Tenorio y don Celso Avendaño, todos ellos desaparecidos en la actualidad al igual que su esposo. Apunta que por comentarios de algunas personas se enteró que algunos de los cuerpos posiblemente estén sepultados en una fosa donde hoy están construidas unas caballerizas al interior de la 5ta. Comisaria de Carabineros de Pitruftuquén. Este comentario se lo habría hecho a su hijo Luis, un ex funcionario de Gendarmería, cuyo apellido es Madariaga, quien actualmente reside en Pitruftuquén, en calle Vicuña Mackenna con Barros Arana. Nunca supo el destino final de su marido, incluso lo buscó en distintos lugares del país sin obtener hasta esta fecha algún resultado.

A.23 Orfelina Del Tránsito Vásquez (50 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 61 a 62 (Tomo I), fs. 388 a 389 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra 1.379 a 1.380 (Tomo V) y de fs. 2.360 a 2.361 (Tomo VIII) y de fs. 390 (Tomo II).

En declaración extrajudicial prestada ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 29 de agosto de 1990, **rolante de fs. 61 a 62 (Tomo I)**. Delibera que Celso trabajaba como mueblista desde los quince años. Vivía en Pitrufrquén con la declarante desde el año 1970. Participaba en actividades de la gente de izquierda, era dirigente (presidente) del asentamiento Los Boldos, en Toltén. No tenía cargo de partido. Le parece que era radical. Dice que vivían en Pitrufrquén, en el mismo pueblo se dedicaba a la mueblería. Los Carabineros amigos de Celso le decían que lo iban a detener, dándole tiempo para que hiciera y terminara los muebles para el magistrado de Pitrufrquén y otras personas del Tribunal. Difunde que el día 21 de octubre lo detuvieron en el pueblo mismo, después de haber preguntado por él en la casa y no encontrarlo. En el momento en que lo detuvieron estaba con el Alcaide y un yerno. Le fue a avisar a la deponente a su casa el Sargento Castillo, quien al parecer fue dado de baja, diciéndole que lo habían tomado para que declarara. Pidió autorización para ir a dejarle alimentos y negaron el permiso. Al día siguiente concurrió a la Comisaría y le dijeron que lo habían trasladado a Temuco, donde también hizo averiguaciones sin poder hallarlo. El mismo día también detuvieron a don Luis Fernández de su misma casa, él había sido secretario del asentamiento. Tampoco se ha sabido más de él. Preguntó en la cárcel y en Investigaciones sin poder averiguar nada. En la Comisaria hubo otros seis detenidos sin que se haya sabido más de ellos. Uno es Bocaz, quien era vecino suyo. Meses después se encontró en Toltén con un Carabinero de nombre Juan y le dijo que ellos sabían que había pasado con Celso. Dijo que a su marido lo habían matado el 24 en la noche junto a ocho personas más. Todo esto en la cocina de una pensión de Toltén. Que los habían matado en el mismo Pitrufrquén y que los habían enterrado en una fosa que les hicieron cavar a ellos mismos. En el río que pasa por Toltén, el Cautín, se veían cadáveres, pero no era Celso. Dijo que fueron los Militares quienes los habían matado y no Carabineros. Cimentó que en esos lugares se veían muchos Militares que venían de diversos lugares. Cuenta que ella siguió trabajando en sacar papas en Pitrufrquén. Tuvo que ir a Toltén a buscar papas

y cuando volvió le habían robado todos los artefactos de su casa. Delibera que le había dejado encargada su casa a un Carabineros, Eduardo Orellana. Pero se descubrió que personas del mismo Pitrufrquén le habían robado, los Millarán y uno Molina. Eran conocidos y amigos de su marido. Divulga que se tuvo que ir del pueblo. Se fue a Queule, de ahí a Toltén y entonces Hualpin, donde vive actualmente. Nunca había denunciado el caso ante alguna organización.

En declaración judicial de 25 de octubre de 1994, **rolante de fs. 388 a 389 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra 1.379 a 1.380 (Tomo V) y de fs. 2.360 a 2.361 (Tomo VIII).** Desarrolla que era conviviente de Celso Avendaño y vivían en Pitrufrquén en calle General Mackenna. El día 21 de octubre de 1973 los Carabineros andaban preguntando por su conviviente, solo recuerda a un Carabinero de apellido Castillo, que ahora está retirado y vive en Pitrufrquén. Ella les dijo que él estaba haciendo un trabajo en la casa del Alcaide de la cárcel que vivía en el alto; esto fue como a las doce del día y posteriormente como a las 18:00 horas los mismos Carabineros que antes mencionó le fueron a avisar que Celso estaba detenido en la Comisaría. Les preguntó si podía ir a dejarle frazadas o algo de comida, pero ellos respondieron que su Capitán no permitía que siquiera le dieran un vaso de agua. Al otro día como a las siete de la mañana fue a la Comisaría a preguntar por él, la acompañó la señora Rosalía Silva, porque al marido de ella lo tomaron detenido el mismo día como a las 15:15 horas, allí les dijeron los Carabineros que se los habían llevado a todos para Temuco a las 18:00 horas. El día 25 de octubre de 1973 fue a Temuco, a la cárcel a preguntar por Celso, pero le dijeron que no estaba ahí y que no habían llevado a la cárcel a nadie de ese nombre, después fue a Investigaciones de Temuco, pero tampoco estaba allí. Posteriormente un cuñado suyo anduvo buscando a Celso en Concepción y Valdivia, pero no lo pudieron encontrar por ningún lado. Estuvo más de un mes buscándolo e incluso cuando alguien dijo que lo habían visto en el río tuvo ganas de ir, pero después no lo hizo porque pensó que podían matarla también y sus hijos iban a quedar completamente huérfanos. Además, de Carabineros había también otros uniformados, le parece que Militares. Ignora si Celso estaba inscrito en algún partido de izquierda. Destaca que una persona muy cercana a ellos, cuyo nombre debe reservarse, le dijo que el día 25 de octubre de 1973 habían dado muerte a Celso y a otros siete, entre ellos Luis Hernández e Ismael Bocaz y los habían enterrado en una fosa que hicieron en la

isla de la ciudad de Pitrufrquén. Recuerda que en esa época no dejaban entrar a nadie a la isla, ni siquiera en el verano, esto fue un buen tiempo así. Es todo cuanto puede decir, ya que debido a una enfermedad que tuvo, la memoria se le va un poco, pero lo que dijo es lo que recuerda muy bien.

En declaración judicial de 15 de diciembre de 1994, **rolante de fs. 390 (Tomo II)**. Detalla que convivió 12 años con Celso Avendaño Alarcón, con quien tuvo dos hijos. El día 21 de octubre de 1973 su conviviente fue detenido en la ciudad de Pitrufrquén a las 5 de la tarde, en calle Bilbao. Él iba en compañía del Sr. Alcaide y del yerno de la deponente, Mauricio Molina. Estas personas le fueron a avisar y le informaron que uno de los Carabineros aprehensores era de apellido Castillo. Luego Carabineros concurre a su domicilio para informarle que habían detenido a su conviviente, le preguntó si esa tarde podía llevarle comida y una frazada, pero le respondieron que por orden del Capitán no podían recibir ninguna cosa. Al día siguiente fue a verlo, le manifestaron que ya no estaba ahí, que se lo habían llevado a Temuco. después hizo averiguaciones en Carabineros y la cárcel de Temuco, pero nunca más supo nada de él. Después de siete meses un Carabinero de apellido Caamaño le manifestó que a su conviviente lo habían muerto al quinto día en la ciudad de Pitrufrquén, pero que nunca le dijera a nadie lo que él le informó. La deponente nunca lo había dicho en sus declaraciones anteriores, porque le tiene miedo a Caamaño. Después de esta información no lo buscó más. Hace presente que en el año 73 vivían en Pitrufrquén, en calle Vicuña Mackenna, cerca de la Escuela N°1, pero hace diez años que vive en Hualpín.

A.24 Juan Nolberto Caamaño Toledo (33 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de 20 de diciembre de 1994, **rolante de fs. 392 a fs. 393 (Tomo II)**. Ensaya que ingresó a la institución en el año 1962. Esgrime que en aquella fecha se encontraban a cargo del funcionario de Carabinero, Sargento Primero Haroldo Hernández (actualmente fallecido) y le correspondió detener a varias personas por asuntos políticos, al que más recuerda es a don Máximo Uribe Beltrán, a quien le pidieron los documentos y fue puesto a disposición de la Comisaría de Pitrufrquén, esta persona era subdelegado, es el único que se le viene a la mente y las demás personas que detuvieron las enviaron a la Quinta Comisaría de Pitrufrquén. Esa es la única persona que recuerda. Espeta que conoció a Celso Avendaño Alarcón, ya que era un albañil. También llegó detenido a la

Tenencia de Toltén y fue remitido a la ciudad de Pitrufquén a la Quinta Comisaría y nunca más supo qué pasó con él. Recuerda que él convivía al parecer, con una señora que no recuerda su identidad, pero nunca nadie preguntó por la suerte de esta persona. Además, jamás ha dicho que le hayan dado muerte, porque por lo menos allí los trasladaron todo a la Comisaría. Con respecto a las personas que se le interroga, escruta que conoció a Gastón Lobos, ya que fue vecino suyo, no sabe realmente qué pasó con él. A Enrique Tenorio también lo conoció como profesor.

A.25 Candelaria Del Transito Álvarez Vásquez (16 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **Declaración judicial** del 01 de diciembre de 2005 **de fs. 426 a fs. 427 (tomo II); copia de fs. 1.440 a fs. 1.441 (tomo V) y de fs. 2430 a fs. 2431 (tomo VIII)**. Respecto a la detención de su padrastro, Celso Avendaño Alarcón, en el mes de septiembre u octubre de 1973, pasado medio día llegó hasta su domicilio ubicado en la ciudad de Pitrufquén una patrulla de Carabineros buscando a su padre. Aduce que en ese momento se encontraba con su madre Orfelina Vásquez y sus hermanastros Humberto Exequiel Avendaño Vásquez y Celso Avendaño Vásquez, estos dos Carabineros eran de la Comisaria de Pitrufquén, llegaron a pie. Adosa que no los conocía, pero según le dijo su madre años más tarde, uno de ellos era el carabinero Orellana. Su cuñado Baudilio Molina actualmente fallecido, se encontraba jugando al tejo con su padrastro en un restaurante al momento en que este fue detenido y le dijo que uno de los carabineros que lo detuvieron era de apellido Catalán. Adosa que su cuñado concurrió a su casa a comunicar que su padrastro había sido detenido. Entonces junto a su madre fueron a la Comisaria a preguntar por él. Agrega que los atendieron afuera y a su madre le dijeron que no le podían dar ninguna información y que se fuera a su casa. Asegura que es misma tarde volvieron en tres o cuatro oportunidades llevando incluso una frazada para su padrastro, pero no la quisieron recibir. Basa que un carabinero conversó con su madre y le dijo que estuviera tranquila, pues iban a soltar a su esposo y que no iba a pasar nada. A los días después, llegó hasta su domicilio el carabinero Orellana, quien era amigo de su padrastro y muchas veces había compartido con ellos en asados en su casa. Comenta que este carabinero le dijo a su madre que no buscara más a su padrastro, porque a las cuatro de la madrugada del día siguiente de su detención le habían dado muerte al interior de la Comisaría enterrándolo en la Isla. Descarga que, sin embargo, no le dijo en qué

parte había sido inhumado. Destaca que su hermano Humberto falleció y Celso vive en Hualpin en una población cercana al Reten de carabineros. Desarrolla que quien pudiera aportar mayores antecedentes a la investigación su hermana Bernarda Álvarez Vásquez, quien era la esposa de Baudilio Molina. Ella vive en Hualpín, pero actualmente está hospitalizada en Santiago.

A.26 Hernando Atilio Madariaga Fernández (33 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 430 a fs. 432, (tomo II), copias de fs. 1444 a fs. 1446 (tomo V) y fs. 2434 a fs. 2436 (tomo VIII) y de fs. 1015 a fs. 1016 (tomo IV).

Declaración judicial del 06 de diciembre de 2005 de fs. 430 a fs. 432 (tomo II), copia de fs. 1.444 a fs. 1.446 (tomo V) y de fs. 2434 a fs. 2436 (tomo VIII). Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Luego del 11 de septiembre de 1973 llegó al penal el Capitán Callis a dar órdenes. Este oficial los trato muy mal. En repetidas ocasiones se presentó en la cárcel junto a Catalán, Silva, Lukowiak y Fernández. Suma que al Teniente Moreno nunca lo vio en la cárcel. Que respecto de los señores Fernández y Avendaño en el periodo septiembre-octubre, no recuerda fecha exacta, carabineros los trasladó a la cárcel en calidad de detenidos. Descarga que luego de un tiempo, alrededor de un mes, llegó una orden emanada de algún tribunal en que se les daba la libertad. Se comentó que esta era una libertad falsa por lo que a Fernández le dijo que se fuera a Santiago donde sus familiares para que nada le ocurriera. Expresa que, sin embargo, él continuó viviendo en su casa que estaba al lado de la cárcel. Supo que Fernández y Avendaño habían sido nuevamente detenidos por Carabineros y no se les volvió a ver. Explicita que, según comentarios de pescadores de la comuna, cierto día lunes unas personas encontraron los cuerpos de Fernández y Avendaño flotando en el sector de la Puntilla. Indica que estos tenían sus manos amarradas con alambre de púas. Se dio cuenta de este hecho a Carabineros quienes se constituyeron en el lugar y procedieron a empujar los cuerpos hacia la corriente del río. Acota que en el mes de octubre de 1973 solicitó su baja del servicio. Entonces el Capitán Callis le llamo a él y a su jefe a conversar a la Comisaría. Apunta que en ese lugar vio llegar camiones llenos de personas detenidas que traían su vista vendada. Advierte que estos vehículos eran de particulares. Soslaya que en dicho lugar Callis le preguntó en reiteradas oportunidades el motivo de su solicitud amenazándole con darle

muerte. Añade que hubo muchos civiles que se paseaban con pistolas y en sus propios vehículos que ayudaron a carabineros a detener personas. Asevera que entre ellos recuerda a Juan Vásquez, René Chesta, Miguel Monge, Renato Cicarelli, Lovengren y Martinovic. Todas estas personas se reunían en la casa de Hernán Cortes. Atestigua que rememora que el padre y unas hermanas de Fernández fueron a visitarlos mientras estuvo en la cárcel. Agrega que Avendaño fue visitado por sus familiares. Atestigua que, respecto del agente del Banco del Estado, Burgos Lavoz. Dice que un caballero de apellido Reyes, lanchero en el sector de Barros Arana, en cierta ocasión le comentó que vio su cadáver varado en la orilla del río. Decanta que el cuerpo presentaba tres impactos de bala en la cabeza y estaba rajado desde el cuello hasta el estómago. Destaca que sus manos estaban amarradas con alambres de púas. Dijo que intentó enterrar el cuerpo, pero no pudo entonces, lo dejó que se fuera río abajo. Distingue que esta persona conocía muy bien al señor Burgos, por lo que no le cabe duda sobre la veracidad de su versión. Musita como funcionarios de Gendarmería de Temuco a un tal Rodríguez, Henríquez, Juan Fernández y su hermano Héctor Madariaga Fernández, quien vive en el sector Huichahue, cerca de la faja 26.000.

Declaración extrajudicial del 04 de octubre de 2013 **de fs. 1015 a fs. 1016 (tomo IV)**. Suma que en el año 1973 trabajaba como vigilante en la cárcel pública de Pitrufquén. El alcaide era don José Valenzuela Gómez, actualmente fallecido y como segundo en el mando don Aquiles Matus Montenegro. Soflama que ubicaba a Luis Fernández Barrera, trabajaba como artesano en la calle Francisco Bilbao de Pitrufquén. Adopta que una vez ocurrido el golpe militar, el día 11 de septiembre de 1973 llegó al recinto carcelario el Teniente de Carabineros Francisco Callis junto a otros funcionarios, como Lukowiak, Silva, Catalán y otros que no recuerda, quien comenzó a dar instrucciones, ya que él quedaba al mando de la cárcel. A contar de esa fecha no llegaron más detenidos por temas políticos a la cárcel, salvo el caso de Luis Fernández y don Celso Avendaño, quienes fueron detenidos por Carabineros de Pitrufquén y entregados a la cárcel de la misma ciudad. No rememora si fueron ingresados en los libros respectivos ya que al parecer se encontraban en tránsito, porque ninguno de ellos había cometido delito. Añade que Fernández y Avendaño permanecieron alrededor de un mes privado de libertad siendo ambos retirados por Carabineros ya que se les iba a otorgar la libertad,

instancia donde pudo aconsejar en más de una oportunidad. Una vez estando libre, se fueron de Pitruquén ya que se habían recibido comentarios que los iban a detener nuevamente y hacer desaparecer, explicándole que su libertad se trataría de una falsedad. Atestigua que a los días posteriores de que Fernández y Avendaño salieron en libertad, personas que practicaban la pesca en el sector “la puntilla” del río Toltén, encontraron los cuerpos de estas dos personas, las cuales se encontraban fallecidas y con sus manos amarradas con alambre de púa. Desconoce que personas encontraron los cuerpos, pero estos dieron cuenta a carabineros y concurren al lugar donde procedieron a empujar los cuerpos al río para que se los llevara la corriente. Destaca que la identidad de los carabineros que participaron en este hecho las ignora. Por comentarios se enteró que una vecina de la Comisaría de Carabineros ignora identidad, había escuchado en reiteradas ocasiones disparos en la noche en la unidad, por lo que presumió que habían fusilado personas y estas habían sido enterrados en el lugar, posiblemente en el sector de las caballerizas.

A.27. Luz Edelmira Álvarez Vásquez (13 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** del 07 de diciembre de 2005 rolante de **fs. 441 (Tomo II) copia a fs. 1455 (Tomo V) y de fs. 2445 (Tomo VIII)**. Espeta que, de la detención de su padrastro, Celso Avendaño no puede aportar mucho, porque se encontraba en Toltén en casa de su tía al momento de su detención. Además, en esa época tenía 15 años. Al regresar a Pitruquén se enteró de lo ocurrido por boca de su madre, recordando que la detención fue practicada por Carabineros que eran amigos de su padre. Aporta el número telefónico de su hermano Celso Avendaño Vásquez.

A.28 Eduardo Enrique Avendaño Stancovich (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **Declaración judicial** del 18 de octubre de 2017, de **fs. 572 a fs. 574 (Tomo II)**. Cuenta que es hijo de Celso Avendaño Alarcón, quien desde el año 1973 se encuentra desaparecido. Indica que él tenía 19 años, no vivía con su padre, sino con su abuela Isabel Rodríguez Meriño, fallecida. En ese tiempo cuando llevan a su padre a la cárcel, estaba en la comuna de Toltén, era carpintero y dirigente del asentamiento “Los Boldos” o algo así. Funda que la última vez que vio a su padre fue a principios del año 1974, cuando estaba recluido en la cárcel de Pitruquén, desde una fecha posterior al 11 de septiembre. Reitera que la última vez fue en el centro penitenciario de Pitruquén en horario de visita. Al llegar, ingresó y

le dicen que espere, pudiendo divisarlo en el tercer portón que estaba a diez metros de distancia, y él lo miró y lo agarró a través de los barrotes. Hiso un gesto con las manos como pidiendo disculpas. Seguidamente él se agarra de los barrotes y con gestos le indicó que su abuela iba a llevarlo fuera de Chile y después se juntarían. Espeta que su padre fue detenido en dos oportunidades, la primera antes del 11 de septiembre, ingresando a la cárcel de Pitrufquén. La segunda detención ocurrió después de esa fecha. Hubo un periodo que pasó en libertad. Los hechos a los que hace referencia corresponden a la segunda detención de la cárcel de Pitrufquén. Su abuela materna, Isabel, hizo averiguaciones sobre su padre, informándole que continuaba recluido en la cárcel, pero no dejaban verlo. En una ocasión su abuela le conto que se lo habían llevado de la cárcel y desconocía su paradero. Años después supo que al parecer personal del Regimiento Tucapel se lo habían llevado desde la cárcel. Ese dato sobre el traslado al regimiento Tucapel se lo comentaron, pero no recuerda quien se lo dijo. El tribunal lee la declaración de fs. 426 y siguientes. Depone que recuerda haber visto por última vez a su padre en la cárcel de Pitrufquén, esto es a principios del año 1974. La segunda vez que ingresó a ese penal. Del carabinero Orellana proclama que era amigo de su padre, pero ignora detalles aportados por Candelaria Álvarez. De la muerte de su padre musita que escuchó rumores que había sido enterrado en una isla, a saber, isla cautín, siendo llevado a ese lugar y enterrado junto a cinco personas de Pitrufquén. Insiste que son rumores. Delibera que debe haber sido en el año 1986, estaba casado y con dos hijos, cuando se volvió a Chile y fue a la guardia del Regimiento Tucapel para indagar sobre su padre. Ahí un teniente o capitán lo hizo ingresar al interior del regimiento, y le dijo que tal vez en unos años más sepa que fue lo que le pasó a su padre. Anexa que ese oficial le informó que su padre fue trasladado de otro lugar y se había enterado de muchos problemas de personas que estuvieron ahí, y debió poner la cara por los jefes. Esa persona no le dio su nombre. En la cárcel de Pitrufquén su abuela hizo varias gestiones, junto a su madre, empero atendido el temor reinante de lo que les pudiera suceder no hicieron mayores indagaciones. Ensaya que Orfelina Vásquez, era pareja de su padre y vivía junto a ella al momento de la detención. De dicha relación nacieron dos hijos a saber, Celso y Exequiel. Celso le comentó que lo trataron muy mal cuando intentó averiguar de su padre. Los malos tratos provenían de Carabineros, y fueron insultos, groserías, etc. Suma

que la gestión fue ir a hablar con su cuñado René Garcés Garcés, medio hermano de su cónyuge. Así a fines de la década del 80 le pidió ayuda para saber el paradero de su padre. Su cuñado en esa época se desempeñaba en Loncoche en Carabineros, le dijo muy amablemente que trataría de indagar con sus jefes, en caso de que la institución manejara alguna información. Al tiempo después le manifestó que no pudo averiguar porque su jefatura le ordenó no hacerlo. Acompaña una fotografía de su padre de la época.

A.29. Jorge Orlando Henríquez Muñoz (23 años para el año de los hechos investigados), quien declaró de fs. 751 a 751 vta. (Tomo III), fs. 848 a fs. 849 (Tomo III), fs. 1411 a fs. 1412 (Tomo V) con copia de fs. 2403 a fs. 2404 y a fs. 2539 (Tomo VIII).

En declaración extrajudicial de fecha 20 de octubre de 2021 **de fs. 751 a fs. 751 vta. (Tomo III)**. Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. El día 10 de septiembre lo trasladaron hasta la Comisaría de Pitrufquén, ostentando el grado de Carabinero, por lo que el pronunciamiento militar lo pasó en dicha Comisaría, estando aproximadamente 4 años en ese lugar. En el año 1973 estaba a cargo de la Comisaría el Capitán Sergio Ramón Callis (+), también se desempeñaban en esa Comisaría el Capitán Carlos Mena Peña, el Suboficial Ludovico Lupis, el Sargento 1° Hugo Catalán Lagos (+), Sargento Reinaldo Hernández Reyes (+), Cabo 1° Amulef, Carabinero López, Carabinero Reyes, Sargento 1° Aroldo Hernán Reyes, el Sargento Muñoz Rhode y el Sargento 1° Octavio Castillo, siendo los únicos que recuerda. Dentro de las funciones que le tocó desempeñar en la Comisaría de Pitrufquén fue realizar punto fijo en la Comisaría, y en ocasiones salían a hacer recorrido en la población; hace presente que casi siempre estaba acompañando al Sargento 1° Emilio Caro Pérez (+), con quien siempre realizaba patrullajes en la población. Nunca practicó alguna detención, ya que no tenía autorización para participar en dichos operativos, y esas eran realizadas por los más antiguos de la unidad. Deja constancia que desconoce a Celso Avendaño Alarcón y no recuerda haber escuchado algo sobre él. Si conoce a don Juan Alfonso Prado Ponce, ya que trabajó con él en la Tenencia de Toltén antes del pronunciamiento militar, haciendo servicios de población, guardias y de cuarteleros. De esa misma forma conoció a Luis Arnoldo Becerra Jaramillo, quién también se desempeñaba en

dicha Tenencia, sin embargo, trabajó muy poco con él. Agrega que cuando se desempeñaba en la 5ª Comisaría de Pitrufquén nunca se topó con Prado Ponce, como tampoco con Becerra Jaramillo, ni menos vio que llegaran con algún detenido a dicho cuartel policial. Nunca escuchó o vio algún detenido político, ya que todo lo que ocurría en la Comisaría era muy reservado, sin embargo, había un grupo que realizaba las detenciones judiciales, el cual estaba compuesto por los Suboficiales Hernández, Amulef, Catalán, siendo los únicos que recuerda.

En declaración judicial de fecha 24 de mayo de 2023, **de fs. 848 a fs. 849 (Tomo III)**. Ratifica su declaración de fs. 751 a fs. 751 vta. Añade que ingresó el 1 de diciembre de 1971 con el grado de carabinero. Salió del curso y fue trasladado a la 5ª Comisaría con el grado de Carabinero. A cargo de la Comisaría estaba el Capitán Sergio Callis Soto, y recuerda al Sargento 1º Hernández, Catalán, Teniente Peña, Emilio Caro Pérez, Sargento 1º, a él lo agregaron para que lo acompañara. La mayoría de las veces hacía dupla con él y punto fijo en la Comisaría. Sobre la relación entre el Capitán Ramón Callis y Carlos Moreno Mena, relata que se llevaban bien como uniformados, él no se metía, no tenían contacto con ellos después del curso. Era soltero en la época de los hechos, tenía 22 años. Había una comisión civil o grupo específico dedicado a las detenciones por motivos políticos. Callis daba las órdenes. Carlos Mena Peña y Lukowiak eran parte de la comisión junto con Catalán y Amulef. Era un grupo como de 6 personas aproximado. Los detenidos eran llevados al patio, a las caballerizas. Ellos no tenían acceso a eso, su estructura era un galpón grande, en el segundo piso guardaban el forraje y el primer piso las caballerizas, que todavía siguen ahí. Señala que no le tocó recepcionar una denuncia o pregunta de familiares por detenidos; la gente le pedía hablar con su jefe y las derivaba a las personas que llegaban. Consultado sobre si se hacían detenciones conjuntas con funcionarios del Retén Toltén, revela que después que se fue de Toltén no tuvo contacto con ellos, estaba acuartelado, no vio nadie en la Comisaría. Sus funciones a la época de los hechos eran patrullaje y acompañante de Emilio Caro Pérez. Añade que nunca le dieron la misión de realizar detenciones a personas por motivos políticos. Respecto de la víctima de autos Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera de la causa N° 29.880 e Ismael Bocaz de la causa rol N° 29.882, quienes fueron detenidos por

funcionarios de la 5ª Comisaría de Pitrufquén en el mes de octubre de 1973, donde habrían sido llevados a la Comisaría y después de eso se les pierde el rastro hasta el día de hoy, señala que no le suenan sus nombres, porque no conocía a nadie cuando llegó a Pitrufquén. Añade que con Callis y Moreno Mena no tenía contacto, no le dirigían el saludo. Después que se fue el Capitán Callis, no recuerda que Capitán quedó a cargo. Prado Ponce trabajaba en Toltén, era cabo 1º, sus funciones eran de población y guardiero; no sabe si realizó detenciones por motivos políticos, ya que no estaba en Toltén. Respecto de apremios de Moisés Norambuena y otros de la causa 29.886, no tiene conocimiento de los hechos y de las personas señaladas; solo a Pablo Curivil, que trabajó en la Comisaría, era Sargento 1º, le parece; a Patricio Burgueño solo lo conoce de nombre, no trabajó con él.

En declaraciones extrajudiciales de fecha 04 de mayo de 2016, **de fs. 1411 a fs. 1412 (Tomo V) y de fs. 2403 a fs. 2404 (Tomo VIII)**. Invoca que para el año 1973 era parte de la dotación de la Tenencia Toltén, dependiente de la 5ª Comisaría de Pitrufquén, la cual estaba al mando del Capitán Ramón Callis Soto. La Tenencia Toltén estaba a cargo del Sargento 1º Haroldo Hernández Reyes. Añade que fue el día 10 de septiembre de 1973, en que se le dio la orden de agregarse a la 5ª Comisaría de Carabineros de Pitrufquén junto a los Carabineros Jorge Saldías Goyeneche, Barrales y López, quedando bajo las órdenes del Capitán Callis, quedando acuartelados por un periodo de tres meses, aproximadamente. Conforme a su recuerdo, el día 11 de septiembre de 1973, se reforzó la Comisión Civil de la Unidad Policial, quedando a cargo del Suboficial Reinaldo Lukowiak Luppy, y los funcionarios Hugo Catalán Lagos, Carlos Ramírez Peña, Silva Soto (+) y Raúl Amulef, escuchando a menudo el comentario que llevaban detenidos por temas políticos a la Unidad Policial. Por los antecedentes que maneja, ellos se movilizaban en vehículos particulares, los cuales probablemente fueron confiscados a otras instituciones del Gobierno. En lo que respecta a sus labores, debido a su poco tiempo en la institución, se le encomendaban actividades como las de vigilante exterior, patrullajes en la población, que siempre cumplió bajo las órdenes del Sargento 1º Emilio Caro Pérez, además de custodia de detenidos por delitos comunes. Es efectivo que los detenidos por temas políticos estaban a cargo de la Comisión Civil, los cuales

ingresaban por una puerta falsa ubicada a un costado de la Comisaría, que da con la intersección de las calles 21 de Mayo con Santa María, quedando ellos mismo a cargo de la custodia de ese tipo de detenidos, los cuales al interior de la Unidad eran dispuestos en el Sector de las Pesebreras. Respecto al interrogatorio de esos detenidos, señala que nunca tuvo participación alguna en ese tipo de actividades, teniendo la impresión de que el personal de la Comisión Civil eran los encargados de esas labores, no descartando que el Capitán Callis, haya sido parte de esa labor. A lo anterior, agrega que nunca vio a otro personal teniendo participación en las labores de la Comisión Civil, ya que era el grupo de confianza del Jefe de Unidad. En relación a la presencia de efectivos militares del Regimiento Tucapel de Temuco, señala que es efectivo que llegaban a la Comisaría, por lo menos una vez a la semana, ignorando si iban a interrogar o a trasladar detenidos a Temuco, en lo personal nunca supo las identidades de los funcionarios militares que llegaron en esas oportunidades. Manifiesta que nunca vio cuerpos de personas fallecidas flotando en el Río Toltén, no obstante se enteró por comentarios que en una oportunidad el Sargento 1° Nadir Guzmán Pincheira (+), quien para ese entonces estaba a cargo del Retén Comuy, vio un cuerpo flotando a la altura de la Faja Maisa, el cual por no verse involucrado en problemas prefirió dejarlo en el río. A lo anterior, agrega que nunca se enteró de una situación de esa naturaleza en las cercanías de Pitrufrquén, ya que ese río cruza esa ciudad, sin embargo, hubo dos Carabineros que cumplían funciones en el sector del Río, custodiando la Población de Carabineros, ellos eran los Carabineros Juan Asenjo (+) y Villagrán, tal vez ellos podrían manejar algún antecedente al respecto. Manifiesta que no está en su conocimiento que para esa época haya llegado a esta zona un helicóptero de la Fuerza Aérea, en el cual se interrogara a funcionarios de Carabineros en su tripulación para recorrer la zona en búsqueda de personas opositoras al Régimen Militar. En relación a la víctima de los hechos investigados, cuya identidad se le da a conocer en este acto como Luis Fernández Barrera, quien fue detenido el 25 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros de la ciudad de Pitrufrquén, indica que no lo conoce ni lo oyó nombrar antes, desconociendo todo antecedente al respecto.

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 2017 **de fs. 2539 (Tomo VIII)**. Se refiere en términos similares a los expuestos.

A.30. Plácido Del Carmen Carrillo Hermosilla (24 años de edad para la fecha de los hechos investigados), quien declaró a fs. 1025 a fs. 1027 (Tomo IV) con copia de fs. 2025 a fs. 2027 (Tomo VII) y de fs. 2115 a fs. 2117 (Tomo VII) y a fs. 1128 a fs. 1129 (Tomo IV) con copia de fs. 2118 a fs. 2120 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial de fecha 16 de octubre de 2013, **de fs. 1025 a fs. 1027 (Tomo IV), de fs. 2025 a fs. 2027, de fs. 2115 a fs. 2117 (Tomo VII)**. Hace una breve reseña de su carrera funcionaria, en lo pertinente desde el año 1971 al 11 de septiembre de 1973, cumplió funciones en los retenes de Toltén, Queule y Lastarria. Posteriormente, el mismo día 11 de septiembre fue agregado a la 5ª Comisaría de Carabineros de Pitrufuquén, donde cumplió funciones hasta el mes de octubre de 1973, debido a que fue trasladado a la 2ª Comisaría de Carabineros de Puente Alto. Hace presente que nunca estuvo en comisión extrainstitucional. Para el año 1973 ostentaba el grado de carabinero y se encontraba cumpliendo funciones en el Retén Lastarria, cuyo jefe de Retén era el cabo 1º Eudocio Díaz Ibacache. El día 11 de septiembre de 1973 recibieron la orden desde la Tenencia de Gorbea que debía prepararse porque debían cerrar la unidad y recogerse a la 5ª Comisaría de Pitrufuquén, unidad donde quedaron bajo las órdenes del Capitán Sergio Callis Soto, de quien tiene muy malos recuerdos por el mal trato que le daba a los carabineros subalternos. Nunca más regresó a esa zona durante el año 1973. En la 5ª Comisaría de Pitrufuquén cumplió funciones de vigilante durante los servicios de guardia y también efectuaba patrullajes en la población, casi siempre a pie, siempre acompañado de funcionarios antiguos del grado sargento, tal como Reinaldo Hernández Reyes y el cabo Gregorio Luengo Jara. No recuerda que en alguna oportunidad haya llevado personas detenidas a la unidad por infracción al toque de queda. Señala que nunca le correspondió acompañar a funcionarios de su unidad a efectuar allanamientos o detenciones de personas por temas políticos. Hubo personas detenidas por temas políticos, los cuales pasaban por la guardia de la unidad sin quedar registrados, para ser llevados directamente a las caballerizas de la comisaría, específicamente en el segundo piso de esas, donde se guardaba el forraje de los animales. Se habilitó esa dependencia para ubicar ahí a los detenidos, ignorando si en ese lugar se interrogaba, ya que nunca se le encomendó efectuarles vigilancia. Agrega que hubo un grupo de carabineros que

se encargaba directamente de las detenciones de esas personas y presume que ellos también los interrogaban al interior de la unidad. Sobre el Suboficial Lukowiak, era el chofer del Capitán Callis, y generalmente lo veía en la unidad. Respecto a los vehículos de la 5ª Comisaría de Pitrufquén había solamente uno institucional al cual llamaban la campañola, y que era de uso exclusivo de Callis. Después del 11 de septiembre fueron incautados otros vehículos, que a su parecer eran de propiedad del SAG, los cuales correspondían a furgones de color verde. Añade que es primera vez que escucha el nombre de la víctima Luis Anselmo Fernández Barrera e ignora todo antecedente relacionado con su detención y paradero actual. No está en sus recuerdos que personal del ejército provenientes de Temuco se hayan presentado en la unidad policial diariamente a retirar detenidos. Reitera que estuvo en Pitrufquén desde el día 11 de septiembre hasta el mes de octubre de 1973, por lo que nunca pudo familiarizarse con los funcionarios de la unidad ni tampoco con algunos residentes de la ciudad.

En declaración judicial de fecha 28 de agosto de 2014, **de fs. 1128 a fs. 1129 (Tomo IV) y de fs. 2118 a fs. 2120 (Tomo VII)**. Presume que los detenidos que no se registraban en el libro de guardia de la unidad eran por motivos políticos, ya que los otros detenidos, por delitos comunes, eran debidamente ingresados en los registros respectivos y, además, por el clima que en ese momento se vivía en el país. Los detenidos por motivos políticos eran ingresados por funcionarios de otras unidades, desconociendo de qué unidades eran. Recuerda que veía cuando los funcionarios entraban directamente al interior de la comisaría, no pasando por el cuerpo de guardia. Los funcionarios que llegaban con detenidos eran alrededor de 3 a 4 funcionarios, llevando 3 o 4 personas detenidas aproximadamente. Llegaban en camionetas verdes que no eran de carabineros y presume que eran incautadas a servicios públicos. Los funcionarios de otras unidades siempre vestían el uniforme de la institución, no recordando haber visto funcionarios vestidos de civil. Nunca le correspondió vigilar a los detenidos por motivos políticos. Además, estaba prohibido el tránsito de los funcionarios hasta ese sector. Lukowiak y el Teniente Moreno sabían todo lo que pasaba en la unidad ya que eran parte de la jefatura de la Comisaría. Lukowiak en ese tiempo era el funcionario de mayor grado después del teniente

Moreno. Ellos tenían acceso a todas las dependencias de la Comisaría, incluso al sector donde habían detenidos por motivos políticos. No recuerda muy bien, pero tal vez alguno de los recintos donde estaban los caballos sirvió para guardar el forraje después del 11 de septiembre de 1973, ya que desde esa fecha el lugar destinado para ello fue ocupado por detenidos por motivos políticos.

A.31 Víctor Alejandro Fernández Silva (1 año de edad para la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** con fecha 12 de febrero de 2020, **rolante de fs. de fs. 1.690 a fs. 1.691 (tomo VI)**. Expone que en torno a los hechos que se investigan en cuanto a la desaparición de su padre, no tiene ningún recuerdo de aquel, que sólo sabe lo ocurrido por el relato de su madre. Indica que tenía 2 años de edad. Anexa que lo que le comentó su madre es que carabineros de Pitrufuquén detuvo a su padre el 25 de octubre de 1973, que lo aprehendieron en su domicilio en aquel entonces ubicado detrás de la cárcel de Pitrufuquén. Que inmediatamente de ocurridos los hechos, su madre los dejó encargados con una vecina de nombre Hilda y concurrió hasta la Comisaria a tener noticias de su padre y al llegar allí le dijeron que lo fuera a buscar al mar. Anexa que pasado los años le compraron un camión a Atilio Madariaga, quien les señaló que había advertido a su padre que se fuera de Pitrufuquén por todas las detenciones que estaban ocurriendo, a lo que su padre le respondió que no se iría. Luego cuenta, ocurrió lo de su detención y posterior desaparición. A continuación, señala al tribunal que una persona de Pitrufuquén, cuya identidad no recuerda, el cual se encuentra trabajando en una obra que se está ejecutando a la salida de la ciudad por camino Toltén, lugar donde se están construyendo casas, le comentó que se habían encontrado osamentas humanas, razón por la cual la obra se había paralizado unos días. Aquello se lo dijo hace 5 meses. Indica que la verdad eso fue un comentario y no tiene mayor conocimiento respecto a su veracidad. Apunta que quien podría aportar más antecedentes respecto a la causa son sus hermanos Luis Rufino Fernández Silva y Anselmo Ascanio Fernández Silva.

A.32 Ángel Ascanio Fernández Barrera (28 años de edad para la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 21 de julio de 2023, **rolante de fs. de fs. 1.853 a fs. 1.854 (tomo VI)**. Ratifica su declaración policial rolante a fs. 858 y siguiente y que en el acto le ha sido leída y reconoce

como suya la firma estampada en ella. Aquilata que para el año 1973 vivía con su señora Lucía Pérez Reyes en la ciudad de Santiago y su hijo Miguel Ángel Fernández, quien era guagua. Aproxima que ellos eran dos hermanos, Luis y el, y tenían hermanastras de nombres Edelmira Elizabet y Carmen Vailey, hijas de su madrastra Irma Vailey, quienes vivían en calle San Alfonso 59, de la comuna de Santiago o Estación Central. Aquellas vivían junto a su padre. Apunta que su hermano Luis se dedicaba a la artesanía y de todo un poco. Tiene entendido que él no tenía una militancia política. Agrega que ellos siempre han sido de Santiago, originarios de allá. Asevera que su hermano conoció a su señora y se fue a vivir a Pitruftuén, por esa razón desconoce que amistades tenía su hermano en Pitruftuén. Adosa que no sabe cómo supo su madre, efectivamente los carabineros habían detenido a Luis. Que esa comunicación tuvo que habérsela dado la señora de su hermano, tal vez por carta o por teléfono. No recuerda en qué momento específico se enteró de la detención, pero tuvo que ser varias semanas después. Barbulla que su padre ese día del golpe, iba para el sur a ver a Luis y se quedó toda la noche en la estación porque el tren no salió y después vino el golpe. De aquello se acuerda porque su padre se lo contó. Agrega que su padre fue alrededor de tres veces para el sur, para saber el paradero de su hermano Luis e iba a carabineros de Pitruftuén, y ellos le decían que habían pasado a Luis a Temuco. Anexa que fue también a los militares, no sabe de dónde, pero ellos le dijeron que su hermano Luis no había sido ingresado allá. Arguye que lo cierto es que carabineros de Pitruftuén fueron los que lo detuvieron. Respecto de Celso Avendaño Alarcón e Ismael Bocaz Muñoz, "Chalia", la esposa de Luis dijo que cuando se llevaron a su hermano iba más gente detenida en el vehículo y entre ellos estaban estas dos personas. Apoya que el nunca más supo de su cuñada, se enteró que se había vuelto a casar. Agrega que los trámites en el informe Rettig los hizo el; que se acuerda de haber ido a la catedral y allá hizo la denuncia. Acompaña al proceso comprobante de toma de muestras para registro de ADN de familiares de detenidos desaparecidos. El tribunal lo tiene acompañado al proceso.

A.33 Isolina Peña Pérez (26 años para la época de los hechos), quien declaró de fs. 1.960 a fs. 1.961 y de fs. 2.122 a fs. 2.123 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial con fecha 7 de agosto de 2013, **de fs.1.960 a fs.1.961 (Tomo VII)**. Relata que es la cónyuge de Ismael Rolando Bocaz Muñoz. Contrajo matrimonio con Ismael el día 26 de mayo de 1963, de su relación nacieron tres hijos de nombres Patricio, Ginett y Cecilia, todos menores de edad para el año 1973. Indica que vivían en un inmueble ubicado en calle Vicuña Mackenna de la comuna de Pitrufuquén, el cual quedaba en las cercanías de la Plaza de Armas de esa ciudad. Su marido, para esa época tenía 31 años, trabajaba en vialidad como jefe de cuadrilla y su lugar de trabajo estaba en la gobernación. Adosa que Ismael era militante del Partido Comunista. Apunta que no recuerda nombres de compañeros de trabajo de su marido, ni de sus compañeros de partido político, solo una familia de apellido Alarcón, quienes eran sus vecinos. Sobre la desaparición de su esposo, precisa que no son muchos los antecedentes que maneja, ya que la última vez que lo vio fue la mañana del día 18 de octubre de 1973, cuando él como de costumbre se fue de la casa en dirección a su lugar de trabajo, no regresando jamás. Relata que esa misma tarde, cerca de las 14:00 horas y al ver que no llegaba a almorzar, se preocupó y fue hasta su oficina pero no lo encontró, incluso rememora que le preguntó en esos momentos al mismo Gobernador, pero le contestó que Ismael no había llegado a su lugar de trabajo. Posteriormente, fue a la Comisaría de Pitrufuquén donde la atendió un funcionario de guardia; quien le dijo que Ismael no se encontraba en ese lugar. Continúa, que concurrió a esa unidad policial varias veces, pero la respuesta siempre fue la misma. Debido a lo anterior, durante dos meses, todos los martes fue a Temuco a consultar por Ismael a la Cárcel Pública de esa ciudad, pero nunca obtuvo resultados positivos. Por otra parte, su suegra y su cuñada buscaron a Ismael en Santiago, pero también les fue mal. Posteriormente, después de un año dejaron de buscarlo y asumieron en el fondo que fue detenido y desaparecido. Informa que antes de la desaparición de su marido, su casa fue allanada un par de veces por efectivos policiales de la Comisaría Pitrufuquén y posterior a su desaparición también fueron allanados en una oportunidad, según su recuerdo los Carabineros buscaban armas. Siempre ha tenido la certeza que Carabineros de Pitrufuquén detuvieron a su marido debido a los allanamientos que sufrieron. Afirma que no sabe las identidades de los funcionarios de Carabineros que allanaron su domicilio y además que por temor

a que le pasara algo a ella y a sus hijos, se fue de la ciudad. Anexa que la hermana de su esposo se llama Sofía Bocaz Alarcón y vive en la ciudad de Santiago. Nunca supo por terceras personas de algún antecedente que tuviera relación con la detención y destino final de su esposo.

En declaración judicial con fecha 8 de septiembre de 2014, **rolante de fs.2.122 a fs.2.123 (Tomo VII)**. Ratifica la declaración policial de fs.1.960 a fs.1.961 y que en ese acto le ha sido leída. Recuerda que el día anterior a la detención de Ismael, su casa fue allanada en 3 oportunidades por funcionarios de Carabineros de Pitrufquén, entre los que nombra, a uno de grado de Capitán, que tenía una hija que era compañera de la suya, Ginnete, en el Colegio Santa Cruz de Pitrufquén, al parecer su apellido era Callis. También andaba un funcionario que era muy violento, pero de quien ignora su identidad, era conocido por tener el grado de Teniente, por lo menos todos los vecinos creían que ese era su grado en la institución. Ellos buscaban armas y a su marido, diciéndole que en cuanto éste llegara, debía presentarse en la unidad de Carabineros de Pitrufquén. Manifiesta que el día que se efectuaron los allanamientos, Ismael no se encontraba en la comuna, llegando al día siguiente hasta su hogar. En cuanto llegó le contó lo sucedido y le dijo que luego de tomar desayuno iría a la Comisaría y posteriormente a su trabajo. Sin embargo, Ismael nunca llegó a su lugar de trabajo, desconociendo hasta la fecha su paradero. Asevera que desconoce si los Carabineros andaban movilizados, ya que en ese tiempo vivían en una mediagua y su puerta principal estaba por la parte de atrás del sitio que ocupaban, que en todo caso no tenía cerco. A la pregunta, sólo andaban dos funcionarios de Carabineros cuando se efectuaron los allanamientos a su hogar. Inquieta que no supo ninguna otra información de Ismael, lo busco intensamente por muchas unidades militares y de Carabineros, sin lograr resultados positivos. Descarga que Celso Avendaño era su vecino, vendía pescado y era simpatizante del MIR. Él tenía una relación de amistad con su marido, desconociendo si se reuniesen para analizar temas políticos.

A.34 Sofia Iris Bocaz Muñoz (32 años para la época de los hechos), declaró de fs. 2.602 a fs. 2.603, copia de fs. 2.612 a fs. 2.613 y de fs. 2.615 a fs. 2.616 (Tomo VIII).

En declaración extrajudicial con fecha 30 de octubre de 2017, **rolante de fs.2.602 a fs.2.603 (Tomo VIII)**. Evidencia que es hermana de Ismael Rolando Bocaz Muñoz, con quien residía hasta el año 1965 en la comuna de Loncoche junto a sus padres Leónidas Bocaz Rodríguez y Apolonia Muñoz Muñoz. Pasada esa fecha contrajo matrimonio y se radicó en Santiago, junto con su madre, ya que su papa había fallecido, quedando su hermano en la ciudad de Pitrufuquén, pertenecía a vialidad. Su hermano era una persona muy colaboradora con la gente necesitada, fue así que, en una oportunidad viajó hasta Santiago alojándose en su domicilio, con la finalidad de tener una reunión con el Presidente Allende, para que este le diera planchas para techos de la gente de escasos recursos en la comuna de Pitrufuquén. Debido a esto tuvieron una discusión, en la cual le representó que debía preocuparse primero de su familia y luego de los demás. Por lo anterior, al día siguiente ya de haber conversado los problemas, se retiró de su casa y no lo volvió a saber nada de él. Solo recuerda que, en el mes de septiembre de 1973, luego del golpe, su madre recibió una carta en la que señalaban que su hermano estaba detenido en Pitrufuquén. Fue así como su madre se trasladó desde Santiago hasta Pitrufuquén, en donde los hijos de su hermano le cuentan que, el papa llegó a la casa muy mal herido, vomitando sangre, estando unas horas aproximadamente en casa y nuevamente es detenido a puros golpes, por funcionarios de Carabineros. Indica que en los días posteriores de la detención de Ismael, personas conocidas informaron a su madre, que funcionarios de Carabineros lo llevaban atados de manos y pies con dirección a la cárcel, lugar al cual luego de ingresar se escucharon disparos. Musita que cuando su madre viajó a Pitrufuquén, vecinos le señalaron que su hermano, luego del golpe de estado se escondió debajo de un puente y pasado unos días personal de Carabineros lo detuvo, siendo esta su primera detención, así mismo su madre le contó que cuando supo lo de su hermano, ella concurrió hasta la unidad de Carabineros, en donde al consultar por Ismael, le señalaron que se retirara o si no le pasaría lo mismo que a su hijo, interpretando ella que su hijo estaba muerto. Inquieta que nunca supo que Carabineros lo tomaron detenido ni menos quienes lo asesinaron, solo se mencionaba a los funcionarios de Carabineros de Pitrufuquén.

En declaración judicial con fecha 8 de marzo de 2018, **rolante de fs.2.615 a fs.2.616 (Tomo VIII)**. Ratifica en todas sus partes la declaración del 30 de Octubre de 2017. Apunta que todo lo acontecido con su hermano Ismael Bocaz Muñoz, lo supo por su madre, quién viajó a Pitrufquén para saber porque había sido detenido. Esto ocurrió después del golpe militar, en el mes de octubre de 1973. Su madre concurrió a la unidad de Carabineros de Pitrufquén para preguntar por el paradero de su hermano y estos le señalaron que se retirará o si no le pasaría lo mismo que él, interpretando de esta forma que Ismael estaba muerto. Recuerda que su madre supo por comentarios de los vecinos de Pitrufquén, que a todos los fallecidos los llevaban a Temuco o eran tirados en el río. Destaca que estos hechos le traen mucho dolor.

A.35 Patricio Leónidas Bocaz Peña (10 años para la época de los hechos), quien declaró de fs. 2.804 a fs. 2.804 vta. y de fs. 2.849 a fs. 2.850 (Tomo IX).

En declaración extrajudicial con fecha 26 de abril de 2022, **rolante de fs.2.804 a fs.2.804 vta. (Tomo IX)**. Explicita que es hijo de Ismael Rolando Bocaz Muñoz, víctima de la presente causa, precisando que nunca más supieron de él, desde que desapareció al momento que habría sido detenido en la plaza de Pitrufquén por Carabineros, pertenecientes a la Comisaría del mismo pueblo en el año 1973. Indica que al momento de la detención de su padre, se encontraba viviendo en Pitrufquén junto a su madre llamada Isolina Peña Pérez y sus dos hermanas Cecilia y Ginette Bocaz Peña. En ese tiempo tenía aproximadamente 9 años, siendo el mayor de sus hermanas. Relata que el día 16 de octubre de 1973 a eso las 21:30 horas, comenzaron a llegar funcionarios de Carabineros de la Comisaría de Pitrufquén e ingresaron a su domicilio de forma violenta, rompiendo todo a su paso y preguntando si su padre había llegado y donde está, además de golpear a su madre tirándola contra la pared. Al deponente le golpearon con una agenda o libro en la cara. Esto ocurrió alrededor de tres veces a diferentes horas durante la noche. Al otro día llegó su padre que venía de la localidad de Toltén por trabajo, al llegar su madre le cuenta lo sucedido y este comienza a quemar toda la documentación que mantenía en su poder referente al partido. A eso de las 10:00 horas del día 17 de octubre de 1973, se fue presentar a la Comisaría de Carabineros del pueblo, sin embargo, al pasar por la

plaza es detenido por funcionarios los que lo estaban esperando para detenerlo, esto fue visto por la Sra. Elena, vecina de la cual no recuerda su nombre completo, la que se encuentra ya fallecida. Al otro día 18 de octubre de 1973 alrededor de medio día, su madre a la cual acompañó, se dirigió la Comisaria de Pitrufquén a consultar si se encontraba su esposo detenido, a lo que afirmaron que no se encontraba en ese lugar y que había sido trasladado al Regimiento de Temuco. Continúa que luego de dos días aproximadamente, su madre decidió ir a el Regimiento de Temuco, donde intento saber respecto a su padre si se encontraba en ese lugar, donde le indicaron de forma muy grosera que se fuera y que este no estaba en ese lugar, regresando su madre a la casa. Desde esa fecha no supieron más de su padre hasta la fecha. Respecto a que se comentaba en el pueblo, esto era que su padre lo habrían mandado a la isla de Quiriquina. En cuanto a la pregunta, de quién podría ayudar con antecedentes respecto a la investigación, conjetura que sería importante contactar a la familia Tellier, un tal Daniel o Miguel, quien podría entregar nuevos antecedentes. Esta familia estaría viviendo en estos momentos en Pitrufquén y el tal Daniel o Miguel estaría en Santiago, según lo último que supo de parte de su familia.

En declaración judicial con fecha 20 de julio de 2023, **de fs.2.849 a fs.2.850 (Tomo IX)**. Ratifica la declaración que rola a fs.2.804 y reconoce como suya la firma estampada en ella. Su padre para el año 1973 trabajaba en vialidad, era dirigente del Partido Comunista. Su padre andaba en Toltén porque tenía que ir a dejar materiales, acompañando al chofer del camión, cuyo nombre no recuerda. Como existía el toque de queda al regresar a Pitrufquén pasaron por una casa y tocaron la puerta, salió el dueño de la casa, un Capitán de Ejército y empezó a correrles bala, hiriendo al chofer. Esa misma noche fueron los carabineros hasta su casa a realizar la búsqueda de su padre, como relató en su declaración policial. A la consulta, distinguió que el Capitán empezó a disparar porque era toque de queda y no andaba gente en la calle. Todo esto, el pedir alojamiento en esa casa, fue en Toltén. Era complicado volver, pasaron por esa casa a pedir alojamiento, ellos andaban vestidos de obrero y esta persona salió disparando al tiro e hirió al chofer en la pierna. Su padre se fue caminando a la casa. Al parecer el chofer fue detenido de inmediato en Toltén y dio el nombre de su padre. Todo esto lo escuchó cuando su padre llegó a la casa y se lo

comentó a su madre. A la consulta, rememora a los de apellido Teillier que eran del Partido Comunista y otras personas que también están desaparecidas en Pitrufuquén; entre ellos había uno que trabajaba en el hospital y tenía un brazo cortado, vivía al frente de ellos. Precisa que ellos vivían como a dos cuadras hacia al norte desde Investigaciones, en lo que se conoce como una toma, su padre gestionó mediaguas para todos. La señora Elena Henríquez, madre de los Calfuquir, era vecina suya, parece que esta señora trabajaba en el hospital y su hija igual. Desarrolla que la señora Elena llegó corriendo donde su mamá a avisarle que en la plaza le pegaron un culatazo a su papá y que una patrulla de Carabineros lo tomó detenido. Él mismo acompañó a su mamá a la Comisaría de Pitrufuquén y allí reconocieron que su padre había estado detenido pero que lo habían trasladado al Regimiento de Temuco. Recuerda que la noche en que fueron a su casa, el carabinero que le pegó era de apellido Antipan. Según recuerda, su padre se fue a presentar a la Comisaría. Su madre, cuando su padre llegó desde Toltén, le dijo que no quería que los siguieran allanando, que no volvieran a la casa los Carabineros, pero como iban a volver a ir nuevamente a la casa, su padre quemó todo y se fue a presentar a Carabineros de Pitrufuquén. La distancia entre la plaza y su casa era de aproximadamente 5 a 6 cuadras. Atestigua que no supieron si su padre estuvo detenido con más personas en la Comisaría de Pitrufuquén. El único allanamiento fue la noche anterior a que su padre se presentará en la Comisaría. No hubo posteriores. Respecto a Celso Avendaño, indica que él vivía dos casas más allá de la suya, en la misma toma. A Luis Anselmo Fernández Barrera, lo ubicaba porque su padre antes del 11 de septiembre iba a marchas y él mismo lo acompañaba, por eso tiene conocimiento sobre él. No tiene mayores antecedentes sobre sus detenciones, solo que Carabineros de Pitrufuquén fueron los responsables. A la consulta, cuando apareció el informe Rettig, él hizo las gestiones para conocer el paradero de su padre. Suma que Daniel o Miguel es de apellido Teillier.

A.36 Mauricio Guy Alexis Teillier Del Valle (21 años para la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** con fecha 15 de junio de 2023, **de fs. 2.853 a fs. 2.853 vta. (Tomo IX)**. Divulga que para el año 1973, tenía la edad de 21 años, era estudiante universitario de la Universidad Técnica de Temuco, de la carrera tecnología en Riego, soltero, sin hijos y residía en el mismo lugar donde

vive, inmueble que pertenecía a sus padres. Sobre su militancia política, pertenecía a las Juventudes Comunistas de Pitrufrquén, era encargado orgánico, siendo sus funciones velar por la logística y funcionamiento del partido. Expresa que ocurrido el golpe de estado, su casa fue allanada varias veces por Carabineros, siendo la primera oportunidad el día 11 de septiembre, ocasión en que logró escapar junto a su hermano León Axel y otros militantes, con quienes se refugió a orillas del río Toltén, en el sector de la Isla. Agrega que regresaron a su hogar, pero después se refugiaron en el campo por un par de días, en el sector Chanco. Posteriormente, regresaron a Pitrufrquén, pero se les dejó con la medida de no salir a la calle. Afirma que nunca fue detenido, sin embargo sus hermanos René Laureano, Magaly y Roxana, fueron detenidos en distintas épocas de la dictadura. Respecto a la víctima Ismael Bocaz Muñoz habla que lo conoció, él pertenecía al Partido Comunista y al igual que él tenía domicilio en Pitrufrquén. Acorde a su recuerdo, Ismael trabajaba en la Municipalidad de Pitrufrquén, en vialidad, donde era obrero. Por lo que sabía, él fue detenido en la plaza de la comuna por un Carabinero de apellido Hernández junto a otro funcionario, probablemente de apellido Fernández. Esta situación se la contó doña Elena Henríquez, profesora y esposa de Hernán Calfuquir, otra víctima de Derechos Humanos, quien también conocía a Ismael. Ella aparte de comentarle de la detención de Bocaz, le hizo mención que el Carabinero Fernández era su primo y sin consideración a eso, este le había allanado su casa según ella. Asevera que no fue testigo de la detención de Ismael, como tampoco obtuvo de manera directa antecedentes relacionados con su detención. Es probable que su hermano René Laureano tenga conocimiento, ya que en esa época él también estuvo detenido, en la cárcel pública de Temuco, siendo aprehendido en primera instancia por personal de Carabineros de Pitrufrquén, quienes previo a su traslado a Temuco lo torturaron en la Comisaría. De su detención, puede saber una persona de apellido Salinas, él era funcionario del hospital de Pitrufrquén y vive en la población Los Castaños de esa ciudad y por lo que supo es probable que haya estado detenido también.

A.37 Rubén Darío López Llanos (36 años para la fecha de ocurrencia de los hechos), quien declaro de fs. 1.420 a fs. 1.421 (tomo V) con copia de fs. 2.396 a fs. 2.397 y de fs. 2.479 a fs. 2.480 y de fs. 2.514 a fs. 2.515 (tomo VIII).

En declaración extrajudicial con fecha 4 de mayo de 2016, **de fs. 1.420 a fs. 1.421 (tomo V) copia de fs. 2.479 a fs. 2.480 (tomo VIII) y la de fs. 2.396 a fs. 2.397 (tomo VIII)**. En lo pertinente soslaya que en el año 1973, con posterioridad al golpe militar, se desempeñaba como escribiente en Carabineros, siendo dotación de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén, la cual estaba a cargo del Capitán Sergio Callis Soto, siendo secundado por el teniente Carlos Moreno Mena. Precisa que dentro de los funcionarios que allí trabajaban, recuerda a los sargentos Lukowiak, Emilio Caro, Octavio Castillo, José Ortiz, Pedro Nahuelhual Cuminao, Pedro Zárate Rojas, Germán Fernández Torres, los cabos Ambrosio Antipán, Hugo Catalán Lagos, Juan Contreras, Reinaldo Hernández, los carabineros Raúl Amulef Sandoval, Antonio Silva Soto quien era el chofer del comisario y Arnoldo Villagrán. Indica que sus labores al interior de la 5° Comisaria de Pitrufquén no cambiaron luego del golpe militar y consistían en tramitar la documentación interna de la unidad policial, tales como elaborar las cuentas diarias, quincenales, anuales, semanales y listas de revista, entre otras cosas, desempeñándose en la oficina de partes junto a Carlos Ramírez Gatica y Jaime Obando Fernández, entre otros. Agrega que, con posterioridad al golpe militar jamás le correspondió realizar servicios a la población, control de toque de queda y carreteras, ni tomar personas detenidas por motivos políticos. Refiere que al interior de la Comisaria de Pitrufquén no se formó un grupo especial que se dedicara a llevar a cabo detenciones políticas, pero si recuerda que el Capitán Callis Soto solía trabajar con sus funcionarios de confianza, los cuales eran Lukowiak, Raúl Amulef, Catalán, Fernández, Juan Rioseco Montoya y Antonio Silva Soto, conductor, desconociendo con detalle que tipo de labores realizaban, pero se dedicaban a realizar patrullajes en los sectores rurales de nuestra jurisdicción. Cuenta que con posterioridad al golpe militar vio llegar personas detenidas a la 5° Comisaria de Pitrufquén, las cuales eran mantenidas en el sector de las caballerizas, aislados del resto de la unidad, desconociendo quienes eran sus aprehensores. Detalla que funcionarios del Ejército y de la Fuerza Aérea de Chile, llegaban con regularidad a la unidad, al parecer iban a dejar o a buscar detenidos para trasladarlos a la ciudad de Temuco, hecho que supo por comentarios. Manifiesta que no vio ni supo que se hayan ejecutado a personas y posteriormente lanzados al río Toltén. En relación a la víctima Luis

Fernández Barrera, indica que no lo conoce ni lo oyó nombrar antes, desconociendo todo antecedente al respecto.

En declaración judicial con fecha 19 de diciembre de 2016, **de fs. 2.514 a fs. 2.515 (tomo VIII)**. Ratifica su declaración policial de fs. 568 a fs. 569 y que en el acto le ha sido leída. Acota que si bien en la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufrquén existieron detenidos por motivos políticos a contar del 11 de septiembre de 1973 y eran mantenidos en las caballerizas de la Comisaria, nunca se enteró en qué condiciones físicas se encontraban aquellos, puesto por orden del Capitán Callis no podían ingresar a dichos sectores. Sólo ingresaba el personal de confianza de Callis, los cuales eran Lukowiak Raúl Amulef, Catalán, Fernández, Juan Rioseco Montoya Antonio Silva Soto. Dice que tampoco tiene conocimiento de lo acontecido con Ismael Bocaz Alarcón ni de Fernández Barrera, del cual se le informa en el acto que fue detenido el 25 de octubre de 1973 y trasladado hasta la 5 Comisaria de Pitrufrquén. Divulga que conoció al padre Lautaro Calfuquir Henríquez, supo que compañeros de trabajo lo habían detenido la famosa patrulla integrada por Catalán, Amulef, Silva, los que mencionó precedentemente como los funcionarios de confianza de Callis. Desarrolla que posteriormente lo trasladaron al Regimiento Tucapel y que hasta la fecha se encuentra desaparecido. Sin embargo, respecto a Lautaro Calfuquir, Moisés Norambuena Oviedo, Leonor del Carmen Pincheira García y Carlos Alfredo Torres Concha no tiene conocimiento de lo que les sucedió.

A.38 Flavio José Urra Guíñez (39 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** de 07 de noviembre de 2005, **rolante de fs. 257 a fs. 259 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.250 a fs. 1.252 (Tomo V) y de fs. 2.211 a fs. 2.213 (Tomo VII)**. Acota que para septiembre de 1973 se desempeñaba en la 5° Comisaría de Pitrufrquén con el grado de Sargento, jubilando en el año 1980. Aduce que el Capitán Callis llegó poco antes del golpe militar. Luego llegó el Mayor Espinoza. Advierte su función para el periodo septiembre-diciembre de 1973 era el de vigilancia en las calles y centinela. Adopta que vio detenidos políticos en la Comisaría de Pitrufrquén, quienes eran ingresados por la puerta falsa, ubicada en calle Santa María con 21 de mayo. Estas personas no eran pasadas por la guardia. Los detenidos eran traídos en camiones y camionetas y eran mantenidos en el segundo piso de las caballerizas

al interior de la unidad. Adosa que solo vio hombres detenidos. Afirma que los detenidos eran trasladados a Temuco en vehículos que venían desde esa ciudad. Agrega que solo el grupo de confianza de Callís y Moreno podía entrar a las dependencias donde estaban los detenidos. Recuerda que en una oportunidad Callís casi lo fusiló por darle un pedazo de pan a un detenido. Alega que los hombres de confianza del Capitán Callís eran el Suboficial Lukowiak, el Cabo Catalán, los Carabineros Fernández y Amulef. Anexa que el chofer del Capitán Callís era Domingo Antonio Silva Soto, quien era también de la confianza del Oficial mencionado. Anima que los funcionarios antes mencionados más el Teniente Moreno, participaban en las detenciones de personeros políticos. Respecto de las personas que se le nombran como detenidos políticos en la Comisaría de Pitrufquén, solo recuerda al agente del banco, Sr. Burgos y al ex intendente, Gastón Lobos Barrientos, en cuya casa tuvo que hacer punto fijo cuando estuvo bajo el régimen de arresto domiciliario. Respecto de la detención del señor Burgos, puede decir que cuatro o cinco días después del golpe militar, se encontraba en la garita de control del puente Toltén junto a Orellana y Luengo, ambos fallecidos, cuando llegó un vehículo de norte a sur, al parecer una camioneta, del cual descendió una persona con las manos arriba. Al interrogarlo manifestó ser el señor Burgos, agente del Banco del Estado, quien se venía a entregar, pues había escuchado en la radio que se le requería. El deponente ordenó a un Cabo que avisara a la Comisaría de este hecho. A los pocos minutos llegó el Teniente Moreno, Silva, Catalán y Amulef en la camioneta blanca que utilizaba el Capitán Callís. Luego de subirlo al móvil se lo llevaron a la Comisaría. Días después se enteró que había sido trasladado a Temuco por los militares, pero no le consta. Nunca lo vio detenido en la Comisaría. Apunta que en la cabina de la camioneta se fueron Silva con el Teniente Moreno y atrás junto al detenido se fueron Catalán y Amulef. Ignora qué sucedió con la camioneta del señor Burgos. Apoya que no recuerda que en este hecho hubiese participado Lukowiak. Está seguro que Catalán actuó en este operativo, porque se atribuyó la detención de Burgos ante el Capitán Callís, lo que al deponente le trajo muchos problemas. Respecto del ex intendente Gastón Lobos, como señaló anteriormente, le correspondió hacer un turno de noche frente a su casa cuando éste estaba con arresto domiciliario y pudo verlo cuando salió al patio a fumar un cigarrillo. Nunca

más lo vio luego de este hecho. Aproxima que los familiares de detenidos políticos se entrevistaban con el Teniente Moreno, porque el Capitán Callís no quería recibirlos. Aquilata que cuando subió a los altos de las caballerizas para darle el pedazo de pan al detenido que señaló anteriormente, cuyo nombre ignora, vio que todas las personas allí encerradas estaban con su vista vendada, amordazados y con las manos atadas. Finalmente agrega que el Carabinero Jorge Henríquez también era chofer y al igual que Catalán reemplazaba a Silva en la conducción del vehículo de Callís. Esta persona vive en la población del alto.

B. Documentos (45).

1. Querella criminal interpuesta de Rodrigo Ubilla Mackenney por el delito de secuestro calificado de las personas Celso Avendaño Alarcón Luis Fernández Barrera y Ismael Bocaz Muñoz.
2. Querella interpuesta por Sebastián Saavedra Cea y Rayen Daza Pilquinao por el delito de homicidio calificado de Luis Fernández Barrera en contra de todas las personas que resulten responsables.
3. Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de de Luis Fernández Barrera.
4. Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de Ismael Rolando Bocaz Muñoz.
5. Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad respecto de Celso Avendaño Alarcón.
6. Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de Luis Fernández Barrera.
7. Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de Ismael Bocaz Muñoz,
8. Informe museo de la Memoria y Derechos Humanos.
9. ORD. N°2.422-2013 de Jefe de departamento control de fronteras de la Policía de investigaciones de Chile.
10. Oficio n°178-2014 del III Juzgado Militar de Valdivia de fs.118 (tomo I).
11. Copia de informe pericial fotográfico N°176-2006 de la Policía de Investigaciones de Chile.
12. Copia de informe pericial planimétrico n°105-2006 de la Policía de Investigaciones de Chile.
13. Copia simple cuadro grafico demostrativo exfuncionarios 5° Comisaría de Pitruftuén de fs.368 a fs.387 (tomo II),
14. Red familiar de Celso Avendaño Alarcón.
15. Inspección de libros de detenidos, procesados, rematados y patronato de reos de cárcel pública de Pitruftuén.
16. Nómina de personal 5°Comisaria de Pitruftuén de septiembre a diciembre de 1973.
17. Copia simple de fotografía de Celso Avendaño Alarcón de fs.575 (tomo II).
18. Oficio n°1.559-2017 del alcaide del centro de detención preventiva de Pitruftuén
19. Certificado de matrimonio entre Celso Avendaño Alarcón y Esmeraldina Stancobich Meriño.
20. Informe N° 375 de Tesorería General De la República, Región de la Araucanía.
21. Informe N° 562 de la Municipalidad de Pitruftuén.
22. Informe N° 1417 del Servicio Médico Legal Región Araucanía de fs. 883 (tomo IV), que señala que revisados sus archivos no existe protocolo de autopsia de Luis Fernández Barrera.
23. Informe N° 485 del Servicio de Impuestos Internos.
24. Certificado de Nacimiento de Luis Anselmo Fernández Barrera.
25. Acta de Nacimiento de Luis Anselmo Fernández Barrera.

26. Informe N° 847 del Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos.

27. Informe N° 744 Servicio Electoral Región de la Araucanía.

28. Acta de inspección personal del tribunal de fs. 1.290 a fs. 1.292 (tomo V), de fecha 29 de marzo de 2006, realizada en causa rol 28.291-A del Juzgado de Letras de Pitrufquén.

29. Copia de set fotográfico de dotación de 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén del año 1973.

30. Informe N° 0504 del Servicio Registro Civil e Identificación.

31. Informe N° 1186 del Servicio Médico Legal Regional Araucanía.

32. Informe N° 2037 del Servicio Registro Civil e Identificación.

33. Informe N° 372 de la Tesorería General de la Republica.

34. Informe N° 564 de la Municipalidad de Pitrufquén.

35. Informe N° 1216 del Departamento de Control Fronteras, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

36. Informe N° 740 del Servicio Electoral Región de la Araucanía.

37. Informe N° 577 del Departamento Derechos Humanos de Carabineros de Chile.

38. Copia de Set fotográfico dotación 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén del año 1973.

39. Informe N° 2580 del Servicio Registro Civil e Identificación.

40. Informe N° 101 de la Municipalidad de Pitrufquén.

41. Extracto de filiación y antecedentes de Celso Avendaño Alarcón.

42. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

43. Informe N° 12180 del Departamento de Control Fronteras, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

44. Certificados de defunción emitido por el Registro Civil e Identificación.

45. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Policía de Investigaciones de Chile.

B.1 Querella criminal interpuesta por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior de fs.29 a fs.39 (tomo I), de fs. 1.829 a fs. 1.834 (tomo VI) y de fs. 2.077 a fs. 2.086 (Tomo VII) por el delito de secuestro calificado de las personas Celso Avendaño Alarcón Luis Fernández Barrera y Ismael Bocaz Muñoz en contra de todas las personas que resulten responsables, que acompaña los documentos que a continuación se indican:

a. Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de fs.1 a fs.9 (tomo I), informa que Celso Avendaño Alarcón, 47 años, presidente del asentamiento Los Boldos, de actividad Mueblista, su familia habría sido informada posteriormente que había sido trasladado a la cárcel de Temuco, donde nunca fue encontrado.

B.2 Querella interpuesta por Sebastián Saavedra Cea y Rayen Daza Pilquinao de fs. 1.736 a fs.1.740 (tomo VI) por el delito de homicidio calificado de

Luis Fernández Barrera en contra de todas las personas que resulten responsables, que acompaña los documentos que a continuación se indican:

a. Certificado de nacimiento de Luis Anselmo Fernández Barrera de fs.1731 (Tomo VI), emitido por el Registro Civil e Identificación.

b. Certificado de Matrimonio entre Luis Anselmo Fernández Barrera y Rosalía Silva Mardones de fs. 1.732 (tomo VI), emitido por el Registro Civil e Identificación, consta que contrajeron matrimonio con fecha del matrimonio 02 de julio de 1966.

c. Certificado de nacimiento de Víctor Alejandro Fernández Silva de fs.1733(Tomo VI), emitido por el Registro Civil e Identificación.

d. Certificado de nacimiento de Luis Rufino Fernández Silva de fs.1734 (Tomo VI), emitido por el Registro Civil e Identificación.

e. Certificado de nacimiento de Anselmo Ascanio Fernández Silva de fs.1735(Tomo VI), emitido por el Registro Civil e Identificación.

B.3 Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de fs. 1.052 a fs. 1.066 (tomo IV), informa respecto de Luis Fernández Barrera, detenido desaparecido, Pitrufquén, en octubre de 1973, 32 años de edad, casado y padre de tres hijos, era artesano. Fue detenido por Carabineros de Pitrufquén el 25 de octubre de 1973, siendo trasladado a la Comisaria de dicha localidad, desde esa fecha se desconoce su paradero.

B.4 Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de fs. 2.049 a fs.2.067 (tomo VII), informa respecto de Ismael Rolando Bocaz Muñoz, detenido desaparecido, Pitrufquén, octubre de 1973, 31 años, casado con hijos. Militante del partido comunista, se desempeñaba como funcionario de la municipalidad de Pitrufquén. El 18 de octubre de 1973 fue detenido en las cercanías de la plaza, luego que su domicilio fue allanado el día anterior. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

B.5 Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de fs.43 a fs.44 (tomo I), respecto de Celso Avendaño Alarcón, **situación represiva:** Celso Avendaño Alarcón, casado, mueblista, presidente del Asentamiento "Los Boldos" de Pitrufquén, fue detenido el 16 de octubre de 1973, en horas de la mañana, en su domicilio de calle Bilbao de la localidad de Pitrufquén, por efectivos militares que

dijeron pertenecer al Regimiento Tucapel de Temuco. El arresto fue practicado en presencia de los vecinos de Celso Avendaño, quienes avisaron de la situación a su cónyuge, quien vivía en la ciudad de Temuco. Presumiblemente, fue trasladado a la ciudad indicada, perdiéndose todo rastro de su persona. Su familia realizó numerosas averiguaciones para conocer la suerte corrida por el afectado en manos de sus captores, ninguna de ellas dio resultado alguno. **Gestiones judiciales y/o administrativas:** Doña Esmeraldina Stancobich Meriño, cónyuge de la víctima, interpuso en 1989 una denuncia por presunta desgracia, ante el Juzgado del Crimen de Pitruftuén, en la cual expone las circunstancias del arresto y posterior desaparecimiento de su marido. Asimismo, en agosto de 1990, deja constancia de, los mismos hechos, en una declaración jurada en la que agrega que no realizó gestiones con anterioridad, por temor a represiones en su contra y la de su familia.

B.6 Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 875 a fs. 877 (tomo IV) respecto de informa respecto de Luis Fernández Barrera, detenido desaparecido, Pitruftuén, en octubre de 1973, 32 años de edad, casado y padre de tres hijos, era artesano. Fue detenido por carabineros de Pitruftuén el 25 de octubre de 1973, siendo trasladado a la Comisaría de dicha localidad, desde esa fecha se desconoce su paradero.

B.7 Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 1.917 a fs. 1.918 (tomo VII) informa respecto de Ismael Bocaz Muñoz, **situación represiva:** Ismael Rolando Bocaz Muñoz, casado, 3 hijos, empleado de Vialidad, militante comunista, fue detenido el 17 de octubre de 1973 por Carabineros cuando se dirigía a entregarse voluntariamente a la Comisaría de Pitruftuén y desde esa fecha permanece como detenido desaparecido. Ismael Bocaz era dirigente del Partido Comunista en la comuna de Pitruftuén, Provincia de Cautín, en la actual Novena Región y trabajaba con el Gobernador del Departamento. El 16 de octubre de 1973 su casa fue allanada tres veces. Ismael Bocaz no llegó esa noche a su domicilio, pues estaba en la localidad de Toltén, donde, buscaba refugio con el chofer del vehículo en el que viajaba. Esa noche se había hecho tarde y golpearon en la casa de un militar, el que al abrir la puerta, les disparó, hiriendo al chofer. A la mañana del día siguiente, al llegar a su casa Ismael Bocaz, fue informado de los

allanamientos y se dirigió a la Comisaría local para presentarse allí. En el camino fue detenido por Carabineros, hecho que ocurrió en la plaza de la localidad, allí fue golpeado por sus aprehensores. Desde esa oportunidad no se supo más de Ismael Bocaz, quien se encuentra desaparecido. **Gestiones judiciales y/o administrativas:** La cónyuge del afectado quedó muy atemorizada. Debió irse de la localidad a vivir con su madre, para poder mantener a sus tres hijos. Nunca se atrevió a hacer gestiones judiciales. La Comisión Nacional Verdad y Reconciliación investigó nueve casos de personas desaparecidas en septiembre y octubre de 1973, en Pitrufrquén, entre ellos el caso de Ismael Bocaz y llegó a la conclusión que estas personas fueron forzadas a desaparecer por agentes del Estado y que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos. La esposa del afectado recurrió a la Comisaría de Pitrufrquén y al regimiento Tucapel de Temuco haciendo consultas sobre su marido, sin obtener respuestas acerca de su paradero.

B.8 Informe museo de la Memoria y Derechos Humanos de fs.54 a fs.93 (tomo I), que contiene, a fs. 54 certificado de nacimiento de Celso Avendaño, informando como madre a Eduarda Alarcón Parra y como padre a José Miguel Avendaño Vallejos, fecha de nacimiento el 02 de abril de 1926. De fs. 56 a fs. 57 copia de causa rol 22.704 del Juzgado del Crimen de Pitrufrquén por inhumaciones ilegales donde aparecen como posibles víctimas Luis Fernández Barrera Ismael Bocaz Muñoz y Celso Avendaño Alarcón.

B.9 ORD. N°2.422-2013 de Jefe de departamento control de fronteras de la Policía de investigaciones de Chile de fs.95 (tomo I), informa que respecto de Celso Avendaño Alarcón no se registran movimientos migratorios.

B.10 Oficio n°178-2014 del III Juzgado Militar de Valdivia de fs.118 (tomo I), informa que la causa rol ingreso 22.704 dio origen al proceso Rol N° 30-1996 de ese tribunal, sumario que fue solicitado por el Juzgado de Letras de Pitrufrquén, siendo remitida por la magistratura militar por medio del oficio n°1595-202 de fecha 09 de junio de 2000, la cual no ha sido devuelta.

B.11 Copia de informe pericial fotográfico N°176-2006 de la Policía de Investigaciones de Chile de fs.300 a fs.320 (Tomo I), sobre inspección personal a la 5ta Comisaria de Carabineros de Pitrufrquén.

B.12 Copia de informe pericial planimétrico n°105-2006 de la Policía de Investigaciones de Chile de fs.321 a fs.328 (tomo I), copia de fs. 1.314 a fs.1.321 (tomo V), copia de fs. 2.275 a fs. 2.282 (tomo VII); sobre inspección personal a la 5ta Comisaria de Carabineros de Pitrufoquén.

B.13 Copia simple cuadro grafico demostrativo exfuncionarios 5° Comisaría de Pitrufoquén de fs.368 a fs.387 (tomo II),

B.14 Red familiar de Celso Avendaño Alarcón de fs. 402 a fs.403 (tomo II), copia de fs.617 a fs.618 (tomo II), que informa: **antecedentes familiares de Celso Avendaño Alarcón** RUN N.º 2.497.459-6, Fecha de nacimiento: 02 de abril de 1926, Nacimiento: inscripción N° 50, de 1931, circunscripción Cholchol Defunción: no hay, Estado Civil: casado. **Matrimonio:** Inscripción N.º 40, de 1952, circunscripción Tolten, casado con doña Esmeraldina Stancovich Meriño, RUN N.º 3.459.307-8. Fallecida. **Hijos:** Eduardo Enrique Avendaño Stancovich run N.º 7.182.630-9

B.15 Inspección de libros de detenidos, procesados, rematados y patronato de reos de cárcel pública de Pitrufoquén de fecha 5 de diciembre de 2005 a fs.443 (tomo II), indica que revisados todos los libros, Walter Stepke Muñoz, Pedro Curihual Paillal, Luis Caupolicán Calfuquir Villalón, Einar Enrique Tenorio Fuentes, Osvaldo Burgos Lavo, Osvaldo Segundo Barría Gutiérrez, Luis Anselmo Fernández Barrera y Celso Avendaño Alarcón no figuran como detenidos, procesados ni rematados, como tampoco firmando el libro de cumplimiento de condenas del patronato de reos de la ciudad de Pitrufoquén en el periodo de Septiembre a diciembre de 1973.

B.16 Nómina de personal 5°Comisaria de Pitrufoquén de septiembre a diciembre de 1973 de fs.463 (tomo II), en el cual aparece el acusado Carlos Hernán Moreno Mena.

B.17 Copia simple de fotografía de Celso Avendaño Alarcón de fs.575 (tomo II).

B.18 Oficio n°1.559-2017 del alcaide del centro de detención preventiva de Pitrufoquén de fs.588 (tomo II), informa que respecto de Celso Segundo Avendaño Alarcón habiendo revisado los libros y el sistema computacional sólo se registra la causa rol N° 3916 con ingreso a esa unidad penal el día 22.07.1971 por el delito

de apropiación indebida con fecha de egreso el día 06.07.1972 pago de fianza por el Juzgado de letras de Pitrufrquén

B.19 Certificado de matrimonio de fecha 13 de junio de 1952, inscripción Toltén, circunscripción n°40 entre Celso Avendaño Alarcón y Esmeraldina Stancovich Meriño de fs.686 (tomo II).

B.20 Informe N° 375 de Tesorería General De la República, Región de la Araucanía de fs. 878 (tomo IV), que informa que la persona Luis Anselmo Fernández Barrera no se encuentra registrado como contribuyente.

B.21 Informe N° 562 de la Municipalidad de Pitrufrquén de fs. 880 (tomo IV), que indica que Luis Anselmo Fernández Barrera no se encuentra sepultado en el cementerio municipal ni otros dependientes de la administración de dicha localidad.

B.22 Informe N° 1417 del Servicio Médico Legal Región Araucanía de fs. 883 (tomo IV), que señala que revisados sus archivos no existe protocolo de autopsia de Luis Fernández Barrera.

B.23 Informe N° 485 del Servicio de Impuestos Internos de fs. 884 (tomo IV), indica que respecto de Luis Fernández Barrera no registra antecedentes en la institución.

B.24 Certificado de Nacimiento de Luis Anselmo Fernández Barrera de fs. 886 (tomo IV), fecha de nacimiento el 28 de noviembre de 1940, señala como madre a Claudia del Carmen Barrera y como padre a Anselmo Fernández Jiménez

B.25 Acta de Nacimiento de Luis Anselmo Fernández Barrera de fs. 887 (tomo IV).

B.26 Informe N° 847 del Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos de fs. 889 a fs. 943 (tomo IV), señala algunos antecedentes sobre las detenciones, en el informe a la comisión nacional de verdad y reconciliación a fs. 906 respecto de Ismael Bocaz que cuando ya habían terminado su trabajo, pasaron a mirar un encuentro de fútbol local, iban Raúl, un tío de éste de apellido Cerda e Ismael Bocaz, quien realizaba un trabajo como pioneta en el camión, todos de Pitrufrquén. Durante el fútbol se produjo un incidente, típica pelea de contenedores, se sintió un disparo y una pistola apareció cerca de Bocaz Muñoz, los carabineros que controlaban el lugar los detuvieron a los tres (carabineros de Toltén los trasladaron

hasta la comisaria de Pitrufrquén y al otro día quedaron en libertad Raúl y su tío solamente. Respecto de Celso Avendaño, de ocupación mueblista al momento de su detención, vivía junto a su conviviente y a sus dos pequeños hijos en calle Vicuña Mackenna, entre Pedro León Gallo y Santa María de Pitrufrquén en una población de emergencia que hoy no existe. Después del 15 de octubre de 1973 se encontraba éste en compañía del entonces alcaide de cárcel de Pitrufrquén, en un local en que realizaba un mueble para este señor y en donde servía como restaurant. Llegaron hasta la casa habitación dos carabineros de la 5ta comisaría, caminando y preguntaron a su conviviente por éste, ella como algo natural les indicó el lugar donde se encontraba su marido. Llegaron hasta el local, lo detuvieron, el alcaide trató de evitar su detención, pero ellos manifestaron que luego lo dejarían en libertad. Respecto de Luis Fernández, fue detenido en su casa habitación que compartía con su esposa y dos hijos, Vivían entonces detrás de la cárcel de Pitrufrquén. Llegaron el 25-10-1973 una dotación en una cuca de la 5ta comisaría de Pitrufrquén, 4 o 5 carabineros, según su esposa, Rosalía Silva; su esposo en esa misma mañana había llegado desde Santiago, era comerciante temporario, también copiaba plano en su casa, lo detuvieron y lo fueron a subir al furgón, su esposa salió corriendo detrás de él y cuando abrieron la puerta de atrás para subirlo, ella vio en su interior a Ismael Bocaz y al Celso Avendaño. Ella los conocía bien porque eran amigos con su esposo y todos Vivían cerca. (Bocaz y Avendaño eran, además, vecinos, vivían en la misma población de emergencia en calle Vicuña Mackenna)

B.27 Informe N° 744 Servicio Electoral Región de la Araucanía de fs. 945 (tomo IV); indica que no registra antecedentes respecto de Luis Anselmo Fernández Barrera.

B.28 Acta de inspección personal del tribunal de fs. 1.290 a fs. 1.292 (tomo V), de fecha 29 de marzo de 2006, realizada en causa rol 28.291-A del Juzgado de Letras de Pitrufrquén se constituye el tribunal militar en dependencias de la 5° Comisaría de carabineros de Pitrufrquén, ubicado en calle Gronow 894 de Pitrufrquén participando el Ministro Fernando Carreño, el Fiscal Militar de Temuco Teniente Rolando Riquelme Araneda, el secretario de dicha fiscalía militar, empleado civil de justicia militar Mauricio Rosales Robín, los peritos del laboratorio

de criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile Rodrigo Lar looks, perito fotógrafo y doña Jimena Castillo Fierro, perito planimetrista y de los procesados Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy, Hugo Nibaldo Catalán Lagos, Germán Fernández torres y Domingo Silva Soto. El tribunal da inicio a la diligencia revisando el inmueble, constatando que se han efectuado modificaciones a la construcción original tanto en la guardia como en los calabozos. Acto seguido, el ministro solicita a los procesados que identifiquen y describan las habitaciones que constituían la primitiva sala de guardia y los calabozos. Los procesados indican y describen la disposición original de las dependencias señaladas, el tribunal inspecciona cada una de las habitaciones señaladas por los procesados, constatando los cambios, la Policía de Investigaciones fija los puntos indicados. Posteriormente el tribunal se traslada hacia el patio de la comisaria e inspecciona el edificio que los procesados señalan como las antiguas caballerizas. Se trata de una construcción mixta de dos pisos. El procesado Domingo Silva Soto advierte al tribunal que un box de estacionamiento de vehículos ha sido suprimido y en su lugar se ha habilitado una dependencia utilizada como habitación de bodega. El tribunal ordena fijar el punto indicado. El procesado Reinaldo Lukowiak indica que una de las tres dependencias ubicadas en el primer piso junto a los de estacionamiento era utilizada por él para guardar herramientas y otros materiales de uso personal. Las otras dos estaban a cargo del mariscal de la unidad, quien guardaba monturas y aperos en una, y herraduras y clavos en la otra. El tribunal ordena fijar los puntos indicados. El tribunal accede por una escalera de madera hasta el segundo piso de las dependencias de las caballerizas, pudiendo constatar que éste es de madera y que, según versiones de los procesados ha sido modificado y seccionado por cuanto antiguamente era una sola habitación. Se puede apreciar que efectivamente existían piezas y divisiones de reciente construcción. El tribunal solicita a los procesados que señalen el uso que se le daba a ese lugar y sitio exacto donde eran mantenidos los detenidos políticos en 1973. Los procesados coinciden que toda la parte norte del inmueble estaba ocupada con fardos de pasto y sacos de avena quedando los detenidos en el espacio restante. Asimismo, Lukowiak advierte al tribunal que la escalera de acceso ha sido modificada respecto de su posición original, por cuanto

antiguamente se ascendía de manera recta y ahora se le ha hecho un descanso y codo que hace subir hacia la derecha. El tribunal ordena fijar los puntos indicados. El tribunal ordena a los peritos participantes entregar sus respectivos informes directamente al ministro en visita. Se pone termino a la diligencia firmando el tribunal junto al ministro.

B.29 Copia de set fotográfico de dotación de 5° Comisaria de Carabineros de Pitruftuén del año 1973 de fs. 1.360 a fs. 1.378 (tomo V).

B.30 informe N° 0504 del Servicio registro Civil e Identificación de fs. 1.592 a fs. 1.593 (tomo VI) señala red familiar respecto de Luis Anselmo Fernández Barrera, indicando **antecedentes familiares:** titular Luis Anselmo Fernández Barrera, RUN N° 4.188.133-K, fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1940, según inscripción N° 2659 del año 1940 de la circunscripción de Estación, que actualmente corresponde a Estación Central. Contrajo matrimonio según inscripción N° 68 del año 1966 de la circunscripción de San José de la Mariquina, con doña Rosalía Silva Mardones, RUN 5.637.398-5. El último domicilio registrado por la cónyuge corresponde a León Gallo Sur N° 80, Población 18 de septiembre de la comuna de Pitruftuén. **Padres:** Anselmo Rudecindo Fernández Jiménez, run n° 1.109.989-5 Claudina Rosa del Carmen Barrera o Claudina Rosa del Carmen Barrera Valenzuela, no registra datos en la base de datos **Hijo:** Víctor Alejandro Silva Fernández RUN N° 12.990.046-6, último domicilio registrado Pasaje A N° 94, Villa Martini, comuna de Pitruftuén. **Hermanos:** ángel Ascanio Fernández barrera, RUN N° 5.075.923-7, último domicilio registrado San Eugenio N° 3538, Villa Jardín Alto, La Florida. Irma del Carmen Fernández Bailey, N° 6.223.293-5, último domicilio registrado Américo Vespucio Norte N° 322, depto. N° 21, comuna de Las Condes.

B.31 Informe N° 1186 del Servicio Médico Legal Regional Araucanía de fs. 1.944 (tomo VII), en lo pertinente espeta que revisados sus antecedentes no se encuentran registros de protocolo de autopsia de Ismael Bocaz Muñoz.

B.32 Informe N° 2037 del Servicio registro Civil e Identificación de fs. 1.946 (tomo VII), respecto de Ismael Bocaz Muñoz indica que no registra datos en la base de datos del servicio.

B.33 Informe N° 372 de la Tesorería General de la Republica de fs. 1.947 (tomo VII); respecto de Ismael Bocaz Muñoz indica que no registra datos en la base de datos del servicio.

B.34 Informe N° 564 de la Municipalidad de Pitrufrquén de fs. 1.949 de fs. 1.950 (tomo VII), indica que Ismael Bocaz Muñoz no se encuentra sepultado en el Cementerio Municipal ni otros dependientes de esa administración.

B.35 Informe N° 1216 del Departamento de Control Fronteras, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de fs. 1.950 (tomo VII), señala que respecto de Ismael Bocaz Muñoz no existen datos de entrada y salida del país.

B.36 Informe N° 740 del Servicio Electoral Región de la Araucanía de fs. 1.954 (tomo VII), respecto de Ismael Bocaz informa que no registra domicilio electoral.

B.37 Informe N° 577 del Departamento Derechos Humanos de Carabineros de Chile de fs. 1.964 a fs. 1975 (tomo VII), remite nómina de Carabineros de la Comisaria de Pitrufrquén entre septiembre y diciembre del año 1973, a fs. 1967 (Tomo VII) consta el nombre del acusado Carlos Hernán Moreno Mena.

B.38 Copia de Set fotográfico dotación 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufrquén del año 1973 de fs. 2.341 a fs. 2.359 (tomo VIII).

B.39 Informe N° 2580 del Servicio Registro Civil e Identificación de fs. 2.371 a fs. 2.376 (tomo VIII), que adjunta antecedentes familiares y certificado de nacimiento de Ismael Bocaz Muñoz, señalando como padre a Leónidas Bocaz Rodríguez y como madre a Apolonia Muñoz Muñoz, fecha de nacimiento 23 de febrero de 1942. hijos: Ginete Bocaz Peña, Carmen Bocaz Peña, Patricio Bocaz Peña y Cecilia Bocaz Peña.

B.40 Informe N° 101 de la Municipalidad de Pitrufrquén de fs. 2722 (tomo IX), refiere que Ismael Bocaz Muñoz no se encuentra sepultado en el campo santo de la dirección de desarrollo territorial.

B.41 Extracto de filiación y antecedentes de Celso Avendaño Alarcón de fs. 405 (tomo II), no registra anotaciones en el registro general de condenas.

B.42 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fs. 1928 a fs. 1929 (Tomo VII), en lo pertinente aporta antecedentes de las detenciones de Celso Avendaño Alarcón, Ismael Bocaz Muñoz y Luis Anselmo

Fernández Barrera, documento de la Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos, IX región.

B.43. Informe N° 12180 del Departamento de Control Fronteras, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de fs. 881 (tomo IV), señala que respecto de Luis Anselmo Fernández Barrera no existen datos de entrada y salida del país.

B.44 Certificados de defunción emitido por el Registro Civil e Identificación, que a continuación se indican:

a) Ramón Sergio Callis Soto de fs. 475 (tomo II) y copia de fs. 1.977 (tomo VII), consta que falleció el 03 de julio de 1976.

b) Emilio Caro Pérez de fs.476 (tomo II) copia de fs. 1.978 (tomo VII), consta que falleció el 01 de noviembre de 1994.

c) Octavio Castillo de fs. 477 (tomo II), copia de fs. 971, de fs. 1.190 (tomo IV), consta que falleció el 22 de febrero de 2007.

d) Haroldo Hernández Reyes de fs. 478 (tomo II), copia de fs. 972 (tomo IV), copia de fs. 1.980 (tomo VII), consta que falleció el 08 de junio de 1989.

e) José Eleodoro Ortiz Ulloa de fs. 479 (tomo II), copia de fs. 973 (tomo IV), copia de fs. 1.981 (tomo VII), consta que falleció el 30 de abril de 2013.

f) Pedro Nahuelhual Cuminao de fs. 480 (tomo II), copia de fs. 974 (tomo IV), copia de fs. 1.982 (tomo VII), consta que falleció el 19 de agosto de 1979.

g) Juan de Dios Asenjo Inostroza de fs. 481 (tomo II), copias de fs.481 (tomo IV), fs. 975 (tomo IV) y de fs. 1.983 (tomo VII), consta que falleció el 05 de enero de 1991.

h) Ambrosio Antipan Linconao de fs. 482 (tomo II), copia de fs. 976 (tomo IV) y fs. 1.984 (tomo VII), consta que falleció el 12 de septiembre de 1992.

i) Juan de Dios Contreras Muñoz de fs. 483 (tomo II), copia de fs. 978 (tomo IV), copia de fs. 1.985 (tomo VII), consta que falleció el 08 de abril de 1977.

j) Reinaldo Aurelio Hernández Reyes de fs. 484 (tomo II), consta que falleció el 24 de enero de 2004.

k) Gregorio Luengo Jara de fs. 485 (tomo II) copia de fs. 979 (tomo IV), consta que falleció el 07 de mayo de 1985.

l) Hernán Mella Lagos de fs. 486 (tomo II), copia de fs. 980, copia de fs. 1.191 (tomo IV), consta que falleció el 21 de marzo de 2011.

m) José Adrián Meriño Ferreira de fs. 487 (tomo II), copia de fs. 981 (tomo IV), consta que falleció el 17 de julio de 2002.

n) Germain Punulef Caniulef de fs. 488 (tomo II), copia de fs.506 (tomo II), fs. 982 (tomo IV) y fs. 1.990 (tomo VII), consta que falleció el 18 de mayo de 2003.

o) Domingo Antonio Silva Soto de fs. 489 (tomo II), copia de fs. 983 (tomo IV), copia de fs. 1.991 (tomo VII), consta que falleció el 12 de octubre de 2009.

p) José Eduardo Orellana Maldonado de fs.490 (tomo II), copia de fs. 984 (tomo IV) y fs. 1.995 (tomo VII), consta que falleció el 28 de enero de 1984.

q) Arnoldo Reuse Beraud de fs.491 (tomo II), copia de fs. 985 (tomo IV) y de fs. 1.996 (tomo VII), consta que falleció el 17 de marzo de 2008.

r) Juan Nolberto Caamaño Toledo de fs.492 (tomo II), copia de fs. 986 (tomo IV) y de fs. 1.997 (tomo VII), consta que falleció el 30 de enero de 1995.

s) Jaime Arturo Carrasco Nuñez de fs.493 (tomo II), copia de fs. 493 (tomo II), fs. 987 (tomo IV) y de fs. 1.998 (tomo VII) consta que falleció el 25 de septiembre de 2003.

t) Jorge Saldías Goyeneche de fs.494 (tomo II), copia de fs. 988 (tomo IV) y de fs. 1.999 (tomo VII), consta que falleció el 19 de septiembre de 2000.

u) José Cristino Mellado Osses de fs.495 (tomo II), copia de fs. 989 (tomo IV) y de fs. 2.000 (tomo VII), consta que falleció el 16 de enero de 2008.

v) Carlos Eustaquio Valdebenito Aguillon de fs.496 (tomo II), copia de fs. 990 (tomo IV) y de fs. 2.001 (tomo VII), consta que falleció el 18 de marzo de 2013.

w) Luis Ernesto Vergara de fs.497 (tomo II) copias de fs. 991 (tomo IV) y fs. 2.002 (tomo VII), consta que falleció el 15 de agosto de 1986.

x) Víctor Antonio Toledo Uribe de fs.498 (tomo II), copia de fs. 992 (tomo IV) y de fs. 2.003 (tomo VII), consta que falleció el 02 de mayo de 2000.

y) Omar Armando Segundo Beltrán Bustamante de fs.499 (tomo II), copia de fs. 993 (tomo IV), fs. 2.004 (tomo VII) y fs. 2.005 (tomo VII), consta que falleció 16 de abril de 1992.

z) Rubinaldo Ulloa López de fs.500 (tomo II), copia de fs. 994 (tomo IV) y fs. 2.006 (tomo VII), consta que falleció el 02 de noviembre de 2012.

aa) Ricardo Voisier Riquelme de fs.501 (tomo II), copia de fs. 995 (tomo IV) y fs. 2.007 (tomo VII), consta que falleció el 14 de noviembre de 2005.

bb) Pablo Curimil Cariman de fs.502 (tomo II), copia de fs. 996 (tomo IV), consta que falleció el 22 de septiembre de 2009.

cc) Flavio José Urra Guíñez de fs.503 (tomo II), copia de fs. 997 (tomo IV), consta que falleció el 20 de mayo de 2012

dd) Nemesio Saldias Sepúlveda de fs.504 (tomo II), copia de fs. 998 (tomo IV), consta que falleció el 07 de febrero de 1990.

ee) José Domingo Cerda Muñoz de fs.505 (tomo II), copia de fs. 999 (tomo IV), consta que falleció el 11 de enero de 2012.

ff) Guillermo Gacitúa Riquelme de fs.507 (tomo II), copia de fs. 1.001 (tomo IV), copia de fs. 2.004 (tomo VII), consta que falleció el 05 de mayo de 1994.

gg) Hernando Atilio Madariaga Fernández de fs.521 (tomo II), copia de fs. 1.125 (tomo IV), consta que falleció el 08 de abril de 2014,

hh) Hugo Nibaldo Catalán Lagos de fs.657 (tomo I), de fs. 1.045 a fs. 1.046 (tomo IV), consta que falleció el 23 de octubre de 2018.

ii) Guillermo Fabio Muñoz Rohde de fs.690 (tomo II), consta que falleció el 05 de mayo de 2019.

jj) Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy de fs.800 (tomo III), copia de fs. 1.784 (tomo VI) y de fs. 2.808 (tomo IX), consta que falleció el 03 de septiembre de 2022.

kk) Yolanda María Marchioni Brun de fs. 1.491 (tomo V), consta que falleció el 24 de agosto de 2011.

ll) Pablo Fernando Maurer Werner de fs. 1.615 (Tomo VI), consta que falleció el

mm) Emilio Alejandro Bornand Dumont de fs. 1.616 (tomo VI), consta que falleció el

nn) Rogelio Alberto Robín Peigna de fs. 1.617 (tomo VI), consta que falleció el 18 de septiembre de 2003.

oo) Manuel Rubén Chávez Arias de fs. 1.618 (tomo VI), consta que falleció el 16 de abril de 2008.

pp) Héctor Muñoz Medina de fs. 1.619 (tomo VI), consta que falleció el 16 de enero de 2002.

qq) Domingo Eustaquio Muñoz Coloma de fs. 1.620 (tomo VI), consta que falleció el 21 de octubre de 1998.

rr) Manuel Jesús Verdugo Reyes de fs. 1850 (tomo VI), consta que falleció el 29 de octubre de 2019.

ss) José Domingo Cerda Muñoz de fs. 1994 (tomo VII) consta que falleció el 11 de enero de 2012.

tt) Dominica Aguilera Caamaño de fs. 2.567 (tomo VIII); consta que falleció el 21 de enero de 2015.

B.45 Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Policía de Investigaciones de Chile que se desglosan de la siguiente forma:

- a)** De fs.98 a fs.99 (tomo I), informe policial N° 837/202 en lo pertinente contiene individualización de testigos del proceso, sin declaraciones.
- b)** De fs.121 a fs.138 (tomo I), informe policial N° 5761/702 que contiene declaración voluntaria de Hugo Catalán Lagos, Eleodoro Merino Salas Arnoldo Villagrán Fica, Germán Fernández Torres, Pedro Zárate Rojas, reinaldo Lukowiak Luppy.
- c)** De fs.174 a fs.190 (tomo I), informe policial N° 3640/202 en lo pertinente aporta declaración voluntaria de Emeraldina Stancobich Meriño, Dagoberto Anabalón Ríos, Guillermo Muñoz Rodhe, Rodolfo Lagos Rivera, Luis Becerra Jaramillo,
- d)** De fs.398 a fs.400 (tomo II), informe policial N° 2316/202 en lo pertinente remite individualización de Eduardo Avendaño Stancobich.
- e)** De fs.532 a fs.542 (tomo II), informe policial N° 1874/202 en lo pertinente contiene declaración voluntaria de Juan Rioseco Montoya, René Teillier del Valle.
- f)** De fs.576 a fs.580 (tomo II), informe policial N° 5178/202, en lo pertinente individualización de testigos de la época.

- g)** De fs.623 a fs.630 (tomo II), informe policial N° 03031/202, que contiene declaración voluntaria de Gabriel Nesbet Soto.
- h)** De fs.631 a fs.637 (tomo II), informe policial N° 03413/202, declaración de ex funcionario de Carabinero.
- i)** De fs.698 a fs.702 (tomo II), informe policial N° 01007/202, contiene declaración voluntaria de Dagoberto Anabalón Ríos.
- j)** De fs.723 a fs.723 (tomo III), informe policial N° 00272/202, contiene individualización de testigos de la época.
- k)** De fs.746 a fs.755 (tomo III), informe policial N° 04956/202, contiene declaración voluntaria de Jorge Henríquez Muñoz y Juan Prado Ponce.
- l)** De fs. 1.003 a fs. 1.017 (tomo IV), informe policial N° 4864/202 contiene declaraciones de testigos.
- m)** De fs. 1.018 a fs. 1.032 (tomo IV), informe policial N° 4816/202, contiene declaración voluntaria de Placido Carrillo Hermosilla, Hernán Barrales Cerda, Raúl Mora Vallejos.
- n)** De fs. 1.037 a fs. 1.048 (tomo IV), informe policial N° 1003/202 declaraciones de ex funcionarios policiales y testigos.
- o)** De fs. 1.101 a fs. 1.105 (tomo IV), informe policial N° 4133/702, contiene individualización de testigos de la época.
- p)** De fs. 1.140 a fs. 1.158 (tomo IV); informe policial N° 5768/702, contiene declaración voluntaria de Hugo Catalan Lagos, Eleodoro Merino Salas, Arnoldo Villagrán Fica, Germán Fernández Torres, Pedro Zárate Rojas y Reinaldo Lukowiak Luppy.
- q)** De fs. 1.381 a fs. 1.423 (tomo V), informe policial N° 2624/202 contiene declaraciones voluntarias de Elcides Gubelin Duran, Guillermo Muñoz Rodhe, Dagoberto Anabalón Ríos, Jorge Henríquez Muñoz, Arnoldo Villagrán Fica, Eleodoro Meriño Salas, Benjamín Chávez Saavedra y Rubén López Llanos,
- r)** De fs. 1.501 a fs. 1.511 (tomo V), informe policial N° 1874/202, contiene declaración voluntaria de Fernando Rioseco Montoya y René Teillier del Valle.
- s)** De fs. 1.601 a fs. 1.608 (tomo VI), informe policial N° 03031/202, declaración voluntaria de Gabriel Nesbet Soto.

- t)** De fs. 1.630 a fs. 1.636 (tomo VI), informe policial N° 04851/202, declaración voluntaria de Oriel Salvo Maldonado.
- u)** De fs. 1.706 a fs. 1.709 (tomo VI), informe policial N° 03820/202 que contiene individualización de testigos de la época.
- v)** De fs. 1.716 a fs. 1.721 (tomo VI), informe policial N° 01061/202 que contiene declaración voluntaria de Juan Ortíz Sáez.
- w)** De fs. 1.824 a fs. 1.828 (tomo VI); informe policial N° 00534/202 que contiene declaración voluntaria de Ángel Fernández Barrera.
- x)** De fs. 1.957 a fs. 1.961 (tomo VII), informe policial N° 3821/202 que contiene declaración voluntaria de Isolina Peña Pérez.
- y)** De fs. 2.009 a fs. 2.033 (tomo VII), informe policial N° 4933/202 que contiene declaración voluntaria de Arnoldo Villagrán Fica, Eleodoro Merino Salas, Placido Carrillo Hermosilla, Hernán Barrales Cerda y Raúl Mora Vallejos.
- z)** De fs. 2.035 a fs. 2.045 (tomo VII), informe policial N° 4927/202 que contiene declaración voluntaria de Arnoldo Villagrán Fica Eleodoro Merino Salas.
- aa)** De fs. 2.096 a fs. 2.098 (tomo VII), informe policial N° 2996/202 que contiene declaración voluntaria de Raúl Lagos Cerda.
- bb)** De fs. 2.130 a fs. 2.134 (tomo VII), informe policial N° 6232/202 que contiene declaración voluntaria de Nibaldo Epuñan Currihual.
- cc)** De fs. 2.378 a fs. 2.413 (tomo VIII); informe policial N° 2692/220 que contiene declaración voluntaria de Rubén López Llanos, Arnoldo Villagrán Fica, Benjamín Chávez Saavedra, Jorge Henríquez Muñoz, Eleodoro Merino Salas, Elcides Gubelín Durán.
- dd)** De fs. 2.465 a fs. 2.492 (tomo VIII), informe policial N° 2775/220 que contiene declaración voluntaria de Rubén López Llanos, Arnoldo Villagrán Fica, Benjamín Chávez Saavedra, Eleodoro Merino Salas, Elcides Gubelín Durán y René Teillier del Valle.
- ee)** De fs. 2.578 a fs. 2.592 (tomo VIII), informe policial N° 1874/202 que contiene declaración voluntaria de Fernando Rioseco Montoya, René Teillier del Valle,
- ff)** De fs. 2.599 a fs. 2.606 (tomo VIII), informe policial N° 00449/202 que contiene declaración voluntaria de Sofía Bocaz Muñoz.

- gg)** De fs. 2.756 a fs. 2.759 (tomo IX), informe policial N° 01360/202, en lo pertinente adjunta declaración testigo.
- hh)** De fs. 2.766 a fs. 2.772 (tomo IX), informe policial N° 03889/202 que contiene declaración voluntaria de Raúl Lagos Cerda,
- ii)** De fs. 2.799 a fs. 2.805 (tomo IX) informe policial N° 02062/202, contiene declaración voluntaria de Patricio Bocaz Peña.
- jj)** De fs. 2.851 a fs. 2.854 (tomo IX); informe policial N° 02921/202, contiene declaración voluntaria de Mauricio Teillier del Valle.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado lo que se indicará a continuación.

A. Que luego del 11 de septiembre de 1973 y el golpe de Estado que afectó al país, producto de una orden emanada en todo el país a las instituciones armadas y de orden, la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén aumentó su dotación al replegarse unidades inferiores a ella, tal es el caso de los retenes de Lastarria y los Galpones; debiendo además los uniformados pernoctar en dicho recinto policial, pues la orden los obligaba a permanecer en estado de acuartelamiento o grado 1.

B. Que al mando de esta unidad y sus unidades dependientes como superior jerárquico, se encontraba el Capitán Ramón Sergio Callis Soto (fallecido de fs. 475 tomo II, copia de fs. 1.977 tomo VII), quien organizó y coordinó un grupo especial de patrullas de carabineros compuesto por funcionarios de la unidad a su cargo, para el control y detención de personas por motivos políticos en Pitrufquén y comunas aledañas como Toltén, Hualpín, Lastarria, Comuy, Los Boldos, Queule, Quitratué y Los Galpones; entre los que se encontraba el teniente Carlos Hernán Moreno Mena, quien le seguía en el mando; el suboficial Mayor Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy (fallecido de fs.800 tomo III, copia de fs. 1.784 tomo VI) tercer hombre en la jerarquía de la unidad; además de los uniformados, Germán Fernández Torres, Domingo Antonio Silva Soto (fallecido de fs. 489 tomo II, copia de fs. 983 tomo IV), Hernán Mella Lagos (fallecido de fs. 486 tomo II, copia de fs. 980, copia de fs. 1.191 tomo IV), Emilio Caro Pérez (fallecido de fs.476 tomo II,

copia de fs. 1.978 tomo VII), Octavio Castillo (fallecido de fs. 477 tomo II, copia de fs. 971, de fs. 1.190 (tomo IV), Haroldo Hernández Reyes (fallecido de fs. 478 tomo II, copia de fs. 972 tomo IV), José Eleodoro Ortiz Ulloa (fallecido de fs. 479 tomo II, copia de fs. 973 tomo IV, copia de fs. 1.981 tomo VII,) Pedro Nahuelhual Cuminao (fallecido de fs. 480 tomo II, copia de fs. 974 tomo IV, copia de fs. 1.982 tomo VII, Pedro Zarate Rojas, Juan Asenjo Rojas (fallecido de fs. 481 tomo II, copia de fs. 975 tomo IV, copia de fs. 1.983 tomo VII), Eleodoro Merino Salas, Ambrosio Antipan Linconao (fallecido de fs. 482 tomo II, copia de fs. 976 tomo IV, copia de fs. 1.984 tomo VII, Hugo Catalán Lagos (fallecido de fs.657 tomo I, Juan Contreras Muñoz (fallecido de fs. 483 tomo II, copia de fs. 978 tomo IV, copia de fs. 1.985 tomo VII), Reinaldo Hernández Reyes (fallecido de fs. 484 tomo II), José Meriño Ferreira (fallecido de fs. 487 tomo II, copia de fs. 981 tomo IV), Carlos Ramírez Gatica, Germain Punulef Caniulef (fallecido de fs. 488 tomo II, copia de fs.506 tomo II, copia de fs. 982 tomo IV, copia de fs. 1.990 tomo VII), Arnoldo Villagrán Fica y David Pinilla Novoa, según consta en nómina de personal de la 5° comisaria de Pitrufquén de los meses septiembre a diciembre de 1973 de fs.463, (tomo II) y las declaraciones de los ex funcionarios de Carabineros de Toltén y Los Galpones Juan Alfonso Prado Ponce de fs.733 a fs.734 y fs.769 a fs.774 (tomo III); Luis Arnoldo Becerra Jaramillo de fs.147 a fs.148, de fs.189 a fs.190, (tomo I) de fs.679 a fs.680, (tomo II) y fs.717 a fs.718 (tomo III); Guillermo Fabio Muñoz Rhode de fs.164 a fs. de fs.186 (tomo I) y de fs.524 a fs.525 (tomo II); Juan Fernando Rioseco Montoya de fs.274 a fs.276 (tomo I), de fs.538 a fs.539 y de fs.544 a fs.545 (tomo II); Raúl Fernando Mora Vallejos de fs.1.031 a fs.1.032 (tomo IV), y Francisco Javier Navarrete Quijon de fs.1.047 a fs.1.048 (tomo IV) y de fs.1.113 a fs.1.114 (tomo IV).

C. Que Celso Avendaño Alarcón, mueblista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, vivía junto a su familia en la comuna de Pitrufquén, donde era reconocido por sus habitantes por su trabajo en la comuna y alrededores. Para el día 25 de octubre de 1973, tras ser dejado en libertad tras cumplir una condena en la cárcel pública de Pitrufquén, según declaraciones de Hernando Atilio Madariaga Fernández de fs.430 a fs. 432 (tomo II) y de fs.1.015 a fs.1.016 (tomo IV), fue nuevamente detenido por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén en la

comuna, que lo suben en una camioneta donde es visto arriba de ella por Dominica Aguilera Caamaño (fallecida de fs. 2.567, tomo VIII), según sus declaraciones de fs.283, (tomo I), copia de fs.1.276, (tomo IV), copia de fs.2.237, (tomo VII) y de fs.438 a fs.440 (tomo II), copia de fs.1.452 fs.1.454, (tomo V), copia de fs.2442 a fs.2.444 (tomo VIII); tras detener a otras personas ese mismo día. Desde ese momento se le pierde el rastro hasta la actualidad. Además de las declaraciones de Rosalía Silva Mardones de fs.423 a fs.424 (tomo II) y de fs.567 a fs.569 (tomo II); Luis Arnoldo Becerra Jaramillo fs.147 a fs.148, de fs.189 a fs.190, (tomo I) y de fs.679 a fs.680 (tomo II); María Elena Calfuquir Henríquez de fs.225 a fs.230 (tomo I) y de fs.857 a fs.864 (tomo III); Orfelina Vásquez Vásquez de fs.61 (tomo I), de fs.388 a fs.389 (tomo II) y de fs.390 a fs.391 (tomo II); Octavio Castillo de fs.232 a fs.233 (tomo I) e informe de Presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX región de fs.6 a 7 (tomo I), copia fs.1.928 a fs.1.929 (tomo VII).

D. Que el mismo día de detención de Celso Avendaño Alarcón, es detenido Luis Anselmo Fernández Barrera, comerciante, artesano, militante del Partido Socialista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, que vivía junto a su esposa e hijos en el centro de Pitrufrquén, quien es sacado de su domicilio por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufrquén, siendo testigos presenciales de este hecho, su esposa Rosalía Silva Mardones según sus declaraciones de fs.951 a fs.952 y de fs.1.112 (tomo IV), y su vecina Dominica Aguilera Caamaño (fallecida de fs. 2.567, tomo VIII), según sus declaraciones de fs.283 (tomo I), copia de fs.1.276 (tomo IV), copia de fs.2.237 (tomo VII), de fs.438 a fs.440 (tomo II), copia de fs.1.452 fs.1.454 (tomo V), copia de fs.2442 a fs.2.444 (tomo VIII); quienes reconocen entre sus aprehensores a los carabineros Reinaldo Lukowiak Luppy (fallecido de fs.800, tomo III, copia de fs. 1.784, tomo VI) y Octavio Castillo (fallecido de fs. 477 tomo II, copia de fs. 971, de fs. 1.190, tomo IV). Inmediatamente es subido a una camioneta por los funcionarios, donde además ven detenido a Celso Avendaño Alarcón y otras personas. Ambas mujeres se dirigen a la 5° comisaria de Pitrufrquén para consultar del paradero de Fernández Barrera, donde se les niega que este detenido allí, que no insistan en su búsqueda, a pesar de sus esfuerzos y consultas por diversos destacamentos en la región. Hasta el día de hoy se desconoce el

paradero de Luis Anselmo Fernández Barrera; además corroborando lo anterior las declaraciones de María Elena Calfuquir Henríquez de fs.225 a fs.230 (tomo I) y de fs.857 a fs.864 (tomo III); y Ángel Ascanio Fernández Barrera de fs.1.058 a fs.1.059 (tomo IV), de fs.1.827 a fs.1.828 y 1.853 a fs.1.854 (tomo VI) e informe de Presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX región de fs.6 a 7 (tomo I), copia fs.1.928 a fs.1.929 (tomo VII).

E. Que Ismael Rolando Bocaz Muñoz, casado, funcionario de la Gobernación y militante del Partido Comunista, tras allanarse su domicilio en calle Vicuña Mackenna tres veces y ser requerido por funcionarios de la 5° comisaría de Pitrufuquén, se presenta voluntariamente en dependencias de la mencionada comisaría el 18 de octubre de 1973. No obstante, lo anterior y pese a las gestiones de su esposa Isolina Peña Pérez para encontrarlo, desde ese día no se tienen noticias del paradero de Ismael Bocaz Muñoz; según declaraciones de sus familiares Isolina Peña Pérez de fs.1.960 a fs. 1.961 y de fs.2.122 a fs.2.123 (tomo VII), Patricio Leónidas Bocaz Peña de fs.2.804 y de fs.2.849 a fs.2.850 (tomo IX). Además de las de declaraciones de María Elena Calfuquir Henríquez de fs.225 a fs.230 (tomo I) y de fs.857 a fs.864 (tomo III); Rubén Darío López Llanos de fs.2479 a fs.2480 y de fs.2.514 a fs.2.515 (tomo VIII) y Dominica Aguilera Caamaño (fallecida de fs. 2.567, tomo VIII) de fs.283 (tomo I) copia de fs.1.276 (tomo IV), copia de fs.2.237 (tomo VII), fs.438 a fs.440 (tomo II), copia de fs.1.452 a fs.1.454 (tomo V), copia de fs.2.442 a fs.2.444 (tomo VIII) e informe de Presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX región de fs.6 a 7 (tomo I), copia fs.1.928 a fs.1.929 (tomo VII).

F. Que hasta esta fecha ningún funcionario público de las Fuerzas Armadas, en especial el mando de Carabineros de Chile que se desempeñaba en la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo realmente acontecido, respecto al destino de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz. Manteniéndose tal situación hasta el día de hoy.

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados, constituyen el delito de secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz

Muñoz, previstos y sancionados en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema, en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

1. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidios calificados de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

2. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

3. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidios calificados de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

4. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

5. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

6. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

7. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el delito de homicidios calificados de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

8. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

9.Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

10.Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

11. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

12. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

13. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

14. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

15.Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

16.Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

17. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

18. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

19. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

20. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por los homicidios calificados en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

21. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

22. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

23. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

24. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por los homicidios calificados en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

25. Causa rol 1-2013 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque Lican y Abel Florencio Colpihueque Lican; apremios ilegítimos de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican; y homicidios calificados de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Licán, sentencia de 24 de mayo de 2019.

26. Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidios calificados en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

27. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de secuestro calificado en la persona de Segundo Elías

Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

28. Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

29. Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

30. Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

31. Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

32. Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

33. Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

34. Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

35. Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidios calificados y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

36. Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

37. Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

38. Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

39. Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por los homicidios calificados en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

40. Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019.

41. Causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de Alejandro Ancao Paine, sentencia de 03 de septiembre de 2021.

42. Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

43. Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia del 13 de junio de 2019.

44. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de José Edulio Muñoz Concha, sentencia del 30 de abril de 2021.

45. Causa rol 5-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por aplicación de tormentos de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

46. Causa rol 113.999 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

47. Causa rol 114.058 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos de Manuel Antivil Huenuqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

48. Causa rol 6.345 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

49. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el homicidio calificado de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

50. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

51. Causa rol 18.782 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

52. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

53. Causa rol 45.355 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

54. Causa rol 18-2011 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

55. Causa rol 63.551 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

56. Causa rol 113.969 de ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, sentencia de 2 de enero de 2020.

57. Causa rol 2-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Domingo Pérez San Martín, sentencia de 14 de octubre de 2020.

58. Causa rol 24.428 del ingreso del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia de 31 de octubre de 2023. Todos los fallos anteriores condenatorios.

59. Causa rol 114.034 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf, sentencia del 03 de agosto de 2022.

60. Causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por aplicación de tormentos y detención ilegal, sentencia del 09 de agosto de 2022.

61. Causa rol 25-2011 de ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Reinaldo Rosas Asenjo, sentencia del 19 de diciembre de 2022.

62. Causa rol 113.975 de ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por los delitos de homicidio calificado y apremios ilegítimos de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, sentencia del 26 de agosto de 2022.

63. Causa rol 45.357 de ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Sergio del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera, sentencia del 22 de julio de 2021. Todos los fallos anteriores condenatorios.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Que la Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones

reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más

amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que, si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del

silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (Michel Taruffo (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, N° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).

Declaraciones indagatorias.

8°) Declaración indagatoria de **Carlos Hernán Moreno Mena** (26 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 142 a fs. 143 (Tomo I), copia a fs. 1162 a fs. 1163 (Tomo IV) y de fs. copia de fs. 2.137 a fs. 2.138 (Tomo VII), de fs. 159 a fs. 162 (tomo I), copia de fs. 1177 a fs. 1180 (Tomo IV) y de fs. 2.296 a fs. 2.299 (tomo VIII), fs.218 a fs.221 (tomo I), copia a fs. de fs. 1.210 1.213 (tomo IV) y de fs. 2.172 a fs. 2.175(Tomo VII), de fs.236 a fs.237 (tomo I) copia de fs. 1.229 a fs. 1.230 (Tomo V) y de fs. 2.190 a fs. 2.191 (Tomo VII), fs. 240 a fs. 242 (Tomo I), copia a fs. de fs. 1.233 a fs. 1.235 (Tomo V) y de fs. 2.194 a fs. 2.196 (Tomo VII), de fs. 271 (Tomo I), copia a fs. 1264 (Tomo V) y de fs. 2225 (Tomo VII), de fs. 1.241 a fs. 1.242 (Tomo V), con copia a fs. 2.202 a fs. 2.203 (Tomo VII), fs. 1.244 (Tomo V), fs. 1263 (Tomo V), fs. 1449 a fs. 1450 (Tomo V) y con copia a fs. 2.439 a fs. 2.440 (tomo VIII) y de fs. 2221 (Tomo VII), con copia a fs. 1260 (Tomo V).

En **declaración extrajudicial** del 23 de noviembre de 2014 de **fs. 142 a fs. 143 (Tomo I)**, copia a fs. 1162 a fs. 1163 (Tomo IV) y de fs. 2.137 a fs. 2.138 (Tomo VII). Refiere que el 11 de septiembre de 1973 era parte de la dotación de la 5° Comisaria de Pitruquén, la cual se encontraba a cargo del Capitán Sergio Callis Soto, además de los funcionarios, Suboficial Reinaldo Lukowiak Luppy, Sargento Segundo Aroldo Hernández Reyes, Sargentos Emilio Caro y Germán Fernández, Cabos primeros Reinaldo Hernández Reyes, Carlos Ramírez y Antonio Silva Soto, Cabos Juan Asenjo Inostroza, Nibaldo Catalán Lagos y otros que no recuerda.

Haciendo mención que era el segundo después de Callis. Tras el pronunciamiento militar su labor fue la seguridad exterior y a los servicios públicos de Pitruquén. Espeta que no tuvo conocimiento de un grupo especial o de interrogatorios al interior de la Comisaria donde se desempeñaba. Empero actualmente se enteró que existió dicha agrupación, ignorando quienes la integraban. Efectivamente en la unidad hubo detenidos de los cuales ignora su identidad, dicha información la manejaban los Suboficiales de guardia y cuarteros, rememora que las detenciones que él efectuó fueron del señor Tenorio y Lobos, desconociendo que ocurrió con ellos posterior a la detención. De la víctima Juan Nancuñil Reuque, desconoce todo antecedente al respecto. Precisa que su función se realizaba fuera del cuartel. Asevera que no participó ni observó torturas ni muertes de civiles por parte de Carabineros, así como tampoco supo que en la unidad el cuarto de forraje fuese un centro de tortura o detención, pese a ser el segundo de la unidad. Con posterioridad el Suboficial Castillo le indicó que atendido al número de detenidos, no había donde dejarlos, quedando en las caballerizas.

En declaración judicial del 04 de junio de 2015, de **fs. 159 a fs. 162 (tomo I)**, copia de fs. 1177 a fs. 1180 (Tomo IV) y de fs. 2.296 a fs. 2.299 (tomo VIII). Ratifica su declaración extrajudicial de fs. 242 a fs. 243 de la causa rol 29.881 del Juzgado de Letras de Pitruquén. Ratifica declaraciones que rolan de fs. 218 a fs. 219 vta., fs. 522 a fs. 523, fs. 654, fs. 656, fs. 657 de causa rol 28.291-A de ingreso criminal el Juzgado de Letras de Pitruquén. Dice que el Capitán Callis tenía su personal de confianza y el deponente no estaba en ese grupo. Precisa que no ingreso a las caballerizas o cuartos de forraje de la época. Cuenta que Octavio Castillo no era una persona de confianza del Capitán Callis, al parecer tenía ideas de izquierda. Si el Comisario Callis salía de la unidad, nadie quedaba a cargo de ella. Él se llevaba una radio y desde ahí impartía instrucciones. Siempre estaban resueltas las situaciones cotidianas o las resolvía por la radio, incluso él tenía mucha confianza con Lukowiak. No vio que parte de la superioridad de Carabineros de la región hayan ido a supervisar lo que ocurría en la unidad. No se hacían visitas inspectivas. Refiere que cuando se investigó el caso por el cual fue condenado, no se dejó consignado que Callis lo tenía amenazado y que no era de su confianza. Quien escuchó y supo de eso fue el detective Vielma, quien investigó

la causa donde fue condenado. Aclara que siempre que detuvo personas lo hizo por órdenes escritas emanadas de la Fiscalía Militar o de Carabineros. El único fundamento para detener eran su filiación política. Recuerda muy bien al Capitán Callis que el trabajando en labores menores y no tenía nada que ver con los detenidos que se mantenía en la Comisaria. Reitera que no era una persona de confianza de Callis y por eso solo detuvo a dos personas, a saber Tenorio y Lobos. Urde que no tuvo ningún tipo de contacto con los detenidos que estaban al interior de la Comisaria. Recuerda, eso sí, que los calabozos estaban repletos de personas. Aproximadamente a mediados o fines de octubre de 1973 se enteró que habían detenidos en el segundo piso de la Comisaria de Pitrufquén. Sobre el destino de los detenidos que se encontraban en la Comisaria de Pitrufquén, en una ocasión estando en la calle, un camión de un civil al parecer de apellido Baer se llevó un lote de detenidos desde la Comisaria de Pitrufquén hasta Temuco, según lo que pudo averiguar. No supo cuál fue el destino de los otros detenidos. Proclama que su oficina estaba ubicada al lado de la de Callis y sus labores consistían en revisar los libros de guarida, las novedades, instruir a los subalternos de los documentos que deben hacer, entre otras cosas. Eso en situaciones normales después del 11 de septiembre de 1973 Callis le quito esas funciones, porque no era de su confianza, enviándolo a efectuar labores de guardia en la población, junto a dos carabineros de los cuales no recuerda su nombre. Delibera que no recuerda donde pernoctaba en la época, era soltero y al parecer algunas veces lo hizo al interior del vehículo. Hubo una persona que llegó a preguntar por familiares detenidos, la señora de Gastón Lobos no atendió a nadie más. Desarrolla que tenía conciencia de que estaban sucediendo cosas irregulares posterior al 11 de septiembre de 1973, pero no las cuestionó al jefe ni dio cuenta a la superioridad. En todo caso, cuando se daba cuenta debía probarse lo que se consideraba irregular. Además, a Callis le llegaban documentos muy clasificados y la situación que el deponente consideraba irregular, podía no serlo por desconocerlo. Los nombres de Luis Anselmo Fernández Barrera, Celso Segundo Avendaño Alarcón, Ismael Rolando Bocaz Muñoz, Héctor Ñancugil Reuque, Pedro Curihual Paillán, es primera vez que escucha sus nombres. Se refiere a un hecho ocurrido respecto de Ricardo Segundo Bustos Martínez y Daniel Sepulveda

Contreras. Ignora si funcionarios de otras unidades dependientes de la Comisaria de Pitrufquén trasladaron detenidos desde sus recintos policiales hasta la Comisaria de Pitrufquén, no supo que haya habido fallecidos al interior de la Comisaria. En esa época había una central de la FACH en el río Allipén, quienes tenían contacto radial permanente con Callis.

En **declaración judicial** del 15 de octubre de 2002, **de fs.218 a fs.221 (tomo I)**, copia a fs. de fs. 1.210 1.213 (tomo IV) y de fs. 2.172 a fs. 2.175(Tomo VII). Manifiesta que entre el año 1971 o 1972 ascendió al grado de Teniente y prestaba servicio en la undécima región y no recuerda bien si ese mismo año es que fue trasladado a la quinta Comisaria de Pitrufquén, a cargo de Ramón Sergio Callis, jefe directo. Se refiere a la víctima Gastón Lobos Barrientos y los hechos relativos a su detención. Con respecto a los hechos, sospecha que el actuar del Comisario señor Callis, era bastante dudoso, debido a que por muchos años posteriores al año 1973 cuando ese estaba trasladado en Santiago por rumores supo que por mutuo propio había ajusticiado a personas de izquierda, lo que se descubrió después, se le sumario y ahí se suicidó, eso ocurrió en la Prefectura de Carabineros sur de Santiago. Otro dato que puede ayudar es que en cierta ocasión y a la distancia, cuando ya se iba observó un helicóptero que salió de la Comisaria y al preguntar después, nadie sabía nada e incluso el propio Comisario no lo aclaró, como también la ubicación extraña de ciertas fuerzas que, siendo uniformados, parecían ser del ejército y merodeaban el cuartel o vigilaban. Respecto a la participación de civiles, soflama que el Capitán Callis se reunió con diferentes personas que en general no conocía, otras sí, pero se reunían exclusivamente con él larga y latamente, al preguntarle por qué iban y se demoraban tanto. No conocía la real dimensión de las reuniones. Ratifica que el nunca cometió un crimen delante del deponente. La gente que detuvo, fue mediante mandato y exclusivamente para ponerlo a disposición de la autoridad legal, que era él y el local a donde llevaba el detenido y desde allí se desvinculaba. Manifiesta que él solo le exhibía las órdenes, nunca las tuvo en su poder, porque él regularizaba el sistema. Continúa refiriéndose a la detención del señor Lobos. De las personas que detuvo, recuerda que nunca le hicieron daño a su persona o la institución, quizás por eso no le son familiares o ignora de que se les habría

acusado para llevarlos detenido. No vio ni supo de algún subalterno que haya cometido algún crimen, ni siquiera de oídas. Cuenta que los civiles que podrían haber estado eran aquellos que llevaban el rancho a Carabineros, no vio a ninguno de ellos participando en la detención y seguramente también prestaban vehículos a petición expresa del Capitán Callis. Adopta que todo lo que sucedió era porque el Comisario llevaba la potestad total, única y exclusiva de todo el acontecimiento, por tanto, era imposible tomar decisiones ajenas a su voluntad. Funda que fuera de la detención de Lobos, participó en la detención de otras personas en Pitrufrquén, ordenadas por el señor Callis. Blasona que en una oportunidad el Capitán Callis, personalmente hizo unos cambios de gerente en el banco de estado, llevando preso al que estaba en funciones. Delibera que permaneció en Pitrufrquén hasta el año 1974 y luego fue destinado a Villarrica, jubilando en el año 1991, como Teniente Coronel, en la ciudad de Los Ángeles. Comunica que las ordenes provenían de la Fiscalía Militar de Carabineros de Temuco. Ignora si hubo excavaciones en la localidad.

En **declaración extrajudicial** del 07 de agosto de 2005, de **fs.236 a fs.237 (tomo I)** copia de fs. 1.229 a fs. 1.230 (Tomo V) y de fs. 2.190 a fs. 2.191 (Tomo VII). Habla que a partir del 11 de septiembre de 1973 prestaba servicios en la quinta Comisaria de Pitrufrquén, desde un breve tiempo a la fecha. Esa unidad se encontraba al mando del Capitán Ramón Sergio Callis Soto, actualmente fallecido. De los hechos ocurridos en Pitrufrquén en la fecha indicada, dice que ha sido interrogado en varias oportunidades. Barbulla que eran dos los Oficiales que integraban la dotación de la unidad y 23 subalternos aproximadamente, sin que se acuartelara el personal de los destacamentos de la Comisaria en ella. En relación a las funciones que recuerda, cuya nomina se le lee, dice rememorar al Suboficial Mayor Reinando Lukowiak Luppy, como hombre de confianza de Ramón Callis Soto, el vice Sargento 1° Octavio Castillo, Sargento 2° Juan de Dios Asenjo Inostroza, Cabos Ambrosio Altipan Linconao, Hugo Nibaldo Catalán Lagos, Hernán Mella Lagos y Eugenio Ramirez Gatica (buen dactilógrafo) y el Sargento Pedro Nahuelhual Cuminao. En relación al material rodante existente en la Comisaria, había una camioneta de color verde cerrada, además de una camioneta C-10, marca Chevrolet, cabina simple. De las funciones que desarrolló a partir del 11 de

septiembre, eran principalmente las de carácter policial en la población. Es por eso que pasaban principalmente en la calle efectuando patrullajes sin personal designado para el efecto. Atestigua que en la Comisaria se adoptaron procedimientos de detenciones de personeros de izquierda desconocidos para el deponente, ejemplifica con el ex intendente de Temuco don Gastón Lobos Barrientos, desde su domicilio, quien posteriormente fue trasladado por funcionarios designados por el Capitán Callis hasta Temuco. El origen de las detenciones, emanaban de la Fiscalía Militar de Carabineros de la Prefectura Cautín, cuyo fiscal era el Comandante Gonzalo Arias Gonzalez. Utiliza que los procedimientos de detenciones de gente de izquierda las efectuó en compañía del Suboficial Lukowiak. Anexa que participó en un procedimiento de un grupo de personas encargadas por asuntos políticos, era de noche y fue junto a Lukowiak y Catalán, sin que pueda determinar la identidad de dichos detenidos, porque no los conocía. Adosa que siempre concurrió premunido de un decreto judicial, emanado de la respectiva Fiscalía. Esas personas, eran llevadas de inmediato al cuartel, donde quedaban a disposición de la guardia, según lo ordenaba Callis. Con posterioridad supo que las caballerizas existentes en la Comisaria fueron utilizadas para mantener detenidos, los cuales nunca vio, básicamente porque no interrogaba detenidos, ignora donde se efectuaban. Ahora bien, del helicóptero de la fuerza aérea que se le consulta, dice que lo vio sobrevolando la Comisaria, pero jamás lo vio apostado en las cercanías del cuartel, tampoco su tripulación, dejando o trayendo detenidos, como asimismo ignora cual era la finalidad de la visita. De la patrulla militar blasona que vio una en las inmediaciones del cuartel, con actitud de custodia del mismo, ignorando a que destacamento pertenecían. Precisa que no era hombre de confianza de Callis, así en una oportunidad lo amenazó de atentar contra su vida sino acataba sus órdenes.

En **declaración judicial** del 21 de octubre de 2005 de **fs. 240 a fs. 242 (Tomo I)**, copia a fs. de fs. 1.233 a fs. 1.235 (Tomo V) y de fs. 2.194 a fs. 2.196 (Tomo VII). Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial de fs. 502 a fs. 503. Se le pregunta por la detención de Einar Tenorio Fuentes, profesor de Pitrufrquén, espeta que no lo recuerda, como tampoco haber participado en su detención, aunque en una oportunidad una hija de esa persona le aseguró que haber formado

parte de la patrulla que lo detuvo, eso ocurrió en un careo en un tribunal de Temuco. De la declaración de fs. 520 de Reinando Lukowiak, depone que es probable que los hechos hayan ocurrido como lo indica, porque no lo recuerda. Sin embargo, si participó en la detención de Tenorio debió haber sido obedeciendo órdenes del Capitán Callis. Siempre practicó detenciones con una orden escrita de su superior, jamás lo hizo sin portar esa orden o al menos que se la hubiesen exhibido en la Comisaria y luego de cerciorarse que ella estuviera ingresada en los libros. En el caso particular del señor Tenorio, no recuerda si portaba la orden o si le fue exhibida, pero en ningún caso fue una orden verbal. Lo más probable, es que en aquella oportunidad no portaba la orden de detención del señor Tenorio por la rapidez con la que se debía realizar. Afirma que debió haberle exhibido la orden. Es posible que haya concurrido hasta la casa del señor Tenorio y participar de su detención, aunque no recuerda exactamente la casa, pero si en un operativo de calle Carrera, pasada la línea férrea. Agrega que no rememora haber revisado los libros del señor Tenorio. Continúa, una vez detenido fue trasladado hasta la Comisaria y entregado a la guardia, desentendiéndose del procedimiento. Ese era el procedimiento utilizado siempre que le correspondió detener personas. Explica que vio detenidos en la Comisaria de Pitrufquén, en la guardia de la unidad, empero no conocía a nadie porque en el año 1971 llegó a Pitrufquén. No recuerda quienes participaron en la patrulla que detuvo al señor Tenorio a excepción de Lukowiak. Refiere que los detenidos eran puestos en la guardia y el personal se encargaba de su destino, ignora a qué lugar eran distribuidos. La persona que sabe el destino de todos los detenidos es el Capitán Callis. Descarga que de los vehículos que tenía carabineros, uno era una camioneta de color oscuro y otra de color blanco, aunque esta última era solo conducida por Callis. El Capitán Callis a menudo salía con Lukowiak y Catalán. Cuenta que participó en operativos de búsqueda de armas, sin resultados positivos. Pero no participó en la detención de otras personas. El día de la detención de Tenorio, se detuvo a una o tres personas, la misma noche. Según Lukowiak esa noche se detuvo a las personas correctas, es decir aquellas que la orden señalaba. Las otras personas no las recuerda, porque la orden señalaba literalmente: "Tenorio y otros". el nombre de los otros lo proporcionó el señor Callis, pero no recuerda nombres ni si fueron detenidas antes

o después de Tenorio, en todo caso la patrulla conocía nombres y domicilios. Domingo Granzoto era un civil que cooperó con Carabineros, facilitaba la camioneta blanca para fines particulares. El único vehículo institucional que tenía carabineros en Pitrufuén era una campañola blanca, tipo jeep.

En **declaración judicial** del 09 de noviembre de 2005 de **fs. 271 (Tomo I)**, copia a fs. 1264 (Tomo V) y de fs. 2225 (Tomo VII). Dice que de la detención del señor Burgos, agente del Banco de Estado de Pitrufuén, el Capitán Callis un día les ordenó acompañarlo al centro, no recuerda si fueron a pie o vehículo. El Capitán Callis ingreso al banco acompañado por otros carabineros y el deponente se quedó vigilando la puerta. A los pocos minutos salió el Capitán Callis llevando detenido y encañonado a Osvaldo Burgos. No recuerda el nombre de los Carabineros que lo acompañaban, pero eran alrededor de las seis. El señor Burgos fue trasladado hasta la Comisaria y mucho tiempo después supo que había sido puesto en libertad desde la Comisaria. Reitera que no participó en la patrulla que detuvo al señor Burgos ni en el evento que se le consulta.

En **diligencia de careo con Reinaldo Lukowiack Luppy** del 25 de octubre de 2005 de **fs. 1.241 a fs. 1.242 (Tomo V)**, con copia a fs. 2.202 a fs. 2.203 (Tomo VII). Ratifica sus declaraciones prestadas en autos de fs. 522, recalca que las personas que fueron detenidas en esa ocasión fueron entregadas a la guardia de la Comisaria de Pitrufuén y al Capitán Callis. Acota que la orden que el Capitán Callis le exhibió una vez llevada a cabo la diligencia, fue devuelta por él a su manera y en el tiempo de su manera, ignorando como lo hacía. El tribunal le pregunta quienes eran las otras dos personas que la patrulla debía detener, según lo manifestó en su declaración de fs. 522, rectifica su declaración en el sentido que en esa oportunidad solo detuvo al señor Tenorio y tenía la impresión de que se había detenido a dos personas más, fue porque los Carabineros se subían y bajaban de la patrulla para custodiar el perímetro de la casa de Tenorio.

En **diligencia de careo con Hugo Nibaldo Catalán Lagos** del 31 de octubre de 2005 de **fs. 1.244 (Tomo V)**. Espeta que no recuerda haber participado en la detención de Calfuquir, como lo refiere el señor Catalán. Sin embargo, de ser cierta su participación, lo más probable es que el detenido haya sido trasladado hacia el cuartel policial.

En **diligencia de careo con José Job Jiménez Vergara** del 09 de noviembre de 2005 rolante de **fs. 1263 (Tomo V)**. Dice que no participó en la detención del señor Jiménez, pudo haber sido otra patrulla la que lo detuvo. No rememora haber participado en su detención ni haber conversado con él en la Comisaría ni menos haberle dicho algo relacionado con la detención del señor Calfuquir, puesto que no manejaba esa información. Definitivamente no sostuvo ninguna conversación con él.

En **diligencia de careo con Rosalía Silva Mardones** del 06 de diciembre de 2005 de **fs. 1449 a fs. 1450 (Tomo V)** y con copia a fs. 2.439 a fs. 2.440 (tomo VIII). Habla que es falso lo señalado por la señora Silva, puesto que no sabía nada de los detenidos ni tenía contacto con ellos, solo el Capitán Callis y su gente conocían la identidad de estos. Es posible que se haya entrevistado con la deponente, de haber sabido algo al respecto de su marido se lo habría comunicado inmediatamente. Insiste que desconoce antecedentes sobre la detención de su marido. El oficial más antiguo era el subrogante de Callis en la Comisaria de Pitrufrquén, en el caso sublite el Teniente Muñoz de la Tenencia de Gorbea, pero solo cuando Callis le entregaba el mando. Dice que no había jefe operativo cuando no estaba el Capitán Callis, pues daba ordenes desde donde estuviera, dejaba todo arreglado antes de salir.

En **diligencia de careo con Carlos Alberto Salinas Mora** del 09 de noviembre de 2005 de **fs. 2221 (Tomo VII)**, con copia a fs. 1260 (Tomo V). Señala que del cuartel para adentro no era suyo, recién a fines de octubre de 1973 que hubo detenidos políticos en los altos de las caballerizas. Niega haber conversado con esa persona en los términos que indica.

9º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Carlos Hernán Moreno Mena**, quien fue sometido a proceso de fs. 2.873 a fs. 2.893 (Tomo IX) con fecha 06 de diciembre de 2023. Acusado según el auto acusatorio de fs. 2.923 a fs. 2.942 (Tomo IX) con fecha 05 de febrero de 2024, como autor del delito de secuestro calificado en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz perpetrados en la comuna de Pitrufrquén, a contar del 18 de octubre de 1973.

Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

A. Declaraciones.

1. Francisco Javier Navarrete Quijón depone de fs.110 a fs.111 (tomo I) copia de fs. fs. 1.047 a fs. 1.048 (Tomo IV) y de fs. 2103 a fs. 2104 (Tomo VII) y de fs.114 a fs.115 (tomo I) copia de fs. 2107 a fs. 2108 (Tomo VII). Que en lo pertinente en sus dichos de fs. 114 a fs. 115 (Tomo I) copia de fs. 2107 a fs. 2108 (Tomo VII). Ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 110 a fs. 111 y que en este acto le ha sido leída. Espeta que el Teniente Moreno sabía lo que pasaba en la unidad, porque era el Subcomisario del cuartel, es decir, el segundo de los jefes. Él podía transitar libremente por toda la Comisaría, incluso por las caballerizas. Recuerda el caso de un profesor de Apellido Seguel que era de Los Galpones. A este profesor lo mantenían detenido en las caballerizas de la unidad, según comentarios de los otros funcionarios. En un momento, aprovechando que no había nadie cerca de las caballerizas, concurrió hasta ahí y divisó a Seguel, le preguntó cómo estaba, pero de inmediato apareció el Teniente Moreno y lo retó por estar en ese lugar y que se retirara de allí.

2. Hugo Nibaldo Catalán Lagos, declara de fs.128 a fs.129 (tomo I) copia de fs. 1.147 a fs. 1.148 (tomo IV), de fs.351 a fs.354 (tomo II), de fs.634 a fs.635 (tomo II) y de fs. 2.150 a fs. 2.151 (tomo VII). En lo pertinente a fs. 351 a fs. 354 (Tomo II), explica que cuando Callis no estaba, el Teniente Moreno Mena era quien subrogaba sus funciones. Ese era el orden jerárquico. Asevera que el Teniente Moreno Mena tenía acceso a todas las dependencias de la unidad de Pitrufrquén, exceptuando el almacén de armamento y de vestuario, a cargo de Lukowiak. Moreno Mena estaba al tanto de todas las personas que estaban detenidas en la unidad después del 11 de septiembre de 1973. Él, como Oficial, estaba al tanto de ello e incluso vivía en la unidad, porque era soltero. A su pregunta, a los detenidos

por motivos políticos los mantenían en un lugar denominado las caballadas, que estaba al final del patio de la unidad, en un segundo piso. Cuenta que en algunas oportunidades tuvo que ir a las caballadas y pudo ver a personas detenidas, pero no reconoció a nadie.

3. Eleodoro Merino Salas, declara de fs.130 a fs.131 (tomo I) copia de fs. 2.826 a fs. 2.827 (Tomo IX), de fs.203 a fs.204 (tomo I) copia fs. 2157 a fs. 2158 (Tomo VII) y fs. 2.828 a fs. 2.829 (Tomo IX), de fs.337 a fs.338 (tomo I) copia de fs. 2.830 a fs. 2.831 (tomo IX), de fs. 1.092 a fs. 1.094 (tomo IV) copia de fs. 2092 a fs. 2094 (Tomo VII), de fs. 1.416 (tomo V), de fs. 2.022 a fs. 2.023 (Tomo VII) copia de fs. 1.012 a fs. 1.014 y de fs. 2043 a fs. 2045 (Tomo VII), de fs. 2.157 a fs. 2.158 (tomo VII), de fs. 2.405 a fs. 2.406 (Tomo VIII) con copia de fs. 2.488 a fs. 2.489 (tomo VIII), de fs. 2.488 a fs. 2.489 (tomo VIII) y de fs. 2.823 a fs. 2.825 (Tomo IX). En lo pertinente de su declaración de fs. 130 a fs. 131 (Tomo I) copia de fs. 2.826 a fs. 2.827 (Tomo IX) dice que hubo un grupo que salía constantemente con el mando de la unidad integrado por el Comisario Callis, Carabinero Silva Soto y Germán Fernández, los cuales realizaban las detenciones políticas de la fecha y los interrogatorios, siendo el lugar de interrogatorios las caballerizas o bodega de forrajes. Estaba estrictamente prohibido ingresar, salvo el Comisario, Teniente Moreno y Lukowiak. Luego reitera a fs. 337 a fs. 338 (Tomo I) copia de fs. 2.830 a fs. 2.831 (tomo IX) que a la unidad llegaron distintas ordenes relacionadas con temas de índole política, emanadas de la Fiscalía Militar del Ejército de Temuco y la Fiscalía de Carabineros de Cautín, relacionadas con la detención de diversos personeros políticos de Pitrufquén y sus alrededores, ordenes que nunca vio, pues llegaban directamente a la oficina del Comisario. Como los detenidos políticos llegaron a la Comisaría, en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, fueron separados de los detenidos comunes. En declaración de fs. 1092 a fs. 1094 (Tomo IV) copia de fs. 2092 a fs. 2094 (Tomo VII), esta se dividió en dos, el día 11 de septiembre de 1973 cuando se produjo el golpe de estado, orden dada por el Comisario Ramón Callis Soto. Para el interior no tenían acceso, solo lo hacía el Comisario, el Teniente Moreno, con sus respectivos grupos operativos que ellos tenían. Los detenidos eran llevados por la puerta falsa, que es por donde entran los vehículos. Eran llevados a las caballerizas. No había registro en el cuerpo de

guardias. Esos registros solo los llevaban ellos. Supo que el grupo operativo se movilizaba en un jeep de la institución y una camioneta facilitada por un particular, cuyo nombre no recuerda en este momento, pero cree que este fallecido. En términos similares se refiere a fs. 2.405 a fs. 2.406 (Tomo VIII) con copia de fs. 2.488 a fs. 2.489 (tomo VIII), que el día 11 de septiembre de 1973, se encontraba ejerciendo funciones de Suboficial de Guardia y por orden del Capitán Callis, debió clausurar una puerta interior que da acceso al patio de la Unidad Policial, lugar por donde ingresaban los detenidos de índole político que eran conducidos por el personal policial en los patrullajes a cargo del Capitán Ramón Callis Soto, Teniente Carlos Moreno y por el Suboficial Mayor Reinaldo Lukowiak, siendo acompañados habitualmente por el Sargento Germán Fernández y el Cabo Hugo Catalán Lagos, completando sus patrullas con personal que se encontraba disponible en el cuartel.. Espeta que no le correspondió participar en interrogaciones, siendo los encargados de estas labores el Capitán Callis, Teniente Moreno y el Suboficial Lukowiak en conjunto con su personal de confianza, los cuales eran el Sargento Fernández y el Cabo Catalán.

4. German Fernández Torres. Declaraciones de fs.133 a fs. 134 (tomo I) copia de fs. 1.153 a fs. 1.154 (tomo IV), de fs.272 a fs.273 (tomo I) copia de fs. 2.226 a fs. 2.227(tomo VII) y de fs. 1.265 a fs. 1.266 (Tomo V), de fs.329 a fs.333 (tomo I) copia de fs. 2.283 a fs. 2.285 (tomo VII), de fs.346 a fs.349 (tomo I) copia de fs. 2.311 a fs. 2.314 (tomo VIII), de fs.662 a fs.666 (tomo II) copia de fs. 2.698 a fs. 2.702 (tomo IX), de fs. 1.655 a fs. 1.659, de fs. 1.835 a fs.1.937 (tomo VI), de fs. 1.286 (tomo V) copia de fs. 2.247 (tomo VII). En lo pertinente de su declaración de fs.346 a fs.349 (tomo I) copia fs. 2.311 a fs. 2.314 (tomo VIII). Narra al mando de la Comisaría de Pitrufquén estaba el Capitán Callis Soto. Si Callis no estaba, el Teniente Moreno Mena era quien subrogaba sus funciones. Ese era el orden jerárquico. Sin embargo, en algunas oportunidades era Lukowiak el tercero al mando, quien en esa época ostentaba el grado de Suboficial Mayor y asumía las funciones de mando en la unidad cuando Callis no estaba. Efectivamente el Teniente Moreno Mena tenía acceso a todas las dependencias de la unidad de Pitrufquén. Moreno Mena estaba al tanto de todas las personas que estaban detenidas en la unidad, él era el segundo al mando y sabía lo que ocurría. A él no

se le restringió el acceso a ninguna dependencia de la Comisaría. Incluso tenía conocimiento de los detenidos por motivos políticos y acceso a ellos. Las órdenes de la Fiscalía Militar eran más delicadas, tomando conocimiento de ellas el Capitán Callis o el Teniente Moreno Mena. A su pregunta, la única oportunidad que participó de una detención fue en la de Calfuquir, pero sólo fue acompañando al teniente Moreno Mena. Soslaya que los detenidos por motivos políticos los mantenían en un lugar denominado las caballadas, que estaba al final del patio de la unidad. Los calabozos eran chicos, por esta razón se habilitó el lugar de las caballadas. A su pregunta, no le llamaba la atención ir a las caballadas, ya que sabía que ahí se mantenía a detenidos por motivos políticos. Desconoce si había algún tipo de restricción a los funcionarios para ir hasta el lugar de las caballadas. Generalmente los mismos funcionarios que estaban de guardia estaban a cargo de los detenidos en esa dependencia. Quienes cumplían las ordenes delicadas, es decir, las que provenían de la Fiscalía Militar o de los bandos que se emitían en esa época, eran Moreno Mena y Lukowiak. En relación a Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera, Juan Héctor Ñancufil Reuque, no recuerda esos nombres y desconoce su actual ubicación. El nombre de Ismael Bocaz Muñoz le es conocido porque su madre era una persona conocida en el lugar Chada, era agricultora.

5. Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy. Declaraciones de fs.137 a fs.138 (tomo I) copia de fs. 1.157 a fs. 1.158, de fs.217 (tomo I) copia de fs. 1.209 (Tomo IV) y de fs. 2.171 (Tomo VII), de fs.243 a fs.245 (tomo I) copia de fs. 1.236 a fs. 1.238 (Tomo V) y fs. 2.197 a fs. 2.199 (Tomo VII), de fs.343 a fs.345 (tomo I) copia de fs. 1.344 a fs. 1.346 (Tomo V) y de fs. 2.315 a fs. 2.317 (tomo VIII), de fs.366 a fs.367 (tomo II) copia de fs. 1.358 a fs. 1.359 (Tomo V) y de fs. 2.339 a fs. 2.340 (Tomo VIII), de fs. 1.188 a fs. 1.189, de fs. 1.231 a fs. 1.232, de fs. 1.236 a fs. 1.238, de fs. 1.241 a fs.1.242 copia de fs. fs. 2.202 a fs. 2.203 (Tomo VII), de fs. 1.259 copia de fs. fs. 2.220 (Tomo VII), de fs. 1.261 a fs. 1.262 copia de fs. 2.222 a fs. 2.223 (Tomo VII), de fs. 1.288 copia de fs. 2.249 (tomo VII) y de fs. 1.451 (tomo V) copia de fs. 2.441 (tomo VIII).

En declaración de fs.343 a fs.345 (tomo I) copia de fs. 1.344 a fs. 1.346 (Tomo V) y de fs. 2.315 a fs. 2.317 (tomo VIII). Afirma que cuando Callis no estaba en la Comisaría, por conducto regular Moreno Mena debía subrogarlo, pero Callis no le

tenía confianza, por lo que era él quien asumía las labores de mando en ese lugar. Efectivamente el Teniente Moreno Mena tenía acceso a todas las dependencias de la unidad de Pitrufrquén. Si bien es cierto Callis no le tenía confianza, Moreno estaba al tanto de todo lo que ocurría en la Comisaría, sabía que había detenidos después del 11 de septiembre de 1973. Recuerda que ellos a veces no tenían conocimiento del por qué se detenían a personas, esto después del 11 de septiembre de 1973. Callis les ordenaba detener y ellos cumplían. Recuerda como detenidos políticos a Burgos, Tenorio, Calfuquir. A su pregunta, había grupos para detener, entre los que recuerda a Antonio Silva, Germán Fernández, Juan Río Seco y Carlos Ramírez. Ellos salían con Callis en la camioneta, eran del grupo de confianza de Callis. Él también era de su confianza. Recuerda que a él le correspondió hacer detenciones, pero por toque de queda y podía hacer las detenciones con cualquier otro funcionario. No recuerda a nadie en específico en estos momentos. En ese tiempo eran alrededor de cincuenta funcionarios aproximadamente, pero en la Comisaría no habían más de quince, ya que el resto hacía labores de punto fijo y guardia de población. Se refiere a otros hechos. Desarrolla que una sola oportunidad aterrizó un helicóptero en la Comisaría, fue a hablar con Callis el Oficial al mando de él y luego se fue. No estuvo más de cinco minutos en el lugar. En relación a Celso Avendaño Alarcón, Pedro Curihual Paillán, Luis Anselmo Fernández Barrera, Juan Héctor Ñancuñil Reuque e Ismael Bocaz Muñoz, no recuerda esos nombres y desconoce su actual ubicación. Ni que Lautaro Calfuquir Henríquez haya estado detenido en la Comisaría de Pitrufrquén. Sabe que esta persona es hijo del "Polo" Calfuquir, que trabajaba en el hospital, pero no conocía a su hijo. Se le pregunta por otras víctimas.

En diligencia de careo judicial con Carlos Moreno Mena de fs. 1.241 a fs.1.242 (Tomo V) copia de fs. 2.202 a fs. 2.203 (Tomo VII). Ratifica íntegramente su declaración. No es posible dentro de la lógica militar que la orden que debía cumplir la patrulla que integraba haya sido entregada a un subalterno y no al jefe de la misma, lo anterior puesto que la orden las recibe y las porta el jefe de la patrulla, que debe dar cuenta en su oportunidad del diligenciamiento. Posiblemente él era conductor. Se refiere a otra víctima.

6. Luis Arnoldo Becerra Jaramillo. Declaraciones de fs.147 a fs.148, de fs.189 a fs.190 (tomo I), de fs.679 a fs.680 (tomo I) copia de fs. 2.718 a fs. 2.719 (tomo IX), de fs.715 a fs.716 (tomo III), de fs.717 a fs.718 (tomo III), de fs. 1.673 a fs. 1.674 (Tomo VI) copia de fs. 2.716 a fs. 2.717(Tomo IX), de fs. 1.675 a fs. 1.676 (tomo VI) y de fs. 2.486 a fs. 2.487 (tomo VIII). En declaración de fs.679 a fs.680 (tomo I), copia de fs. 1.675 a fs. 1.676 (tomo VI) y de fs. 2.718 a fs. 2.719 (tomo IX). Respecto a los detenidos políticos que comenzaron a llegar a la Tenencia de Toltén a contar del 11 de septiembre de 1973 eran directamente trasladados hasta la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén por orden del Capitán Sergio Callis Soto dado que la Tenencia de Toltén dependía de aquella unidad. El conductor era Juan Prado Ponce (Cabo 2) recuerda que él y su persona eran los únicos encargados de trasladar a los detenidos por motivo políticos hasta la 5° Comisaría de Pitrufquén. Las detenciones en la comuna de Toltén eran ordenadas generalmente por el Capitán de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén y cualquier funcionario que estuviera de servicio en Toltén cumplían la orden. Respecto a la víctima Celso Avendaño Alarcón fue detenido en el asentamiento Los Boldos ubicado a 6 kilómetros de Toltén (hoy llamado fundo Carrisal), por funcionarios de Carabineros, pasó por Toltén, no recuerda cuánto tiempo estuvo, tampoco le consta si fue registrado, pero posteriormente fue trasladado hasta la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén. Lo anterior lo sabe porque se lo comentaron los colegas de trabajo. Responde que no trasladó al señor Celso Avendaño hasta la Tenencia de Carabineros de Pitrufquén, desconoce quién lo hizo. Ese procedimiento se ordenó por orden del Capitán Callis. Respecto a la víctima Luis Fernández Barrera, los comentarios eran que lo habían detenido junto a Celso Avendaño por ser dirigentes del asentamiento. Se refiere a otros hechos. Respecto de Ismael Bocaz, no lo conoció ni maneja ningún antecedente respecto a su desaparición.

7. Guillermo Fabio Muñoz Rodhe. Declaraciones de fs.165 a fs. 168 (tomo I), de fs.186 (tomo I), de fs.524 a fs.525 (tomo II) copia de fs. 1.494 a fs. 1.495 (tomo V) y de fs. 2.520 a fs. 2.521 (tomo VIII), fs. 1.407 a fs. 1.408 (tomo V) y de fs. 2.409 a fs. 2.41 (tomo VIII). De lo cual cabe destacar lo expuesto a fs.165 a fs. 168 (tomo I), a saber que los detenidos sólo les daban agua y les permitían ir al baño, no

había comida para darles, por esa razón eran trasladados dentro de las 24 horas después de su detención. A estos se les mantenía en los calabozos, pero muchas veces no había capacidad para dejarlos allí, por lo que los dejaban en el comedor de la Tenencia. Respecto al caso de Celso Avendaño era amigo de él. Se conocieron antes de 1973 ya que él era mueblista, muy conocido en el sector de Toltén, e hizo su primer comedor. Él vivía en Toltén, con su señora e hijos y según lo que recuerda dos niñas y algunos niños. Después del 11 de septiembre de 1973, al parecer en el mes de septiembre u octubre de ese año, se comentó que Celso Avendaño fue detenido por Juan Caamaño y otro funcionario que desconoce, ya que era integrante del partido socialista y estaba mencionado en los listados que les llegaron de personas con vinculaciones políticas que había que detener. Eran lógicamente detenciones ilegales, pero a ellos los mandaban y tenían que cumplir lo que les ordenaban. A su pregunta, él no vio detenido a Celso Avendaño en la Tenencia de Toltén, pero se enteró y además supo que había sido trasladado hasta la Comisaría de Pitrufuquén. Anexa a fs. 186 (tomo I) que se comentaba que Avendaño habría sido llevado a la Tenencia de Toltén y luego trasladado hasta la ciudad de Pitrufuquén, desconociendo mayores antecedentes, encontrándose desaparecido hasta el día de hoy.

8. Octavio Castillo. Declaraciones de fs.194 a fs.195 (tomo I) copia de fs. 1.186 bis a fs. 1.187 (tomo IV) y de fs. 2.148 a fs. 2.149 (Tomo VII), de fs.198 (tomo I) copia de fs. 2.152 (Tomo VII), de fs.232 a fs.233 (tomo I) copia de fs. 1.225 a fs. 1.226 (Tomo V) y de fs. 2.186 a fs. 2.187 (tomo VII), de fs.334 a fs.336 (tomo I) copia de fs. 1.327 a fs. 1.329 (tomo V) y de fs. 2.288 a fs. 2.290 (Tomo VII) y de fs. 1.699 a fs. 1.700 (tomo VI). En lo pertinente es dable destacar lo dicho a fs. 232 a fs.233 (tomo I) copia de fs. 1.225 a fs. 1.226 (Tomo V), fs. 1.699 a fs. 1.700 (tomo VI) y de fs. 2.186 a fs. 2.187 (tomo VII), a saber el Teniente Moreno también participaba de detenciones, pero tenía un grupo distinto al de Callis, aunque no permanente, pues tomaba indistintamente a cualquier funcionario para que lo acompañara en sus operaciones, todas ordenadas por Callis.

9. Carlos Alberto Salinas Mora. Declaraciones de fs.205 a fs.207 (tomo I) copia de fs. 1.197 a fs. 1.199 (tomo IV), de fs. 253 a fs.254 (tomo I) copia de fs. 1.246 a fs. 1.247 (Tomo V) y de fs. 2.207 a 2.208(Tomo VII), de fs. 1.260 (tomo V), de fs.

2.221 (tomo VII) copia de fs. 2.159 a fs. 2.161 (Tomo VII) y de fs. 2.220 (tomo VII).

Recalcar en lo pertinente las siguientes declaraciones:

En declaración judicial de fs.253 a fs.254 (tomo I) copia de fs. 1.246 a fs. 1.247 (Tomo V) y de fs. 2.207 (Tomo VII). Mientras estuvo detenido en los altos de las caballerizas de la Comisaría, se le acercó el Teniente Moreno a conversar con él en dos oportunidades. La primera fue una conversación amistosa, en la que le dijo que no se preocupara. La segunda fue con prepotencia preguntándole por el plan Z, torturándolo para que hablara. Fue torturado en la Comisaría de Pitrufquén por el Suboficial Lukowiak, el Teniente Moreno y otros carabineros cuyas voces no reconoció. Le aplicaron corriente y le dieron golpes en diferentes partes del cuerpo. Recuerda que estuvo detenido en Pitrufquén alrededor de siete días. Esto lo asevera porque la sirena toco siete veces. Sin embargo, no podría asegurar fehacientemente que fueron esa cantidad de días, quizás fueron menos.

En diligencia de careo judicial con la persona de Carlos Moreno Mena, de 1.260 (tomo V). Ratifica su declaración leída en el acto el Teniente Moreno a que ha hecho referencia es la persona con quien se le carea. Aclara que nunca vio al Teniente Moreno, pues su vista se encontraba vendada, sin embargo, la primera vez que conversó con él, la persona que se le acercó se identificó como el Teniente Moreno y la segunda vez reconoció su voz. Se mantiene en sus dichos.

10. Juan Alfonso Prado Ponce. Declaró de fs. 731 a fs. 732 (Tomo III), fs. 733 a fs. 734 (Tomo III), fs. 751 a fs. 754 (Tomo III), fs. 769 a fs. 774 (Tomo III), fs. 1763 a fs. 1764 (Tomo VI), fs. 1765 a fs. 1766 (Tomo VI) y de fs. 1767 a fs. 1771 (Tomo VI). En lo pertinente de fs. 769 a fs. 774 (Tomo III) y de fs. 1767 a fs. 1771 (Tomo VI). Habla que trasladaba a los detenidos por motivos políticos, a Pitrufquén, pero siempre con un jefe, nunca hizo un traslado con un subalterno o con uno que no haya sido jefe de retén, porque el jefe de retén era al que se le ordenaba de Pitrufquén, entonces él tenía que responderle al Comisario de la detención. Las detenciones las ordenaba el Comisario de Pitrufquén, Callis, a todo a quien tuviera un color político o que se sospechara que fuera así. Él era quien ordenaba todo. En ningún momento los jefes de retenes ordenaban una detención, todo lo hacían por intermedio de Pitrufquén. El Tribunal le consulta ¿Qué rol cumplía el Teniente Moreno Mena de Pitrufquén en las detenciones por motivos políticos? ¿Ud. alguna

vez vio a ese Teniente en el retén?, el deponente responde: poco vio al Teniente Moreno Mena en la Comisaria, porque prácticamente se quedaba afuera en el vehículo, pero al teniente Moreno no lo recuerda muy bien. El Tribunal le consulta por la víctima Celso Avendaño Alarcón, cuenta que en la segunda quincena de octubre tenía los trámites hechos para irse de Toltén por motivos familiares, y se sorprendió mucho cuando se le preguntó que había sido detenido porque en realidad no tiene conocimiento que haya estado detenido en la Tenencia. Urde que a Celso Avendaño lo conoció más o menos en el año 1967, que fue una casualidad, estaba recién llegado en Toltén y Toltén era como una villa no más, era un pueblo chico, entonces necesitaba dos cañones de cocina y en la pensión donde estaba comentó esto. Ir a Pitruquén por dos cañones de cocina era muy difícil, la locomoción era mala, entonces consultó si había alguien, algún maestro que hiciera este trabajo y le indicaron a este señor; y al mismo tiempo en esa pensión, había un caballero de edad que tenía una camionetita y el la llevó a la casa del señor Avendaño, y allá conversó con este señor, no lo recuerda muy bien físicamente, y a él le preguntó si tenía un par de cañones de cocina porque estaba recién casado y le vendió dos cañones de cocina. Ahí lo vio, inclusive antes de llegar a la casa de él, por el camino le comentó este caballero de edad (que ya debe estar fallecido porque debe haber tenido unos 70 en esa fecha) de que este caballero hacía arreglos de relojes, lámparas, todas esas cosas, entonces el señor Avendaño, conversaron unos ocho o diez minutos en su casa que era prácticamente un galpón donde vivía, el hombre no vivía muy bien, y él mostró unas lámparas, relojes y dijo, cualquier cosa que necesite venga a hablar conmigo porque lo puede reparar, perfecto, eso fue todo, esa fue la única vez que yo conversó con él. Después me parece que fue en el 68, 69 por ahí, a fines del 68, se fue este señor de Toltén, se fue a vivir no sabe si a Queule o en la otra pescadería que hay más allá al otro lado de Queule, se le olvidó en este momento. Él se fue de Toltén, fue una persona que nunca estuvo detenida ni antes ni después de 1973, no era un hombre revoltoso, que peleara, le gustaba si salir en las noches, salir a tomar, tomaba, pero nunca lo vio tomando en un restaurant ni nada de eso, no tiene por qué decir nada. Entonces si al señor Celso lo detuvieron y llevaron a la Tenencia de Carabineros de Toltén, ¿Quién lo habría trasladado hasta las

dependencias de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufrquén si el deponente era el único conductor designado.? Comunica que se fue en la segunda quincena de octubre, no tiene conocimiento que esa persona haya sido detenida, y es la verdad. Asevera que trasladó detenidos políticos desde Toltén a Pitrufrquén por orden del Capitán Callis, era el único chofer, nadie decía que sabía manejar, pero eso lo llevo a cabo hasta la primera quincena, hasta la segunda quincena de octubre de 1973.

11. Juan Fernando Rioseco Montoya. Depone de fs. 274 a 277 (Tomo I), copia de la cual se encuentra 1.267 a 1.270 (Tomo V) y de fs. 2.228 a 2.231(Tomo VII), fs. 538 a 539 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.507 a 1.508 (Tomo V), fs. 544 a 545 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.515 a 1.516 (Tomo V) y de fs. 2.535 a 2.536 (Tomo VIII) y de fs. 1.287 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.248 (Tomo VII). En declaración rolante de fs. 274 a 277 (Tomo I), copia de la cual se encuentra 1.267 a 1.270 (Tomo V) y de fs. 2.228 a 2.231(Tomo VII). Aduce que el día 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufrquén. Acota que en 1972 cumplía funciones en Toltén, año en que fue trasladado a Pitrufrquén, lugar en que estuvo hasta 1976. Adopta que tenía el grado de Cabo y estaba a cargo de la central de compra. Recuerda que vivía en Temuco y viajaba todos los días a Pitrufrquén. Adosa que el día 11 de septiembre llegó a su trabajo como de costumbre y siendo las 08:10 horas salió desde su casa el Capitán Callís eufórico, informando lo del golpe de Estado. Sin embargo, no dio ninguna instrucción al respecto. Afirma que le dio a conocer su inquietud por los Carabineros que estaban en la guardia de la Moneda, a lo que éste le dijo *“mejor que mueran unos pocos huevones, pero que se salve el país”*. Luego le preguntó como estaban de mercadería, a lo cual respondió que estaban escasos, por lo que le ordenó que lo acompañara a Temuco a comprar. En Temuco se estacionaron frente a la Prefectura. El Capitán Callis estuvo alrededor de una hora. Al salir le dijo que debía encargarse de la logística de manera exclusivamente a partir de ese día. Se acuartelaron y debieron dormir en la Comisaría. Agrega que como a los cuatro días luego de ocurrido el golpe, el Capitán Callis comenzó a formar patrullas para vigilar y detener personas. Dicha patrulla estaba conformada por Antonio Silva y Germán Fernández. Algunas veces se hacía acompañar del Cabo Carlos Ramírez y en alguna oportunidad le

correspondió salir con él. Estas salidas eran hacia Temuco con destino a la Prefectura o a la FACH. Se movilizaban en una camioneta C-10 de color blanco con toldo. El Teniente Moreno tenía una patrulla y el Suboficial Lukowiak tenía otra. Este último funcionario actuaba con Meriño, Hugo Catalán y con Amulef. Ellos se movilizaban en una camioneta de color verde. No recuerda a los integrantes de la patrulla del Teniente Moreno. Alega que nunca le correspondió participar en detenciones por motivos políticos. Respecto del señor Burgos, nunca supo de su detención ni lo conoció. Anexa que existía una puerta falsa por la que entraban los vehículos con detenidos, que eran encerrados en los altos de las caballerizas de la Comisaría. Recuerda que como cinco días luego del golpe, el Suboficial Lukowiak trasladó detenidos a Temuco en un camión que había proporcionado un civil. Al lugar señalado anteriormente solo tenían acceso los patrulleros. Anima que no le correspondió efectuar guardia en el recinto donde estaban los detenidos políticos. Respecto del señor Calfuquir, puede señalar que lo conoció, pero no lo vio detenido. Y no recuerda al profesor Tenorio ni haber visto mujeres detenidas en la Comisaría de Pitrufquén. Añade que no recuerda que raíz de la detención de alguna persona hubiera quedado una camioneta blanca requisada en la Comisaría. Apunta que la relación entre el Capitán Callis y el Teniente Moreno no era muy buena. Esto porque el carácter del Comisario era muy cambiante. Apoya que el Suboficial Omar Valdebenito estaba a cargo de la central de compras de la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, actualmente fallecido. El Teniente Riquelme se hizo cargo de esta dependencia al parecer el año 1974, pero en realidad solo firmaba porque no tenía idea como llevarla. Ellos siempre se entendieron con el Suboficial Valdebenito. Aproxima que su esposa es prima del Teniente Ítalo García Watson. Este Oficial luego del 11 de septiembre fue destinado a la Prefectura. Aquilata que el Capitán Callis lo miraba con malos ojos, porque decía que García Watson era socialista y lo asociaba con la esposa del deponente. Arguye que no vio que se torturara a los detenidos políticos en el primer piso de las caballerizas, pero si sintió gemidos y gritos de estas personas. Respecto del traslado de detenidos, le parece que la patrulla de Lukowiak era la encargada de estos movimientos. Solo recuerda a una señora que fue a la Comisaría como tres o cuatro veces a preguntar por algún detenido, pero no recuerda su nombre ni a

quien buscaba. Tampoco rememora haber fiscalizado los domicilios de las personas que quedaban bajo el régimen de arresto domiciliario. Asegura que no le consta que existiese una patrulla establece en el sector de la isla municipal. Sin embargo, sus colegas aseguraban que era frecuente ver en las noches patrullas militares dando vueltas en Pitrufrquén.

12. Oscar Manuel Seguel Jofré. Depone de fs. 234 a fs. 235 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.227 a 1.228 (Tomo V) y de fs. 2.188 a fs. 2.189 (Tomo VII) y de fs. 355 a fs. 357 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.307 a fs. 2.309 (Tomo VIII). En lo pertinente habla que el día 23 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido desde su domicilio. En esta oportunidad el grupo de Carabineros estaba al mando del Teniente Moreno. También integraba el grupo el Suboficial Lukowiak, quien lo golpeó duramente con la culata de su fusil en presencia de sus hijos. Luego, lo subieron a un camión al interior del cual había más detenidos. Una vez que llegaron a la Comisaria de Pitrufrquén fue interrogado por el Capitán Callis acerca de personas y armas. Luego de un tiempo en la Comisaria fue trasladado por el Capitán Callis en un camión hasta el Regimiento Tucapel. En ese lugar le sacó la venda de los ojos y se rio del deponente. Este último lo trató de traidor. Respecto de las torturas recibidas en el Regimiento Tucapel, recuerda que un Oficial, al parecer Teniente y de apellido Thielemann procedió a golpearlo con las palmas de sus manos. Éste era un gringo alto y gordo, bastante agresivo. Que antes del golpe trabaja en alguna repartición pública.

13. José Job Jiménez Vergara. Depone de fs. 255 a 256 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.248 a 1.249 (Tomo V) y fs. 2.209 a 2.210 (Tomo VII), fs. 1.261 a 1.262 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.222 a 2.223 (Tomo VII) y de fs. 1.263 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.224 (Tomo VII). Precisar las siguientes declaraciones:

Es dable reiterar lo rolante de 255 a 256 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.248 a 1.249 (Tomo V) y fs. 2.209 a 2.210 (Tomo VII), que para septiembre de 1973 se desempeñaba como funcionario del Servicio de Salud en Pitrufrquén. Recuerda que el día 13 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas fue detenido por Carabineros de Pitrufrquén, entre los que recuerda al Teniente Moreno, al Suboficial Lukowiak y a los Carabineros Catalán y Silva. Recalca que Lukowiak y

Moreno entraron a su domicilio, que en aquel tiempo estaba ubicado en calle Blanco Encalada N°290 de Pitrufquén y en presencia de su señora Gladis Arévalo y su suegra Carmen Ortiz, lo detuvieron para posteriormente subirlo a la parte trasera de una camioneta C-10 de color blanco. Luego de esto se dirigieron a la casa de Carlos Salinas, al que también detuvieron. Posteriormente fueron a las casas de otras personas que también fueron detenidas. Más tarde fueron conducidos a la Comisaría donde les vendaron la vista y les amarraron las manos con alambre de púas. Los encerraron en la parte alta de las caballerizas y en ese lugar fue torturado mediante la aplicación de corriente en diferentes partes del cuerpo. No sabe quiénes participaron en su tortura. Días más tarde fueron trasladados hasta el Regimiento Tucapel. En ese lugar fueron interrogados por un Oficial, al parecer Teniente, que era alto y rubio, el que luego de darles a conocer que se iban a constituir las Fiscalías, les ordenaron que se bañaran. Luego de esto, junto con Polo Calfuquir, Elena Henríquez y la señora Inés Rubilar, pasaron a la Fiscalía y los liberaron inmediatamente, pero con arresto domiciliario y con la obligación de presentarse en la Comisaría. Esto fue el día 18 de septiembre. Agrega que junto con don Polo Calfuquir, una señora y un caballero de Toltén, cuyos nombres no recuerda, contrataron un taxi y se trasladaron a Pitrufquén. Al llegar al puente Toltén fueron detenidos en el control que estaba a la entrada del pueblo y fueron instruidos para irse directamente a sus domicilios. En la barrera policial estaban los Carabineros Haroldo Hernández y Germán Fernández. Suma que en esa oportunidad Luis Calfuquir le dijo que lo iban a matar esa misma noche, pero que no se preocupara porque al deponente no le iba a pasar nada. Relata que se fue a presentar al día siguiente a la Comisaría y allí se enteró por boca del Teniente Moreno que Luis Calfuquir había sido detenido. Además, cada dos días lo iban a buscar los Carabineros y lo detenían por algunas horas. Esto duró como tres meses. También le tenían a un militar como punto fijo, el que lo seguía a todas partes. Finalmente, el Carabinero Asenjo le dijo que fuera más a presentarse a la Comisaría. Soflame que nunca le preguntaron nada mientras estuvo detenido. En diligencia de careo con Carlos Moreno Mena, rolante de fs. 1.263 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.224 (Tomo VII). Ratifica íntegramente su declaración judicial que rola a fs. 605 y que se le lee. El Teniente Moreno a que he

hecho referencia es la persona con quien se le carea, aun cuando en aquel tiempo éste era más delgado. Recuerda que conversó con él en la guardia de la Comisaria el día 19 de septiembre de 1973. Se mantiene en sus dichos.

14. María Elena Calfuquir Henríquez. Depone de fs. 225 a 230 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.179 a 2.184 (Tomo VII) y de fs. 857 a 864 (Tomo III). En lo pertinente de sus dichos depuso que, los días 11, 12, 13, 14 y 19 y días posteriores de septiembre de 1973 su hogar y domicilio familiar de Vicuña Mackenna 432 fue allanado diariamente por efectivos de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitruftuén. El día 11 de septiembre de 1973 fue detenido su hermano, Patricio Alejandro. En su detención participaron civiles como Juan Vásquez, agricultor de Pitruftuén, quien lo encerró en un galpón, junto a otros cuatro jóvenes, llamando luego a Carabineros y trasladándolos hasta la Comisaría de Pitruftuén. El día 12 de septiembre de 1973 fue detenido su otro hermano, Lautaro, de 21 años, estudiante de Contabilidad e inspector en el liceo de hombres de Pitruftuén. Estuvo preso en la cárcel de Temuco. En 1974 se exilia. Actualmente vive en Francia. Delibera que con fecha 14 de septiembre de 1973 su padre sufrió su primera detención por parte de los Carabineros Carlos Moreno y Reinaldo Lukowiak de Pitruftuén. El día 17 de septiembre fue trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco junto a otros detenidos, desde donde es liberado el mismo día, con arresto domiciliario firmado por Dorian Novoa, Fiscal Militar de la fecha. Al momento de ser liberado, en el mismo Regimiento Tucapel su padre se encuentra con su madre, Elena, enterándose en ese instante que ella también había sido detenida y que sus hermanos Patricio y Lautaro se encontraban detenidos en alguna parte (estaban incomunicados en la cárcel de Temuco y no daban información respecto de su detención). Ambos se dirigieron hasta el domicilio de un familiar, la tía Aída Henríquez en Temuco, decidiendo Caupolicán retornar solo a Pitruftuén al día siguiente, debido a su delicado estado de salud. Elena se queda en Temuco unas horas más, para tratar de obtener información sobre sus hermanos detenidos, Patricio y Lautaro. Una vez que llega a la casa en Pitruftuén lo recibe y se percata que sangraba por la boca y al orinar. Su cuerpo estaba enteramente golpeado, con hematomas y huellas de quemaduras de cigarrillo. Su estado de salud era deplorable. Le comentó que había sido golpeado con

guateros, con la culata de armas, quemado en espalda y extremidades inferiores (muslos) y genitales, entre otras torturas. Además, se le humilló, cortó el pelo al rape y se discriminó por su condición de mapuche. Luego lo acompañó hasta la Comisaría de Pitrufquén, donde fue duramente interpelado por un Carabineros que se encontraba encerando la entrada, diciéndole *“indio de mierda, quien te dio permiso para pasar”*. Su padre había avanzado un paso, pisando el encerado, inmediatamente pidió disculpas y le extendió el documento donde constaba su arresto domiciliario, el Carabinero lo recibió y trató de deletrear su contenido (parecía que apenas sabía leer). El día 15 de septiembre de 1973 fue detenida su madre Elena Henríquez, de 46 años, Profesora y directora de la Escuela Básica. Su detención la realizó el Teniente de Carabineros de la 5° Comisaría de Pitrufquén, Carlos Moreno Mena, con ocasión en que ella se encontraba indagando sobre la detención de su padre. Estuvo con sus manos atadas y su vista vendada por dos días. El día 19 de septiembre de 1973, siendo aproximadamente las tres de la madrugada, fue detenido su padre por segunda vez, por Carabineros de la 5° Comisaría de Pitrufquén. Carabineros ingresó en forma violenta al domicilio familiar, a gritos e insultos, a través de ventanas del comedor y por la puerta principal. Tomando de inmediato detenido a su padre, quien se encontraba en pijama como el resto de la familia, por los Carabineros, Capitán Sergio Callis (quien posteriormente se suicida) y Reinaldo Lukowiak (actual encargado de la oficina de registro electoral en Pitrufquén), los cuales amenazaron de muerte y con intenciones de disparar sus armas largas (pasaron balas), poniendo a su madre, a su padre y deponente contra la pared. Además, se identificó a los Carabineros apellidos Merino y Ortiz. Revisaron y dieron vuelta veladores, armarios, camas, tomaron (robaron) relojes, dinero, objetos de valor familiar, patearon muebles y paredes, tiraron al suelo libros y objetos diversos, destruyeron y rasgaron fotos y vestimentas, se comieron los alimentos que había sobre la mesa del comedor (empanadas y bebidas), en un escenario de horror gigantesco. Los efectivos de Carabineros actuaron con total impunidad y desprecio hacia las personas y menores de edad presentes, quienes en ningún momento tuvieron la oportunidad de defenderse o incluso hablar. Pese a los ruegos, llantos y peticiones de su madre y suyos, los Carabineros individualizados se llevaron a la fuerza a su padre, pero

antes de cruzar la reja tiraron al antejardín su cedula de identidad y lo introdujeron en una camioneta Chevrolet, año 1970, 500K, de color verde, sin tolva, de propiedad de Pablo Maurer (civil), con destino desconocido. Se presume que se dirigieron hacia el puente Toltén de Pitrufrquén. A continuación, en horas siguientes del día 19 de septiembre, tanto su madre como la deponente, a partir de las 7 de la mañana se dirigieron a la Comisaría de Pitrufrquén para solicitar información y saber sobre la detención de su padre. Allí la atendió el Teniente Carlos Moreno Mena y la amenazó con dejarla detenida, negó que su padre hubiera sido detenido y justificó cualquier acción que hubiera hecho Callis o Lukowiak diciendo que pertenecían a un cuerpo de seguridad especial y “secreto”. Al día siguiente, es decir, el 20, cuando estaba a escasos 100 metros de su casa, observó como una patrulla de Carabineros llegaba a ella y procedían a ingresar. Desde ese momento no volvió a su hogar por temor a ser detenida y su madre tampoco. El mismo día 20 de septiembre de 1973 fue hasta el Regimiento Tucapel y se entrevistó con Dorian Novoa, quien se acordaba de su padre y el arresto domiciliario, dado que lo conocía de antes y dijo no saber nada respecto a esta segunda detención, sugiriendo que los buscara en la Comisaría de Pitrufrquén. Posteriormente su madre y la deponente fueron a la cárcel de Temuco y Fiscalía Militar de Temuco sin obtener algún tipo de respuesta. Durante los meses siguientes se dirigieron a Santiago e indagaron antes el Ministerio de Defensa y Estadio Nacional. En años siguientes, además de realizar acciones judiciales, se buscó en la zona sur y norte del país, sin resultados. Encontrándose su padre, hasta la fecha, detenido desaparecido.

15. Domínica Aguilera Caamaño. Depone de a fs. 283 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 444 (Tomo II), 1.276 (Tomo V), 1.458 (Tomo V), 2.237 (Tomo VII) y 2.448 (Tomo VIII) y fs. 438 a 440 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V) y de fs. 2.442 a 2.444 (Tomo VIII). En lo pertinente a fs. 438 a fs. 440 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V) y de fs. 2.442 a 2.444. Destaca que en 1973 era vecina de su cuñada, doña Rosalía Silva en calle Arturo Pratt de la ciudad de Pitrufrquén. Sobre la detención de Luis Fernández Barrera espeta que el día 25 de octubre de 1973 se encontraba en el patio de su casa mientras su vecino Luis Fernández estaba limpiando un

tabló de perejil que estaba cerca de la vereda. De pronto vio aparecer un vehículo de color blanco, específicamente una camioneta, que era cerrada, la que se detuvo frente a la casa de Fernández. De este móvil se bajaron cuatro Carabineros, entre los que pudo reconocer a los hermanos Hernández, otro al que le decían “el maña”, y un cuarto que era moreno y tenía un lunar en la mejilla derecha. Tomaron rápidamente a su vecino y lo subieron a la camioneta. Dentro de ese mismo móvil pudo ver detenidos a Celso Avendaño, un señor de apellido Bocaz y Luis Calfuquir, quien era marido de una profesora de nombre Elena Henríquez. Luego de esto, la camioneta se fue rumbo a la Comisaría. Distingue que le fue a avisar a su vecina Rosalía Silva lo que había sucedido, puesto que ésta se encontraba lavando ropa detrás de la casa. Por lo tanto, ella no vio cuando su marido fue detenido. Junto con ella se dirigió a la Comisaría a preguntar por él, siendo atendidas por el Carabinero Hernández. Se retiraron de ese lugar, pero volvieron en la noche junto con Rosalía Silva y la esposa de Celso Avendaño, encontrándose con el Carabinero Caamaño, quien les contó que tanto Fernández como Avendaño estaban en la pesebrera de la Comisaría, atados de pies y manos con alambres de púas y vendados. Les señaló que les iban a dar el bajo esa misma noche, pero que no le contaran a nadie. Esa noche se encondieron en las inmediaciones de la Comisaría y vieron salir un camión tolva con detenidos, pudiendo reconocer nuevamente a los hermanos Hernández que abrían el portón de la Comisaría y se subieron al camión. Este último se dirigió hacia la isla municipal regresando poco tiempo después. Luego de un rato volvió a salir cargado con detenidos yendo al mismo lugar antes mencionado. El camión tolva era de vialidad y el chofer de ese vehículo era el cuidador del recinto donde funcionaba vialidad al otro lado del puente. Glosa que entre los dos viajes del camión pudieron sentir muchos quejidos que provenían de la pesebrera, como si estuvieran golpeando gente. Días después pasó por su casa el Carabineros apodado “el maña”, quien le dijo “ojo por ojo y diente por diente. Cuídate”.

16. Carlos Gabriel Jaramillo Flores. En declaración de fs. 339 a 340 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.332 a 1.333 (Tomo V). Fue el día 13 de septiembre de ese mismo año en horas de la mañana, cerca de las once horas, mientras que se encontraba junto a una profesora de nombre Llanquirray Troncoso

Méndez, en dependencias del hotel De France; recuerda que ella subió a su habitación y el deponente la esperó en el hall del hotel, en esos instantes llegó una camioneta marca Chevrolet, color verde botella, cabina simple, modelo C-10, al mando del Suboficial Reinaldo Lukowiak Luppy, quien portaba revolver, el Cabo Domingo Silva Soto, quien conducía; los Carabineros Hernán Mella Lagos y Germán Fernández Torres, quienes portaban fusiles. Ahí Lukowiak les indica que están detenidos y los suben a la parte posterior del vehículo. Son trasladados hasta la 5° Comisaría de Pitruquén e ingresaron a la guardia. Oportunidad en que les vendaron la vista y luego los pasaron al segundo piso de las pesebreras, ubicadas en la parte posterior del cuartel. Desarrolla que pudo escuchar como golpeaban a los detenidos de su alrededor, incluyéndolo, específicamente patadas en el estómago, no reconociendo a quienes propinaban dichos golpes. En dichas dependencias había otras personas de Pitruquén, entre quienes recuerda a un joven al parecer de apellido Rojas, quien supuestamente era del Mapu y trabajaba en el SAG o INDAP de Pitruquén. Al día siguiente es dejado en libertad, por lo cual regresó a Pitruquén, donde nuevamente y en circunstancias que se encontraba en el centro de la ciudad es detenido por Carabineros al mando del Teniente Carlos Moreno Mena, quien se movilizaba al parecer, junto a Mella Lagos y Fernández Torres, es trasladado a la 5° Comisaría, donde se le corta el pelo en el patio del Cuartel y se le informa que debe mantenerse con arresto domiciliario por un periodo de casi un mes. En esta oportunidad pudo observar que al interior de la unidad se encontraban algunos ayudantes civiles de Carabineros, entre los cuales recuerda a Julio y Bernardo Dumont Bornard, Juan Larrondo, hermano de un Oficial de Carabineros, Patricio Vega, entre cuyos nombres no recuerda.

17. Juan Nolberto Caamaño Toledo. En declaración de fs. 392 a fs. 393 (Tomo II). Espeta que conoció a Celso Avendaño Alarcón, ya que era un albañil. También llegó detenido a la Tenencia de Toltén y fue remitido a la ciudad de Pitruquén a la Quinta Comisaría y nunca más supo qué pasó con él. Recuerda que él convivía al parecer, con una señora que no recuerda su identidad, pero nunca nadie preguntó por la suerte de esta persona. Además, jamás ha dicho que le hayan dado muerte, porque por lo menos allí los trasladaron todo a la Comisaría.

18. Hernando Atilio Madariaga Fernández. Depone de fs. 430 a fs. 432, (tomo II), copias de fs. 1444 a fs. 1446 (tomo V) y fs. 2434 a fs. 2436 (tomo VIII) y de fs. de fs. 1015 a fs. 1016 (tomo IV). Es conveniente destacar declaración de fs. 430 a fs. 432 (tomo II), copia de fs. 1.444 a fs. 1.446 (tomo V) y de fs. 2434 a fs. 2436 (tomo VIII) que luego del 11 de septiembre de 1973 llegó al penal el Capitán Callis a dar órdenes. Este oficial los trato muy mal. En repetidas ocasiones se presentó en la cárcel junto a Catalán, Silva, Lukowiak y Fernández. Suma que al Teniente Moreno nunca lo vio en la cárcel. Que respecto de los señores Fernández y Avendaño en el periodo septiembre-octubre, no recuerda fecha exacta, carabineros los trasladó a la cárcel en calidad de detenidos. Descarga que luego de un tiempo, alrededor de un mes, llegó una orden emanada de algún tribunal en que se les daba la libertad. Se comentó que esta era una libertad falsa por lo que a Fernández le dijo que se fuera a Santiago donde sus familiares para que nada le ocurriera. Expresa que, sin embargo, él continuó viviendo en su casa que estaba al lado de la cárcel. Supo que Fernández y Avendaño habían sido nuevamente detenidos por Carabineros y no se les volvió a ver. Apunta que en ese lugar vio llegar camiones llenos de personas detenidas que traían su vista vendada. Advierte que estos vehículos eran de particulares.

19. Plácido Del Carmen Carrillo Hermosilla, quien declaró a fs. 1025 a fs. 1027 (Tomo IV) con copia de fs. 2025 a fs. 2027 (Tomo VII) y de fs. 2115 a fs. 2117 (Tomo VII) y a fs. 1128 a fs. 1129 (Tomo IV) con copia de fs. 2118 a fs. 2120 (Tomo VII). En lo pertinente soflama de fs. 1128 a fs. 1129 (Tomo IV) y de fs. 2118 a fs. 2120 (Tomo VIII) que los detenidos que no se registraban en el libro de guardia de la unidad eran por motivos políticos, ya que los otros detenidos, por delitos comunes, eran debidamente ingresados en los registros respectivos y, además, por el clima que en ese momento se vivía en el país. Los detenidos por motivos políticos eran ingresados por funcionarios de otras unidades, desconociendo de qué unidades eran. Recuerda que veía cuando los funcionarios entraban directamente al interior de la comisaría, no pasando por el cuerpo de guardia. Los funcionarios que llegaban con detenidos eran alrededor de 3 a 4 funcionarios, llevando 3 o 4 personas detenidas aproximadamente. Llegaban en camionetas verdes que no eran de carabineros y presume que eran incautadas a servicios públicos. Los

funcionarios de otras unidades siempre vestían el uniforme de la institución, no recordando haber visto funcionarios vestidos de civil. Nunca le correspondió vigilar a los detenidos por motivos políticos. Además, estaba prohibido el tránsito de los funcionarios hasta ese sector. Lukowiak y el Teniente Moreno sabían todo lo que pasaba en la unidad ya que eran parte de la jefatura de la comisaría. Lukowiak en ese tiempo era el funcionario de mayor grado después del teniente Moreno. Ellos tenían acceso a todas las dependencias de la Comisaría, incluso al sector donde habían detenidos por motivos políticos. No recuerda muy bien, pero tal vez alguno de los recintos donde estaban los caballos sirvió para guardar el forraje después del 11 de septiembre de 1973, ya que desde esa fecha el lugar destinado para ello fue ocupado por detenidos por motivos políticos.

20. Orfelina Del Tránsito Vásquez. Depone de fs. 61 a 62 (Tomo I), fs. 388 a 389 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra 1.379 a 1.380 (Tomo V) y de fs. 2.360 a 2.361 (Tomo VIII) y de fs. 390 (Tomo II). En lo pertinente puntualizar lo expuesto a fs. 388 a 389 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra 1.379 a 1.380 (Tomo V) y de fs. 2.360 a 2.361 (Tomo VIII). Desarrolla que era conviviente de Celso Avendaño y vivían en Pitrufrquén en calle General Mackenna. El día 21 de octubre de 1973 los Carabineros andaban preguntando por su conviviente, solo recuerda a un Carabinero de apellido Castillo. Ella les dijo que él estaba haciendo un trabajo en la casa del Alcaide de la cárcel que vivía en el alto; esto fue como a las doce del día y posteriormente como a las 18:00 horas los mismos Carabineros que antes mencionó le fueron a avisar que Celso estaba detenido en la Comisaría. Les preguntó si podía ir a dejarle frazadas o algo de comida, pero ellos respondieron que su Capitán no permitía que siquiera le dieran un vaso de agua. Al otro día como a las siete de la mañana fue a la Comisaría a preguntar por él, la acompañó la señora Rosalía Silva, porque al marido de ella lo tomaron detenido el mismo día como a las 15:15 horas, allí les dijeron los Carabineros que se los habían llevado a todos para Temuco a las 18:00 horas. El día 25 de octubre de 1973 fue a Temuco, a la cárcel a preguntar por Celso, pero le dijeron que no estaba ahí y que no habían llevado a la cárcel a nadie de ese nombre, después fue a Investigaciones de Temuco, pero tampoco estaba allí. Posteriormente un cuñado suyo anduvo buscando a Celso en Concepción y Valdivia, pero no lo pudieron encontrar por

ningún lado. Estuvo más de un mes buscándolo e incluso cuando alguien dijo que lo habían visto en el río tuvo ganas de ir, pero después no lo hizo porque pensó que podían matarla también y sus hijos iban a quedar completamente huérfanos. Además, de Carabineros había también otros uniformados, le parece que Militares. Ignora si Celso estaba inscrito en algún partido de izquierda. Destaca que una persona muy cercana a ellos, cuyo nombre debe reservarse, le dijo que el día 25 de octubre de 1973 habían dado muerte a Celso y a otros siete, entre ellos Luis Hernández e Ismael Bocaz y los habían enterrado en una fosa que hicieron en la isla de la ciudad de Pitrufrquén. Recuerda que en esa época no dejaban entrar a nadie a la isla, ni siquiera en el verano, esto fue un buen tiempo así. Es todo cuanto puede decir, ya que debido a una enfermedad que tuvo, la memoria se le va un poco, pero lo que dijo es lo que recuerda muy bien.

21. Rosalía Silva Mardones. Depone de fs. 362 a 363 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.353 a 1354 (Tomo V), fs. 423 a 425 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.437 a 1.438 (Tomo V) y de fs. 2.427 a 2.428 (Tomo VIII), fs. 433 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra a fs. 1.447 (Tomo V), fs. 1.549 a 1.551 (Tomo V) y a fs. 2.437 (Tomo VIII), fs. 1.112 (Tomo IV), copia de lo cual se encuentra a fs. 2.564 (Tomo VIII), fs. 1.449 a 1.450 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.439 a 2.440 (Tomo VIII), a fs. 2.441 (Tomo VIII), fs. 951 a 952 (Tomo IV), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.562 a 2.563 (Tomo VIII). En lo pertinente conviene reiterar declaraciones que a continuación se indican.

En declaración rolante de fs. 423 a 425 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.437 a 1.438 (Tomo V) y de fs. 2.427 a 2.428 (Tomo VIII). Invoca que el 25 de octubre de 1973 vivía detrás de la cárcel de Pitrufrquén, en calle Arturo Prat s/n. Alrededor de las 15:00 horas de ese día llegó Carabineros a detener a su esposo Luis Anselmo Fernández Barrera de 33 años, militante Socialista, quien había llegado esa mañana desde Santiago. Esto sucedió mientras él estaba trabajando en la huerta de su casa, en compañía de uno de sus hijos, Luis Rufino Fernández de 4 años. La deponente sintió que su hijo lloraba, por lo que salió al patio para ver qué ocurría, entonces pudo observar cómo su esposo era golpeado por un Carabinero con la culata de su fusil y era subido a un vehículo policial de color blanco con negro y descubierto atrás. También pudo ver que había seis personas

detenidas en el interior del móvil, pudiendo reconocer a don Celso Avendaño. Junto con su hijo persiguieron el vehículo por media cuadra, pero lo perdieron. Volvió a su casa para encargar a su hijo a su vecina y cuñada, doña Domínica Aguilera, quien está casada con su hermano Enrique Montenegro Jaque, quienes viven actualmente en San José de la Mariquina y se dirigió a la Comisaría para saber de su esposo. Interpreta que doña Domínica fue testigo ocular de la detención. Cuando llegó a la Comisaría se entrevistó con el Teniente Moreno, quien negó la detención de su esposo. Entonces volvió a su casa a buscar un chaquetón de vastilla de su esposo y su carnet de identidad. Regresó a la Comisaría y volvió a conversar con el Teniente Moreno, quien estaba junto al Suboficial Lukowiak. En esta oportunidad el Teniente Moreno reconoció que su esposo había sido detenido, pero que si quería hablar con él tenía que ir a buscarlo al océano. Ante su insistencia el Oficial llamó a un Carabinero para que la detuviera sino se iba, entonces la deponente le dijo que tenía hijos que cuidar, por lo que decidió marcharse. A partir de ese momento concurrió en varias oportunidades a la Comisaría, entrevistándose con diferentes Carabineros que se encontraban de guardia, sin tener noticias de su marido. Al cabo de diez días, al parecer la primera semana de noviembre de 1973, fue al Juzgado de Letras de Pitrufquén, entrevistándose con Luis Dossow, quien la ayudó a dejar una constancia por escrito sobre la detención y desaparición de su esposo. También, en compañía de doña Orfelina Vásquez, esposa de Celso Avendaño fueron a Temuco al Regimiento Tucapel para consultar por sus esposos, pero nada pudieron obtener. Manifiesta que las hijas de doña Orfelina Vásquez pudieran haber sido testigos de la detención de Celso Avendaño.

En diligencia de careo con Carlos Hernán Moreno Mena, rolante de fs. 1.449 a 1.450 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 2.439 a 2.440 (Tomo VIII). Ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 713 y que se le lee. Aduce que no conocía a ningún Carabinero de Pitrufquén, puesto que estaba recién llegada de Toltén. En la Comisaria le dijeron que la persona con la que se entrevistó era con quien se le carea. La persona que le dijo que buscara a su marido en el océano era alto, moreno y delgado.

22. Candelaria Del Transito Álvarez Vásquez. Declaración de fs. 426 a fs. 427 (tomo II); copia de fs. 1.440 a fs. 1.441 (tomo V) y de fs. 2430 a fs. 2431 (tomo VIII). En lo pertinente funda que respecto a la detención de su padrastro, Celso Avendaño Alarcón, en el mes de septiembre u octubre de 1973, pasado medio día llegó hasta su domicilio ubicado en la ciudad de Pitrufquén una patrulla de Carabineros buscando a su padre. Aduce que en ese momento se encontraba con su madre Orfelina Vásquez y sus hermanastros Humberto Exequiel Avendaño Vásquez y Celso Avendaño Vásquez, estos dos Carabineros eran de la Comisaria de Pitrufquén, llegaron a pie. Adosa que su cuñado concurrió a su casa a comunicar que su padrastro había sido detenido. Entonces junto a su madre fueron a la Comisaria a preguntar por él. Agrega que los atendieron afuera y a su madre le dijeron que no le podían dar ninguna información y que se fuera a su casa. Asegura que es misma tarde volvieron en tres o cuatro oportunidades llevando incluso una frazada para su padrastro, pero no la quisieron recibir. Basa que un carabinero conversó con su madre y le dijo que estuviera tranquila, pues iban a soltar a su esposo y que no iba a pasar nada. A los días después, llegó hasta su domicilio el carabinero Orellana, quien era amigo de su padrastro y muchas veces había compartido con ellos en asados en su casa. Comenta que este carabinero le dijo a su madre que no buscara más a su padrastro, porque a las cuatro de la madrugada del día siguiente de su detención le habían dado muerte al interior de la Comisaría enterrándolo en la Isla.

23. Eduardo Enrique Avendaño Stancovich. Declaración de fs. 572 a fs. 574 (Tomo II). Cuenta que es hijo de Celso Avendaño Alarcón, quien desde el año 1973 se encuentra desaparecido. Funda que la última vez que vio a su padre fue a principios del año 1974, cuando estaba recluso en la cárcel de Pitrufquén, desde una fecha posterior al 11 de septiembre. Reitera que la última vez fue en el centro penitenciario de Pitrufquén en horario de visita. Espeta que su padre fue detenido en dos oportunidades, la primera antes del 11 de septiembre, ingresando a la cárcel de Pitrufquén. La segunda detención ocurrió después de esa fecha. Hubo un periodo que pasó en libertad. Los hechos a los que hace referencia corresponden a la segunda detención de la cárcel de Pitrufquén. De la muerte de su padre musita que escuchó rumores que había sido enterrado en una isla, a

saber, isla cautín, siendo llevado a ese lugar y enterrado junto a cinco personas de Pitrufrquén. Insiste que son rumores. Ensayó que Orfelina Vásquez, era pareja de su padre y vivía junto a ella al momento de la detención. De dicha relación nacieron dos hijos a saber, Celso y Exequiel. Celso le comentó que lo trataron muy mal cuando intentó averiguar de su padre. Los malos tratos provenían de Carabineros, y fueron insultos, groserías, etc. Suma que la gestión fue ir a hablar con su cuñado René Garcés Garcés, medio hermano de su cónyuge. Así a fines de la década del 80 le pidió ayuda para saber el paradero de su padre. Su cuñado en esa época se desempeñaba en Loncoche en Carabineros, le dijo muy amablemente que trataría de indagar con sus jefes, en caso de que la institución manejara alguna información. Al tiempo después le manifestó que no pudo averiguar porque su jefatura le ordenó no hacerlo. Acompaña una fotografía de su padre de la época.

24. Ángel Ascanio Fernández Barrera. En declaración de fs. 1.853 a fs. 1.854 (tomo VI). Ratifica su declaración policial rolante a fs. 858 y siguiente y que en el acto le ha sido leída y reconoce como suya la firma estampada en ella (declaración no se encuentra en la causa). Apunta que su hermano Luis se dedicaba a la artesanía y de todo un poco. Agrega que tiene entendido que el no tenía una militancia política. Agrega que ellos siempre han sido de Santiago, originarios de allá. Asevera que su hermano conoció a su señora y se fue a vivir a Pitrufrquén, por esa razón desconoce que amistades tenía su hermano en Pitrufrquén. Adosa que no sabe cómo supo su madre, pero efectivamente los carabineros habían detenido a Luis. Que esa comunicación tuvo que habérsela dado la señora de su hermano, tal vez por carta o por teléfono. Barbulla que su padre ese día del golpe, iba para el sur a ver a Luis y se quedó toda la noche en la estación porque el tren no salió y después vino el golpe. De aquello se acuerda porque su padre se lo contó. Agrega que su padre fue alrededor de tres veces para el sur, para saber el paradero de su hermano Luis y siempre iba a carabineros de Pitrufrquén, y ellos le decían que habían pasado a Luis a Temuco. Anexa que fue también a los militares, no sabe de dónde, pero ellos le dijeron que su hermano Luis no había sido ingresado allá. Arguye que lo cierto es que carabineros de Pitrufrquén fueron los que lo detuvieron. Respecto de Celso Avendaño Alarcón e Ismael Bocaz Muñoz, “Chalia”, la esposa de Luis dijo que cuando se llevaron a su hermano iba más

gente detenida en el vehículo y entre ellos estaban estas dos personas. Agrega que los trámites en el informe Rettig los hizo el; que se acuerda de haber ido a la catedral y allá hizo la denuncia.

25. Isolina Peña Perez, quien declaró de fs. 1.960 a fs. 1.961 y de fs. 2.122 a fs. 2.123 (Tomo VII). En lo pertinente narra de fs.2.122 a fs.2.123 (Tomo VII), el día anterior a la detención de Ismael, su casa fue allanada en 3 oportunidades por funcionarios de Carabineros de Pitrufquén. También andaba un funcionario que era muy violento, pero de quien ignora su identidad, pero era conocido por tener el grado de Teniente, por lo menos todos los vecinos pensábamos que ese era su grado en la institución. Ellos buscaban armas y a su marido, diciéndole que en cuanto éste llegara, debía presentarse en la unidad de Carabineros de Pitrufquén. Manifestó que el día que se efectuaron los allanamientos, su esposo Ismael no se encontraba en la comuna, llegando al día siguiente hasta su hogar. En cuanto llegó le contó lo sucedido y le dijo que luego de tomar desayuno iría a la Comisaría y posteriormente a su trabajo. Sin embargo, como ya declaró ante la Policía, Ismael nunca llegó a su lugar de trabajo, desconociendo hasta la fecha su paradero. Asevera que desconoce si los Carabineros andaban movilizados, ya que en ese tiempo vivían en una mediagua y su puerta principal estaba por la parte de atrás del sitio que ocupaban, que en todo caso no tenía cerco. A la pregunta, sólo andaban dos funcionarios de Carabineros cuando se efectuaron los allanamientos a su hogar. Inquirió que no supo ninguna otra información de Ismael, lo busco intensamente por muchas unidades militares y de Carabineros, sin lograr resultados positivos. A la pregunta, descargo que recuerda que Celso Avendaño era su vecino, vendía pescado y además tiene entendido, que era simpatizante del MIR. Él tenía una relación de amistad con su marido, desconociendo si se reuniesen para analizar temas políticos.

26. Patricio Leónidas Bocaz Peña, quien declaró de fs. 2.804 a fs. 2.804 vta. y de fs. 2.849 a fs. 2.850 (Tomo IX). En lo pertinente soflama de fs.2.849 a fs.2.850 (Tomo IX). Su padre para el año 1973 trabajaba en vialidad, era dirigente del Partido Comunista. Como existía el toque de queda al regresar a Pitrufquén pasaron por una casa y tocaron la puerta, salió el dueño de la casa que era un capitán de Ejército y empezó a correrles bala, hiriendo al chofer. Esa misma noche

fueron los carabineros hasta su casa a realizar la búsqueda de su padre, como relató en su declaración policial. Todo esto, el pedir alojamiento en esa casa, fue en Toltén. Era complicado volver, pasaron por esa casa a pedir alojamiento, ellos andaban vestidos de obrero y esta persona salió disparando altiro e hirió al chofer en la pierna. Su padre se fue caminando a la casa. Al parecer el chofer fue detenido de inmediato en Toltén y dio el nombre de su padre. Todo esto lo escuchó cuando su padre llegó a la casa y se lo comentó a su madre. A la consulta, rememora a los de apellido Teillier que eran del Partido Comunista y otras personas que también están desaparecidas en Pitrufrquén; entre ellos había uno que trabajaba en el hospital y tenía un brazo cortado, vivía al frente de ellos. Precisa que ellos vivían como a dos cuadras hacia al norte desde Investigaciones, en lo que se conoce como una toma, su padre gestionó mediaguas para todos. La señora Elena Henríquez, madre de los Calfuquir, era vecina suya, parece que esta señora trabajaba en el hospital y su hija igual. Desarrolla que la señora Elena llegó corriendo donde su mamá a avisarle que en la plaza le pegaron un culatazo a su papá y que una patrulla de Carabineros lo tomó detenido. Él mismo acompañó a su mamá a la Comisaría de Pitrufrquén y allí reconocieron que su padre había estado detenido pero que lo habían trasladado al Regimiento de Temuco. Recuerda que la noche en que fueron a su casa, el carabinero que le pegó era de apellido Antipan. Según recuerda, su padre se fue a presentar a la Comisaría. Su madre, cuando su padre llegó desde Toltén, le dijo que no quería que los siguieran allanando, que no volvieran a la casa los Carabineros, pero como iban a volver a ir nuevamente a la casa, su padre quemó todo y se fue a presentar a Carabineros de Pitrufrquén. La distancia entre la plaza y su casa era de aproximadamente 5 a 6 cuadras. Atestigua que no supieron si su padre estuvo detenido con más personas en la Comisaría de Pitrufrquén. El único allanamiento fue la noche anterior a que su padre se presentará en la Comisaría. No hubo posteriores. Respecto a Celso Avendaño, indica que él vivía dos casas más allá de la suya, en la misma toma. A Luis Anselmo Fernández Barrera, lo ubicaba porque su padre antes del 11 de septiembre iba a marchas y él mismo lo acompañaba, por eso tiene conocimiento sobre él. No tiene mayores antecedentes sobre sus detenciones, solo que Carabineros de Pitrufrquén fueron los responsables.

B. Documentos.

1. Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de fs.1 a fs.9 (tomo I), informa que Celso Avendaño Alarcón, 47 años, presidente del asentamiento Los Boldos, de actividad Mueblista, su familia habría sido informada posteriormente que había sido trasladado a la cárcel de Temuco, donde nunca fue encontrado.
2. Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de fs. 1.052 a fs. 1.066 (tomo IV), informa respecto de Luis Fernández Barrera, detenido desaparecido, Pitruftuén, en octubre de 1973, 32 años de edad, casado y padre de tres hijos, era artesano. Fue detenido por Carabineros de Pitruftuén el 25 de octubre de 1973, siendo trasladado a la Comisaría de dicha localidad, desde esa fecha se desconoce su paradero.
3. Informe Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de fs. 2.049 a fs.2.067 (tomo VII), informa respecto de Ismael Rolando Bocaz Muñoz, detenido desaparecido, Pitruftuén, octubre de 1973, 31 años, casado con hijos. Militante del partido comunista, se desempeñaba como funcionario de la municipalidad de Pitruftuén. El 18 de octubre de 1973 fue detenido en las cercanías de la plaza, luego que su domicilio fue allanado el día anterior. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.
4. Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de fs.43 a fs.44 (tomo I), respecto de Celso Avendaño Alarcón, **situación represiva:** Celso Avendaño Alarcón, casado, mueblista, presidente del Asentamiento "Los Boldos" de Pitruftuén, fue detenido el 16 de octubre de 1973, en horas de la mañana, en su domicilio de calle Bilbao de la localidad de Pitruftuén, por efectivos militares que dijeron pertenecer al Regimiento Tucapel de Temuco. El arresto fue practicado en presencia de los vecinos de Celso Avendaño, quienes avisaron de la situación a su cónyuge, quien vivía en la ciudad de Temuco. Presumiblemente, fue trasladado a la ciudad indicada, perdiéndose todo rastro de su persona. Su familia realizó numerosas averiguaciones para conocer la suerte corrida por el afectado en manos de sus captores, ninguna de ellas dio resultado alguno. **Gestiones judiciales y/o administrativas:** Doña Esmeraldina Stancobich Meriño, cónyuge de la víctima, interpuso en 1989 una denuncia por presunta desgracia, ante el

Juzgado del Crimen de Pitrufquén, en la cual expone las circunstancias del arresto y posterior desaparecimiento de su marido. Asimismo, en agosto de 1990, deja constancia de, los mismos hechos, en una declaración jurada en la que agrega que no realizó gestiones con anterioridad, por temor a represiones en su contra y la de su familia.

5. Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 875 a fs. 877 (tomo IV) respecto de informa respecto de Luis Fernández Barrera, detenido desaparecido, Pitrufquén, en octubre de 1973, 32 años de edad, casado y padre de tres hijos, era artesano. Fue detenido por carabineros de Pitrufquén el 25 de octubre de 1973, siendo trasladado a la comisaria de dicha localidad, desde esa fecha se desconoce su paradero.

6. Informe Fundación de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 1.917 a fs. 1.918 (tomo VII) informa respecto de Ismael Bocaz Muñoz, **situación represiva:** Ismael Rolando Bocaz Muñoz, casado, 3 hijos, empleado de Vialidad, militante comunista, fue detenido el 17 de octubre de 1973 por Carabineros cuando se dirigía a entregarse voluntariamente a la Comisaría de Pitrufquén y desde esa fecha permanece como detenido desaparecido. Ismael Bocaz era dirigente del Partido Comunista en la comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, en la actual Novena Región y trabajaba con el Gobernador del Departamento. El 16 de octubre de 1973 su casa fue allanada tres veces. Ismael Bocaz no llegó esa noche a su domicilio, pues estaba en la localidad de Toltén, donde, buscaba refugio con el chofer del vehículo en el que viajaba. Esa noche se había hecho tarde y golpearon en la casa de un militar, el que al abrir la puerta, les disparó, hiriendo al chofer. A la mañana del día siguiente, al llegar a su casa Ismael Bocaz, fue informado de los allanamientos y se dirigió a la Comisaría local para presentarse allí. En el camino fue detenido por Carabineros, hecho que ocurrió en la plaza de la localidad, allí fue golpeado por sus aprehensores. Desde esa oportunidad no se supo más de Ismael Bocaz, quien se encuentra desaparecido. **Gestiones judiciales y/o administrativas:** La cónyuge del afectado quedó muy atemorizada. Debió irse de la localidad a vivir con su madre, para poder mantener a sus tres hijos. Nunca se atrevió a hacer gestiones judiciales. La Comisión Nacional Verdad y Reconciliación investigó nueve casos de personas desaparecidas en septiembre y octubre de

1973, en Pitrufuquén, entre ellos el caso de Ismael Bocaz y llegó a la conclusión que estas personas fueron forzadas a desaparecer por agentes del Estado y que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos. La esposa del afectado recurrió a la Comisaría de Pitrufuquén y al regimiento Tucapel de Temuco haciendo consultas sobre su marido, sin obtener respuestas acerca de su paradero.

7. ORD. N°2.422-2013 de Jefe de departamento control de fronteras de la Policía de investigaciones de Chile de fs.95 (tomo I), informa que respecto de Celso Avendaño Alarcón no se registran movimientos migratorios.

8. Nómina de personal 5°Comisaria de Pitrufuquén de septiembre a diciembre de 1973 de fs.463 (tomo II), en el cual aparece el acusado Carlos Hernán Moreno Mena.

9. Informe N° 1216 del Departamento de Control Fronteras, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de fs. 1.950 (tomo VII), señala que respecto de Ismael Bocaz Muñoz no existen datos de entrada y salida del país.

10. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fs. 1928 a fs. 1929 (Tomo VII), en lo pertinente aporta antecedentes de las detenciones de Celso Avendaño Alarcón, Ismael Bocaz Muñoz y Luis Anselmo Fernández Barrera, documento de la Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos, IX región.

11. Informe N° 12180 del Departamento de Control Fronteras, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de fs. 881 (tomo IV), señala que respecto de Luis Anselmo Fernández Barrera no existen datos de entrada y salida del país.

10°) Que de los propios dichos del encausado Carlos Moreno Mena se puede desprender lo siguiente:

- A.** Que de acuerdo a lo señalado de fs. 159 (Tomo I), en lo pertinente:
- “Aclara que siempre que detuvo personas lo hizo por órdenes escritas emanadas de la Fiscalía Militar o de Carabineros. El único fundamento para detener eran su filiación política.”, luego en la misma foja refiere que: “Reitera que no era una persona de confianza de Callis y por eso solo detuvo a dos personas, a saber Tenorio y Lobos.”

- B.** Que a mayor ahondamiento a fs. 240 (Tomo I), en lo pertinente dijo: “El día de la detención de Tenorio, se detuvo a una o tres personas, la misma noche. Según Lukowiak esa noche se detuvo a las personas correctas, es decir aquellas que la orden señalaba. Las otras personas no las recuerda, porque la orden señalaba literalmente: “Tenorio y otros”. el nombre de los otros lo proporcionó el señor Callis, pero no recuerda nombres ni si fueron detenidas antes o después de Tenorio, en todo caso la patrulla conocía nombres y domicilios.”
- C.** Que es oportuno reiterar lo expuesto a fs. 271 (Tomo I) que: “De la detención del señor Burgos, agente del Banco de Estado de Pitrufquén, el Capitán Callis un día les ordenó acompañarlo al centro, no recuerda si fueron a pie o vehículo. El Capitán Callis ingreso al banco acompañado por otros carabineros y el deponente se quedó vigilando la puerta. A los pocos minutos salió el Capitán Callis llevando detenido y encañonado a Osvaldo Burgos.”
- D.** Que sumar a lo precedente diligencia de careo con Reinaldo Lukowiack rolante a fs. 1.241 a fs. 1.242 (Tomo V) que: “las personas que fueron detenidas en esa ocasión fueron entregadas a la guardia de la Comisaria de Pitrufquén y al Capitán Callis.”
- E.** Que de lo puntualizado anteriormente, este tribunal puede arribar a la conclusión que el señor Carlos Moreno Mena, fue parte de la dotación de la 5° Comisaria de Pitrufquén, y tenía pleno conocimiento de la existencia de los detenidos ilegalmente por motivos políticos, como el espacio físico destinado al interior de dicha unidad para mantenerlos.
- F.** Que de los dichos puntualizados precedentemente, se desprende que el Teniente Moreno Mena, a la época de los hechos, participó de la detención de diferentes personas, las cuales eran motivadas por causas políticas, tales como los señores Burgos y Tenorio.
- 11°)** Que del conjunto de elementos probatorios antes aquilatados y relacionados generales y específicos testigos directos, indirectos y documentos antes señalados como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.923 a fs.**

2.942 (Tomo IX) permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

1. Primero: que han existido los delitos de secuestro calificado en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, previstos y sancionados en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícitos en su carácter de lesa humanidad.

2. Segundo: que en estos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Carlos Hernán Moreno Mena**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

12°) En cuanto a la defensa. La abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación de **Carlos Hernán Moreno Mena** en su presentación de fs. 3386 a fs. 3401 (Tomo XI), en lo principal contesta acusación judicial y acusaciones particulares, solicitando la absolución de su representado, en subsidio alega excepciones de fondo, prescripción y amnistía, solicitando el sobreseimiento total y definitivo; al primer otrosí medios de prueba; al segundo otrosí: beneficios de la ley 18.216; al tercer otrosí: se deje sin efecto apercibimiento que indica y al cuarto otrosí: solicita copias de resolución que indica.

Para un mejor entendimiento se estructura de la siguiente manera:

A. Antecedentes que aporta la acusación judicial. Comienza reproduciendo el auto acusatorio en lo pertinente. Puntualizando que no reúne los requisitos establecidos por el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal.

B. Alegaciones y defensas.

B.1 Solicita absolución por falta de participación. Que la acusación refiere en términos generales que las tres víctimas de autos fueron detenidas por personal de 5° Comisaria de Pitrufquén, sin individualizar a los funcionarios que supuestamente detuvieron a dichas personas. A criterio de la defensa se le atribuye responsabilidad a su representado, a consecuencia de que era el segundo de la Comisaria precitada, secundando a Ramón Callis, oficial a cargo de la Comisaria respectiva. Continúa la defensa describiendo la dinámica entre el oficial Callis y su representado al interior de ésta. Espeta que su defendido no era de confianza de dicho oficial, razón por la cual se apoyó de suboficiales de larga

trayectoria. En tanto Carlos Moreno se dedicó a reforzar la seguridad y del cuartel con personal subalterno al disponer que acudieran y concurrieran funcionarios desde retenes circundantes. Anexa que a partir del 11 de septiembre de 1973 Callis le quitó sus funciones y su cargo de oficial de órdenes le fue anulado, no delegando responsabilidades ni comisión por parte de su superior. Puntualiza que fue el grupo de confianza de Callis, a quienes la defensa individualiza, los que se encerraron en el cuartel y en la oficina colindante con la oficina de partes, activando contactos con los servicios de inteligencia, militares e institucionales. Esgrime la defensa que su representado se vio obligado a cambiar su rutina y dejó de dormir en el cuartel, como lo hizo previo al 11 de septiembre, descansando en un vehículo que facilitó el señor Granzoto y salió a patrullar a la población o calle sin personal designado al efecto. Que no es razón suficiente, que su representado haya sido parte de la dotación de la 5° Comisaria de Pitrufquén para atribuirle responsabilidad en la detención de las víctimas, más aún considerando que el oficial a cargo de dicho lugar, fue Ramón Callis Soto. Reitera que su representado no ejerció como segundo al mando de la Comisaria, es más, el ex teniente Carlos Moreno no era oficial de confianza de Callis Soto. Recalca que no existe ningún medio probatorio que inculpe a su representado del secuestro de Celso Avendaño, Luis Fernández e Ismael Bocaz. La defensa se hace cargo de la declaración de Dominica Aguilera Caamaño, de lo cual concluye que no representa ni vincula a su representado en la detención de las víctimas, pese a que identifica al grupo aprehensor. En relación a los dichos de Rosalía Silva Mardones refiere que existe contradicción con los dichos de la testigo Dominica, por cuanto señalan haber conversado con diferentes personas. Arguye que el tribunal ha creado una autoría del señor Moreno mezclando diversas declaraciones de diversas causas para configurar la hipótesis errada de que la función de su representado en aquella época se debía a la sistematicidad de actuar con detenidos que suponía ya sabía y conocía tenían que ser detenidos y desaparecidos señalándose como autor sospechoso y reincidente y no creíble porque estaba como segundo al mando. Para lo anterior se apoya en dichos de Reinado Lukowiak Luppy, José Amulef Maripe, sin perjuicio de las declaraciones de Flavio Urra Guiñez, Benjamín Chávez Saavedra, antecedentes que hacen presumir la inocencia de su representado, así

las conclusiones a las cuales llega el tribunal no fueron debidamente precisadas. Proclama que el actuar de su representado no es compatible con el tipo penal descrito en el artículo 141 del Código Penal. Ahora bien, en el caso improbable que se insista que su representado fue parte del grupo de carabineros que detuvo a las víctimas, se debe hacer presente que no se puede olvidar que el encausado siempre actuó conforme a la ley, siempre que se detuvo a una persona, fue a propósito de una instrucción de su jefe directo, con decreto y orden escrita emanada para ello, entregando al detenido a su jefatura y guardia. En conclusión, refiere que no hay méritos para colegir que su representado tuvo responsabilidad alguna en los hechos.

B.2 Respecto a las acusaciones particulares. Fundamenta la defensa que los querellantes no han aportado antecedentes diversos que permitan establecer, en razón de los mismos hechos aquilatados, algún otro tipo penal distinto de aquel que ha acreditado el tribunal, deben necesariamente ser desestimados, más aún, si la presunta responsabilidad que se le pretende atribuir a su representado en tales ilícitos, no se encuentra acreditado en autos. Mismas razones por las cuales se solicita el rechazo de las circunstancias agravantes que se plantea por los querellantes en sus diversas presentaciones. Urde que su defendido no realizó ninguna de las acciones típicas descrita anteriormente.

C. Opone, de manera subsidiaria y como excepción de fondo, la prescripción de la acción penal y la amnistía. Que atendida el tiempo transcurrido la acción penal se encuentra prescrita conforme a los artículos 93 y siguientes del Código Penal, debiendo el tribunal declararla de oficio y conforme a ello se decrete el sobreseimiento total y definitivo. En subsidio de lo anterior y producto que los hechos se encuadran dentro del ámbito de aplicación del D.L. N°2191 de 1979 se absuelva al encausado de su eventual responsabilidad, por amnistía.

D. Solicita subsidiariamente, la recalificación de la participación. Que en el caso eventual que no se consideren suficientes los argumentos de la defensa y se decida condenar a su defendido, se recalifique su participación en calidad de encubridor, toda vez que no fue parte del grupo de Carabineros que detuvo a las

víctimas, habiendo sido acreditado por declaraciones de testigos presenciales, que fueron otros los funcionarios autores de la detención.

E. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En caso de sostener una eventual participación de su representado, es pertinente se le reconozca la atenuante del artículo 11 N°6 y 9 del Código Penal, por su irreprochable conducta anterior y porque desde el comienzo de la investigación, ha señalado de manera clara y detallada cual fue la realidad de lo vivido al interior de la Comisaria de Carabineros de Pitrufquén. Anexa la atenuante muy calificada del artículo 103 del mismo cuerpo normativo. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, arguye que si bien la norma es de carácter imperativo y una norma de orden público, implica que cumpliéndose los requisitos necesarios para que proceda, debe aplicarse por parte del juzgador, que razonar al contrario infringe principios resguardados por la Constitución Política de la República.

Análisis de la defensa específica.

13°) Consideraciones previas al análisis de la defensa específica: Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallaran:

- A. Resumen ejecutivo del auto acusatorio.
- B. Estado de derecho.
- C. Obligación de investigar.
- D. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por tribunales alemanes.
- E. Convenios de Ginebra.

14°) Resumen ejecutivo del auto acusatorio. Que para un adecuado análisis de la defensa específica se hace necesario hacer un resumen del auto acusatorio de fs.2.923 a fs. 2.942 (Tomo IX) en la parte pertinente de la descripción de los hechos.

a. Que en la letra A) del auto acusatorio se cuenta que luego del 11 de septiembre de 1973, la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén aumentó su dotación al replegarse unidades inferiores a ella; debiendo además los

uniformados pernoctar en dicho recinto policial, pues la orden los obligaba a permanecer en estado de acuartelamiento grado uno.

b. Que en la letra B) se narra que al mando de esta unidad y sus unidades dependientes como superior jerárquico, se encontraba el Capitán Ramón Sergio Callis Soto quien organizó y coordinó un grupo especial de patrullas de carabineros compuesto por funcionarios de la unidad a su cargo, para el control y detención de personas por motivos políticos en Pitrufquén y comunas aledañas; entre los que se encontraba el teniente Carlos Hernán Moreno Mena, quien le seguía en el mando.

c. Que en la letra C) se describe lo acontecido con Celso Avendaño Alarcón, mueblista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, vivía junto a su familia en la comuna de Pitrufquén, donde era reconocido por sus habitantes por su trabajo en la comuna y alrededores. Para el día 25 de octubre de 1973, tras ser dejado en libertad tras cumplir una condena en la cárcel pública de Pitrufquén, fue nuevamente detenido por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén, que lo suben en una camioneta donde es visto arriba de ella por Dominica Aguilera Caamaño. Desde ese momento se le pierde el rastro hasta la actualidad.

d. Que la letra D), habla que el mismo día de la detención de Celso Avendaño Alarcón, es detenido Luis Anselmo Fernández Barrera, comerciante, artesano, militante del Partido Socialista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, que vivía junto a su esposa e hijos en el centro de Pitrufquén, quien es sacado de su domicilio por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén, siendo testigos presenciales de este hecho, Rosalía Silva Mardones y su vecina Dominica Aguilera Caamaño. Inmediatamente es subido a una camioneta por los funcionarios, donde además ven detenido a Celso Avendaño Alarcón. Ambas mujeres se dirigen a la 5° comisaría de Pitrufquén para consultar del paradero de Fernández Barrera, donde se les niega que este detenido allí, que no insistan en su búsqueda, a pesar de sus esfuerzos y consultas por diversos destacamentos en la región. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Luis Anselmo Fernández Barrera

e. Que en la letra E), señala que sucedido con Ismael Rolando Bocaz Muñoz quién era casado, funcionario de la Gobernación y militante del Partido Comunista, tras allanarse su domicilio en calle Vicuña Mackenna tres veces y ser requerido

por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén, se presenta voluntariamente en dependencias de la mencionada Comisaría el 18 de octubre de 1973. No obstante lo anterior y pese a las gestiones de su esposa Isolina Peña Pérez para encontrarlo, desde ese día no se tienen noticias del paradero de Ismael Bocaz Muñoz.

f. Que la letra F) funda que hasta esta fecha ningún funcionario público de las Fuerzas Armadas, en especial el mando de Carabineros de Chile que se desempeñaba en la época de los hechos ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo realmente acontecido con las víctimas.

g. Que como se desprende del resumen del auto acusatorio y sin perjuicio de las ponderaciones posteriores no se trata de actos aislados de los agentes del Estado, si no que hay un patrón permanente respecto a las detenciones políticos, así se observa en el caso de la letra C) de Celso Avendaño, una vez puesto en libertad por otra causa, es detenido ilícitamente por funcionarios de la 5° Comisaria y lo suben a una camioneta. En el caso de Fernández Barrera, la persona es sacado de su domicilio en presencia de testigos presenciales. Sin perjuicio de lo sucedido a Ismael Bocaz, que su domicilio fue allanado tres veces por funcionarios de la 5° Comisaria de Pitrufquén. En consecuencia, como se ha reiterado es una actividad permanente de los agentes del Estado para detener en este caso a estas tres víctimas por motivaciones políticas o caprichos por el exceso de poder.

15°) Estado De Derecho:

a. Estado Autoritario: “Un Estado autoritario, es aquel donde el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella.”

(**Roberto Ruiz Díaz Labrano:** “El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia”, **p.3.** Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc.) (...) “La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso

arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario”. (**Oscar Vilhena Vieira** (2007): “La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho”. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. **p.33**). (...) “En esa línea el concepto de **Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno”. (**Dante Jaime Haro Reyes**: “Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia”. www.juridicas.unam.mx. **p. 123**). (...) “Puede sostenerse entonces, que su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política”. (**Pablo Marshall Barberán** (2010): “El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política”. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, **pp. 185-204**).

b. Origen: “El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos.” (**Luis Villar Borda** (2007): “Estado de Derecho y Estado Social de Derecho”. Revista de Derecho del Estado N° 20, **p. 74**). (...) “En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento”. (**Haro, p. 118**).

c. Fundamento: “El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término

no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder”. (**Marshall, pp. 187-188**).

d. Concepto: “El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre.” (**Haro, p. 124**). (...) “Del mismo modo, como expresa **Guastini** en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro, p.123**). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos”. (**Haro, p. 126**).

e. Elementos: **Marshall** siguiendo **Böckenförde**, expresa que las características originales del Estado de Derecho son las siguientes: “**a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre

estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones” (**Marshall, p.191**). En esa línea **Benda** considera que el Estado de Derecho involucra: “**a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica.” (**Marshall, p.191**). Sobre lo anterior **Villar Borda (pp. 74-81)** realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá **Böckenförde**. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de muchas fuentes y distintas épocas, así: “**a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de las leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional”.

f. Chile y el Estado de Derecho: Que Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** “La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo

temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad**. Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática”. (Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle (2006): “La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano”. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la **Constitución de 1925** esta consagra, además, el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo. Así es verificable en sus **artículos 1 al 4** que consagra el gobierno republicano y democrático **(1)** la soberanía reside en la nación **(2)**. Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por las leyes **(4)**. Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Que por su lado la **Constitución de 1980** (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su **artículo 4** que Chile es una República democrática. En su **artículo 5** que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. Marshall (pp.199-202) expresa que (...) “los **artículos 5 a 7 de la Carta Fundamental** se desprenden algunos **principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política**: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. **(i)** El enunciado del **artículo 5 inciso 2º** como consagración del principio de distribución. La afirmación de que el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía

constitucional (**art. 6 inc. 1º**), legalidad en sentido amplio (**arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º**), garantía del orden institucional (**art. 6 inc. 1º**), fuerza normativa de la Constitución (**art. 6 inc. 2º**); responsabilidad (**art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º**), distribución de competencias- separación de poderes- (**art. 7 inc. 1º y 2º**), legalidad en sentido estricto (**art. 7º inc. 1º**). Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar.” (Marshall, pp. 191-192). (...) “En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera uno de los pilares principales de un régimen democrático Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso”. (Vilhena, p.30). Luego se dan todos los elementos del **Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad** para formularle al acusado el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad, hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el **11 de septiembre de 1973**, tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un **quiebre constitucional** significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. **El delito de secuestro calificado** (como indica el mérito del proceso) de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, fueron al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de la defensa.

16º) Obligación de investigar. Que cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de

violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

a. “Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en Derechos Humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al **artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución** que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales.” (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

b. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en

los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c. “Que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”.(García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

d. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**- ya citada- en especial los **artículos 1.1 y 2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se

deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los Derechos Humanos (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

f. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

1. Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...) “el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”. Por su lado en el párrafo **177** acota que (...) “la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

2. Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del (...) “artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos”.

3. Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que (...) “esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

4. Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su **párrafo 42** anexa que (...) “La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria” (...).

5. Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) “el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado”.

6. Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el **párrafo 115** explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”.

7. Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las

garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso”.

8. Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004.

Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana”.

9. Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención”.

10. Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) “está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar exoficio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.

11. Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al

derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso”. El párrafo **233** (...) “Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados parte en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales”; el párrafo **299** (...)“Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán”.

12. Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo 143 afianza que (...) “en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

13. Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que el párrafo 117 (...) “además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”. El párrafo 129 (...) “una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables”. El párrafo 130 (...) “por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido”.

14. Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa el párrafo 111 (...) “Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta

en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.
Párrafo 114 (...) “Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”.

15. Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares”.

16. Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, el párrafo 155 (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irracionalidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron

durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. El párrafo **156** (...) “El eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”. El párrafo **171** (...) “Este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.”

17. Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo 106 indica que (...) “Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio”.

18. Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) “El Tribunal reitera

que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.

19. Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en el párrafo **104**, (...) “Que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”. El párrafo **112** (...) “La obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional”. El párrafo **115** (...) “Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una

investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas”.

20. Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) “La obligación de investigar violaciones de Derechos Humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos”.

21. Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) “en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.

22. Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. **Párrafo 283** añade “que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

23. Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su **párrafo 298** apunta que (...) “La obligación general de garantizar los Derechos Humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la

gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condiciona condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

24. Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) “este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación, así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y

aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación”.

25. Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) “en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”.

26. Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) “la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales”.

27. Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) “la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

28. Sentencia caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador del 23 de mayo de 2023. Párrafo 81 asevera que, (...) “de forma reiterada en su jurisprudencia, la Corte ha establecido que la desaparición forzada es una violación compleja y múltiple, que pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. En particular, esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente Asimismo, la Corte ha señalado que, si un Estado práctica, tolera o permite un acto de desaparición forzada, incumple las obligaciones previstas en el artículo I a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe tales conductas”. Continúa, el párrafo 83 musita que, asimismo, (...) “la Corte ha afirmado que la desaparición forzada es “un acto continuado o permanente, que permanece mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y mientras no se determine con certeza la identidad de los mismos”. Este acto se configura cuando se presentan en forma concurrente los siguientes elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”. Que el párrafo 106 asienta que, “Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, en su caso de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En particular, cuando se trata de la investigación de violaciones en perjuicio de personas que se encontraban bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, es decir, con la debida diligencia, sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Tales características del deber de investigar son aplicables, con mayor razón, en casos de posible desaparición forzada de una

persona. Por último, el párrafo 107 refiere, (...)” frente a esta violación en particular, además del deber de investigar y sancionar a los responsables, la Corte ha subrayado la existencia de una obligación autónoma de buscar y localizar a las personas desaparecidas, derivada de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, del artículo X de la CIDFP y de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Este deber también ha sido desarrollado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos últimos indican que las autoridades encargadas deben iniciar la búsqueda de oficio, incluso si no se ha presentado una denuncia o una solicitud formal y agregan que “[l]a búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”, toda vez que “[e]l proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal.”

g. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la obligación de investigar en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor. (“Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal”. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). El autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

2. Que si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

3. El **deber de investigar** es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

5. La Corte IDH ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

6. Para cumplir la **obligación de investigar** y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación,

persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte IDH ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

9. Esta obligación de debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

11. La Corte IDH reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines

centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación efectiva de Ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

h. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y en este aspecto el escrito de la defensa realiza una alegación sin ese contexto. En ese orden de ideas, del estudio de sus argumentaciones, no existe un examen

adecuado de todos los testigos y documentos, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que la defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

17°) Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes.

a. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos, casas, subterráneos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad, respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación, se realiza una síntesis de las reflexiones en lo pertinente de los artículos de **Gerhard Werle** y **Boris Burghardt** (Universidad Humboldt- Berlín, sobre el caso Demjanjuk); y de **Claus Roxin** sobre el caso Oskar Gröning. Estos casos además han sido llevados a formato audiovisual en diferentes documentales, tales como: “El nazi Iván el terrible” Netflix y “El contador de Auschwitz” de la plataforma Prime Video.

b. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el **caso Demjanjuk** en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). (Gerhard Werle y Boris Burghardt (Universidad Humboldt- Berlín. “Revista Penal México”. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193). Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal

Estatál) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como cómplice de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de

guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

c. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello

toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

d. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Go-merski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht, incluso para Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de

Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo”. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

e. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, (...) todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que (...)se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado (...) ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco

en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

f. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo. La declaración principal podía resumirse diciendo que allí no había actividades neutrales. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

g. Que el segundo artículo versa sobre la sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin ("Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano". CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión

solicitado por el acusado Oskar Gröning en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

h. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en calidad de cómplice de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que, en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-

Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

i. Que el profesor Roxin expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del artículo 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944

ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

j. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que el acusado (Gröning) tuvo participación en esta facilitación de los hechos. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

k. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por

acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

I. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

m. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20 de febrero de 1969**, a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió...”. En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

n. Que precisa Roxin que, no existen causales de exculpación. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]”. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedido por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es

difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

ñ. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

1. Que al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues las Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

2. Es decir, se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789; Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos N°2 y N°16 de la citada declaración del Hombre y del Ciudadano. “Artículo 2: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. “Artículo 16: Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

3. Que en este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el Congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad

tenía un doble resguardo de los Derechos Fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia, el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor. En segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las personas se debía tener una necesaria proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho. Lo anterior según publicación del sitio web <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2024&nr=138703&linked=pm&Blank=1> .

4. En este caso entonces, las personas (como es el caso de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz) estaban en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias antes detallada. Sin perjuicio del análisis de la defensa.

18°) Convenios de Ginebra. Que a mayor abundamiento, cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra, la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, caso Luis Almonacid Dúmenez de fecha 29 de octubre de 2013, en su considerando dieciocho, párrafo 6, señala que: (...) “los Convenios de Ginebra consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder “auto exonerarse” a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *ius*

Cogens". En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido". Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo: (...) "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de los Cogens o Principios Generales de Derecho Internacional".

19°) Análisis de la defensa específica. Que haciéndonos cargo de la defensa de fs. 3.386 a fs. 3.401 (Tomo XI) de la abogada Katerina Gnecco Sandoval, en representación del acusado **Carlos Hernán Moreno Mena**. El Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial a lo que antes se detalló, y además lo ponderado con precisión en el título de consideraciones generales para la defensa. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa no interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos. La defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo. La defensa alega como excepción de fondo la prescripción de la acción penal y amnistía. El tribunal haciéndose cargo reflexiona en el siguiente sentido:

a. Que en cuanto a la excepción de **prescripción de la acción penal**, el Tribunal reitera que del mérito de proceso el delito que se le imputa al acusado, atenta contra los derechos humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Este Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene en el párrafo 114) que: “La Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otra normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal”. No existiendo en conformidad a lo que dispone la propia defensa en su presentación, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. En consecuencia, esta excepción de prescripción de la acción penal **se rechaza** y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

b. **Amnistía.** Que el Tribunal ha establecido que los hechos corresponden a delitos de lesa humanidad y éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos, párrafo 114, sostiene que: “la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se

puede conceder amnistía. En la misma línea la Corte Interamericana citada lo manifestó en la caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001, que en su párrafo 41 dispuso: —esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” **En consecuencia, esta excepción amnistía del artículo 433 N°6 del Código de Procedimiento Penal se rechaza. Y de la misma forma el sobreseimiento solicitado por medio de estas excepciones y así se dirá en lo resolutivo de este fallo.**

D. Contestación de la acusación fiscal y particulares. El tribunal estará a lo razonado precedentemente, puntualizando lo siguiente:

a. Que respecto de los antecedentes que la defensa en su escrito aporta de la acusación judicial, en realidad a esta argumentación es un téngase presente toda vez que pudiendo haber ejercido los recursos pertinentes respecto de la acusación nada hizo sobre la materia.

b. Que en cuanto a la absolución por falta de participación. No es posible dar lugar a esta alegación. En efecto, de la lectura del escrito, la defensa omite un conjunto de elementos probatorios ya aquilatados por el Tribunal en este fallo. Así la defensa olvida el elemento de jerarquía en las instituciones armadas, toda vez que quiere mostrar a su representado, el acusado Carlos Moreno Mena como un simple carabinero que estuvo en el momento de los hechos en la 5° Comisaría de Pitrufquén. Ahora bien, esa narración que pretende esbozar la defensa queda desmentida por los medios de prueba.

c. Que en la misma línea de lo precedente, y según la dotación de Carabineros de Pitrufquén que consta a fs.463 (Tomo II) de la presente causa, el acusado Moreno Mena, para la fecha de septiembre a diciembre de 1973 se desempeñaba con el grado de Teniente de Carabineros, oficial de órdenes. A mayor ahondamiento recalcar que de acuerdo a su extracto de filiación el encausado fue condenado, por hechos sucedidos durante su permanencia en la

Comisaria precitada, a saber causas rol N°29.883 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufrquén como autor del delito de homicidio calificado de Daniel Sepúlveda Contreras y N°29.876 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufrquén por el homicidio calificado de Pedro Curihual Paillan. No obstante lo anterior, y de acuerdo a los registros de este Tribunal, hacer presente que el encausado fue condenado en causa rol N° 28.291-A de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufrquén como coautor del delito de homicidio calificado de Osvaldo Burgos Lavoz y secuestro calificado de Einar Tenorio Fuentes.

d. Que para un mejor entendimiento, se destacan los dichos de los carabineros que se han expuesto en los elementos probatorios de este fallo, y lo que han manifestado respecto al Teniente Moreno, puntualizado los siguientes: Francisco Javier Navarrete Quijón de fs. 114 a fs. 115 (Tomo I) copia de fs. 2107 a fs. 2108 (Tomo VII) espeta que: “El Teniente Moreno sabía lo que pasaba en la unidad, porque era el Subcomisario del cuartel, es decir, el segundo de los jefes. Él podía transitar libremente por toda la Comisaría, incluso por las caballerizas.”; en tanto Hugo Nibaldo Catalán Lagos en lo pertinente de fs. 351 a fs. 354 (Tomo II) explica que: “Cuando Callis no estaba, el Teniente Moreno Mena era quien subrogaba sus funciones. Ese era el orden jerárquico. Asevera que el Teniente Moreno Mena tenía acceso a todas las dependencias de la unidad de Pitrufrquén, exceptuando el almacén de armamento y de vestuario, a cargo de Lukowiak. Moreno Mena estaba al tanto de todas las personas que estaban detenidas en la unidad después del 11 de septiembre de 1973.” Sumar a lo anterior, dichos de Eleodoro Merino Salas, en lo pertinente de su declaración de fs. 130 a fs. 131 (Tomo I) copia de fs. 2.826 a fs. 2.827 (Tomo IX) dice que: “Hubo un grupo que salía constantemente con el mando de la unidad integrado por el Comisario Callis, Carabinero Silva Soto y Germán Fernández, los cuales realizaban las detenciones políticas de la fecha y los interrogatorios, siendo el lugar de interrogatorios las caballerizas o bodega de forrajes. Estaba estrictamente prohibido ingresar, salvo el Comisario, Teniente Moreno y Lukowiak.” Y de los propios dichos de Moreno Mena, se desprende que participó en varias detenciones, es decir tenía pleno conocimiento del patrón ilícito de las detenciones a diferentes personas de Pitrufrquén, entre ellos las víctimas de esta causa, por motivaciones políticas.

e. Que en esa misma línea de ideas, pudiendo haberlo hecho la defensa no objetó a los testigos Rosalía Silva, Dominica Aguilera ni tampoco a los demás Carabineros. En consecuencia, en este tipo de causas resulta un contrasentido e imposible pedirle tanto a las víctimas, en el caso de los secuestros cuando son detenidos o a los testigos que vieron los hechos, la precisión que exige la defensa. Si se analiza con precisión, entre otras, las declaraciones de Rosalía Silva Mardones puntualizando lo rolante de fs. 423 a fs. 425 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.437 a 1.438 (Tomo V) y de fs. 2.427 a 2.428 (Tomo VIII) invoca que: “Cuando llegó a la Comisaría se entrevistó con el Teniente Moreno, quien negó la detención de su esposo. Entonces volvió a su casa a buscar un chaquetón de vastilla de su esposo y su carnet de identidad. Regresó a la Comisaría y volvió a conversar con el Teniente Moreno, quien estaba junto al Suboficial Lukowiak. En esta oportunidad el Teniente Moreno reconoció que su esposo había sido detenido, pero que si quería hablar con él tenía que ir a buscarlo al océano. Ante su insistencia el Oficial llamó a un Carabinero para que la detuviera sino se iba, entonces la deponente le dijo que tenía hijos que cuidar, por lo que decidió marcharse.”

f. Que continuando con el razonamiento anterior, se recalca lo aquilatado por Dominica Aguilera, que en lo pertinente de fs. 438 a fs. 440 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V) y de fs. 2.442 a 2.444 musita que: “De pronto vio aparecer un vehículo de color blanco, específicamente una camioneta, que era cerrada, la que se detuvo frente a la casa de Fernández. De este móvil se bajaron cuatro Carabineros, entre los que pudo reconocer a los hermanos Hernández, otro al que le decían “el maña”, y un cuarto que era moreno y tenía un lunar en la mejilla derecha. Tomaron rápidamente a su vecino y lo subieron a la camioneta. Dentro de ese mismo móvil pudo ver detenidos a Celso Avendaño, un señor de apellido Bocaz y Luis Calfuquir, quien era marido de una profesora de nombre Elena Henríquez. Luego de esto, la camioneta se fue rumbo a la Comisaría. Distingue que le fue a avisar a su vecina Rosalía Silva lo que había sucedido. Junto con ella se dirigió a la Comisaría a preguntar por él. Se retiraron de ese lugar, pero volvieron en la noche junto con Rosalía Silva y la esposa de Celso Avendaño, encontrándose con el Carabinero Caamaño, quien les contó que

tanto Fernández como Avendaño estaban en la pesebrera de la Comisaría, atados de pies y manos con alambres de púas y vendados. Les señaló que les iban a dar el bajo esa misma noche, pero que no le contaran a nadie. Esa noche se encondieron en las inmediaciones de la Comisaría y vieron salir un camión tolva con detenidos, pudiendo reconocer nuevamente a los hermanos Hernández que abrían el portón de la Comisaría y se subieron al camión. Este último se dirigió hacia la isla municipal regresando poco tiempo después. Luego de un rato volvió a salir cargado con detenidos yendo al mismo lugar antes mencionado. Glosa que entre los dos viajes del camión pudieron sentir muchos quejidos que provenían de la pesebrera, como si estuvieran golpeando gente.”

g. Que con el objeto de dar más fuerza a lo antes razonado, cabe precisar la declaración de María Elena Calfuquir Henríquez, en lo pertinente de sus dichos depuso que: “El día 15 de septiembre de 1973 fue detenida su madre Elena Henríquez, de 46 años, Profesora y directora de la Escuela Básica. Su detención la realizó el Teniente de Carabineros de la 5° Comisaría de Pitrufquén, Carlos Moreno Mena, con ocasión en que ella se encontraba indagando sobre la detención de su padre. Estuvo con sus manos atadas y su vista vendada por dos días. El día 19 de septiembre de 1973, siendo aproximadamente las tres de la madrugada, fue detenido su padre por segunda vez, por Carabineros de la 5° Comisaría de Pitrufquén. Carabineros ingresó en forma violenta al domicilio familiar, a gritos e insultos, a través de ventanas del comedor y por la puerta principal. Continua, en horas siguientes del día 19 de septiembre, tanto su madre como la deponente, a partir de las siete de la mañana se dirigieron a la Comisaría de Pitrufquén para solicitar información y saber sobre la detención de su padre. Allí la atendió el Teniente Carlos Moreno Mena y la amenazó con dejarla detenida, negó que su padre hubiera sido detenido y justificó cualquier acción que hubiera hecho Callis o Lukowiak diciendo que pertenecían a un cuerpo de seguridad especial y “secreto”. Al día siguiente, es decir, el 20, cuando estaba a escasos 100 metros de su casa, observó como una patrulla de Carabineros llegaba a ella y procedían a ingresar. Desde ese momento no volvió a su hogar por temor a ser detenida y su madre tampoco. Encontrándose su padre, hasta la fecha, detenido desaparecido.” Que los precitados relatos dan cuenta que los carabineros de

Pitrufrquén detuvieron a las tres víctimas de la causa, que fueron llevados a la Comisaría, y en el caso de Bocaz a consecuencia de que lo estaban persiguiendo y citando, se presentó voluntariamente a la unidad policial. Que no existía a la época de los hechos en esa comunidad otra institución de las fuerzas armadas o de orden y seguridad que estuviera ejerciendo la detención ilegal por motivos políticos de determinadas personas. Luego las alegaciones de la defensa pierden consistencia y valor.

h. Que en esa misma línea, toda la discusión que hay respecto a quién subrogaba a Callis, que si lo hacía Moreno o Lukowiak, es solo es un distractor. Partiendo de la base que en el auto acusatorio y en los hechos establecidos en este fallo se deja plenamente establecido que quien le seguía en el mando al Capitán Sergio Callis era Carlos Moreno Mena. Ahora bien, el acusado Carlos Moreno igual participó en detenciones, como él lo reconoce, más aún los propios carabineros que se han citado, declararon que él junto a Lukowiak tenían acceso a todas las dependencias de la unidad. Así él tenía total claridad que estaban llegando detenidos políticos. No existe en el proceso ningún elemento probatorio válido que indique que al Teniente Carlos Moreno Mena se le hubiera denigrado, destituido de su cargo o jerarquía, despojado de su uniforme ni otra circunstancia parecida. Porque él siguió siempre ejerciendo las labores de Teniente. En consecuencia si los subordinados detienen a personas, las suben en un vehículo y conducen a la Comisaria o bien como en el caso del señor Bocaz se presentan voluntariamente por llamamiento a la Comisaria, obviamente, todas esas órdenes emanaban de la jerarquía, a saber de los oficiales, en este caso Carlos Moreno debe responder de ese secuestro por su grado de conocimiento de las detenciones y secuestros, acceso a las dependencias. Reiterando que él participó en otras detenciones, no puede desligarse de su responsabilidad y culpar a Callis, que por cierto está fallecido según consta fs. 475 (Tomo II), Lukowiak ni a otros carabineros que fueron sus subordinados.

i. Que las declaraciones de los carabineros Jose Amulef, Flavio Urra y Benjamín Chávez no van al fondo del asunto que son los secuestros. En todo caso, desde un punto de vista de consistencia y argumentación como se ha relacionado

y ponderado existen mejores testigos y elementos probatorios sobre la ocurrencia de los secuestros calificados y la participación del acusado Moreno Mena.

j. Que conviene reiterar a la defensa lo precisado por Roxin, ya desarrollado en las consideraciones generales de esta sentencia, en cuanto a que no existen causales de exculpación y resulta inimaginable que quien actúa en una situación como la establecida en esta sentencia hubiera podido considerar que el secuestro de personas resulte conforme al derecho. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

k. Que continuando la línea argumentativa anterior, es dable reiterar a la defensa en lo pertinente sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Go-merski y Johann Klier que dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de

los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht, incluso para Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo”. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

I. Que finalmente de las presunciones judiciales que alega la defensa, en cuanto al artículo 488 del Código Procedimiento Penal, y sin perjuicio de reiterar este Tribunal que se cumplen sus requisitos y a modo de ejemplo se tiene presente lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en su considerando 14: “Que, los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, “los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos” (SCS, 14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto de cada uno de los encartados”. (Rol N° 65.358-2021 de fecha 09 de julio de 2024).

m. Que en cuanto a las acusaciones particulares el Tribunal estará a los argumentos ya aquilatados, sin perjuicio de analizar con posterioridad las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. En los considerandos posteriores el Tribunal se hará cargo de lo solicitado en la presentación.

F. Prueba del plenario. Que no rindió prueba en esta etapa procesal.

G. Calificación final: Que del estudio y ponderación de los medios probatorios y del escrito de la defensa, este Tribunal llega a la conclusión final que mantiene la calificación que se ha dado precedentemente en esta sentencia y auto acusatorio, esto es autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, por el delito de secuestro calificado antes relacionado y ponderado en esta causa.

20°) Reflexiones sobre lesa humanidad. Que a mayor ahondamiento, sobre lo constituye delito de lesa humanidad y que se expresó en las consideraciones generales de este fallo, es también necesario hacer las siguientes reflexiones sobre el delito de lesa humanidad que complementan lo anteriormente dicho por este Tribunal.

21°) Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad

en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

22°) Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excma. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se dicta el presente fallo, corresponden **a secuestro calificado**, son delitos de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena

vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

23°) Que a mayor ilustración, este Tribunal reiteradamente se ha pronunciado en las siguientes causas sobre el delito de lesa humanidad: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

24°) Que cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

25°) Que sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, “Almonacid Arellano y otros versus Chile”, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “Barrios Altos versus Perú” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en

especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de

la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

26°) Que en el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“En relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las

actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,

juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

27°) En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

A. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además, es una verdadera exigencia social y civilizadora.

B. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

C. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

D. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

E. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

F. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

G. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

28°) Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, párrafo 131, donde la Corte indica que: “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer

la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”.

29°) Que cabe puntualizar que en el caso de **“Hilario Barrios Varas” (causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema)**, en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a delitos de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

30°) Acusaciones particulares.

A. Que el abogado Ricardo Lavín Salazar en representación de la **Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos** de fs. 3.004 a fs. 3.006 (Tomo X), formula acusación particular en contra de Carlos Hernán Moreno Mena, por el delito de secuestro calificado en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, en carácter de lesa humanidad, condenándolos en definitiva, solicitando se les reconozca la circunstancia agravante contemplada en el N° 8 del artículo 12 del Código Penal.

B. El abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de la parte **querellante y demandante civil**, de fs. 3.080 a fs. 3.110 (Tomo X) formula acusación particular en contra de Carlos Hernán Moreno Mena.

Fundando su presentación en los siguientes antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento se estructuran de la siguiente forma:

a. Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular. Comparte en su integridad y reproduce los hechos que se tienen por establecidos en la acusación de oficio, la calificación jurídica y la participación del acusado.

b. Calificación jurídica del ilícito. Esta parte considera que con lo razonado por el Tribunal, se desprenden cargos fundados para estimar que Carlos Hernán Moreno Mena en calidad de autor del delito de secuestro calificado reiterado.

c. Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas: El querellante aquilata tomar en consideración las agravantes establecidas en el N°8 y 11 del artículo 12 del Código Penal, cita al tratadista Enrique Cury.

d. Quantum de la Pena. Solicita al tribunal que se le aplique la pena de presidio perpetuo como autor del delito consumado de secuestro calificado reiterado, en su carácter de lesa humanidad.

31°) Análisis de la acusación particular. Que del análisis de las acusaciones particulares de fs. 3.004 y siguientes y de fs. 3.080 y siguientes (Tomo X), se observa que coincide en los hechos y calificación jurídica que ha hecho el Tribunal. La diferencia estriba en la petición de agravantes para el acusado, la que será analizada en los considerandos posteriores.

Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

32°) Atenuantes de responsabilidad penal. Que la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación de **Carlos Hernán Moreno Mena** de fs. 3.386 (Tomo XI), solicita se le reconozcan las circunstancias atenuantes de responsabilidad contempladas en los artículos **103 y 11 N°6 y 9 del Código Penal**.

33°) Que el Tribunal haciéndose cargo, reflexiona de la siguiente manera:

A. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N°6** del texto citado: Que analizando la solicitud de la defensa antes indicada, **se da lugar** a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación, toda vez que, de su extracto de filiación y antecedente citado precedentemente al inicio de este fallo, se puede observar que no tenía antecedentes penales pretéritos, todos a la época de los hechos, esto es, octubre de 1973. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay

muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

B. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N°9 del Código Penal**, no se dará lugar respecto del acusado de Carlos Hernán Moreno Mena, toda vez que como se ha razonado precedentemente en la ponderación y relación integral de toda la prueba del proceso no es posible sostener que dicho acusado haya colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, en realidad ha sido todo lo contrario, han pasado más de 50 años y con otros elementos probatorios, no con los dichos del encausado se ha logrado determinar los hechos y la participación del responsable. El hecho de que el acusado concurra a estrados a prestar declaraciones no es ninguna colaboración sustancial, sino que es una carga u obligación que tiene todo ciudadano, respecto a las reglas jurídicas en materia procesal penal. En consecuencia, **no se hace lugar** a la atenuante solicitada por el acusado.

34°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual: con relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal reflexiona lo siguiente:

A. Que en síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor Óscar López (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto

informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Que ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karinna Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e

incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Que recientemente la Il^{ma}. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019,** pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su considerando tercero señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Que del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero,** acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la

Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “Noveno: Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. En definitiva, **se rechaza** la petición y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

35°) Agravantes de responsabilidad penal.

A. Que a fs. 3.004 a fs. 3006 (Tomo X) el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación de la Unidad de Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, alega la agravante de responsabilidad penal contemplada en el **artículo 12 N°8** del Código Penal.

B. Que a fs. 3.080 a fs. 3.110 (Tomo X) el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de la parte querellante y demandantes civiles, alega las agravantes de responsabilidad penal contemplada en el **artículo 12 N°8 y 11** del Código Penal.

La defensa sobre esta agravante solicita su rechazo, atendido en lo pertinente por el delito de marras, la causal del artículo 12 N°8 es incompatible, por cuanto la calidad de funcionario público constituye un elemento integrante del tipo.

36°) Que haciéndose cargo el Tribunal, reflexiona de la siguiente manera:

A. Que en relación a la agravante del artículo **12 N°8** del Código Penal, tal como este Tribunal lo ha dicho en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar

Contreras Plotzqui, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, en causa rol 113.992 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco homicidio calificado de Ramón Carrero Chanqueo. Y con un mayor estudio de los antecedentes, como lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas este Tribunal **acogerá** la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo, **como se ha razonado**. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se cometan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo, en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habría tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionario público no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría no haberse aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de la calidad de funcionario público. Además, el delito de secuestro calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. **Por ello es que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal por el delito de secuestro calificado.**

B. Que en cuanto a las agravantes del **artículo 12 N° 11** no es posible dar lugar a ella porque si se analiza con tranquilidad apunta a elementos de la alevosía en relación a las víctimas y la alevosía ya ha sido considerada. En consecuencia, **no se hace lugar** a esta agravante solicitada.

37°) En la determinación de la pena. Se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos siguiendo a los autores Juan Pablo Mañalich en su obra Discrecionalidad Judicial en la determinación de la pena, en el libro de Defensoría Penal Pública, 07 de octubre de 2010; además en Memoria de Prueba, del libro determinación de la Prueba en Chile, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2007, Carolina Acevedo, Ángela Torres; Guillermo Oliver en Algunos problemas de aplicación de reglas de determinación legal de la pena en el Código Penal Chileno; René Pica Urrutia, Reglas para la aplicación de las penas. Las que se rigen por los artículos 10, 11, 12, 18 y siguientes, 50 y siguientes, 74 y 103 del Código Penal, 509 del Código de Procedimiento Penal, 164 del Código Orgánico de Tribunales. En lo que se deduce lo siguiente

- A.** En primer lugar, la pena señala por la ley al delito.
- B.** Grado de ejecución del delito.
- C.** Forma de participación en el delito.
- D.** Concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
- E.** Eximentes de Responsabilidad penal.
- F.** Extensión del mal causado.
- G.** Que finalmente la situación de los artículos 74 del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal, ello sin perjuicio de otras circunstancias especiales como eximentes incompletas, situación de los menores de edad.
- H.** Que asimismo cabe hacer presente que tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el artículo 68 del texto punitivo, y si no es así el artículo 67 del texto citado. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los artículos 50 y siguientes del mismo texto.
- I.** Que por otro lado tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida la gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la

extensión de la pena, obtengan algún beneficio de la Ley 18.216 atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

J. Que también cabe precisar, que esta es la última etapa en la determinación de la pena, esto es el equilibrio adecuado entre el artículo 74 del Código Penal y el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma se ha razonado, debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.

38°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponde a la figura típica del delito de secuestro calificado, en contra de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, en la comuna de Pitrufuquén, desde el 18 de octubre de 1973. Delito previsto y sancionado en el artículo **141 del Código Penal**, en su carácter de **lesa humanidad**, vigente a la época de los hechos, que tienen asignada la pena de Presidio Mayor en cualquiera de sus grados, más las accesorias legales correspondiente

39°) Que Carlos Hernán Moreno Mena, está acusado como **autor** del delito de los **secuestros calificados** en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, en la comuna de Pitrufuquén, desde el 18 de octubre de 1973. Respecto a los cuales se razona de la siguiente manera:

A. Que del análisis de las circunstancias atenuantes le beneficia la minorante del artículo 11 N°6 del Código Penal y le perjudica la agravante del artículo 12 N°8 del Código citado. En consecuencia en conformidad al artículo 68 del Código Penal se hace la compensación racional de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, pudiendo entonces el Tribunal recorrer toda su extensión al aplicarla, partiendo entonces el tribunal en Presidio mayor en su grado medio. Si se aplicará el 74 del Código Penal siendo tres delitos de secuestro calificado, la pena sobrepasa los treinta años. Si se aplica el 509 del

Código de Procedimiento Penal, siendo delitos de la misma especie y por la reiteración se sube un grado la pena, quedando en **Presidio mayor en su grado máximo**. Como se desprende le resulta más beneficioso al sentenciado aplicar esta última opción, más las accesorias legales correspondientes.

40°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

Que atendida la extensión de la pena impuesta y las razones que se van a exponer a continuación, no procede ningún beneficio de la ley N°18.216 aplicable a los acusados. Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma no puede acceder a cumplir la pena en libertad. En efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de Derechos Humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en las causas: rol 2-2013 ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia; rol 45.361 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.051 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 45.357 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.103 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 45.367 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.017 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 2-2012 ingreso del Juzgado de Letras de Pucón; rol 114.034 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt; rol 113.969 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 25-2011 ingreso de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

A. Que continuando con el racionamiento anterior, podemos indicar un **estándar en Derechos Humanos** corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al **artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución** que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, **pp. 27 -**

53). Agregando este Ministro que, a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre determinado estándar normativo.

B. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de fecha 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: *“La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”*.

C. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos **tanto en sede contenciosa como consultiva** para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte IDH (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la

Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia, **pp.356-357**).

D. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos en especial los artículos N°1.1 y N°2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo en materia de Derechos Humanos**. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia. Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

a. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el **párrafo 41**, expuso que: *“Considera inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”*.

b. Caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, **párrafos 111 a 114**; la Corte IDH ha señalado: (...) “*Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes*”. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la **impunidad**, que la Corte IDH ha definido como: “*la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana*”. Asimismo, la Corte IDH ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el **Caso Barrios Altos** que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte IDH estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

c. Caso la Masacre de la Rochela versus Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, **párrafo N° 191**, señaló de manera expresa: (...) *“que en la investigación de graves violaciones a los Derechos Humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia”*.

d. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú, de 10 de julio de 2007, en su **párrafo 190**, puntualiza: “La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.” En particular, la Corte IDH recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

e. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el **párrafo 129**, señala que ante esta situación: “la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad”. “En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias,

extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber”.

f. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) versus Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el **párrafo 155**, indica: (...) “Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones.” Entre ellas, destaca [...] “el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares”.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia, ha sostenido este **estándar en materia de Derechos Humanos** en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Que sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común), el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley N°18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33 de la ley antes mencionada**, permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el **artículo 1 y siguientes de la citada ley**. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe: “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la **Ley N°18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común**. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **de secuestro calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira-, (...) “debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos N°1, N°2 y N°29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además los artículos N°26, N°31.1 y N°27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969”. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo

a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

41°) En consecuencia, aplicando el **control de convencionalidad**, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio). No es posible (además de lo antes razonado y de los estándares normativos) otorgarles algún beneficio de la ley N°18.216 a los acusados, en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (Núñez, Constanza (2017):” El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la Itma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 4 de marzo de 2020, en causa **rol N°1.052-2019** (en relación a causa **rol 113.999** de este Tribunal); en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a Derechos Humanos (lesa humanidad). Lo anterior ha sido además ratificado por la **Itma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). Lo mismo en causa **rol 114.034** del Primer Juzgado del Crimen de

Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, no obstante las personas ser condenadas a tres años de presidio menor en su grado medio están cumpliendo pena efectiva, no otorgándosele beneficio. **En consecuencia, no es posible otorgar al acusado, ningún beneficio y deberá cumplir la pena efectiva impuesta como se dirá en lo resolutivo.**

42°) Que en cuanto a los informes solicitados respecto al acusado Carlos Hernán Moreno Mena de fs. 2920 (Tomo VIII) el Centro de Reinserción Social de Los Ángeles, mediante oficio N° 164/2024, del 01 de febrero de 2024 remite carta de consentimiento informada del encausado Moreno Mena, quien no autoriza ser sometido a la entrevista pertinente. En relación al informe del Servicio Médico Legal, este no ha sido remitido al Tribunal, sin perjuicio de haber sido solicitado de fs. 2.915 (Tomo IX) del 09 de enero de 2024 y de fs. 3.512, fs. 3.545 y fs. 3572 (Tomo XI), se pidió cuenta de dicho oficio al servicio correspondiente. No obstante, ello no es óbice para que el Tribunal en virtud de la ley 18.216 pueda dictar el fallo.

En cuanto a la acción civil.

43°) Que de fs. 2977 a fs. 3.001 (Tomo X) el abogado David Alberto Morales Troncoso en representación de **1) Ginette Apolonia Bocaz Peña, 2) Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña, 3) Isolina Peña Pérez, 4) Patricio Leónidas Bocaz Peña, 5) Héctor Celso Avendaño Vásquez y 6) Eduardo Enrique Avendaño Stancovich**, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Diego Acuña Gálvez ambos domiciliados en calle Prat N° 847, oficina 202, Temuco, solicitando se condene al Fisco de Chile, representado por el abogado procurador Fiscal, Diego Acuña Gálvez, a pagar la suma de \$250.000.000(doscientos cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, monto que deberá ser pagado con reajustes e intereses desde la fecha de la notificación de la demanda hasta el completo pago, más las costas del juicio o lo que Ssa., estime conforme a justicia. La cual para un mejor entendimiento se estructura de la siguiente manera:

A. Hechos. Reproduce en lo pertinente el considerando 32 del auto acusatorio.

B. En cuanto al Derecho.

B.1 El delito. Que los hechos precedentes constituyen el delito de secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal.

B.2. Fuentes de la responsabilidad. Esta parte cita lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República de Chile, citando al respecto un fallo de la Excelentísima Corte Suprema, el cual consagra que la responsabilidad de Estado es de carácter genérico. Refiere también doctrina al respecto. Por lo que, a su juicio, la responsabilidad del Estado proviene esencialmente de disposiciones constitucionales y de los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En este sentido, también hace referencia al inciso 2° del artículo 5 de la Constitución, por lo que cualquier órgano del Estado se encuentra obligado a respetar los derechos esenciales de la naturaleza humana, norma constitucional que fue quebrantada por el Estado de Chile a través de sus agentes. En el caso de los funcionarios del Ejército de Chile, estos sin lugar a dudas están ligados al Estado por un vínculo de Derecho Público, como dependientes. Ahora bien respecto a la fuente de la obligación civil particular para delitos que importen una violación a los derechos humanos no solo se encuentra en la Constitución Política de la República de Chile y en la Ley de Bases de la Administración, según se señaló anteriormente, sino que también en los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, para este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de tal suerte que las normas de derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con ellas, tal es el caso del artículo 2329 de nuestro Código Civil que se encuentra en armonía con el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ratificada por el Estado de Chile, citando fallos de la Excelentísima Corte Suprema al respecto.

B.3 La imprescriptibilidad de la acción civil deducida en autos. Cita jurisprudencia al respecto, en lo pertinente destacar que de acuerdo a un fallo del 15° Juzgado Civil de Santiago proclama que la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda en principios generales del derecho humanitario y tratados internacionales que deben primar por sobre las codificaciones civilistas.

B.4 Competencia de este Tribunal para conocer de la presente de manda de indemnización de perjuicios deducida. Cita el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, disposición legal que a su juicio, deja muy en claro y disipa toda duda en cuanto a que en el proceso penal se puede deducir una acción que busque reparar los efectos patrimoniales del hecho punible, como es la acción de indemnización de perjuicios que se deduce en este acto. Así, según su criterio, la norma señala claramente que se puede discutir ante el juez en lo penal toda consecuencia patrimonial, sea contra quien sea que se dirija la acción destinada a hacerla valer, fundándose en fallos de la Excelentísima Corte Suprema al respecto.

B.5 Compatibilidad de la indemnización reclamada con otros beneficios otorgados. Según esta parte, la indemnización de perjuicios pretendida en autos no es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado de Chile, puesto que el objeto de toda acción civil es la obtención de una compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de la buena fe de los tratados internacionales suscritos por Chile, así como la interpretación de las normas de los Cogens, compatibilidad que ya ha sido declarada según los fallos que cita de la Excelentísima Corte Suprema al respecto.

B. 6 El daño provocado y el monto de la indemnización. Que en relación a los demandantes:

i. Demandantes don Héctor Celso Avendaño Vásquez y de Eduardo Enrique Avendaño Stancovich. Ambos hijos de la víctima Celso Avendaño Alarcón, quienes refieren las repercusiones que ocasiono en su vida y forma de relacionarse con la sociedad, la desaparición de su padre.

ii. Demandantes don Patricio Leónidas Bocaz, Ginette Apolonia Bocaz Peña y Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña, hijos de Ismael Rolando Bocaz Muñoz y su cónyuge doña Isolina Peña Pérez. Cita jurisprudencia al respecto. Narran como el grupo familiar quedo sin el proveedor de la familia, debiendo reestructurarse para poder salir adelante, pese a los obstáculos que debieron superar, por esa razón se fueron en búsqueda de mejores condiciones a Neuquén, Argentina.

44°) Que a fs. 3.080 a fs. 3.110 (Tomo X), en el primer otrosí de su presentación el abogado Sebastián Saavedra Cea y Leopoldo Huichalaf García en representación **1) Rosalía Silva Mardones, 2) Anselmo Ascanio Fernández Silva, 3) Víctor Alejandro Fernández Silva y 4) Luis Rufino Fernández Silva,** demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, domiciliado en calle Prat N°847, oficina 202, comuna de Temuco, solicitando tener por interpuesta la demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma total de **\$800.000.000 (ochocientos millones de pesos),** que se desglosan en **\$200.000.000 (doscientos millones de pesos)** para cada uno de los querellantes civiles, por concepto de daño moral, por el accionar ilícito de agentes estatales o lo que el tribunal determine en justicia, con reajustes de acuerdo al IPC, desde la fecha de notificación de esta demanda, más intereses legales; acogerla a tramitación y en definitiva condenar al demandado a pagar a los demandantes la suma señalada, con reajustes e intereses y las costas del juicio.

A. Los hechos. reproduce los mismos hechos ya referidos en el auto acusatorio- Comenta que por el periodo en que se cometió este delito constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad por lo que no puede ser objeto de amnistía o prescripción. En ese sentido, este delito constituye un crimen contra la humanidad. transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es por ello que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad y que las consecuencias prácticas de tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción. Cita parágrafo 105 y 114 de Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros v/s Estado de Chile.

B. El reconocimiento del Estado de Chile de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra: El 3 de diciembre de 1973 Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución 3.074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada "Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de

Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad", citando en su párrafo dispositivo 1° y el numerando 8°. Los fundamentos y criterios señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente, citando jurisprudencia al respecto. En consecuencia, el Estado de Chile se encuentra sujeto a obligaciones internacionales que le son exigibles directamente y ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Así resulta obvio, público y notorio que el delito cometido en perjuicio de Luis Anselmo Fernández Barrera, es delito de carácter estatal, que en consecuencia genera responsabilidad y como tal deben considerarse para los efectos de las acciones de reparación, que mediante esta demanda se reclaman.

C. El derecho: Expresa el demandante que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. Para esta parte, esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infringieron el daño cuya reparación se solicita. Se trata de una nomenclatura nueva, que proviene del derecho de los derechos humanos, la cual tiene al Estado como responsable directo de las violaciones de los derechos esenciales inferidas por sus agentes, que actúan en cuanto Estado, bajo el mandato, orientación, planificación, anuencia y consentimiento de las autoridades estatales. Así entre otros instrumentos internacionales, lo establece el artículo 63 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Estos agentes actúan en el marco de funciones estatales, con potestades, recursos materiales y humanos que esa misma organización jurídica pone a su disposición para el cumplimiento de sus tareas.

D. La competencia de este Tribunal para conocer y fallar la demanda civil que se interpone en juicio criminal: Una de las tesis sostenidas por el Fisco de Chile para eximirse del pago de las reparaciones en este tipo de juicios, alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el Juez del Crimen, sería incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Lo cierto es que el texto actual del artículo citado, modificado por la Ley 18.857, de 6 de diciembre de 1.989, permite en términos amplios la interposición ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal. En tal sentido, la excepción de incompetencia absoluta intentada por el Fisco de Chile ha sido mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto, citando jurisprudencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

E. Fallos de la Excma. Corte Suprema que rechazan la tesis de la incompetencia del Tribunal en materia civil: Cita al efecto la sentencia de casación rol Rol 6308-07, de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia de casación rol 10.666-2011 de fecha 04 de junio de 2012, entre otros fallos. Indica que los actos y hechos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen. Esta es la llamada "Teoría del Órgano". De ahí que la responsabilidad extracontractual del Estado se caracterice por ser una responsabilidad "orgánica", de lo cual deriva otra característica, el de ser una responsabilidad DIRECTA.

F. Lo que ha fallado la Excma. Corte Suprema, en forma unánime, sobre la responsabilidad del Estado: Al respecto cita cuatro sentencias: de fecha 26 de Enero del 2005 "Bustos con Fisco", Rol 3354-03 ; otra de 19 de Octubre del 2005- "Caro con Fisco", Rol 4.004-03 ; otra de 13 de Diciembre del 2005, "Albornoz con Fisco", Rol 4006-03 ; y otra de fecha 20 de Enero del 2006, "Vargas con García y Fisco", Rol 5.489-03, fallos unánimes de la Cuarta Sala del máximo Tribunal, que hace claridad acerca de la responsabilidad el Estado.

Asimismo, cita a don Enrique Silva Cimma. Afirma que es importante el reconocimiento de que la responsabilidad extracontractual del Estado se trata de una responsabilidad regida por las normas del derecho público, y que ella emana de la propia naturaleza del Estado, como persona jurídica compleja que debe desarrollar su actividad teniendo presente los principios rectores de las Bases de la Institucionalidad, contenidas en el artículo 1° de la Carta fundamental. Luego, cita el Artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, cuyo precepto consagra que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. A su turno, cita el artículo 1 y 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, así como el artículo 6 y el inciso 2 del artículo 38 de nuestra carta fundamental, entre otras normas, argumentando al respecto. Finalmente indica que las normas citadas encuentran su complemento en diversas disposiciones de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, ya sea entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, esa responsabilidad del Estado está consagrada y reconocida en ese Derecho Internacional Convencional, aún más, lo está también en el Derecho de Gentes o Derecho Internacional Consuetudinario, aplicable en Chile y en todo el mundo, que bajo la fórmula de Principios Generales del Derecho Internacional ha elevado el Derecho a la Reparación de las víctimas como una norma de **IUS COGENS**, esto es, principios obligatorios, inderogables, imprescriptibles y con efecto erga omnes. Que en ese sentido es bueno dirigir la mirada hacia la profusa y rica jurisprudencia internacional emanada de órganos regionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos a los que el Estado de Chile les ha reconocido competencia, siendo sus resoluciones vinculantes para todos los Estados suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica.

G. Referencias jurisprudenciales de nuestros Tribunales sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en materias de reparación: La forma en que incide el derecho Internacional en esta temática de derechos humanos, queda refrendada en: sentencia de la I. Corte de

Apelaciones de Santiago, de fecha 18 de Enero del 2006, Recurso de apelación ingreso 37483-2004, por el Homicidio de Gabriel Marfull; fallo de la 5ta. Sala de la I. Corte de Apelaciones de fecha 10 de Julio del 2006, en causa ingreso 65-2001, "Causa Martínez con Fisco"; fallo de Primera instancia pronunciado por el Ministro del Fuero de la I. Corte de Apelaciones, Sr. Jorge Zepeda, en el denominado caso Silberman, Rol 2182-98, del 27 de Septiembre del 2005; en el mismo sentido un fallo de la I. Corte de Apelaciones de fecha 23 de marzo de 2007, especialmente en su considerando 6°; A todo lo anterior debe agregarse lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, con fecha 23 de marzo del 2007, en casación 1325-04 por el Homicidio de Manuel Rojas Fuentes.

H. Lo que ha aprobado Chile recientemente en el seno de las Naciones Unidas sobre la reparación en materia de Derechos Humanos: Con fecha 21 de marzo del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 60-147, denominada "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". El Estado de Chile concurrió a la suscripción de esa Resolución, unánimemente aprobada, citando los numerales 13, 15, 18, 19, 20 y 23; además del numeral IV, que hace alusión a la institución de la Prescripción.

I. El daño provocado y el monto de la indemnización demandada: El Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a los demandantes de autos. La lógica pura nos dice que ese Estado no podía investigarse a sí mismo, puesto que quedaría en evidencia su compromiso directo con los crímenes. De esa manera el Estado aseguró a sus agentes la impunidad necesaria. Esa es otra dimensión del daño ocasionado, impedir que los familiares de las víctimas supieran qué pasó con sus seres queridos. Con todo derecho pueden sus representados reclamar al Estado la reparación del inconmensurable daño que les ocasionó, por una acción intrínsecamente antijurídica. Se trata de un tipo de daño que es imposible soslayar, de aquellos que no se borran y que son manifiestos para cualquier persona que sufre esa circunstancia traumática. **Luis Anselmo Fernández Barrera**, como toda

persona cualquiera fuese su condición social, tenían derecho a su dignidad y al goce y disfrute de derechos esenciales por su condición de ser humano y persona. Su homicidio, dejó a su familia en la más completa orfandad e inseguridad. Expresa que ese daño que sufrió y padece hasta hoy sus representados, es lo que constituye el daño moral que se demanda. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Todos lo sienten por igual, precisamente por nuestra misma naturaleza humana. Finalmente, define lo que es el daño moral de conformidad a la doctrina, citando además jurisprudencia al efecto. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, citando jurisprudencia al respecto, con la cual coinciden plenamente y finaliza indicando que las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

45°) Que de fs. 3.313 a fs. 3.346 (Tomo XI), **contesta demandas civiles** el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Acuña Gálvez, deducida por el abogado David Morales Troncoso en representación de Isolina Peña Pérez, Ginette Bocaz Peña, Cecilia Bocaz Peña, Patricio Bocaz Peña, Héctor Avendaño Vásquez y Héctor Avendaño Vásquez; en la cual solicita se condena al fisco por indemnización de perjuicios la suma de \$1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos) a razón de \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, con reajustes, intereses legales y costas del juicio. La otra demanda deducida por los abogados Sebastián Saavedra Cea y Leopoldo Huichalaf García en representación de Rosalía Silva Mardones, Ascanio Fernández Silva, Víctor Fernández Silva y Luis Fernández Silva, en la cual solicita se condena al fisco por indemnización de perjuicios la suma de \$800.000.000 (ochocientos millones de pesos), a razón de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, con reajustes, intereses legales

y costas del juicio. Esta parte solicita que las mencionadas demandas sean íntegramente rechazadas, por los siguientes fundamentos:

A. Excepción de reparación integral. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados todos los demandantes en conformidad a las leyes de reparación:

a. Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas. Comienza aludiendo a la Justicia Transicional, que desde esa óptica se puede mirar en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que en ese sentido, las negociaciones del Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos.

b. La complejidad reparatoria. Comienza citando a Lira. Posteriormente señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o también llamada “Comisión Rettig”, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación”. Dicho informe derivó en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, reflexiona respecto al mensaje de dicho proyecto de ley. Asumida esa idea reparatoria, tanto la Ley 19.123 como las leyes 19.980, 19.992 y otras normas jurídicas conexas, han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones a saber: **a) mediante transferencias directas de dinero.** Aduce a los costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones las que detalla y que ha significado a diciembre de 2019 la suma total de \$992.084.910.400; **b) Reparaciones mediante la asignación de nuevos derechos.** Que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. Señalando la normativa al respecto y las múltiples prestaciones con los desembolsos asumidos por el Estado en esas materias; **c)**

Reparaciones simbólicas: Que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a la víctima de Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Ejemplifica algunas medidas.

c. La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas. Que todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos. Al efecto, funda sus argumentos citando fallos de la Excma. Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia, normativa internacional y doctrina. cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, citando al efecto el caso Almonacid, jurisprudencia y doctrina atinente. Estando entonces la acción deducida los actores que invocan la calidad de cónyuge e hijos de la víctima directa, respectivamente basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cumulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, es que se opone la excepción de reparación y pago por haber sido ya indemnizada en conformidad a las leyes 19.123 y 19.980.

C. Excepción de prescripción extintiva:

a. Normas de prescripción aplicables. En subsidio opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; por encontrarse prescrita la demanda, en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en la demanda, por la detención y desaparición de Ismael Bocaz Muñoz, en tanto la detención y desaparición de Celso Avendaño Alarcón y Luis Anselmo Fernández Barrera, la prescripción

durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 08 de abril de 2024, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

b. Generalidades sobre la prescripción. Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción. Comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de

las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permiten concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia. Cita jurisprudencia y reflexiona en ese ámbito, en lo pertinente el fallo de la Excma. Corte Suprema del 21 de enero de 2013 el cual alega que el principio general que debe regir la materia es la de la prescriptibilidad de la acción de reparación civil. Que el plazo no debe contarse desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de Justicia.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria. Ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional. Funda que en relación con las alegaciones expuestas por las actoras en cuanto a que la acción

patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aduce que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase íntegramente la demanda, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas. Vislumbra que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de las acciones indemnizatorias solicitadas y los montos pretendidos. Alega que los demandantes como compensación del daño moral solicitan una cifra absolutamente excesiva.

a. Fijación de la indemnización por daño moral. Que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

b. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Fundamenta que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

c. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada. Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

46°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A.** Excepción de reparación integral. Improcedencia de las indemnizaciones alegadas por haber sido ya indemnizados los demandantes que se indican.
- B.** Excepción de prescripción extintiva.
- C.** En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. En cuanto a la excepción de la letra A) precedente el Tribunal reflexiona de la siguiente manera: La excepción antes referida, será rechazada por el Tribunal y así se estará en lo resolutivo, es especial por los siguientes fundamentos ya ponderados en las siguientes causas:

- 1. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue**, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;
- 2. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue**, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;
- 3. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

4. **Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;
5. **Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;
6. **Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín**, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;
7. **Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén**, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;
8. **Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;
9. **Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro**, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016,
10. **Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumercindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;
11. **Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén**, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;
12. **Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue**, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;
13. **Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

14. **ñ. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;
15. **Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol**, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;
16. **Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;
17. **Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;
18. **Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt**, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;
19. **Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;
20. **Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt**, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;
21. **Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017;
22. **Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria** seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017,

23. **Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco** para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018;
24. **Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro** seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020;
25. **Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;
26. **Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;
27. **Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;
28. **Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018;
29. **Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018;
30. **Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.
31. **Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco**, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

32. **Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.
33. **Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.
34. **Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.
35. **Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas**, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.
36. **Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019.
37. **Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.
38. **Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.
39. **Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.
40. **Causa rol 5-2013 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia**, seguida por delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera.
41. **Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol**, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Patricio Rivas Sepúlveda.

42. **Causa rol 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera.
43. **Causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, sentencia del 02 de agosto de 2022;
44. **Causa rol 24.428 del Juzgado de Letras de Traiguén**, seguida por los apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia del 30 de octubre de 2023.
45. **Causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt**, seguida por aplicación de tormentos y detención ilegal, sentencia del 09 de agosto de 2022. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el FISCO de Chile.

a. Sobre lo anterior, además se reitera que esta excepción será rechazada. En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita, donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los Derechos Humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial: El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita

fallos en el mismo sentido, roles N° 2918-13, N°3841-12 y N°5436-10. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos: (...) “la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República”. Del mismo modo el hecho que la demandante hayan sido favorecida por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación a los artículos 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También será rechazada. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol 1424-2013 de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973- 1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema,

cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación

con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas:

a) Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma, lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I, artículo 158, donde a los Tribunales se les denominaba “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N°2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento

positivo. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

b. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (John Rawls. Una Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

c. Que en la misma línea, el autor citado en su obra Liberalismo Político, igual editorial, año 2013, páginas 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

d. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo Alejandro Guzmán Brito en su artículo, La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno Claudio Nash Rojas, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro “Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007” (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su

libro “Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en las páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de Alejandro Vergara Blanco, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la

comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana en su artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio ex aequo et bono (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

e. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13, que en su considerando décimo, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia, se procede a rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.

f. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en la causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un

hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

g. Que el fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N°1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N°18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “falta de servicio”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia

quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

h. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre las indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido Delitos de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia, aparece justo y razonable que se otorgue un monto conforme al mérito del proceso y al daño ocasionado.

i. Que en nada arredra lo razonado precedentemente lo informado a fs. 3350 (Tomo XI) por el Departamento de Secretaria General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, ORD. 22805/2024.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, este pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

F. Respecto de las costas de la causa: Que no obstante el fallo de la Corte IDH caso “**Órdenes Guerra y otros versus Chile**” de fecha 29 de Noviembre de 2018. Este demandado sigue insistiendo repetidamente que deben rechazar estas acciones, que no se debe pagar a las víctimas, invocando además la prescripción; ahora bien los últimos fallos que rechazan la prescripción por parte de la Excma. Corte Suprema. Luego si ha sido vencido en el juicio, debe pagar las costas.

47°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del secuestro calificado en contra de las víctimas Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Informe psicológico de Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña rolante de **fs. 3465 a fs. 3468 (Tomo XI)** suscrito por la psicóloga Nicole Osses Jara. En lo pertinente señala que recogido los antecedentes son fidedignos y existe la vivencia de eventos traumáticos como víctima por repercusión de delitos de lesa humanidad a causa de la detención de su padre en lo anteriormente descrito.

B. Informe psicológico de Patricio Leónidas Bocaz Peña rolante de **fs. 3.469 a fs. 3.474 (Tomo XI)** suscrito por la psicóloga Nicole Osses Jara. En lo pertinente señala que se evidencia la vivencia de trauma complejo del desarrollo por repercusión, estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativas, deterioro, social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

C. Informe psicológico de Eduardo Avendaño Vásquez rolante de **fs. 3.475 a fs. 3.477 (Tomo XI)** suscrito por la psicóloga Nicole Osses Jara. En lo pertinente se aprecia sintomatología depresiva, duelo no resuelto, exilo.

D. Informe psicológico de Jinette Apolonia Bocaz Peña rolante de **fs. 3.478 a fs. 3.480 (Tomo XI)** suscrito por la psicóloga Nicole Osses Jara. En lo pertinente refiere sintomatología depresiva infantil, disfemia, trastornos psicossomáticos. Así también, trauma complejo del desarrollo.

E. Informe psicológico de Héctor Celso Avendaño Vásquez rolante de **fs. 3.481 a fs. 3.485 (Tomo XI)** suscrito por la psicóloga Nicole Osses Jara. En lo pertinente evidencia un trauma complejo del desarrollo por repercusión.

F. Declaraciones de Rosa Olivia Morales Jorquera de fs.3.490 (Tomo XI), Hernaldy Alfonso Cid Pinilla de fs. 3491 (Tomo XI), Claudio Acsael Ordenes Navarrete de fs. 3492 (Tomo XI), Gerardo Ramón Aro Chaura de fs. 3493 (Tomo XI) y Nicole Osses Jara de fs. 3494 (Tomo XI) quienes declaran sin tacha y legamente examinados que les consta el daño ocasionado a los demandantes civiles, a consecuencia del secuestro de Ismael Bocaz Muñoz y Celso Avendaño Alarcón. Que los hijos debieron vivir en precarias condiciones y crecer en diferentes familias, debiendo la madre irse a trabajar al campo para generar un sustento económico.

G. Declaraciones de María Elena Calfuqir Henríquez, de fs. 3495 a fs. 3496 (Tomo XI), Ibis Sandoval del Campo de fs. 3497 a fs. 3.498 (Tomo XI) y Víctor Hernán Maturana Burgos de fs. 3.499 a fs. 3.500 (Tomo XI), quienes declaran sin

tacha y legamente examinados que les consta el daño ocasionado a los demandantes civiles, narrando como la ausencia del padre y cónyuge repercutió en sus vidas, provocando una sensación de abandono y un desmedro económico importante, siendo rechazados por la gente del pueblo al ser familiares de la víctima.

H. Informe de la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 3.134 a fs. 3.308 (Tomo X), respecto de Celso Avendaño Alarcon, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Bocaz Muñoz, en virtud del cual se adjunta fotocopia de los siguientes documentos: **1)** Informe trabajo diagnostico niños familiares de detenidos desaparecidos; **2)** Pre- informe trabajo diagnostico niños familiares de detenidos desaparecidos; **3)** Salud mental: síntesis del trabajo con niños familiares de detenidos desaparecidos; **4)** Algunos factores de daño a la salud mental; **5)** Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos y **6)** Algunos problemas de salud mental detectados por Equipo Psicológico Psiquiátrico; **7)** Daño psicológico prolongado de los familiares de detenidos desaparecidos; **8)** Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico; **9)** Salud mental y violaciones a los Derechos Humanos. Equipo de Salud de la vicaría de la Solidaridad y **10)** El problema médico de las aplicaciones de tratos crueles inhumanos y degradantes.

I. Informe del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) del 04 de marzo de 2024, rolante de **fs. 3.120 a fs.3.123 (Tomo X)**, respecto de Celso Avendaño Alarcón, Luis Fernández Barrera e Ismael Bocaz Muñoz.

J. Informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de fs. 3.128 a fs. 3.130 (Tomo X), del 01 de marzo de 2024 en lo pertinente informa que el programa asiste a los familiares de víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas sin entrega de restos, en el ejercicio de los derechos y beneficios reparatorios contenidos en la ley 19.123.

K. Documentos acompañados a la demanda civil de Sebastián Saavedra y Leopoldo Huichalaf García que se desglosan de la siguiente manera:

a. Texto de la resolución 60-147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominadas “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional a interponer recursos y obtener reparaciones” de fs. 3.012 a fs. 3.020 (Tomo X)

b. Texto de la comisión de derechos humanos del consejo económico y social de las Naciones Unidas relativo a la promoción y protección de los Derechos Humanos, de fs. 3.022 a fs. 3.040 (Tomo X)

c. Sentencia en caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” de fs.3.041 a fs. 3.079 (Tomo X).

d. Certificado de matrimonio, emitido por el Registro Civil e identificación de fs. 3575 (Tomo XI), que consta que contrajeron matrimonio doña Rosalía Silva Mardones y Luis Anselmo Fernández Barrera.

e. Certificado de nacimiento de Luis Rufino Fernández Silva, emitido por el Registro Civil e identificación de fs. 3576 (Tomo XI), que consta que sus padres son doña Rosalía Silva Mardones y Luis Anselmo Fernández Barrera.

f. Certificado de nacimiento de Víctor Alejandro Fernández Silva, emitido por el Registro Civil e identificación de fs. 3577 (Tomo XI), que consta que sus padres son doña Rosalía Silva Mardones y Luis Anselmo Fernández Barrera.

g. Certificado de nacimiento de Anselmo Ascanio Fernández Silva, emitido por el Registro Civil e identificación de fs. 3578 (Tomo XI), que consta que sus padres son doña Rosalía Silva Mardones y Luis Anselmo Fernández Barrera.

L. Documentos acompañados a la demanda civil de David Morales Troncoso que se desglosa de la siguiente manera:

a. Certificado de nacimiento de Héctor Celso Avendaño Vásquez, emitido por el Registro Civil e Identificación, de fs. 2.955 (Tomo X), que consta que sus padres son Celso Avendaño Alarcón y doña Orfelina del Tránsito Vásquez.

b. Certificado de nacimiento de Eduardo Enrique Avendaño Stancovich, emitido por el Registro Civil e Identificación, de fs. 2.956 (Tomo X), que consta que sus padres son Celso Avendaño Alarcón y doña Esmeraldina Stancovich Meriño.

c. Certificado de nacimiento de Patricio Leónidas Bocaz Peña, emitido por el Registro Civil e Identificación, de fs. 2.957 (Tomo X), que consta que sus padres son Ismael Rolando Bocaz Muñoz y doña Isolina Peña Pérez.

d. Certificado de nacimiento de Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña emitido por el Registro Civil e Identificación, de fs. 2.958 (Tomo X), que consta que sus padres son Ismael Rolando Bocaz Muñoz y doña Isolina Peña Pérez.

e. Certificado de nacimiento de Ginette Apolonia Bocaz Peña emitido por el Registro Civil e Identificación, de fs. 2.959 (Tomo X), que consta que sus padres son Ismael Rolando Bocaz Muñoz y doña Isolina Peña Pérez.

f. Certificado de matrimonio de don Ismael Rolando Bocaz Muñoz y doña Isolina Peña Pérez, fecha de celebración el 25 de mayo de 1963, emitido por el Registro Civil e Identificación, de fs. 2.976 (Tomo X).

48°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por el delito de secuestro calificado de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, **está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de los delitos por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los actores y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por los ilícitos de secuestro calificado de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, cometido por los Agentes del Estado, esto es para 1) Ginette Apolonia Bocaz Peña; 2) Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña; 3) Isolina Peña Pérez; 4) Patricio Leónidas Bocaz Peña; 5) Héctor Celso Avendaño Vásquez y 6) Eduardo Enrique Avendaño Stancovich; 7) Rosalía Silva Mardones; 8) Anselmo Ascanio Fernández Silva; 9) Víctor Alejandro Fernández Silva y 10) Luis Rufino Fernández Silva **la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos)** para cada uno de los demandantes civiles.

49°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N° 6 y 9, 12 N° 8 y 11, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69, 74, 93, 94 103, 141, **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 433, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 460, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA ACCION PENAL:

I. QUE NO HA LUGAR a las excepciones de fondo de prescripción de la acción penal y amnistía interpuestas por la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación de Carlos Hernán Moreno Mena en su presentación de fojas 3.386 y siguientes (Tomo XI).

II. QUE NO HA LUGAR al sobreseimiento total solicitado por la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación de Carlos Hernán Moreno Mena en su presentación de fojas 3.386 y siguientes (Tomo XI).

III. QUE SE CONDENA con costas a CARLOS HERNÁN MORENO MENA, R.U.N 5.631.189-0, ya individualizado por los delitos consumados de secuestro calificados en las personas de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Pitrufquén desde el 18 de octubre de 1973, a la pena de **16 años de presidio mayor en su grado máximo**

y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

IV. Que respecto al acusado **CARLOS HERNÁN MORENO MENA** según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 15 de diciembre de 2023 como consta a fs. 2.903 (Tomo IX), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 2.873 a fs. 2.892 (Tomo IX), en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total, vigente hasta el día de hoy.

V. Que la pena impuesta al condenado comenzara a regir desde que **se presente o sea habido en la presente causa.**

VI. Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto la medida cautelar personal impuesta al acusado, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

VII.- Que **NO HA LUGAR** a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Acuña Gálvez, en su presentación de fs. 3.313 y siguientes (Tomo XI), esto es:

A. Excepción de reparación integral. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes que se indican en conformidad a las leyes de reparación.

B. Excepción de Prescripción extintiva. Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

VIII. Que **HA LUGAR** a la demanda civil interpuesta por el Abogado David Morales Troncoso en representación de 1) Ginette Apolonia Bocaz Peña; 2) Cecilia Verónica del Carmen Bocaz Peña; 3) Isolina Peña Pérez; 4) Patricio Leónidas Bocaz Peña; 5) Héctor Celso Avendaño Vásquez y 6) Eduardo Enrique Avendaño Stancovich de fs. 2.977 a fs. 3.001 (Tomo X), en contra del Fisco de

Chile condenándose a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto de los delitos de secuestro calificado en las personas de Celso Avendaño Alarcón e Ismael Rolando Bocaz Muñoz a las sumas de: \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles.

IX. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por los abogados Sebastián Saavedra Cea y Leopoldo Huichalaf García en representación de 1) Rosalía Silva Mardones; 2) Anselmo Ascanio Fernández Silva; 3) Víctor Alejandro Fernández Silva y 4) Luis Rufino Fernández Silva, que rola de fs. 3.080 a fs. 3.110 (Tomo X), en contra del Fisco de Chile condenándose a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto de los delitos de secuestro calificado en la persona de Luis Anselmo Fernández Barrera a las sumas de: \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles.

X. Que los montos anteriores arrojan la suma total de **\$ 1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos)**, según se ha indicado precedentemente, por los delitos de secuestro calificado en las personas de Luis Anselmo Fernández Barrera, Celso Avendaño Alarcón e Ismael Rolando Bocaz Muñoz.

XI. La suma anterior deberá ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

XII. Que se condena en costas al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente al sentenciado, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere, facultándose al Tribunal para que cite a al sentenciado personalmente, bajo apercibimiento de arresto o se constituya en su domicilio si fuera necesario, realizando todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia, pronunciándose sobre las peticiones que hiciera el sentenciado en el acto de la notificación, en especial si presentara verbalmente recurso de apelación.

Considerando la pena decretada en contra del sentenciado y teniendo presente las medidas cautelares vigentes, **fórmese** cuaderno separado

“cuaderno de medidas cautelares” y otras situaciones que afecten al sentenciado de este proceso. Incorporándose a este copia de los poderes vigentes y lo referente a revisión de medidas cautelares vigentes; tales como prisión preventiva, arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial, obligación de firma mensual, y arraigos nacionales según corresponda.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al FISCO de Chile y a la abogada defensora que represente al sentenciado; a través de Receptor de turno del presente mes. En el caso de encontrarse en la Secretaría del Tribunal, notifíquese personalmente en esas dependencias.

En el caso del querellante Programa Continuación Ley 19.123, del Ministerio de Justicia, notifíquese personalmente en Secretaría del Tribunal, a cualquiera de los abogados que tenga representación.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo **509 bis del Código de Procedimiento Penal**, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarle sobre las decisiones del presente fallo y en su oportunidad, archívese.

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 29.875

Dictada por don **ÁLVARO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco.

En Temuco, a veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (FRF).